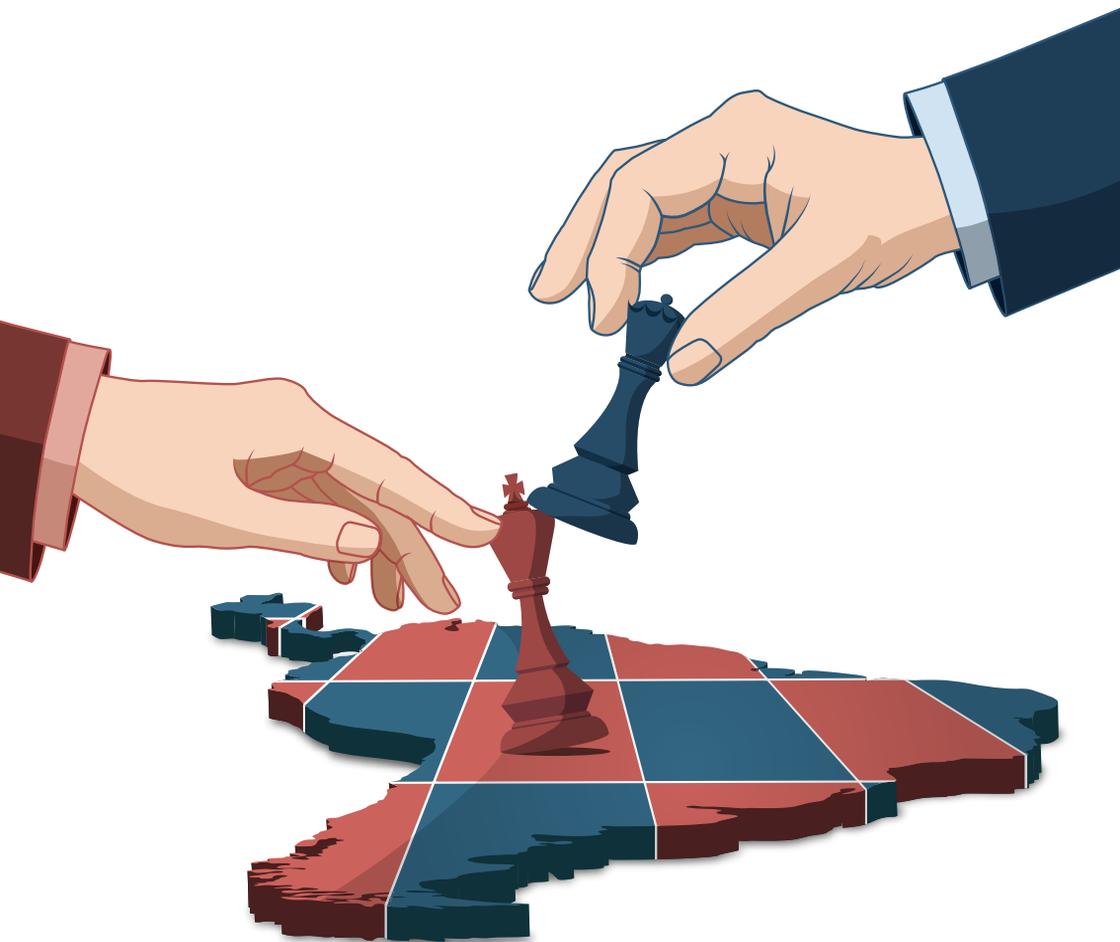


ECUADOR

Debate 122



Élites y derechas en América Latina

AGOSTO | 2024

Élites y derechas en América Latina

Comité Editorial

Alberto Acosta, José Laso Rivadeneira, Simón Espinoza, Fredy Rivera Vélez,
Marco Romero, Hernán Ibarra, Rafael Guerrero, Eduardo Gudynas

Directores

Francisco Rhon Dávila (1992-2022)

José Sánchez Parga (1982-1991)

Coordinadora/Editora

Lama Al Ibrahim

Asistente Editorial

Gabriel Giannone

ISSN: 2528-7761

ECUADOR DEBATE

Diego Martín de Utreras N28-43 y Selva Alegre

Apartado Aéreo 17-15-173B, Quito-Ecuador

Telf: 2522763 - 2523262

E-mail: revistaed@caapecuador.org

www.caapecuador.org/revista-ecuador-debate

SUSCRIPCIONES

Valor anual, tres números:

Exterior: USD\$. 51.00

Ecuador: USD\$. 21.00

Ejemplar suelto exterior: USD\$. 17.00

Ejemplar suelto Ecuador: USD\$. 7.00

Portada y diagramación

David Paredes

Impresión

El Chasqui Ediciones

Ecuador Debate, es una revista especializada en ciencias sociales, fundada en 1982, que se publica de manera cuatrimestral por el Centro Andino de Acción Popular. Los artículos publicados son revisados y aprobados por los miembros del Comité Editorial. Las opiniones, comentarios y análisis son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de *Ecuador Debate*.

Se autoriza la reproducción total o parcial de nuestra información, siempre y cuando se cite expresamente como fuente: © ECUADOR DEBATE. CAAP.

| ÍNDICE

COYUNTURA

- Estados Unidos 2024: elecciones políticas o guerra cultural**
¿Un dilema coyuntural o una corriente profunda? 5-26
Fernando Bustamante
- La derecha al poder en la Argentina (1983-2023):**
los casos de Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA) 27-41
Santiago C. Leiras
- Conflictividad socio-política**
Marzo – Junio 2024 43-56
David Anchaluisa

TEMA CENTRAL

- Presentación del Tema Central: Élités y derechas en América Latina** 57-62
Miguel Ruiz Acosta
- La derecha peruana y su deriva neogolpista** 63-78
Anahí Durand Guevara
- Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador** 79-99
Franklin Ramírez Gallegos
- Dominación y conflicto político del uribismo en Colombia. 2002-2010** 101-125
Alexander Gamba Trimiño
- La derecha en México: entre el Yunque y Vox** 127-142
Hugo Sánchez Gudiño

De Macri a Milei: la peligrosa obsesión de las clases dominantes argentinas	143-161
Andrés Tzeiman	
La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina	163-178
Ariel Goldstein	

DEBATE AGRARIO

Jóvenes indígenas: propósitos y desafíos	179-191
Luis Alberto Tuaza Castro y Rudi Colloredo-Mansfeld	

ANÁLISIS

La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales. El caso de la Asociación "17 de septiembre" en Portoviejo	193-209
Xavier León-Vega, María Fernanda Solíz, Claudia Rodríguez y Alía Yépez	

RESEÑAS

La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia	211-214
Danilo Rosero	
Pensamiento agrario: derribando mitos. Una antología de la obra de Fausto Jordán	215-219
Pablo Ospina Peralta	

Estados Unidos 2024: elecciones políticas o guerra cultural ¿Un dilema coyuntural o una corriente profunda?

Fernando Bustamante*

Resumen

El próximo 4 de noviembre de 2024 los Estados Unidos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Joe Biden. Estas elecciones encuentran al país con divisiones profundas. Tradicionalmente, las diferencias entre los partidos demócrata y republicano eran de matices y en el margen, lo cual hacía que una derrota fuese siempre vista como una situación transitoria, fácilmente reversible y parte de las contingencias del *fair play*. Sin embargo, hoy se entiende que la lucha política adquiere el carácter de una verdadera cruzada, algo que tal vez no se había visto desde los años inmediatamente anteriores al estallido de la guerra civil de 1860-65. Este texto propone un análisis sobre los valores sociales y políticos, las apuestas económicas y las perspectivas de futuro puestas en juego en la contienda.

Introducción

El próximo 4 de noviembre de 2024 los Estados Unidos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Joe Biden, cuyo período culmina en enero de 2025. Para algunos observadores estas elecciones revistan características casi inéditas en el contexto de la historia democrática de dicho país.

En efecto, la política estadounidense ha venido mostrando crecientes signos de una crisis como no se habría visto desde el período inmediatamente anterior al estallido de la guerra civil de 1860-65. Al menos, esto ha sido planteado por algunos observadores tales como Benjamin Goldfrank (2020), Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) y Adam Przeworski (2019). De acuerdo con estas perspectivas, el sistema democrático de aquel país estaría sufriendo los efectos de un deterioro gradual del acatamiento de los sujetos políticos a las normas que hacen posible el funcionamiento fluido de este modo de gobernar. Esto ha llevado a una progresiva erosión de las instituciones, la que se expresa en la polarización extrema, que a su vez pone en peligro la posibilidad de encontrar ese terreno

* Sociólogo, experto en seguridad, relaciones internacionales y administración pública. Director del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios-Universidad UTE.

mínimo de reconocimiento que hace posible que la política no termine siendo simplemente una continuación de la guerra por otros medios (Ludendorff 1936).

En particular, Levitsky y Ziblatt enfatizan que el sistema constitucional estadounidense ha estado basado en una serie de acuerdos supra constitucionales tácitos que permitían el funcionamiento fluido y vigoroso de las normas jurídicas. De acuerdo a este enfoque, lo que permitió al sistema su estabilidad y persistencia no fueron tanto las normas mismas, sino las condiciones de la práctica y de los hábitos políticos y culturales que hacían posible la vigencia de las instituciones. El debilitamiento de estas condiciones puede dar al traste con el más “perfecto” de los ordenamientos constitucionales. De hecho, estos autores muestran cómo muchos países –especialmente en América Latina– han fracasado en sus intentos por adaptar y replicar constituciones exitosas en otras latitudes debido a la inexistencia de un sustrato valórico y actitudinal idóneo (Levitsky y Ziblatt 2018).

Para los autores, la democracia estadounidense ha podido funcionar “exitosamente” por la permanente presencia de estos prerrequisitos “subjettivos”, entre los cuales destacan los siguientes: respeto a normas de tolerancia mutua, lo que redundo en la disposición de aceptar los resultados de los procedimientos institucionales, de las decisiones de autoridad legítima y de las elecciones. Esto también se expresa en la capacidad de respetar la legitimidad de la oposición, de las opiniones divergentes a las propias y de la discrepancia, respeto al espíritu de la ley, autocontrol y moderación en el uso del propio poder.

En suma, se trata de estilos de conducta que permiten que las discrepancias y la defensa de los propios intereses, objetivos y pasiones se muevan dentro de un rango de amplitud controlado y donde todos se dan mutuamente la oportunidad de obtener ventajas y de “ganar”, así como aceptan la posibilidad de perder, en la esperanza de que ya tendrán otra oportunidad de prevalecer.

Sin embargo, los autores de la corriente citada creen que este sustrato básico se halla en peligro y que se ha erosionado en décadas recientes. Por lo tanto, la democracia estadounidense comienza a mostrar síntomas de problemas que han sido muy familiares para los estudiosos de la gobernabilidad democrática en América Latina –entre otras regiones del mundo–. Podría incluso arriesgarse la hipótesis que la propia estabilidad democrática de la Unión estaría en peligro, como lo ilustra la asonada del 6 de enero de 2021 y la aparición cada vez más recurrente de sospechas y acusaciones –con o sin razón– de fraudes electorales en los comicios presidenciales y legislativos más recientes.

De hecho, algunos de los fenómenos sociales que se han asociado con procesos democráticos fallidos o amenazados, también se hacen presentes en la reali-

dad estadounidense actual: la creciente desigualdad económica y la segregación de los partidos políticos por raza, religión y geografía.

Es también claro que las conductas e ideologías autoritarias han experimentado un crecimiento, lo que ha llevado a cuestionamientos cada vez más generalizados y radicales de las mismísimas reglas del juego democrático, la negación de la legitimidad de los oponentes, la intolerancia o el fomento de la violencia y la disposición a restringir las libertades civiles de los rivales.

De esta forma, se puede constatar que la democracia norteamericana muestra síntomas de degradación alarmantes. Ello queda claramente expresado en la agudización de la polarización ideológica, la captura de una parte importante del electorado por posturas extremas, la aparición de populismos caudillistas –que el “trumpismo” ejemplifica de manera enérgica– y la exacerbación de agendas particularistas, identitarias y etnocéntricas, que tiene su versión en espejo en el furor xenófobo que ha convertido el tema de la migración ilegal en el asunto más candente de la agenda política doméstica. Por último, se puede verificar una disposición cada vez mayor a irrespetar las reglas del juego, al recurso al *lawfare* cada vez generalizado y al ahondamiento de las brechas regionales que llevan a que distintas partes del país casi no se reconozcan como constitutivas del mismo sistema político, e incluso de la misma nación (Heras 2024). El mapa político-electoral de los Estados Unidos presenta el panorama de amplias regiones claramente diferenciadas y opuestas, cada una con culturas políticas, prioridades y mentalidades incompatibles.

Historia de dos naciones en un país

Las próximas elecciones encuentran a los Estados Unidos profundamente divididos. Estas divisiones se expresan incluso de manera geográfica: los analistas locales han tomado la costumbre de hablar de “estados azules” y de “estados rojos” para describir estas zonas. Los primeros son donde predomina el partido demócrata y los segundos los que tienden a votar por los republicanos.

El grupo de los “estados azules” está conformado por todos los de la costa oeste –con California a la cabeza–, los del centro-norte –con Illinois a la cabeza–, los de Nueva Inglaterra y el norte de la costa atlántica –con Nueva York a la cabeza–. Los estados prorreplicanos son la mayoría de los del este y las Montañas Rocosas, Texas, el medio oeste y el sur del país.

Desde la época del *New Deal* de Franklin Roosevelt, el partido demócrata fue relativamente hegemónico sobre la base de una coalición que integraba a los estados

del sur, la clase obrera de los centros industriales y los núcleos de migrantes y minorías étnicas. Los republicanos eran el partido de los pequeños propietarios rurales –*farmers*–, los grandes negocios y las clases medias “blancas”. Este alineamiento comenzó a romperse a raíz del apoyo demócrata –a partir de los años sesenta del siglo pasado– a la causa de los derechos civiles y la integración racial. Esto provocó que los votantes blancos del sur se pasaran en grandes cantidades al partido republicano. Adicionalmente, el abandono demócrata de la defensa del estado de bienestar heredado del *New Deal* rooseveltiano, y su conversión al globalismo liberal cosmopolita, tuvo un duro impacto en la clase obrera organizada. Las políticas posteriores a 1980 debilitaron seriamente a los sindicatos y a las centrales obreras, que hasta entonces habían sido uno de los principales puntales del partido demócrata. Muchos sectores de la clase trabajadora se sintieron abandonados por el partido y quedaron políticamente “huérfanos” y disponibles para sumarse a una reacción proteccionista y nacionalista que prometía resguardar sus derechos y sus plazas de trabajo en peligro.

Por otra parte, el partido demócrata compensó parcialmente la pérdida del trabajador blanco por un creciente énfasis en atender a las minorías étnicas e identitarias o las causas postmaterialistas (Inglehart 1981), tales como el medioambiente, las reivindicaciones de las diferencias culturales, sexuales o genéricas o la universalización de determinados derechos. Para muchos norteamericanos de clase trabajadora, el partido demócrata terminó por convertirse en el de las elites urbanas cosmopolitas, globalistas, liberales y obsesionadas por los derechos identitarios; mientras que el partido republicano, otrora identificado con las elites empresariales, se convirtió en el partido “popular” de la gente común y de los blancos menos afortunados. A lo anterior hay que agregar otro factor: a partir de los años sesenta se produce una intensa politización de las corrientes religiosas vinculadas al evangelismo fundamentalista y al literalismo bíblico. Estas tienen un enorme poder político y convocatoria, sobre todo en los estados del denominado *bible belt* (cinturón bíblico), que comprende buena parte del sur del país y del medio oeste. El electorado identificado con esta corriente repudia el liberalismo modernista de los demócratas, y gravita, en consecuencia, hacia el partido republicano u otras expresiones populistas radicales como el Tea Party, QAnon o los Oath Keepers, muchos de cuyos miembros fueron la punta de lanza de los motines en el capitolio de Washington en enero de 2021.

Para los simpatizantes de esta constelación social y política, los demócratas y el liberalismo modernista son algo mucho peor que simples opositores o disidentes, son la encarnación misma del mal y son entendidos como fuerzas demoníacas empeñadas en destruir la civilización heredada de los fundadores de la Unión, e

incluso destruir a toda la herencia cultural cristiana y occidental –que a sus ojos son equivalentes–. No está de más señalar que para los demócratas liberales y seculares, los seguidores de las corrientes mencionadas son asimismo vistos como poco menos que reencarnaciones del fascismo o incluso del nacionalsocialismo racista y apocalíptico y expresiones del oscurantismo más reñido con el progreso de la civilización y de la justicia social. Para los sectores hegemónicos del partido demócrata, el ala populista evangélica del republicanismo es algo así como la resurrección de lo más retrogrado y oscuro de un mundo premoderno fanático, sectario y culturalmente totalitario.

Si se desean resumir las líneas principales de fractura entre las dos “sociedades” podría decirse que los estados “azules” se caracterizan por una cultura más progresista en temas sociales, lo que incluye al apoyo a políticas a favor de los derechos LGBTQ+, a la igualdad de género, a la promoción de las agendas de las minorías étnicas y una mayor liberalidad en temas migratorios. Estos estados son la sede de los centros académicos más sofisticados y secularizados del país y sus economías dependen más del desarrollo del conocimiento y menos de la producción “dura” de bienes y servicios tradicionales. Ponen un mayor énfasis en el desarrollo cultural y, en este campo, están abiertos a corrientes más modernistas, postmodernistas, cosmopolitas y universalistas. Estos estados suelen ser más diversos cultural y racialmente y tener poblaciones inmigrantes multiculturales más nutridas. Los electorados están más abiertos a políticas ambientales más agresivas, creen en la inminencia y magnitud del cambio climático y están dispuestos a sacrificar modos de vida tradicionales en aras de la defensa del medio ambiente, lo que incluye una fuerte adhesión al uso de energías renovables y tecnologías ambientalmente sostenibles.

Los Estados Unidos “azules” creen en las políticas de bienestar social y en una mayor intervención del Estado para subsanar las carencias de los grupos más vulnerables. De cierta forma se aproximan –en la medida que esto es posible en la mentalidad norteamericana– a un concepto de estado de bienestar “*light*”. Por ello mismo allí se tiene respeto por los derechos laborales, por la protección del trabajador y por la defensa de un salario mínimo garantizado. Es en estos estados donde las propuestas de desarrollar un sistema de salud pública como el existente en muchos países europeos ha encontrado más acogida, contra la tenaz resistencia de los prestadores y aseguradores privados.

El panorama ideológico/cultural en los estados “rojos” es muy diferente. En estos predominan los valores tradicionales, un alto compromiso con la defensa de la familia monogámica nuclear, el matrimonio, la protección de la vida humana

desde el momento de la concepción, los estilos de vida conservadores, la religión y en especial el protestantismo evangélico, al punto que es problemático el grado en el cual este segmento de la ciudadanía está comprometido con la separación entre la iglesia y el Estado y con el laicismo.

Uno de los rasgos culturales más marcados de este sector es la defensa a ultranza del derecho a portar armas y el apoyo a la Segunda Enmienda. Asimismo, es aquí donde se encuentra una casi paranoica reacción contra la migración, especialmente si proviene de países latinos. Estos mantienen una arraigada suspicacia hacia el Estado federal, son defensores de los derechos de los estados y prefieren un gobierno menos intervencionista y menos redistributivo, puesto que en la base de su cultura cívica se encuentra lo que se ha llamado un “recio individualismo” que considera moralmente defectuoso esperar o pedir ayudas de la colectividad o de las autoridades. En esta mentalidad la pobreza es resultado de fallas morales del pobre, más que de circunstancias estructurales fuera de su control.

Los estados “rojos” se caracterizan por un alto nivel de patriotismo, sustentado en ideas mesiánicas respecto al excepcionalismo estadounidense. Su población defiende a brazo partido el respeto reverente a las tradiciones nacionales, a los símbolos patrios y a las usanzas fundacionales de la nación. En muchos de estos estados predomina una cultura rural con una fuerte conexión con la agricultura, la ganadería y las comunidades pequeñas y fuertemente integradas.

Mientras que los sectores con mayoría demócrata prefieren políticas económicas internacionalistas –globalistas– y librecambistas, y un fuerte y militante intervencionismo geopolítico, los estados republicanos tienden a ser más proteccionistas y nacionalistas, al punto que en casos extremos se puede llegar a un cierto aislacionismo estratégico. Después de todo la tradición de los Estados Unidos imperiales fue iniciada por los gobiernos demócratas de Roosevelt y Truman, mientras que el aislacionismo post-wilsoniano fue más bien sello característico de los gobiernos republicanos.

Aunque la visión que se acaba de presentar, sin duda, simplifica la realidad, puede proporcionar un marco de comprensión suficiente de las líneas de conflicto que fracturan el sistema político estadounidense y dan su sello característico a la radicalización de las tensiones, a un punto que ha llegado incluso a dar pábulo a especulaciones en torno a la posibilidad de una caída de la democracia, sea por la violencia de las facciones, sea por el surgimiento de algún autoritarismo o despotismo plebiscitario.

El fenómeno “trumpista”

Históricamente, el partido republicano había estado dominado por las elites empresariales corporativas y por las clases medias urbanas. A lo largo del siglo XX, el partido adoptó una postura más conservadora, promoviendo el liberalismo económico, el anticomunismo y el federalismo. Generalmente el GOP (*Grand Old Party*) fue un bastión de la resistencia en contra de los impuestos, de la regulación estatal y de un excesivo fortalecimiento del Estado federal por sobre el poder de los estados. Por último, y de manera creciente sobre todo a fines del siglo XX, comenzó a alinearse con las causas del conservadurismo moral y atrajo el voto de un evangelismo cada vez más politizado y militante. Esto le dio una mayor posibilidad de capturar el voto de sectores más populares, en vista que las tendencias religiosas fundamentalistas suelen tener un mayor arraigo en los grupos de menores ingresos y, sobre todo, entre los pequeños empresarios, propietarios y trabajadores menos organizados.

A finales de la década de 2000, surgió el movimiento del Tea Party, que abogaba por una reducción drástica del gasto público y una interpretación estricta de la Constitución. Algunos de los contenidos programáticos de este movimiento podrían asimilarse a una agenda liberista y anarco-capitalista, pero además con un énfasis en el rescate de los valores fundacionales de la Unión Americana. La referencia al acontecimiento que gatilló la revolución americana tiene relación, precisamente, con una revuelta de contribuyentes opuestos a la imposición de tributos inconsultos y despóticos, pero también a la recuperación de lo que se consideraban los valores prístinos de la época revolucionaria, entre los cuales pueden mencionarse el nativismo anglosajón, el estado mínimo, el federalismo descentralizante y una ética fuertemente individualista y opuesta a la intervención del estado en la redistribución del ingreso y de las oportunidades para los grupos más desposeídos.

El Tea Party fue tan solo la punta del iceberg de la eclosión de otros grupos aún más extremos, pero con orientaciones análogas. Uno de los temas que empiezan a aparecer es un antielitismo radical, que atribuye los problemas de la gente común a la opresión ejercida por grupos privilegiados y enquistados en altas esferas del poder. Para este sector de la opinión, los Estados Unidos han entrado en decadencia por la acción de grupos de poder centralistas que solo miran a sus intereses y que han cristalizado en una especie de confabulación global que une a cúpulas burocráticas, empresariales, académicas e intelectuales en un proyecto “globalista” que busca riqueza y dominación a costa de los

pueblos de sus respectivas naciones. En esta narrativa, el foco del mal estaría en Washington y sus burocracias, que han terminado siendo bautizadas con el mote del “*Deep State*” (Estado profundo), en New York y en los grandes billonarios transnacionales, que se expresarían en el Foro Económico Mundial y en el grupo de Davos, en la academia de elite –las grandes universidades prestigiosas de la *Ivy League*–, y en sus intelectualidades inmorales que habrían producido el fantasma del “marxismo cultural”, empeñado en destruir los valores de la familia, la religión y la meritocracia; y, por fin, en la prensa tradicional, en las grandes cadenas de comunicación de masas –algo equivalente al concepto de “prensa corrupta” en boga en Ecuador y algunas partes de América Latina–. Más adelante, Donald Trump sintetizaría todo este haz de sujetos presuntamente tóxicos en el concepto del “pantano”, que hay que desecar. De esta forma se ha ido constituyendo un populismo en donde la postura antisistema nace de un suelo conservador. Es interesante percatarse que para las corrientes que convergen en el trumpismo, la izquierda y el progresismo liberal se han convertido en el “poder establecido” y en el núcleo de la elite dominante y –en cierto modo– opresora.

Esta tendencia era –inicialmente– marginal dentro del partido republicano. Este seguía siendo dominado por la vieja guardia de “sangre azul” empresarial. Ella estaba muy bien representada por personajes como el candidato presidencial James McCain, Dick Cheney, George Bush, Mitt Romney o por Mitch McConnell, durante muchos años líder parlamentario de las bancadas republicanas en el senado. Sin embargo, a partir de 2016, este club exclusivo se vio desafiado y luego masivamente desplazado por la irrupción de Donald Trump en la política.

Trump era un empresario inmobiliario con intereses en la farándula y el espectáculo, pero relativamente marginal al núcleo corporativo que controlaba al partido desde hacía muchas décadas. Incluso, en algún momento perteneció al partido demócrata. Aparte de ello, su estilo abrasivo, irreverente y poco refinado provocaba desagrado en las elites sociales republicanas. Pero, por estas mismas características pudo conectar con la estética y el imaginario de esa gran masa de votantes que sentían que las cúpulas partidistas se habían hecho parte –precisamente– de ese mundo hostil, sofisticado, ajeno y despreciable que se habría apoderado de y desvirtuado a la democracia americana.

A partir del año de su primera candidatura presidencial, Trump literalmente barrió con esta cúpula tradicional y aplastó todos los tibios intentos que se hicieron desde allí para contrarrestar su creciente influencia en las filas del partido. Los que no se sometieron y aceptaron acompañar la marea trumpista fueron brutalmente desplazados de cualquier posición de influencia o poder.

Trump se apalancó en algunas causas claves de la nueva derecha populista: la defensa del derecho a portar armas, el rechazo a la inmigración ilegal, el antielitismo, el repudio a las causas de la nueva izquierda identitaria, el negacionismo del cambio climático y el apoyo a las tecnologías e industrias tradicionales –combustibles fósiles, etc.– y cierto anti-intelectualismo apoyado en la apología de los “valores tradicionales”.

En la práctica, el trumpismo se ha convertido casi en una secta con rasgos de culto religioso. De esta forma, recuerda de manera sugerente a fenómenos de liderazgo carismático muy conocidos en América Latina. Prácticamente ha concentrado en su persona todo el conjunto de rasgos que la cultura política norteamericana vernácula había venido tejiendo en décadas previas, pero con la novedad del marcado giro antielitista.

Incluso existen fuertes motivos para creer que la corriente que se identifica como MAGA: *Make America Great Again* (Hagamos a América grande de nuevo), que es slogan característico acuñado por Trump en su primera campaña, comparte con otras corrientes caudillistas y carismáticas del resto del mundo la dificultad para aceptar resultados del debido proceso institucional cuando estos son desfavorables. De hecho, hasta podría sostenerse que se trata de una tendencia anti o ainstitucionalista. Ello se ve claramente expresado en la negativa a acatar los resultados de los comicios presidenciales de 2020, las continuas –y poco fundamentadas– denuncias de fraude, los intentos de obligar a su exvicepresidente Michael Pence a quebrantar la Constitución, abrogándose la facultad de determinar que las citadas elecciones estaban viciadas y abstenerse de proclamar los resultados que daban el triunfo a su oponente demócrata, su claro auspicio a la revuelta del 6 de enero de 2021 y la consiguiente toma del capitolio por parte de turbas de partidarios enardecidos, su desprecio por la ley, incluso en sus propios negocios y conducta privada, y así sucesivamente.

Este conjunto de conductas apunta a un grave deterioro del acatamiento al orden jurídico imparcial y su reemplazo por los deseos, sentimientos y valores de un líder y de sus seguidores; es decir, el establecimiento de un orden subjetivo y sectario, que no reconoce unos preceptos universalmente válidos y levantados por encima de las convicciones particulares de un bando y, en este caso, de un caudillo carismático.

Los demócratas: globalismo geopolítico, “progresismo cultural” y políticas de identidad casa adentro

Se podría arriesgar la observación de que el partido demócrata tiene una especie de doble personalidad. A saber, en materias de seguridad nacional, política internacional y geopolítica ha mostrado una tendencia a seguir adelante con políticas altamente asertivas, incluso agresivas. Se ha mostrado propenso a un fuerte intervencionismo en el extranjero y a defender a toda costa la primacía y la dominancia de los Estados Unidos en todas las regiones del mundo. Mientras el partido republicano, y sobre todo su versión “trumpista”, es relativamente reticente a excesivos compromisos globales y tiene una orientación que prioriza más lo doméstico. Los demócratas creen que Estados Unidos deben ejercer un fuerte liderazgo global y proteger el unipolarismo conseguido a raíz de la disolución de la Unión Soviética. Asimismo, son fuertemente partidarios de la globalización y de la creación de instituciones transnacionales que permitan el ejercicio de la hegemonía económica, política, militar y cultural de Washington. Su concepción de la globalización económica está basada en la arraigada creencia que solo una amplia libertad de los mercados internacionales y una operación eficaz de las instituciones multilaterales que la respaldan pueden garantizar la prosperidad y la dominación de las elites empresariales y estatales de los Estados Unidos, incluso si ello implica costos fuertes para determinados sectores de la población norteamericana, que no son capaces de adaptarse o de competir exitosamente en este orden global.

Casa adentro, el partido demócrata ha mantenido su identificación como el que vela por los derechos civiles. Esta postura mantiene continuidad con el sello que le diera la gestión del expresidente Roosevelt en los años treinta y cuarenta del siglo pasado. Esto mismo lo convierte en la fuerza política que mantiene una agenda de promoción de algún grado de igualdad social –de manera muy tibia, de acuerdo a estándares europeos o latinoamericanos, pero que, en el contexto estadounidense, los hace ver como casi “socialistas” por parte de los sectores conservadores domésticos–. En búsqueda de los principios de igualdad y justicia social que son importantes para los políticos demócratas, ellos han enfatizado la lucha en contra de todas las formas de discriminación basadas en factores reñidos con tales principios. Por ello es que para el partido los temas de la igualdad racial, de género, orientación sexual u origen socioeconómico han sido prioritarios.

En un país donde la provisión privada de servicios sociales está fuertemente enraizada, este partido ha impulsado, tanto a nivel estadual como federal, algunos

programas de bienestar social que ayuden a los grupos más vulnerables, especialmente en temas de salud pública y educación. Programas como Medicaid, Medicare, Obamacare, la remisión de las deudas educacionales de los graduados –que son aplastantes para la mayoría de ellos–, son logros específicamente demócratas.

Uno de los temas que han sido apropiados por el partido demócrata –y que mayor tensión genera con los sectores más conservadores que nutren los electorados republicanos contemporáneos– es la decisión de sus líderes de presentar al partido como el defensor de los derechos de las minorías, recurriendo para ello –a menudo– a políticas de acción afirmativa o de discriminación positiva en favor de estos grupos, que incluyen a sectores marginados, incluyendo afroamericanos, personas con discapacidades, inmigrantes, la comunidad LGBT, nativos americanos, sindicatos, mujeres y jóvenes.

El partido demócrata apoya políticas progresistas en temas como el cambio climático, la justicia social y la reforma del sistema de justicia penal. Sus políticos a menudo se hallan al frente de propuestas ambientalistas, creen en la urgencia de hacer frente al cambio climático –que presentan como un hecho científicamente probado–, sostienen la importancia de buscar fuentes de energía renovable. Considera que el sistema de justicia penal está sistemáticamente sesgado en contra de los grupos más vulnerables –y en especial en contra de la población negra– y apoya acciones destinadas a reducir la violencia policial en contra de estos grupos. Por último, aunque defiende el libre mercado, no repudia la acción estatal para regularlo y resolver sus imperfecciones o distorsiones.

En la última década se han desarrollado facciones y tendencias a su interior. En general, la corriente principal del partido se ubica en una postura ideológica más centrista, en donde el matrimonio Clinton sigue jugando un rol de especial influencia, un poco más a la izquierda se sitúan los integrantes que se identifican con la administración Obama (2008-2016), finalmente se siente la presencia de una corriente con tendencias semisocialistas que tiene como sus principales figuras al senador Bernie Sanders, a la representante de New York, Alexandria Ocasio Cortez y a los gobernadores de California y Minnesota, Gavin Newsom y Tim Walz.

Un serio problema que ha enfrentado en elecciones recientes el partido demócrata ha sido la falta de renovación de sus cuadros dirigentes. La influencia que ejercen cuadros históricos como la representante y exjefe de la mayoría en la Cámara, Nancy Pelosi, o el jefe de la mayoría demócrata en el senado, Chuck Schumer, aparte de los ya mencionados Bill y Hillary Clinton, ha sido un obstáculo serio para encontrar cuadros de refresco que ayuden a contrarrestar la marea y el atractivo del caudillismo republicano.

Esta realidad ha adquirido ribetes dramáticos a partir de 2020. En las elecciones de ese año, las estructuras establecidas del partido no pudieron encontrar otro remedio que postular al exvicepresidente de Barack Obama, el veterano senador Joe Biden. Ya en ese entonces Biden mostraba señales de una enfermedad neurológica que afectaba sus facultades mentales y su capacidad para conducir su campaña y –peor aún– la administración del país. A pesar de todo ello, los notables del partido impusieron su candidatura frente a Trump –que buscaba su reelección– pensando que era la única opción capaz de detener la creciente popularidad mostrada en las primarias por el senador Sanders, al que se consideraba demasiado izquierdista, y, por tanto, incapaz de ganar el voto “moderado”. Biden era el mínimo común denominador en que podían converger todos los cuadros del establecimiento demócrata asustados por el surgimiento de una amenaza desde el progresismo radical. Para enfrentar a Trump, se pensaba, era necesario un candidato que pudiese ganar al electorado más centrista.

Como un gesto hacia los sectores putativamente progresistas se escogió sin mayor justificación a la exfiscal general de California, la senadora Kamala Harris. Aunque su récord como acusadora pública en el mencionado estado tenía ribetes problemáticos por varias políticas auspiciadas por ella durante su gestión, que podían interpretarse como serias violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad y por una cierta tendencia a la “mano dura”; su perfil identitario fue visto como suficiente característica como para pensar que sería una concesión al progresismo, al que se supone obsesivamente focalizado en los temas vinculados a las identidades, y en especial a las de tipo racial. Harris se incorporó al binomio por ser quién era, no por su trayectoria ni por sus antecedentes ideológicos o por sus planteamientos. De hecho, la futura vicepresidente pertenecía al mismo mundo “centrista” de la corriente principal del partido, pero se la camuflaba de progresismo por su etnicidad: ella reunía tres rasgos identitarios que parecían satisfacer este perfil “políticamente correcto”: era mujer, hija de un padre de raza negra inmigrante llegado a los Estados Unidos proveniente Jamaica –por tanto, de etnicidad afrocaribeña– y de una destacada bióloga india también inmigrante.

Durante su gestión como vicepresidente se creó la imagen que ella habría sido puesta a cargo de resolver el explosivo tema de la migración ilegal. Asimismo, los republicanos y los medios afectos redoblaron sus ataques contra ella, alegando su presunta ineptitud para manejar dicha crisis. Por otra parte, la personalidad de Harris tampoco resultaba demasiado atractiva y con frecuencia recurría al “cantinflero” para esconder su falta de planteamientos sólidos e interesantes. Durante

el proceso conducente a la selección de Biden como candidato a la reelección, nunca fue vista como una posible alternativa de primera opción.

Lo que cambió dramáticamente las cosas fue el desastre de Biden en el debate con Donald Trump el 9 de junio. En esa ocasión el presidente se mostró confuso, incoherente, débil y prácticamente incapacitado, cometió errores grotescos y acusando aparatosas lagunas mentales. Esta performance fue remachada con nuevos resbalones en la cita que semanas después realizó la OTAN en Washington, donde confundió al presidente ucraniano Zelensky con el mismísimo Vladimir Putin y a su propia vicepresidenta Harris con Donald Trump.

Fue evidente que Biden no estaba en condiciones de llevar adelante una campaña exitosa contra Trump, y mucho menos gobernar por cuatro años más. Esto abrió una intensa pugna dentro del partido demócrata entre los recalcitrantes defensores de la continuidad de Biden y de algunos que deseaban deshacerse de quien se había convertido en una piedra de molino atada al cuello del partido demócrata. Lo que quedó claro es que la cúpula del partido demócrata se percató de que la elección estaba perdida si no había un cambio de candidato. Fue evidente que la “oligarquía” dominante en las filas del oficialismo estadounidense llegó a un consenso al respecto y ejerció una presión sobre la Casa Blanca que no fue posible resistir para el entorno del primer mandatario. Se ha rumoreado que la amenaza decisiva fue la de invocar la 25ª enmienda constitucional, que permite destituir a un presidente en ejercicio por manifiesta imposibilidad o incapacidad para continuar ejerciendo el cargo.

La premura por hacer el relevo se hizo aún más imperiosa a raíz del mortífero atentado que estuvo a punto de costarle la vida al candidato republicano. La milagrosa salvación de Trump y su enérgica reacción ante la balacera crearon la sensación de que el expresidente podía unir el aura de víctima a la de héroe y hacerse imparable en las elecciones de noviembre.

Otro problema que la directiva demócrata debía resolver era la de buscar un postulante que tuviera posibilidades de hacerle frente a Trump en las mejores condiciones posibles. Harris tenía los problemas de su desgaste a lo largo de una gestión juzgada más bien de deslucida en muchos sectores y por muchos medios de opinión. Se barajaron nombres como las del gobernador de California Gavin Newsom o la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, e incluso el de la muy popular Michelle Obama, esposa del expresidente demócrata. Sin embargo, una serie de problemas legales concernientes a ciertas trabas para transferir automáticamente los votos de los delegados de Biden y los fondos ya recolectados para su compañía a cualquier otro candidato, así como la dificultad de justificar,

desplazar a la compañera de fórmula del propio Biden, llevó a qué finalmente se decidiera por lo más fácil: ratificar a Kamala Harris como la natural sucesora de Biden en la papeleta demócrata y apostar a que ella sería capaz de unir al partido y a sus distintas corrientes internas.

El malestar creado por el ocaso de Biden ha sido tan profundo que el solo hecho de que se presentara una figura capaz de articular un discurso coherente y mostrar cierta energía en el podio ha sido suficiente para galvanizar a los alicaídos votantes demócratas. Aparentemente esto ha llevado a un repunte de su partido en las encuestas, aunque –para variar– los sondeos cambian mucho según las tendencias preferidas por los autores y sin que, por otra parte, se pueda calibrar todavía si este repunte será duradero y permitirá al partido actualmente gobernante cerrar la brecha que parecía tener.

En todo caso el binomio Harris-Walz parece tener algunas probabilidades de hacer frente al dúo republicano de Trump-Vance, y lo más probable es que vuelva a ser una elección estrecha como han sido las inmediatamente anteriores.

Para terminar esta sección es necesario referirse a lo que ha ocurrido con la papeleta republicana después del intento de asesinato contra Trump.

Ciertamente, toda la dinámica anterior y posterior al fracaso del intento de magnicidio de Butler ha terminado por consolidar el total control de Trump sobre el GOP. Pero al mismo tiempo ha exacerbado la paranoia de muchos de sus seguidores y ha dado nuevas alas a las teorías de la conspiración, incluso las más extremas. Para muchos seguidores de Trump esta no es una elección cualquiera: reviste por momentos caracteres apocalípticos y en los que se juega el destino mismo de la nación. Por cierto, del lado demócrata existen también sectores que ven el posible triunfo republicano como desafío más civilizacional que político.

Después del atentado que casi le cuesta la vida, se especuló mucho que Trump flexibilizaría su postura y que “habría vuelto a nacer”. Tales piadosas expectativas fueron trizadas por las decisiones que tomó durante la convención republicana de Milwaukee. Su discurso de aceptación fue una larga perorata en el estilo del Trump de siempre y para mayor abundamiento, la selección de su compañero de fórmula no hizo sino radicalizar el perfil de su candidatura. El senador por Ohio James Vance es un católico conservador fundamentalista que defiende una versión libertaria del capitalismo y que se inscribe frontalmente en la lucha cultural en contra del progresismo liberal y contra la corriente “*woke*”,¹ que es una defensa

¹ El término *woke* se aplica a la cultura de las reivindicaciones identitarias y parece haber derivado de una torsión fonética de la palabra inglesa *wake* (que significa “despertar”), que se originó en comunidades afroamericanas para designar la toma de consciencia por parte de sus miembros de las condiciones de discriminación y opresión que han padecido a lo largo de la historia de los Estados Unidos.

intransigente de las reivindicaciones identitarias de grupos tradicionalmente excluidos, discriminados o estigmatizados. Esto es visto por muchos sectores más convencionales como una amenaza a las formas de vida constituidas e incluso a la moralidad tradicional. Lejos de buscar el centro electoral, lo que Trump ha hecho es –una vez más– desafiar las creencias convencionales de la política norteamericana. De acuerdo con estas, el candidato con más probabilidades de éxito es aquel que logra conquistar el apoyo de los actores más moderados y menos fuertemente ideologizados. El candidato republicano ha labrado sus éxitos pasados –y espera repetirlos ahora– sobre la base contraria: agudizar las contradicciones y atender a las posiciones más extremas del espectro político e ideológico.

En definitiva y conclusión: lo que está en juego

Un serio problema que enfrenta el sistema político estadounidense es que esta elección ha tomado un carácter casi apocalíptico para las partes en competencia. Tradicionalmente, las diferencias entre republicanos y demócratas eran de matices y en el margen, lo cual hacía que una derrota fuese siempre vista como una situación transitoria, fácilmente reversible y parte de las contingencias del *fair play*. Por tanto, los partidos nunca tenían la sensación de que se estaban jugando vida y futuro en caso de una derrota.

Esta situación ya no existe. Las elecciones estadounidenses son asumidas cada vez más como contiendas existenciales y como apuestas en las que se juega el todo por el todo. La asonada de enero de 2021 y la negativa del entonces presidente Trump de aceptar los resultados que favorecían a su contendor son un claro indicio. Para los demócratas –por ejemplo– un triunfo de Trump sería visto como una amenaza a la supervivencia misma de la democracia como sistema político. Para los republicanos –simétricamente– un triunfo demócrata sería un peligro para la estabilidad misma de los Estados Unidos como nación, como cultura y como proyecto de vida común.

Ello hace que la lucha política adquiera el carácter de una verdadera cruzada, algo que tal vez no se había visto desde los años inmediatamente anteriores al estallido de la guerra civil de 1860-65.

Para los republicanos un triunfo de Harris sería el comienzo del fin de los Estados Unidos conocidos/anhelados por ellos; sería la vía libre para lo que se ve como una invasión culturalmente mortífera que amenaza la identidad misma y la cultura anglosajona hasta sus cimientos: unos Estados Unidos que hablan castellano y comen burritos le resulta a este grupo nativista una perspectiva

horripilante. Así mismo, el triunfo demócrata abre el fantasma de un país ateo, secularizado, dominado por un despotismo de lo “políticamente correcto”, en donde los roles de género tradicionales irían en camino a ser criminalizados, y con ello la familia tradicional podría verse seriamente amenazada de extinción. Uno de los temas más agudamente contenciosos es el del aborto: el país se ha visto desgarrado por la polarización emocional y moral en torno a este tema. Para los republicanos la anulación del dictamen Roe y Wade que descriminalizaba el aborto a nivel federal y devolvía a los Estados la jurisdicción en la materia fue un triunfo histórico, porque permitía a los estados rojos volver a implantar severas restricciones o a lisa y llanamente prohibir el aborto dentro de su jurisdicción. La presencia de los demócratas en la Casa Blanca es vista por muchos activistas provida como una espada de Damocles que hace peligrar la consolidación de este triunfo judicial.

Los Estados Unidos se caracterizan por haber consagrado el derecho de porte de armas de los civiles –Segunda Enmienda–. Para muchísimos estadounidenses, este es un derecho fundamental. En años recientes, y a raíz de los innumerables incidentes de tiroteos y masacres que se producen casi a diario, con un trágico reguero de víctimas, han surgido sectores dentro del partido demócrata que buscan limitarlo, regularlo o reducirlo –en ese país, la abolición es casi inconcebible–. Esto ha generado otra línea de enfrentamiento casi tan virulenta como el tema de los derechos reproductivos y de la inmigración ilegal. Para los seguidores del partido republicano, cualquier erosión del derecho a portar armas es una amenaza casi existencial y crea una sensación de indefensión y desamparo que sería inconcebible en casi cualquier otro país del mundo, en donde este es inexistente o muy limitado. Los demócratas ven con pavor a la epidemia de violencia sicópata –que casi cobró la vida del mismísimo Trump–, mientras que para los republicanos la supresión de esta potestad es equivalente a la eliminación de un fundamento básico, comparable al derecho a la vida o a la ciudadanía.

El tema de los derechos civiles y de las minorías o grupos vulnerables es otro que, sin duda, se verá afectado por el desenlace de la elección de noviembre. Kamala Harris y su binomio tienen un fuerte compromiso con la profundización de la ampliación de los derechos de los grupos étnicos, sexuales, de género, entre otros. Para los seguidores de Trump esta agenda ha sido llevada demasiado lejos y ha caído en grotescas exageraciones. Toda la “constelación” de reivindicaciones identitarias es sentida como una violación de los principios meritocráticos y como una agresión cultural a la mayoría de la población que no pertenece a esos colectivos. El resentimiento y el desprecio que se dirige

a esta corriente cultural y hacia las políticas públicas de acción afirmativa y discriminación positiva que ella impulsa, se manifiesta en la satanización de lo que denomina con el término “cultura woke”. En general, todo el complejo ideológico asociado a esta palabra es visto como un desafío atemorizante a los valores, certezas, estilos de vida y costumbres consagradas de la población “blanca” y de la cultura eurocéntrica tradicionalmente hegemónica –cuando no, como una afrenta a valores religiosos milenarios, como es el caso de la reivindicación del matrimonio entre persona del mismo sexo–. Los grupos activistas de derechos ven a una segunda administración Trump como un peligro existencial, no solo por el freno que implicaría a muchas de sus demandas reivindicativas, sino porque se teme que puedan existir represalias, persecución e interdicciones vengativas por parte de los republicanos en el poder y de un gobierno federal en manos de sectores conservadores.

Otro tema en donde se juegan opciones muy claramente diferenciadas es el manejo de la economía: la administración Biden decidió enfrentar los efectos devastadores de las medidas sanitarias destinadas a controlar la pandemia Covid-19 (cierre de fábricas, negocios, servicios, cuarentenas, reducción del consumo, costos directos, etc.) inyectando enormes recursos en la economía con el fin de sostener el poder de compra de las personas y evitar un colapso del consumo, con los consiguientes efectos depresivos sobre la economía. Aún después de la pandemia, la política del gobierno demócrata siguió impulsando la actividad económica a través de un agresivo gasto fiscal. Esto tuvo efectos contradictorios. Por un lado, permitió mantener un crecimiento importante de la economía y evitó que Estados Unidos cayera en la depresión o estancamiento que ocurrió en otras latitudes, sobre todo en Europa, y permitió sostener los compromisos del Estado en materia de inversión social e inversión pública. En contraparte, produjo un aumento de la inflación y del costo de la vida que afecta seriamente a las capas asalariadas de la población. Del mismo modo, el Estado se ha visto enfrentado a múltiples exigencias y demandas de gasto. La situación de múltiples tensiones geopolíticas alimentó la presión sobre el gasto en seguridad y defensa, pero al mismo tiempo Washington no ha podido contraer compromisos de apoyo a temas tales como la inversión en el cambio del modelo energético, los subsidios a sectores vulnerables, la inversión en infraestructura, entre otros.

El resultado de esta verdadera “orgía” de gasto fiscal fue un galopante endeudamiento por parte del gobierno federal. En cierta forma, el carácter del dólar como moneda de reserva internacional, le da mucha flexibilidad a la Reserva Federal para simplemente emitir sin mayores limitaciones. Por otra parte, el Tesoro

puede ampliar sus márgenes mediante la emisión de bonos, casi a discreción. De esta forma, bajo la administración Biden la deuda pública estadounidense se ha disparado fuera de control hasta llegar a cifras astronómicas. Hasta 2022, esta deuda ascendía a cerca de 30.887.920 millones de dólares (*Extensión* 2024). Esa cifra representa alrededor del 121,31% del PIB del país y desde entonces aumenta a razón de alrededor de 125 mil millones de dólares mensuales (*La Opinión* 2022).

Es tan aplastante este valor que ha creado inquietudes entre los inversionistas globales –se ha dado incluso el caso que algunos países comiencen a tomar la inédita medida de deshacerse de sus bonos del Tesoro, que son las inversiones históricamente más seguras del sistema financiero mundial– y ha arrojado crecientes sombras de duda sobre el papel futuro del dólar como moneda de reserva y de comercio internacional. Ello mismo ha inflado el atractivo de iniciativas multipolares como los BRICS, que ahora se expanden y reciben solicitudes de ingreso incluso de países vinculados al sistema de seguridad estadounidense, como Turquía. Los BRICS plantearon la necesidad de reemplazar al dólar como moneda de reserva internacional y volver a un sistema de divisas respaldadas, tal como se estableció en el sistema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial.

El candidato Trump ha criticado severamente esta evolución. Una vez más, su embestida en contra de la inflación pretende posicionarlo como el defensor del consumidor de a pie y como el defensor de la solidez del dólar. Es posible que su eventual administración emprenda políticas fiscales más ortodoxas y conservadoras, e incluso que pueda reducir algunos de los más onerosos compromisos militares y de seguridad del país. A título de ejemplo: Trump ha criticado reiteradamente que su país haya subsidiado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la seguridad europea, sin que los países de la OTAN contribuyan proporcionalmente a su propia defensa. Una posibilidad sería que Washington reduzca su aporte a la alianza atlántica y trate de obligar a los europeos a aumentar significativamente su gasto de defensa –lo que podría, además, forzarlos a aumentar sus compras de armas estadounidenses–.

Trump ataca lo que él llama la “globalización”, que a su juicio destruye empleos en Estados Unidos y los exporta hacia otros países del mundo. Ello lo ha empujado a posturas francamente proteccionistas y a insistir en la necesidad de que los capitales de inversión regresen al territorio norteamericano. Propone así mismo una batería de medidas destinadas a proteger los mercados internos y llevar adelante una agresiva política de sanciones comerciales y financieras para

los países que “destruyan empleos estadounidenses”. Su eventual administración podría abrir paso a una agudización de los conflictos comerciales con China y otras potencias económicas emergentes, y en particular con las que compiten exitosamente con industria en donde Estados Unidos ha tenido la primacía o una tajada importante del mercado.

El tópico del medioambiente se verá, sin duda, afectado por el resultado de las elecciones. Trump y buena parte del partido republicano tienden a posturas negacionistas en relación al calentamiento global y al cambio climático. En consecuencia, son muy reticentes a apoyar políticas de transición energética y defienden tenazmente mantener a la economía atada a los combustibles fósiles. Muchos de sus votantes mantienen una adhesión casi identitaria al automóvil de combustión interna y a todas las tecnologías tradicionales asociadas a un estilo de vida construido sobre un patrón de consumo energético tradicional. Por su parte, la administración Biden desarrolló agresivas políticas destinadas a reducir la dependencia del país respecto a las fuentes de energía fósiles y apoyó denodadamente tecnologías alternativas –como por ejemplo el uso creciente de automóviles eléctricos–. Esto halló una dura resistencia por parte de los intereses comerciales vinculados al patrón energético tradicional, que además cuenta con un considerable apoyo popular, sobre todo en los estados “rojos”. Seguramente, una presidencia de Kamala Harris continuará comprometida con el cumplimiento de las metas de los tratados internacionales sobre el cambio climático, mientras que los republicanos desertarán de esos acuerdos de manera más o menos completa, y volverán a enfatizar el desarrollo de las industrias de hidrocarburos y la explotación de las fuentes de energía basadas en el extractivismo.

Las administraciones demócratas, desde el presidente Obama en adelante, han luchado por expandir los programas y derechos a la salud e introducir componentes de salud pública en los programas de gobierno. Los costos astronómicos de medicamentos y atención médica en el país han dejado a grandes sectores de la población sin cobertura y acceso a seguros de salud. Según la oficina de censos, casi 30 millones de personas son básicamente indigentes en materia de salud (United States Census Bureau 2023).

Estados Unidos carece de un sistema de seguros de salud públicos de cobertura universal, como ocurre en muchas naciones, en especial en Europa. Los demócratas creen que se debe avanzar en esa dirección. En cambio, los republicanos rechazan vigorosamente esas políticas y las tachan de “comunistas” y atentatorias contra la libertad de elección. En ello cuentan con el apoyo de la industria médica y farmacéutica que temen que una socialización de la medicina, por

limitada y tibia que sea, pueda afectar sus fabulosas ganancias actuales. Trump se ha mostrado como un decidido partidario de detener, e incluso revertir, las políticas de salud pública desarrolladas en las últimas dos décadas y seguramente apoyará las preferencias del sistema privado.

Como ya se mencionó, para Trump y los republicanos la inmigración ilegal es –tal vez– la prioridad número uno de su agenda. Su discurso apunta a una política de cierre de fronteras y a un despliegue altamente represivo en contra de los potenciales inmigrantes. La virulencia de las actitudes republicanas en este tema ha llegado al punto de mencionar la posibilidad de invadir México y estacionar tropas norteamericanas a ambos lados de la frontera común. Obviamente, Kamala Harris, hija ella misma de inmigrantes provenientes del “sur” le da otra sensibilidad al tema, por lo que lo más probable es que ella busque encontrar alguna manera de promover la regularización migratoria y el ordenamiento de los flujos, en paralelo a lo que parece la ineludible necesidad política de calmar el pánico de las poblaciones anglosajonas ante la “invasión” que hace temblar sus compromisos identitarios.

Frente a los grandes conflictos geopolíticos que Estados Unidos enfrenta hoy por hoy, hay diferencias que podrían resultar en políticas muy divergentes según quién triunfe en las elecciones. Harris es heredera de la postura global que ha sido dominante en Washington desde el fin de la Guerra Fría: mantenimiento del unipolarismo a toda costa, contención de China y de cualquier otra potencia emergente que pudiese llegar a disputar a Estados Unidos la dominación global y promoción de la balcanización de todos los estados con posibilidades de convertirse en adversarios geopolíticos. El sector de las burocracias de la seguridad nacional que ha impuesto este enfoque de manera hegemónica ha sido denominado por sus críticos como el “neoconservadurismo”, que puede muy bien coexistir y apoyarse mutuamente con el liberalismo progresista a nivel doméstico en lo social y cultural.

Donald Trump preconiza desplazar a este grupo de sus posiciones de poder en el Pentágono, el Departamento de Estado y las agencias de seguridad nacional. Ello, no porque no sea partidario de la hegemonía estadounidense, sino porque cree que ella no está siendo adecuadamente precautelada por los “neocons”. Piensa que esta perspectiva ha enredado al país en demasiados y muy costosos compromisos externos, que le ha impedido concentrarse en su propio desarrollo “hacia adentro”, y que ha enfatizado demasiado lo político militar en detrimento de lo económico y comercial. Trump parecería inclinarse por ver la dominación estadounidense en términos comerciales más que militares. Por ejemplo, frente

a China, parecen preocuparle menos las posibles ambiciones territoriales de Beijing sobre Taiwán o sobre el Mar Meridional de la China, que lo que él considera las prácticas comerciales desleales y la “agresión económica” de la que el país asiático sería responsable.

Mientras que para la administración Biden el apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia se ha convertido en una prioridad fundamental, hay indicios de que Trump desearía bajar el perfil de esa guerra y buscar lo más rápidamente un acuerdo negociado que vuelva a abrir las puertas a una relación lucrativa con Moscú. Este último tiende a ver el problema de Ucrania como netamente europeo, que solo tiene implicancias secundarias y mediatas para los Estados Unidos.

Finalmente, en el conflicto entre Israel y Palestina, los republicanos son aún más decididamente proisraelitas que los propios demócratas –si tal cosa fuese posible–. Trump se ha manifestado radicalmente favorable a Netanyahu: su gobierno reprimiría enérgicamente las protestas propalestinas y cerraría la puerta a cualquier presión que se quiera ejercer sobre Israel en los temas de la paz y la guerra en Medio Oriente. Harris, por su parte, aunque sea solo por razones electorales, ha mostrado una pizca de sensibilidad hacia la situación de los habitantes de Gaza y hacia el pueblo palestino, pero ello tampoco va a significar ningún cambio sustancial en la alianza estrecha y existencial entre Estados Unidos e Israel. Cualquier cambio en ese sentido no será sino marginal y decorativo. El apoyo a Israel se ha convertido en parte medular y esencial del sistema político estadounidense y no es concebible que se cambie en el futuro.

Con esto se ha terminado de revisar el sistema de fracturas o “clivajes” que separan los bandos en disputa y los “mundos” alternativos que se abren según cuál de ellos prevalezca. Por primera vez en muchas décadas, las alternativas que se ofrecen a los votantes son claramente diferentes y llevarían –de concretarse– a escenarios nacionales y mundiales cualitativamente distintos. Finalmente, los Estados Unidos pueden escoger entre dos futuros diferentes, e incluso pueden temerse/plantearse la posibilidad de una desestabilización institucional de la cual el 6 de enero de 2021 habría sido tan solo un bosquejo preliminar.²

² Al punto que se ha llegado a hablar en algunos medios –y no se ha calificado esto de disparatado– que la posibilidad de una guerra civil en un futuro no tan lejano es perfectamente concebible. Habría que temblar de solo imaginarse lo que podría ser tal tipo de conflicto en donde ambos bandos poseen armas nucleares. Sería sin duda una pesadilla, un mundo alternativo donde los generales Lee y Grant hubiesen tenido, cada uno, acceso a un “botón nuclear”.

Bibliografía

- Przeworski, Adam. 2019. *Crises of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Extensión. 2024. “Deuda Pública de Estados Unidos 2022 | Datosmacro.com”. Accedido 15 de agosto de 2024. <https://datosmacro.expansion.com/deuda/usa>.
- Goldfrank, Benjamín. 2020. “La democracia estadounidense en el siglo XXI.: ¿Una mengua temporal o un ocaso permanente?”. En *¿Una nueva democracia para el siglo XXI?*, editado por Joaquín Brugué Torruella, Simone Martins, y Carmen Pineda Nebot, 85-102. CLACSO. DOI: <https://n9.cl/mcpft>.
- Heras, Oscar de las. 2024. “El Lawfare ¿Qué es la guerra judicial? Conceptos jurídicos”. *Lo entiendo* [blog], 19 de julio. <https://n9.cl/r86xj>.
- Inglehart, Ronald. 1981. “Post-Materialism in an Environment of Insecurity”. *The American Political Science Review* 75 (4): 880-900. DOI: <https://n9.cl/6px2t>.
- La Opinión. 2022. “La deuda pública de Estados Unidos supera por primera vez los \$31 billones de dólares: qué significa”. <https://n9.cl/w93wz>.
- Levitsky, Steven, y Daniel Ziblatt. 2018. *How Democracies Die*. United Kingdom: Crown.
- Ludendorff, Erich. 1936. *The ‘Total’ War*. London: Friends of Europe. <http://archive.org/details/luden>.
- United States Census Bureau. 2023. #Ingresos, pobreza y cobertura de seguro de salud en los Estados Unidos#. <https://n9.cl/if6lg>.

La derecha al poder en la Argentina (1983-2023): los casos de Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA)

Santiago C. Leiras*

Resumen

La revisión de la política argentina de las últimas décadas permite observar que las opciones de derecha tuvieron una presencia menor que solo se efectivizó inicialmente con la elección de Mauricio Macri en 2015 y luego con Javier Milei en diciembre de 2023. Milei ha propuesto a la sociedad argentina un programa de transformación radical de la economía, la sociedad y el sistema político argentino, con escaso apoyo en las instituciones legislativas, el veto de diferentes organizaciones sociales y un respaldo condicional de los mercados y la opinión pública. La propuesta anarco-capitalista del presidente se enfrenta a una dura oposición parlamentaria y la movilización en las calles.

Introducción

El 10 de diciembre de 2023 la democracia argentina cumplió 40 años de vigencia institucional, el período de mayor duración y estabilidad política; debiendo sortear durante el mismo innumerables desafíos, entre los que merecen ser destacados el militar de 1987/1990, económico de 1989/1990, social del año 2001/2002 y sanitario del bienio 2020/2021.

Resulta importante mencionar que hasta 2015, a nivel nacional y subnacional la democracia argentina –“*the only game in town*” (Przeworski 1995)– había estado caracterizada por al menos cinco reglas fundamentales:

1. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires ha logrado acceder, por medio de la competencia electoral, a la primera magistratura de la Nación.
2. Aquellos candidatos que culminan en segundo lugar en una elección presidencial tienden a perder protagonismo o relevancia política en el período posterior a la contienda electoral.

* Universidad de Buenos Aires-Argentina.

3. Las terceras fuerzas se han visto imposibilitadas de llegar a la conducción política del Estado a través de elecciones libres, competitivas y transparentes a nivel nacional.
4. Ningún gobierno de signo no-peronista ha podido culminar el mandato fijo establecido por la Constitución argentina.
5. El que nace para intendente del conurbano bonaerense o el interior de la provincia de Buenos Aires nunca (o casi nunca) llega a gobernador del distrito (Leiras 2016; 2017).

Respecto de la tercera regla enunciada, la victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015 no solo puso fin a doce años de gobierno kirchnerista, además, dio lugar a un hecho político inédito en la democracia argentina hasta ese entonces, cual fue el acceso de una tercera fuerza a la conducción del poder ejecutivo nacional (Tabla 1).

Tabla 1. Terceras fuerzas, Argentina 1983-2015

Elección	Agrupación	Acceso a la presidencia
1983	Partido Intransigente (PI)	NO
1989	Unión de Centro Democrático (UCD)	NO
1995	Frente por un País Solidario-(FREPASO)	NO
1999	Frente por un País Solidario-(FREPASO)	SI ¹
1999	Acción por la República (AR)	NO
2003	Acción por una República de Iguales (ARI)	NO
2007	Coalición Cívica (CC)	NO
2011	Frente Amplio Progresista (FAP)	NO
2015	Propuesta Republicana (PRO)-Cambiamos	SI ²

Fuente: Leiras 2017.

1 Alianza electoral entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Por Un País Solidario (FREPASO). La fórmula fue encabezada por Fernando De La Rúa de la UCR, secundado por Carlos “Chacho” Álvarez por el FREPASO.

2 Alianza electoral entre los partidos Propuesta Republicana (PRO), Unión Cívica Radical (UCR), y Coalición Cívica (CC). La fórmula presidencial estuvo conformada por Mauricio Macri y Gabriela Michetti, ambos pertenecientes al PRO, la cual se impuso en las elecciones primarias de agosto de 2015 a las fórmulas de la UCR Ernesto Sanz-Lucas Llach y la CC Elisa Carrió-Héctor “Toti” Flores. La experiencia es desarrollada en Gené y Vommaro (2023).

Durante las elecciones presidenciales de 2023 tuvo lugar la irrupción de un nuevo “cisne negro” en la política nacional: en esta oportunidad se trató del economista Javier Milei, primer presidente libertario electo desde 1983, quien al frente de la joven agrupación La Libertad Avanza (LLA)– derrotó en la segunda vuelta electoral por un porcentaje cercano al 56% de los votos al candidato de Unión por la Patria (ex Frente de Todos), Sergio Massa. Milei triunfó en veinte de los veinticuatro distritos electorales de todo el país, con la excepción de las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Buenos Aires.

Es pertinente analizar las experiencias de Propuesta Republicana –PRO– (2015-2019) en el marco de la alianza electoral Cambiemos, y La Libertad Avanza (en curso desde el 10 de diciembre de 2023) como expresiones del ascenso de la derecha argentina al poder.³

A partir de la segunda posguerra y con el ascenso del peronismo, la Argentina se quedó sin la presencia de un partido de izquierda con base obrera y un partido de derecha con votos: con el peronismo convertido en una combinación de conservadorismo popular y laborismo burocratizado, y el radicalismo volcado a una posición de centroizquierda, no había en el país una fuerza política de derecha o centro-derecha moderna que constituya una alternativa para competir democráticamente con una masa suficiente de votos, capaz de expresar una clientela electoral orientada en esa dirección.

En tales circunstancias, en momentos de crisis política, las fuerzas armadas entre 1930 y 1983 han sido reclamadas para llenar el vacío de ese espacio de derecha / centro-derecha y actuar como si se tratara de un partido político que impone, durante un intervalo acotado de tiempo, sus propias políticas destinadas a establecer algún grado de orden –hasta que, por las mismas razones que llevaron al desplazamiento del gobierno constitucional, se les ha pedido que se retiren– (Mora y Araujo 1982).

Este artículo consta de tres partes: en la primera analizaremos el ascenso de la coalición electoral Cambiemos, como expresión de una alianza interparlamentaria y un partido de origen subnacional al frente del poder ejecutivo nacional,

³ Experiencias previas de terceras fuerzas de derecha / centro derecha desde 1983 habían sido las de la Unión de Centro Democrático (UCD)– durante los años ochenta y principios de la década del noventa –partido fundado y dirigido por el ingeniero Álvaro Alsogaray– y posteriormente el partido Acción Por La República (AR), fundado y liderado por el exministro de economía de Carlos Menem (1991-1996) y Fernando De La Rúa (marzo a diciembre 2001), Domingo Felipe Cavallo-. Cabe destacar la experiencia del Movimiento por la Dignidad Nacional (MODIN) liderado por el teniente coronel Aldo Rico, vinculado a la derecha nacionalista. Las dificultades en la construcción de un espacio de derecha / centro-derecha han sido tratadas en Morresi y Vommaro (2014).

Propuesta Republicana-PRO; en la segunda sección abordaremos la experiencia en curso a partir del 10 de diciembre de 2023 de La Libertad Avanza y una breve digresión sobre el Brasil de comienzos de los años noventa. El trabajo finalizará con algunas conclusiones a modo de sumario.

El PRO frente al poder ejecutivo nacional (2015-2019)

Las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina se llevaron a cabo entre el domingo 25 de octubre, mediante una primera vuelta, y el domingo 22 de noviembre, en una segunda vuelta –*ballotage*–.

Los candidatos fueron elegidos en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se realizaron el 9 de agosto de 2015, provenientes de los partidos que alcanzaron en las mismas el umbral del 1,50% de los votos válidos, quedando habilitadas para competir en la primera vuelta las fórmulas Daniel Scioli y Carlos Zannini por el Frente para la Victoria, Mauricio Macri y Gabriela Michetti por Cambiemos, Sergio Massa y Gustavo Sáenz por Unidos por una Nueva Alternativa, Margarita Stolbizer y Miguel Ángel Olaviaga por Progresistas, Nicolás del Caño y Myriam Bregman por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y el binomio Adolfo Rodríguez Saá - Liliana Negre de Alonso por Compromiso Federal.

Tabla 2. Elecciones presidenciales Argentina. Primera vuelta 25 de octubre de 2015

Agrupaciones Políticas	Votos	Porcentaje
Alianza Frente Para La Victoria	9.338.490	37,08 %
Alianza Cambiemos	8.601.331	34,15 %
Alianza Unidos por Una Nueva Alternativa	5.386.977	21,39 %
Alianza Frente de Izquierda y De Los Trabajadores	812.530	3,23 %
Alianza Progresistas	632.551	2,51 %
Alianza Compromiso Federal	412.578	1,64 %
Votos Positivos	25.184.257	96,68 %
Votos en Blanco	664.740	2,55 %
Votos Anulados	199.499	0,77 %
Total de Votantes	26.048.446	

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Resultados Elecciones Nacionales.

Las encuestas iniciales sugerían la posibilidad de que Daniel Scioli (FPV) triunfaría por amplio margen, incluso que podía evitar un *ballotage*. Sin embargo, el resultado de las elecciones presidenciales significó un triunfo sumamente estrecho para el candidato oficialista, con solo el 37,08% de los sufragios, superando por muy escaso margen a Mauricio Macri (Cambiamos) que obtuvo 34,15% de los votos, seguido por Sergio Massa en tercer lugar (UNA) con 21,39%. Luego se ubicaron Nicolás del Caño (3,23%), Margarita Stolbizer (2,51%) y Adolfo Rodríguez Saá (1,64%). El porcentaje de votantes alcanzó el 81,07% de los electores habilitados (Tabla 2).

Como consecuencia de este resultado, se llevaría a cabo una segunda vuelta electoral para definir al futuro presidente. Por primera vez en la historia argentina, se puso en marcha el *ballotage* en elecciones presidenciales, ya que se había llegado a esta instancia en las elecciones de 1973 y 2003, pero no se efectuó debido a la renuncia de los candidatos Ricardo Balbín y Carlos Menem respectivamente, aun cuando el doctor Menem había obtenido el primer lugar en la primera vuelta.

Durante la segunda vuelta la campaña se polarizó totalmente, con los candidatos divididos en su postura hacia el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras el oficialista Daniel Scioli apostaba por un continuismo en las políticas kirchneristas, Mauricio Macri hizo campaña a favor de cambiar algunas de ellas. Este último criticó abiertamente la campaña negativa contra él efectuada por el Frente para la Victoria, describiéndola como una “estrategia oscura”. En este período, varios políticos kirchneristas e instituciones estatales dirigidas por el FPV publicaron mensajes advirtiendo sobre las consecuencias que traería aparejada la elección de Macri como presidente. Scioli defendió dicha campaña, argumentando que se trataba de fomentar la conciencia política.

Finalmente, el *ballotage* se llevó a cabo el domingo 22 de noviembre. Scioli aceptó su derrota al momento de encontrarse escrutadas el 70% de las mesas de votación. Para ese momento, los resultados provisionales daban a Macri una ventaja de seis puntos, con un 53% de los votos. La distancia entre ambos se redujo lentamente en las horas siguientes; Macri, en definitiva, obtuvo un 51,34% de los votos frente al 48,66% de Daniel Scioli. Este significó un margen más estrecho de aquel pronosticado por las encuestas (Tabla 3).

Tabla 3. Elecciones Presidenciales Argentina. Segunda vuelta 22 de noviembre de 2015

Agrupaciones Políticas	Votos	Porcentaje de Votos
Alianza Cambiemos	12.988.349	51,34 %
Alianza Frente Para La Victoria	12.309.575	48,66 %
Votos Positivos	25.297.924	97,54 %
Votos en Blanco	306.471	1,18 %
Votos Anulados	330.848	1,28 %
Total de Votantes	25.935.243	

Fuente: Dirección Nacional Electoral. Resultados Elecciones Nacionales.

El éxito electoral de la alianza Cambiemos en los comicios presidenciales del año 2015 no tuvo efectivo correlato en la formación de una coalición de gobierno.

Una gestión basada en una alianza legislativa entre la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Propuesta Republicana coexistió con la presencia de un partido hasta ese entonces de inserción sub nacional –el PRO, con base en la ciudad de Buenos Aires (CABA) desde el año 2007– al frente del poder ejecutivo nacional, con un liderazgo vertical de Mauricio Macri y la convergencia de dos tipos de redes de apoyo a la gestión: una de carácter técnico, con funcionarios provenientes de empresas del sector privado⁴ y en especial del grupo SOCMA –perteneciente a la familia del presidente–; y otra de carácter territorial, con el soporte de dirigentes con pasado de militancia política en el peronismo, como también algunos funcionarios que acompañaron a Macri en su gestión en la CABA.⁵

La alianza entre el PRO, la UCR y la CC, construida en el poder legislativo, no tuvo un equitativo correlato en la distribución de ministerios: hubo una escasa participación de la UCR y nula presencia de la CC en el gabinete nacional. En efecto, la incorporación de dirigentes de la Unión Cívica Radical en el gabinete –Gustavo Santos en el ministerio de Turismo, Julio Martínez en el de Defensa, Alfonso Prat Gay en la cartera de Hacienda, Ricardo Burayle en la de Agricultura, Oscar Aguad en el área de Telecomunicaciones y Adolfo Rubinstein en el ministerio de Salud, entre otros– obedeció más a la relación de confianza personal con el presidente que a un producto de la relación institucional y a una consulta a la UCR.

⁴ Como los casos del ministro de la producción Francisco Cabrera, del ministro de Energía Juan José Aranguren, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el de Cultura Pablo Avelluto entre otros.

⁵ Tales han sido los casos del ministro del interior Rogelio Frigerio, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y otros ex funcionarios de la CABA como Andrés Ibarra, Jorge Lemus y Carolina Stanley.

Este hecho llama la atención debido a que, en marzo de 2015, en el debate interno de la Convención Nacional de la UCR en la ciudad de Gualeguaychú, se estableció la decisión orgánica del centenario partido de encarar una alianza electoral con Propuesta Republicana –por un total de 188 delegados sobre 330 presentes–, en detrimento de un acuerdo con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, que en su momento estaba sostenido por Gerardo Morales y Ricardo Alfonsín, entre otros.

En este contexto el funcionamiento del congreso argentino pareció alejarse durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos de las clásicas figuras de “la máquina de impedir” o “la escribanía”, que eran utilizadas para describir al organismo colegiado en otras etapas de su historia política reciente. En efecto, la situación de un gobierno en hiperminoría, con base en una alianza interparlamentaria, y la de una oposición mayoritaria fragmentada abrieron paso a una nueva y distinta forma de relación entre el poder ejecutivo y el congreso nacional.

¿Cuál ha sido el resultado de esa peculiar combinación? Por una parte, menor nivel de producción legislativa –en especial en los dos últimos años, 2018 y 2019–; por otra, mayor iniciativa del congreso, por momentos con una llamativa ausencia de trabajo político previo por parte del ejecutivo nacional. Esto, aún en el contexto de las sesiones extraordinarias previstas por la Constitución para el tratamiento de la agenda del poder ejecutivo: el trámite de la reforma al impuesto a las ganancias en las sesiones extraordinarias del año 2016 y el intento de bloqueo legislativo al proyecto de reforma previsional en el último período de sesiones extraordinarias del 2017 atestiguaron las dificultades políticas que tuvo el oficialismo en aquel entonces para garantizar el control de la agenda legislativa (Tabla 4).

Cambiemos constituyó una exitosa coalición electoral, tal como su predecesora: la Alianza (1999-2001); aunque, a diferencia de ella, se basó en un estable acuerdo interparlamentario hasta el final del mandato de Mauricio Macri sin tener que afrontar las tensiones propias de la brecha entre un liderazgo formal y un liderazgo real. No obstante, Cambiemos no se conformó como una coalición de gobierno, ya que su mecanismo de toma de decisiones estuvo basado en un esquema piramidal con el presidente en la cúspide y la ausencia de un esquema institucionalizado de consulta y resolución de conflictos a su interior.

El fracaso de las experiencias de Cambiemos entre 2015 y 2019, primero, y luego el del Frente de Todos en el período 2019-2023 abrió la puerta a la posibilidad de un proceso de alternancia. Pero, contra todas las previsiones, emergió un liderazgo desde fuera del sistema político. A continuación, abordaremos la experiencia en curso de Javier Milei.

Tabla 4. Producción legislativa 2012-2019

Año	Número de leyes aprobadas	Iniciativa Poder Ejecutivo	%	Iniciativa Poder Legislativo	%
2012	106	49	46,22	57	54,78
2013	86	34	39,53	52	61,47
2014	197	89	45,17	108	54,83
2015	121	50	41,32	71	58,68
Total 2012-2015	510	222	43,52	288	56,58
2016	101	28	27,72	73	72,28
2017	86	28	32,55	58	67,45
2018	66	21	31,81	45	68,19
2019	37	8	21,62	29	78,38
Total 2016-2019	290	85	29,31	205	70,69

Fuente: Elaboración propia, en base a Directorio Legislativo, Argentina. Balance Comparativo 2012-2019.

¿Un nuevo cisne negro? El ascenso de Javier Milei y la Libertad Avanza

El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo bajo el principio de no agresión y defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad"
Alberto Benegas Lynch (H)

Un nuevo “cisne negro”⁶ irrumpió en la política nacional en las elecciones presidenciales de 2023: Javier Milei, al frente de la joven agrupación La Libertad Avanza, derrotó en segunda vuelta a Sergio Massa, de Unión por la Patria, por un valor cercano al 56% de los votos (Tabla 5).

Como se mencionó arriba, Javier Milei triunfó en casi todos los distritos electorales del país, con la excepción de las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco y Buenos Aires: en esta última, sin embargo, el resultado fue cercano a un empate: LLA terminó al frente en 109 de los 135 municipios; la diferencia fue compensada por el triunfo del ministro y candidato Massa en 18 de los 35 municipios del Gran Buenos Aires.

⁶ La teoría del cisne negro es la representación de una metáfora que describe aquellos sucesos que ocurren por sorpresa, que ningún analista había previsto ni tenido en cuenta porque a *priori* eran improbables, y que terminan teniendo gran impacto y repercusión.

La victoria de La Libertad Avanza podría explicarse por cinco factores principales (Leiras 2023):⁷ El primero se relaciona con el contexto regional, el segundo con la crisis de mediana edad por la que atraviesa la democracia argentina, el tercero con el carácter frecuentemente sorpresivo que ha caracterizado a la política del país desde 1983, el cuarto con la oportunidad perdida por Juntos por el Cambio y, por último, las propuestas presentadas a la sociedad por el candidato triunfante.

Con respecto al primer factor, la región ha sido un verdadero campo de prueba para la emergencia de líderes de una heterogénea derecha radical con diferentes niveles de suceso electoral; desde aquellos que llegaron al poder, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador, hasta candidatos altamente competitivos derrotados en segunda vuelta, como Rodolfo Hernández en Colombia o José Antonio Kast en Chile.

En relación al segundo, el largo ciclo de cuarenta años de democracia nos enfrenta a un muy modesto balance en materia de satisfacción de las expectativas sociales. Ha sido un proceso de escasos logros –una democracia resiliente y una expansión de la agenda en materia de derechos civiles– y muchas frustraciones en relación al incumplimiento de múltiples demandas. No se han resuelto las esperanzas que despertaba aquel lema tan presente en la campaña de Raúl Alfonsín de 1983: “con la democracia se come, se cura y se educa”.

Tabla 5. Elecciones presidenciales. Segunda vuelta electoral (19 de noviembre de 2023)

Fórmula		Alianza	Lista	Votos	%
Presidente	Vicepresidente				
Javier Milei	Victoria Villarruel	La Libertad Avanza	135	14.554.560	55,65 %
Sergio Massa	Agustín Rossi	Unión por la Patria	134	11.598.720	44,35 %
Votos afirmativos				26.153.280	96,79 %
Votos en blanco				417.574	1,55 %
Votos nulos				450.746	1,67 %
Participación				27.021.600	76,32 %
Abstenciones				8.383.798	23,68 %
Electores registrados				35.405.398	100 %

Fuente: Cámara Nacional Electoral (2023). Segunda vuelta electoral. Consulta del escrutinio definitivo.

⁷ Seis explicaciones diferentes y convergentes pueden hallarse en Semán (2023). La amalgama ideológica de LLA es desarrollada en Morresi y Ramos (2023).

El tercer factor es la amplia experiencia del país en el surgimiento de actores políticos no detectados por el radar de la política tradicional; quienes rápidamente lograron convertirse en referentes nacionales. Tales han sido los casos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Las excepciones fueron Fernando De La Rúa y Cristina Fernández.

En cuarto lugar, la oposición de Juntos por el Cambio, ganadora en los comicios legislativos del año 2021, ha llevado a cabo un proceso interno sumamente disputado que le impidió terminar de convencer a una significativa parte de la sociedad de su condición de alternativa electoral, siendo ese espacio ocupado por LLA.

Javier Milei expuso a la sociedad un conjunto de propuestas –algunas muy polémicas, como venta de órganos; otras, difícilmente practicables, aunque no imposibles en la Argentina, tales como el cierre del Banco Central, una dolarización, entre otras– en un contexto de campaña en que el deterioro del debate público y la ausencia de propuestas fueron sus rasgos principales. *Natura no sopporta el vacío*.

Un nuevo presidente, entre la necesidad y la urgencia

Una vez más, el 10 de diciembre de 2023 Argentina ingresó en un ciclo político en el cual el presidente definió su gestión como una “bisagra o fisura de la historia”,⁸ y que, en esa condición, se proponía inaugurar una nueva etapa política en la que proyecta hacer tabla rasa de los presupuestos sobre los que se basó el proceso democrático desde 1983, en particular, y la política argentina del último siglo, en general.

Así, asistimos a un nuevo discurso con pretensión fundacional, como los de Raúl Alfonsín en 1983, Carlos Menem en 1989 y Néstor Kirchner en 2003, enunciados en contextos de crisis terminal, o percibida como terminal: el colapso del régimen cívico-militar entre 1982/1983 luego de la debacle de Malvinas en el caso de Alfonsín, la hiperinflación de 1989 en el caso de Menem y el colapso social de 2001/2002 en el caso de Néstor Kirchner. Si recordamos el viejo cuento infantil, podríamos decir que, mientras que en estos últimos casos el lobo había llegado para quedarse, en la gestión de LLA el lobo está por venir –encarnado en las amenazas de hiperinflación y la vía venezolana–.

En una obra publicada en el año 2012 el filósofo Tomás Abraham reflexionaba: “Estamos acostumbrados a los mitos de fundación. El punto regenerativo es un lugar común repetido luego de cada una de las crisis nacionales” (Abraham

⁸ Interesante reflexión sobre el kirchnerismo como fisura de la historia se encuentra en Forster (2010).

2012). Así también se interrogaba el filósofo argentino sobre peculiaridad de la cultura política criolla:

¿Puede ser que en nuestro país cada vez que asume la presidencia un personal gubernamental se anuncie una mutación del sistema de valores? [...] Como si existiera un grado cero de la cultura. Santos, mártires, excomulgados, Una nueva epifanía consagra al poder de turno y se proclama al reciente victorioso de una batalla cultural (Abraham 2012, 246-247).

En base a las definiciones precedentes es que el nuevo presidente ha impulsado dos polémicas iniciativas: la primera, a través del DNU 70/2023, que modifica o deroga más de trescientas leyes y que tiene como propósito principal la desregulación de la economía argentina; la segunda, mediante una ley ómnibus que –en un texto de 350 páginas y 664 artículos denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”– propone transformaciones muy profundas sobre diversos y muy variados aspectos de la convivencia social, tales como la regulación de la protesta social, la reforma del sistema electoral, la privatización de empresas del sector público y la regularización de activos económicos –blanqueo–, solo para mencionar algunas de ellas. Digno de mencionar es su artículo 654, que impulsa la aprobación del DNU 70/2023 mediante esta ley.⁹

Con base en un severo diagnóstico sobre la crisis argentina –definida, una vez más, como la más grave de toda la historia–, Javier Milei ha propuesto un programa de transformación radical de la economía, la sociedad y el sistema político, con escaso apoyo en las instituciones legislativas, el veto de diferentes organizaciones sociales y un respaldo condicional de los mercados y la opinión pública.

Las dificultades no tardaron en llegar: el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 fue sometido a votación en el Senado de la Nación y rechazado. No

⁹ Es interesante destacar algunos datos relacionados con el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) desde 1983 a la fecha: 1) Se firmaron en total 1.380 DNU desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 9 de diciembre 2023, a un promedio de 2,88 DNU por mes. 2) Cinco expresidentes hicieron uso del recurso por encima del promedio: Eduardo Duhalde (9,29), Néstor Kirchner (5,09), Carlos Menem (4,36), Alberto Fernández (3,71) y Fernando De La Rúa (3,04). 3) Tres expresidentes hicieron uso de los DNU por debajo del promedio: Raúl Alfonsín (0,34), Cristina Fernández (0,79) y Mauricio Macri (1,45). 4) Párrafo aparte para los seis DNU que firmó Adolfo Rodríguez Saá en siete días de gestión presidencial. Varias consideraciones podrían realizarse a partir de los datos señalados: la primera es que, en el caso de aquellos presidentes que han utilizado este recurso por encima de la media, su gestión tuvo lugar en contextos de crisis de carácter terminal (o así percibidas): económica (Carlos Menem), social (Fernando De La Rúa/Eduardo Duhalde/Néstor Kirchner) y sanitaria (Alberto Fernández), ésta última producto de una pandemia de carácter global; la segunda es que en los casos de Raúl Alfonsín, Cristina Fernández y Mauricio Macri, la gestión gubernamental se desarrolló en contextos de “relativa normalidad” (CFK) o de crisis “asintomática” (Alfonsín/Macri).

obstante, a pesar de ese rechazo, los lineamientos del DNU continúan vigentes a la fecha, a la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Una versión más moderada de la Ley ómnibus ha sido aprobada en general en la prolongada sesión de los días martes 29 y miércoles 30 de abril de 2024 con el apoyo de 142 diputados, el rechazo de 106 legisladores y 5 abstenciones. En esta oportunidad, el apoyo a la ley en general se mantuvo en la discusión particular, no obstante la reintroducción –entre otras iniciativas– del impuesto al tabaco que había sido retirado de la Ley por parte del poder ejecutivo.¹⁰ Merece ser destacado que esta Ley, luego de ser aprobada en general tras sucesivas enmiendas y cambios, había sido reenviada a comisión para considerar las modificaciones propuestas en la discusión particular durante los primeros días del mes de febrero pasado.

Asimismo, la masiva movilización universitaria del día 23 de abril representó el primer cisne negro de la breve gestión de Javier Milei: la calle se encargó de definir los límites al ejercicio discrecional del poder presidencial.

Nos encontramos frente a una disociación entre el teórico del anarcocapitalismo y el jefe del Estado argentino. Si prevalece el presidente, tendrá garantizada su centralidad en la escena política argentina; si lo hace el primero, puede terminar con un destino similar al de expresidentes como Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1992) o Abdalá Bucaram en Ecuador (1997). Precisamente, del expresidente brasileño haremos una referencia a continuación, a modo de digresión, con particular énfasis en los límites de la antipolítica.

Digresión: un paseo con el De Lorean al Brasil de comienzos de los años '90¹¹

En las elecciones presidenciales del año 1989, el entonces gobernador del Estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello, derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio “Lula” da Silva, por un margen de seis puntos en la segunda vuelta electoral.

El candidato triunfante se presentó ante la sociedad como un líder nuevo, ajeno a la clase política tradicional –los “Marajás”, en los términos del propio Collor de Mello; la casta política, diríamos hoy– y propuso un profundo programa de

10 Al momento de culminar este artículo, se espera un difícil tratamiento de la Ley en el Senado Nacional, dada la capacidad de veto del heterogéneo bloque legislativo de Unión por la Patria, compuesto por treinta y tres senadores ¿Podrá el oficialismo construir una base de apoyo que permita sortear el veto de la mayoría legislativa de UXP?

11 Basado en Leiras (2024).

reforma y modernización de la economía de Brasil y un nuevo tipo de relación directa con la sociedad, por encima de las mediaciones del sistema político.

Esa experiencia fue sumamente representativa de los costos implicados en la elaboración de políticas públicas a través de medidas provisorias, cuando el partido o coalición del presidente carece de suficiente apoyo en la legislatura. En el afán de ir más lejos que sus antecesores, el mandatario no solo intentó frenar la inflación sino implementar un plan de cambio estructural que incluía un modelo agresivo de privatizaciones y de reformas en el sector público.

El escaso éxito de las medidas de estabilización tendría como consecuencia la erosión de su apoyo político –de manera particular en relación con las reformas estructurales propuestas–, abarcando el proceso de desencanto inclusive a aquellas reformas llevadas a cabo de manera exitosa, como fue el caso del programa de liberalización comercial.

La incapacidad para la construcción de mayorías estables que permitieran garantizar la gobernabilidad democrática –producto de un estilo excluyente de decisión– y los escasos resultados que acompañaron a la gestión de Fernando Collor de Mello en la puesta en marcha de esta estrategia política tuvieron también repercusión en la evolución de su imagen ante la opinión pública.

De acuerdo con los resultados de la encuestadora *Data Folha*, mientras que al momento de asumir el gobierno el porcentaje de ciudadanos con expectativas positivas sobre su gestión se encontraba en el orden del 71%, este valor fue descendiendo al 36% a los tres meses de gobierno, 34% a los seis meses, 23% al año de gobierno, 18% al año y medio, 15% a los dos años y 9% de expectativas positivas a los dos años y medio de gestión presidencial.

Fue en estas condiciones –y en medio de un escándalo de corrupción por tráfico de influencias– que se desarrolló el proceso de juicio político que llevó primero a la suspensión del presidente, en el mes de septiembre, y finalmente a su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de ocho años, en diciembre de 1992.

Parafraseando al célebre Karl Marx, la historia en Argentina se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa ¿Se repetirá?

Conclusiones preliminares

Este análisis de las experiencias de Propuesta Republicana (2015-2019), en el marco de la alianza electoral e interparlamentaria Cambiemos, y La Libertad Avanza –en curso desde el 10 de diciembre de 2023– ha explorado las expresiones del ascenso de la derecha argentina al poder.

La victoria de Mauricio Macri en las presidenciales de 2015 no solo puso fin a doce años de gobierno kirchnerista, sino que dio lugar a un hecho político inédito en la democracia argentina hasta ese entonces: el acceso de una tercera fuerza de derecha a la conducción del poder ejecutivo nacional. Por otra parte, durante las elecciones de 2023 tuvo lugar la irrupción de un nuevo cisne negro en la política nacional: se trató de Javier Milei, primer presidente libertario desde 1983.

En la primera parte del trabajo analizamos el ascenso de la coalición electoral Cambiemos como expresión de una alianza interparlamentaria y un partido de origen subnacional al frente del poder ejecutivo nacional, el PRO. En la sección siguiente abordamos la experiencia en curso de La Libertad Avanza y una breve digresión sobre el Brasil de comienzos de los años noventa.

Es precisamente la experiencia de los años noventa del siglo pasado la que nos pone a disposición cuatro diferentes desenlaces de las emblemáticas experiencias reformistas: el de Carlos Menem en Argentina –reelección vía acuerdo con la oposición–, el de Alberto Fujimori en Perú –autogolpe y reelección–, el del señalado Fernando Collor de Mello –*impeachment*– y el de Abdalá Bucaram en Ecuador –destitución y declaración de inhabilidad–. El devenir de la propia gestión presidencial será la que finalmente determine cuál de esos –¿u otros?– desenlaces definirá la suerte de Javier Milei.

Bibliografía

- Abraham, Tomás. 2012. *La lechuza y el caracol. Contrarrelato político*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Dirección Nacional Electoral. 2015. Resultados Elecciones Nacionales. Generales Presidente y Vicepresidente 25 de octubre 2015. <https://n9.cl/yv9i>.
- _____. 2015. Resultados Elecciones Nacionales. Segunda Vuelta Presidente y Vicepresidente 22 de noviembre. 2015. <https://n9.cl/4r85a>.
- Directorio Legislativo. 2019. *Argentina. Balance Comparativo 2012-2019*. <https://n9.cl/r6bcx>.
- Cámara Nacional Electoral. Segunda vuelta electoral. Consulta del escrutinio definitivo. <https://n9.cl/25ovq>.

- Forster, Ricardo. 2010. "Las fisuras de la historia". *Diario El Argentino*, 15 de abril. Buenos Aires, Argentina.
- Gené, Mariana y Gabriel, Vommaro. 2023. *El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Leiras, Santiago. 2016. "La democracia argentina en el contexto del Bicentenario: reglas, patrones y tendencias". *Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas*, XLIII: 1-24.
- _____. 2017. "Provincia de Buenos Aires ¿La jefatura comunal como 'Techo de Cristal' de los intendentes bonaerenses". *Ecuador Debate*, 102: 67-81. CAAP.
- _____. 2023. "PASO 2023 en Argentina: Brainstorming en medio de la tormenta electoral". *Desafíos de la Democracia en América Latina-DDA*, 54: 54-57.
- _____. 2024. "Argentina 2024: volver al futuro". *Diario Perfil*, 17 de marzo. Buenos Aires.
- Mora y Araujo, Manuel. 1982. "El ciclo político argentino". *Desarrollo Económico*, 22 (86): 203-30.
- Morresi, Sergio y Hugo, Ramos. 2023. "Apuntes sobre el desarrollo de la derecha radical en Argentina: el caso de La Libertad Avanza". *Caderno CRH*, 36: 1-18.
- Morresi, Sergio y Gabriel, Vommaro. 2014. "Unidos y diversificados: la construcción del partido PRO en CABA". *Revista SAAP*, 8(2): 375-417.
- Przeworski, Adam. 1995. *Democracia y mercado. Reformas económicas y políticas en Europa del Este y América Latina, 1995*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Semán, Pablo. 2023. "Introducción". En *Está entre nosotros ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?*, coordinado por Pablo Semán. Buenos Aires: Siglo XXI.



Algo va mal: nuevos desórdenes globales

310
MARZO-ABRIL 2024

COYUNTURA: **Benjamin Kurylo**. Corrupción en El Salvador: el doble juego de Bukele.

TRIBUNA GLOBAL: **Joshua Leifer**. La izquierda israelí en una encrucijada histórica. Entrevista a Sally Abed, Yael Berda y Eli Cook.

TEMA CENTRAL: **Artem Remizovsky**. La izquierda ante la desintegración del orden mundial. **Ezequiel Kopel**. Guerra en Gaza: balances necesarios.

Patrick Iber. El trumpismo como amenaza a la democracia. **Steven Forti**. ¿La extrema derecha otra vez «de moda»? Metapolítica, redes internacionales y anclajes históricos. **Uwe Optenhögel**. BRICS: de la ambición desarrollista al desafío geopolítico. **Gabriel Kessler / Gabriel Vommaro**. ¿Cómo se organiza el descontento en América Latina? Polarización, malestar y liderazgos divisivos. **Ignacio Álvarez-Ossorio Alvaríño**. Irán: contestación doméstica y retos regionales. **Apama Sundar**. El «momento Modi» y la extrema derecha hindú. **Óscar Mateos Martín**. África en el torbellino de la volatilidad global.

ENSAYO: **Eva Illouz**. Fascismo y democracia: el gusano en la manzana.



308
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023

Argentina, el abismo permanente



309
ENERO-FEBRERO 2024

¿De la utopía a la distopía?

PAGOS: Solicite precios de suscripción y datos para el pago a <info@nuso.org> o <distribucion@nuso.org>.

EN NUESTRO PRÓXIMO NÚMERO
Cocina, política, cultura

Conflictividad socio-política Marzo – Junio 2024

David Anchaluisa

Entre marzo y junio de 2024 se registraron 230 casos de conflictividad, 35 adicionales en relación con el periodo anterior. Estos meses estuvieron marcados por acontecimientos como el conflicto diplomático entre Ecuador y México, originado por la intervención de la embajada mexicana en Ecuador. Además, se desarrolló la Consulta Popular y Referéndum 2024 en la que el gobierno obtuvo apoyo en nueve de las once preguntas planteadas. Esto ocurrió en un contexto en que la crisis económica, política y de seguridad no muestra señales de mejoras importantes. Así, los tipos de conflictos más frecuentes fueron los de las organizaciones de la sociedad civil, urbano barriales y laborales, tanto públicos como privados. Los sujetos de la conflictividad más activos fueron los grupos locales, las organizaciones barriales, los gremios y los trabajadores. El objeto más frecuente de la conflictividad fue el rechazo de la política estatal que halló expresión mayoritaria en marchas y protestas. Por otro lado, la conflictividad socio-política se caracterizó por su arraigamiento local y cantonal. Sin embargo, empezó a escalar al nivel provincial y regional. Finalmente, las instancias estatales más activas en la gestión de los conflictos fueron los ministerios, la policía y los municipios, aunque la mayoría de los conflictos no ha hallado solución o debe esperar por ella de modo indefinido, lo que alimenta las causas de la conflictividad.

Frecuencia del conflicto

Entre marzo y junio de 2024 se documentaron 230 casos de conflictividad socio-política. Esto representa un incremento notorio de 35 conflictos en relación con el cuatrimestre anterior, que tuvo 195 casos entre noviembre 2023 y febrero 2024. Si bien la distribución por mes no evidencia marcadas diferencias, se puede destacar una mayor concentración de conflictividad en marzo y abril, ambos meses representan un 55,65% del total de casos registrados. En mayo los eventos disminuyen a 47 y en junio se observa un nuevo incremento a 55 casos.

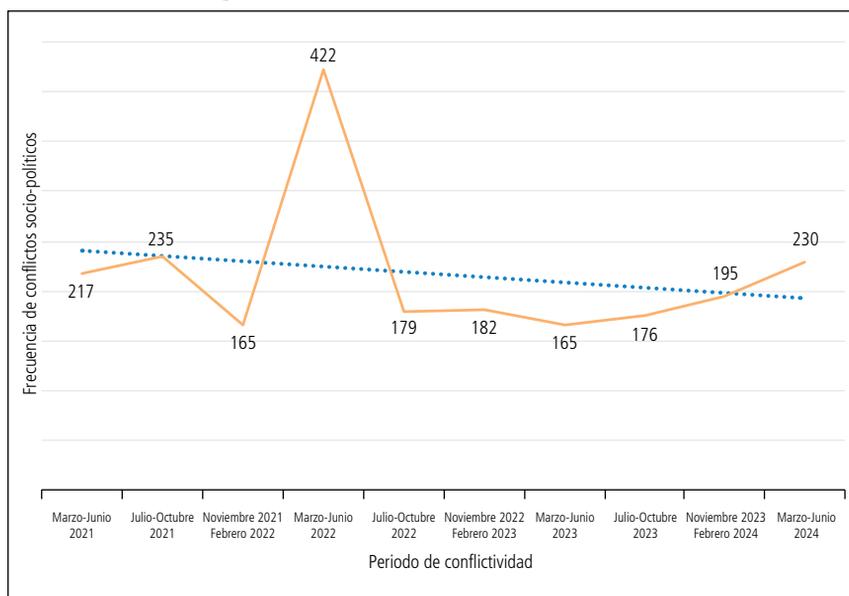
Tabla 1. Casos de conflictividad por mes

Fecha	Número	Porcentaje
Marzo / 2024	63	27,39
Abril / 2024	65	28,26
Mayo / 2024	47	20,43
Junio / 2024	55	23,91
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI – CAAP

En una mirada retrospectiva a los periodos anteriores, podemos notar que a partir de marzo de 2023 existe una tendencia del aumento en la frecuencia de conflictos. En concreto, en marzo-junio de ese año se documentaron 165 casos; en julio-octubre de 2023 se incrementaron a 176; en el periodo de noviembre 2023 a febrero 2024 se produjeron 195; y, finalmente, en marzo-junio de 2024 los casos documentados fueron 230.

Figura 1. Evolución de la frecuencia de la conflictividad



Fuente: Observatorio de conflictividad (CAAP 2021-2024)

El aumento de la conflictividad en el contexto nacional se produce en medio de un conjunto de crisis de índole económica, política, institucional y de seguridad. En el plano económico, las proyecciones de crecimiento son desalentadoras. El Banco Central del Ecuador ha estimado para el 2024 un 1% de crecimiento (BCE 2024), mientras que el Banco Mundial estima que este será de 0,3% (World Bank 2024). Entre tanto, el gobierno nacional enfrenta una grave adversidad relacionada con el déficit presupuestario. En su intento por solucionar esta situación ha vuelto a acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI): el 31 de mayo de 2024 pactó un nuevo acuerdo de crédito por 4.000 millones de dólares. A cambio deberá cumplir una serie de condiciones que impone el FMI y

la carta de intención firmada por el gobierno nacional. Además, adoptó medidas económicas delicadas, por su impacto en la sociedad y su posible reacción: el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15% y la eliminación de los subsidios a las gasolinas (extra y ecopaís).¹

Por otra parte, la situación laboral se halla deteriorada. A pesar de que en el discurso oficial se habla de la creación de 50.000 hasta 64.000 plazas de empleo, sin embargo, otras entidades estatales como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) muestran datos distintos a los señalados por el Gobierno.

En el plano político, la situación de gobernabilidad se ha transformado vertiginosamente. Al inicio de la gestión de Daniel Noboa se habló de un acuerdo de gobernabilidad que involucraba al presidente y las bancadas de legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), Acción Democrática Nacional (ADN) y Partido Social Cristiano (PSC). Con base en dicho acuerdo varias leyes urgentes se aprobaron. Sin embargo, a pocos meses de gestión el pacto ha desaparecido. El accionar del gobierno le ha abierto varios frentes de conflicto con adversarios políticos e incluso con actores ideológicos cercanos. Por otro lado, no se puede perder de vista la cercanía de las próximas elecciones presidenciales en 2025, y los cálculos políticos que esta coyuntura motiva en cada organización y partido político.

Finalmente, la inseguridad que vive el país es un marcado rasgo que caracteriza el contexto nacional. El “Plan Fénix”² –una bandera del gobierno nacional– genera más dudas que certezas y las varias declaratorias de *estado de excepción* no constituyen soluciones definitivas a la inseguridad. Mientras tanto, el crimen organizado vinculado al narcotráfico continúa operativo e influyendo en esferas como la justicia y la política. A ello hay que añadir el profundo desasosiego de la sociedad civil que experimenta a diario extorsiones, robos, secuestros y asesinatos.

1 Productos como el diésel y el gas de uso doméstico continúan con subsidios.

2 El «Plan Fénix» fue una de las propuestas de campaña del actual presidente Daniel Noboa. Algunas de las acciones que se publicitaron como parte de este plan fueron la creación de una Central de Inteligencia y la entrega de equipamiento y armamento táctico a las fuerzas del orden. Sin embargo, un amplio conjunto de actores duda de la existencia del plan como política pública, pues no se conoce un documento oficial con metas e indicadores que permitan conocer su sentido y evaluarlo.

Género del conflicto

Durante este periodo se evidencia que el género del conflicto predominante corresponde a la categoría de *organizaciones de la sociedad civil* con 99 casos (43%). Otros géneros significativos corresponden a: *urbano barrial*, con 43 casos (18,7%); *laboral privado*, con 26 casos (11,3%); *laboral público*, con 22 casos (9,6%). Finalmente, otras categorías con menor frecuencia son: *instituciones educativas*, *campesino*, *pugna de poderes*, *indígena*, *cívico regional*, *político legislativo* y *político partidista*.

Tabla 2. Género del conflicto

Género del conflicto	Número	Porcentaje
Campesino	3	1,3
Indígena	6	2,6
Cívico regional	9	3,9
Urbano barrial	43	18,7
Laboral público	22	9,6
Laboral privado	26	11,3
Político partidista	4	1,7
Político legislativo	9	3,9
Pugna de poderes	3	1,3
Organizaciones de la Sociedad Civil	99	43,0
Instituciones educativas	1	0,4
Otros	5	2,2
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

La alta frecuencia en la categoría *organizaciones de la sociedad civil* refleja el papel de una ciudadanía activa que demanda políticas públicas más eficientes, el cumplimiento de derechos y cambios sociales importantes. El número de casos en la categoría *urbano barrial* son la expresión de los problemas y las tensiones sociales que viven las zonas urbanas, principalmente en torno a la inseguridad. Por otro lado, es importante señalar que los conflictos de orden *laboral público* y *laboral privado* continúan siendo significativos, la falta de recursos y las condiciones de trabajo en varias actividades económicas son factores que alimentan la conflictividad.

Sujeto del conflicto

Los sujetos predominantes en la conflictividad corresponden a tres categorías: *grupos locales*, con 46 incidentes (20%); *organizaciones barriales* y *grupos heterogéneos*, con 34 casos cada una (14,8%). Otros grupos significativos de la conflictividad fueron los *gremios*, con 28 casos (12,2%), *trabajadores*, con 26 casos (11,3%) y *partidos políticos*, con 14 casos (6,1%).

Tabla 3. Sujeto del conflicto

Sujeto del conflicto	Número	Porcentaje
Gremios	28	12,2
Empresas	6	2,6
Sindicatos	8	3,5
Organizaciones barriales	34	14,8
Trabajadores	26	11,3
Campesinos	4	1,7
Indígenas	7	3,0
Grupos locales	46	20,0
Grupos heterogéneos	34	14,8
Partidos políticos	14	6,1
Universidades	1	0,4
Secundaria	1	0,4
Otros	5	2,2
Ambientalistas	7	3,0
LGBTI	2	0,9
Derechos Humanos	7	3,0
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

Los conflictos socio-políticos en que los *grupos locales* fueron los protagonistas están relacionados con la falta de financiamiento a los servicios de salud y el pago a prestadores privados que complementan esta cobertura. Por otro lado, tienen relación con la carencia o falta de servicios como agua potable, vialidad, transporte y seguridad. Y finalmente, estos conflictos están vinculados a la violación

de diversos derechos humanos a miembros de las localidades o que afectan a las mismas. Por su parte, en los casos en que se evidencia un protagonismo de *organizaciones barriales* y de *grupos heterogéneos*, los problemas están relacionados con la vialidad, obras y su financiamiento a nivel local, la inseguridad ciudadana y el uso de los espacios públicos.

Objeto del conflicto

El objeto de conflicto más significativo ha sido el *rechazo de la política estatal*, los 46 casos (20%) son evidencia de un creciente descontento con las políticas del gobierno. En este periodo, se pueden destacar algunos hitos en torno a los que se han agudizado las tensiones entre sociedad civil y Estado. En primer lugar, las propuestas del *Referéndum y Consulta Popular*, llevados a cabo el 21 de abril de 2024, en el que el gobierno consiguió respaldo en nueve de las once preguntas.³ Además, respecto a la política gubernamental en torno a actividades extractivas –tanto mineras como petroleras–, el conflicto más visible se produjo en torno a la consulta ambiental previa a la concesión minera en el sector de Palo Quemado. Por otro lado, las medidas económicas de incremento del porcentaje del IVA del 12% al 15% y la eliminación de subsidios a las gasolinas han agitado el accionar de las organizaciones sociales. Otro aspecto que provoca oposición a las políticas públicas tiene relación con las propuestas de reforma a la seguridad social.

Tabla 4. Objeto del conflicto

Objeto del conflicto	Número	Porcentaje
Salariales	13	5,65
Laborales	29	12,61
Financiamiento	30	13,04
Rechazo política estatal	46	20,00
Denuncias de corrupción	5	2,17
Otros	107	46,52
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

³ Las dos preguntas en las que el gobierno no tuvo respaldo fueron: 1. La propuesta de que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método de solución en controversias de temas como inversión o contratos. 2. Las reformas laborales para el trabajo por horas.

Otro motivo importante de conflictividad tiene que ver con el *financiamiento*, categoría que concentra 30 casos (13,04%). La falta de recursos en el área de la salud obligó a pacientes con cáncer y usuarios de diálisis a manifestarse ante una situación que pone en riesgo sus vidas. Sin embargo, la respuesta estatal no ofrece una solución definitiva, pues no cuenta con los recursos para cubrir millonarios déficits presupuestarios y deudas con prestadores externos de salud.

Finalmente, los temas *salariales* y *laborales* fueron otra fuente importante de conflictividad. El gobierno central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) mantienen deudas de varios meses por concepto de salarios con servidores públicos. Los gremios que más destacaron en sus reivindicaciones fueron los maestros y los médicos. Por otra parte, desde varios gremios reclaman por la mejora de las condiciones de seguridad que habilitan el desarrollo de actividades productivas y comerciales.

Intensidad del conflicto

Durante este periodo la estrategia más usada por los actores sociales para manifestar sus necesidades y defender sus derechos fue la realización de *marchas*, en esta modalidad de acción se documentó un total de 74 casos (32,17%). En segundo lugar, con un total de 61 casos (26,52%) la conflictividad adoptó la forma de *protestas*. A continuación, en 38 casos (16,52%), los actores sociales usaron *otras* formas de acción como reclamos o quejas. Finalmente, la vía *judicial* recogió 26 casos (11,30%).

Tabla 5. Intensidad del conflicto

Intensidad del conflicto	Número	Porcentaje
Bloqueos	12	5,22
Paros/huelgas	3	1,30
Tomas	1	0,43
Protestas	61	26,52
Marchas	74	32,17
Desalojos	1	0,43
Amenazas	12	5,22
Heridos	1	0,43

Suspensión	1	0,43
Juicios	26	11,30
Otros	38	16,52
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

Mediante las *marchas y protestas* la sociedad civil manifestó su inconformidad con las medidas económicas, el extractivismo minero y petrolero, la falta de recursos y los recortes presupuestarios, principalmente a los GAD, y con la seguridad ciudadana.

Impacto del conflicto

Tal como se observa en la tabla, el impacto evidencia una concentración de casos a nivel *local y cantonal*, ambas categorías suman 140 casos (60,87%). Esto significaría que la mayoría de los conflictos surgen y se limitan a zonas geográficas específicas sin lograr escalar a niveles más amplios e involucrar a más actores. Los conflictos dentro de estas categorías guardan relación con asuntos como la inseguridad, la carencia de servicios (agua, alcantarillado), las deudas de los GAD a funcionarios públicos y a sus proveedores. Ante esto, la ciudadanía en distintos barrios y cantones exige medidas efectivas.

Otro porcentaje importante de conflictos tuvo un impacto *regional*, con 50 casos (21,74%) y son un indicador de problemas estructurales que involucran a sectores de la sociedad civil más organizados con mayor capacidad de acción. Comprende temas como el extractivismo (minero y petrolero),⁴ el financiamiento a los GAD, el rechazo de las medidas económicas de alza del IVA y la eliminación de subsidios a las gasolinas (extra y ecopaís) y los proyectos de reformas a la seguridad social.

⁴ En este periodo fueron muy visibles conflictos como: 1. La consulta ambiental en Palo Quemado (Cotopaxi). 2. El rechazo de comunidades amazónicas hacia las intenciones del gobierno nacional de impulsar una ronda de licitación petrolera en la región suroriente y extremo sur de la Amazonía. 3. El pedido de comunidades amazónicas de apagar los mecheros de quema de gas de las petroleras, que contaminan y causan enfermedades a la población.

Tabla 6. Impacto del conflicto

Impacto del conflicto	Número	Porcentaje
Local	84	36,52
Cantonal	56	24,35
Provincial	24	10,43
Regional	50	21,74
Nacional	14	6,09
Internacional	2	0,87
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

Los conflictos con un impacto *nacional* e *internacional* suman catorce (6,09%) y dos (0,87%) casos, respectivamente. Si bien pueden ser menos frecuentes, tienen consecuencias más serias, por lo cual requieren especial atención. En este periodo, algunos conflictos de alcance nacional fueron, por un lado, la pugna política entre el poder Ejecutivo y Legislativo, lo que contribuye a la falta de gobernabilidad. Además, el financiamiento a los GAD, situación que escaló hasta formar una causa común en la que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE) tomaron parte.

Finalmente, un conflicto de impacto internacional fue el asalto de las fuerzas del orden ecuatorianas a la embajada mexicana para detener al expresidente Jorge Glas, un hecho que causó una crisis diplomática que no parece tener fecha pronta de solución y que ha llevado a las partes a la Corte Penal Internacional, mientras que al interior del país provocó la abierta oposición del partido Revolución Ciudadana y su bancada de legisladores al gobierno nacional.

Conflictos por región

La distribución de los casos de conflictividad por región evidencia una marcada concentración en la *Sierra* y la *Costa*. En la primera se documentaron 123 casos (53,48%) y en la segunda región, 100 casos (43,48%), ambas suman un 96,96% del total. En contraste, la *Amazonía* registra únicamente siete casos (3,04%). Por otra parte, de acuerdo a las fuentes, *Galápagos* no registró situaciones de conflictividad socio-política en este periodo.

Tabla 7. Conflictos por región

Región	Número	Porcentaje
Costa	100	43,48
Sierra	123	53,48
Amazonía	7	3,04
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

El análisis según su *género* y *región* evidencia que en la *Sierra* se registra una mayor cantidad y diversidad de tipos de conflictos. Se destacan principalmente los relacionados con las *organizaciones de la sociedad civil* (56 casos), *laborales público y privado* (22 casos), *urbano barrial* (12 casos) y *cívico regional* (9 casos). En la *Costa*, aunque suma una cantidad importante (100 conflictos), se observa que se concentran principalmente en la categoría *organizaciones de la sociedad civil* (39 casos) y *urbano barrial* (31 casos). Por otro lado, en la *Amazonía* se documentan únicamente siete casos, y la mayoría está relacionada con las *organizaciones de la sociedad civil* (4 casos).

Tabla 8. Género del conflicto por región

Género del conflicto	Región			Total
	Costa	Sierra	Amazonía	
Campesino	0	3	0	3
Indígena	0	4	2	6
Cívico regional	0	9	0	9
Urbano barrial	31	12	0	43
Laboral público	12	10	0	22
Laboral privado	14	11	1	26
Político partidista	1	3	0	4
Político legislativo	1	8	0	9
Pugna de poderes	0	3	0	3
Organizaciones de la Sociedad Civil	39	56	4	99
Instituciones educativas	0	1	0	1
Otros	2	3	0	5
Total	100	123	7	230

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora y El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

La prevalencia de conflictos relacionados con las *organizaciones de la sociedad civil* en todas las regiones supone una intensificación de la conflictividad socio-política y un dinamismo de las organizaciones que abre panoramas inciertos sobre las vías que pueden conducir hacia el alivio de aquella conflictividad.

Conflicto por provincia

La distribución por provincia muestra una concentración en *Pichincha* (72 casos) y *Guayas* (55 casos), ambas abarcan el 55,21% de casos registrados. Históricamente estas provincias han tenido un peso importante por ser ejes económicos y políticos del país. En cuanto a *Azuay*, en este periodo recoge un 10,43% de casos.

Tabla 9. Distribución por provincia

Provincia	Número	Porcentaje
Azuay	24	10,43
Cotopaxi	10	4,35
Esmeraldas	4	1,74
Guayas	55	23,91
Imbabura	1	0,43
Loja	4	1,74
Los Ríos	13	5,65
Manabí	9	3,91
Morona Santiago	1	0,43
Pastaza	1	0,43
Pichincha	72	31,30
Tungurahua	15	6,52
Zamora Chinchipe	1	0,43
Sucumbíos	4	1,74
Santo Domingo de los Tsáchilas	10	4,35
Santa Elena	6	2,61
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

Otras provincias con una menor cantidad de casos son *Tungurahua*, con 15, y *Los Ríos*, con 13. A estas les siguen *Cotopaxi* y *Santo Domingo de los Tsáchilas*, cada una con 10 casos registrados.

Intervención estatal

El análisis de la intervención estatal en la conflictividad muestra que, en este periodo, los distintos *ministerios* tuvieron un peso importante en la gestión de la conflictividad, según los datos, en 72 casos (31,3%). Por otro lado, los *gobiernos provinciales* (gubernaciones) han asumido la gestión de la conflictividad únicamente en 11 casos (4,78%).

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tanto *municipios* como *Consejos Provinciales* en conjunto, han intervenido en 41 casos (17,83%). Por otro lado, el sistema judicial estuvo presente en 25 casos (10,87%) y la *Corte Constitucional* en 10 (4,35%). A su vez, la *Asamblea Nacional* canalizó 13 casos (5,65%). Finalmente, las fuerzas del orden, tanto *policía* como *militares*, se involucraron en 43 situaciones de conflictividad (18,69%).

Tabla 10. Intervención del Estado

Intervención estatal	Número	Porcentaje
Policía	40	17,39
Ministerios	72	31,30
Municipio	39	16,96
Militares	3	1,30
Gobierno provincial	11	4,78
Judicial	25	10,87
Consejo Nacional Electoral	1	0,43
Otros	14	6,09
Asamblea Nacional	13	5,65
Consejo Provincial	2	0,87
Corte Constitucional	10	4,35
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

Desenlace del conflicto

En un análisis del desenlace se puede observar una preocupante falta de capacidad gubernamental para la resolución efectiva. Por un lado, 139 conflictos (60,43%) han visto sus soluciones *aplazadas*, por otro, 53 no tuvieron resolución (23,04%). En el otro lado de la moneda, son escasos los que han hallado una solución *positiva*, únicamente 14 casos (6,09%) o que al menos pudieron entrar en un proceso de *negociación*, 9 casos (3,91%).

Si bien en este periodo hubo una importante intervención de las fuerzas del orden en los conflictos documentados, su desenlace fue la *represión* únicamente en 6 ocasiones (2,61%).

Tabla 11. Desenlace del conflicto

Desenlace del conflicto	Número	Porcentaje
Negociación	9	3,91
Positivo	14	6,09
Rechazo	7	3,04
Represión	6	2,61
No resolución	53	23,04
Aplazamiento resolución	139	60,43
Otros	2	0,87
Total	230	100

Fuente: El Expreso, El Universo, La Hora, El Mercurio de Cuenca. Elaboración: UI-CAAP.

A partir del análisis del desenlace de los conflictos se puede apuntar que la capacidad gubernamental de ofrecer soluciones fue insuficiente. Es necesario recalcar que el contexto social, económico y político por el que atraviesa el país agudiza mucho más los motivos de conflictividad socio-política y pone en evidencia la necesidad de atender los problemas estructurales; tarea que requiere una perspectiva de mediano y largo plazo. A la par, se evidencia la necesidad de una gestión eficaz de los conflictos desde las distintas instancias estatales.

Bibliografía

- BCE, Banco Central del Ecuador. 2024. “La economía ecuatoriana registró un crecimiento de 2,4% en 2023”. Banco Central del Ecuador [sitio web]. <https://n9.cl/2ir7q>.
- World Bank. 2024. *June 2024. Global Economic Prospects*. Washington DC: World Bank. <https://hdl.handle.net/10986/41536>.

Presentación del Tema Central: Élites y derechas en América Latina

Miguel Ruiz Acosta*

Uno de los principales estudiosos de las derechas latinoamericanas (Cannon 2016) postula que en nuestra región existe una sólida tradición de estudios sobre las élites, pero considera que hay una relativa debilidad de aproximaciones sistemáticas que analicen los vínculos entre aquellas y las derechas. Tomando como punto de partida la teoría de Michael Mann sobre el poder social, Cannon se propuso pensar esos vínculos a partir del análisis de cinco tipos de *redes de poder* que utilizan las élites económicas, ideológicas, políticas, militares y transnacionales. Este tipo de acercamiento le permite concluir que para las élites la lucha por el poder del Estado es central, pero no agota su amplio repertorio de estrategias para conservar e incrementar su poder social. En otras palabras, lo que nos sugiere Cannon, en la mejor tradición gramsciana, es la necesidad de comprender la agencia de las élites desde el punto de vista de la lucha por la hegemonía, la cual pasa simultáneamente por las diferentes esferas del mundo social y se ejerce en diversos grados, tanto en las trincheras de la sociedad civil (medios de comunicación, universidades, *think tanks*, gremios empresariales, etc.) como en las instituciones propiamente “políticas”: los partidos y las diferentes ramas del poder público.

En este mismo sentido, en su reciente trabajo sobre las derechas latinoamericanas Bohoslavsky (2023, 20) sugiere pensar a las derechas como “las organizaciones específicamente políticas que defienden de manera activa las formas desiguales de distribuir bienes, oportunidades y reconocimiento entre las clases sociales, pero también entre varones y mujeres y entre generaciones”. Al poner en el centro, aunque no exclusivamente, el problema de las clases, Bohoslavsky se hace eco de una larga tradición intelectual que se remonta a los orígenes mismos del nacimiento de la “geografía política” de la modernidad: la Revolución francesa. Fue durante esa gesta que se acuñaron los términos de derecha e izquierda para

* Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y miembro del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Contacto: maruiz@uce.edu.ec.

referirse, en un primer momento, al problema de quién debería ser el sujeto de la soberanía (la Nación o el Rey). Pero rápidamente la dicotomía se fue trasladando a un terreno contencioso más complejo relacionado con la posición ante el problema clave de la igualdad, y no solo en sus aspectos jurídicos formales (igualdad ante la ley), sino también de la igualdad *sustantiva* en el plano del acceso a la propiedad y a la riqueza. Es en ese sentido que las aproximaciones clásicas al estudio de la diada izquierda/derecha de los siglos XIX y XX centraron su atención en cómo se definían las fuerzas políticas en torno a la polaridad igualdad/desigualdad y, concomitantemente, en torno a la defensa o crítica de los privilegios. Es en este mismo sentido que los trabajos reunidos en el presente Dossier también pretenden dar cuenta de los complejos vínculos que existen entre las élites –que defienden un orden socioeconómico fundado en la desigualdad y los privilegios– con los diferentes instrumentos políticos (redes, partidos, medios, instituciones estatales), que les sirven de apoyo para el mantenimiento de su poder social.

Antes de presentar las temáticas centrales de cada uno de los aportes del Dossier, creemos conveniente hacer una somera referencia a uno de los debates más encendidos durante los últimos años entre los estudiosos de esa mitad *diestra* del espectro político contemporáneo; un debate que se podría sintetizar en la pregunta/título del artículo de Verónica Giordano (2014): “¿Qué hay de nuevo en las ‘nuevas derechas?’” La pregunta en sí lleva ya implícita una hipótesis de trabajo: la emergencia de corrientes políticas y partidarias en nuestra región que, de alguna manera, encarnan novedades respecto a las derechas llamadas clásicas o tradicionales; aquellas que disputaron el poder político durante buena parte del siglo XX latinoamericano. Sin pretender resumir las diferentes posiciones que existen al respecto –eso sería motivo de una investigación en sí misma–, consideramos que las ideas avanzadas por Waldo Ansaldi (2022) pueden ser muy fértiles para pensar el problema.

Este autor sostiene que no es lo mismo decir “las nuevas derechas” que “lo que tienen de nuevo las derechas”, para enfatizar que estamos ante fenómenos políticos que expresan de forma simultánea cambio y continuidad. Para Ansaldi la continuidad estaría dada por tres dimensiones del pensar y actuar de las fuerzas de derecha latinoamericanas de ayer y hoy:

- 1) un núcleo conceptual duro que es permanente u orgánico –su posición respecto de la diada igualdad/desigualdad y conexo, la defensa a ultranza del capitalismo, preferentemente sin Estado de bienestar o, en América Latina, de compromiso social o protector–; 2) un núcleo discursivo también duro y permanente, acentuado a lo largo

de las últimas décadas –la apelación a la mentira, al uso indiscriminado del bulo, a la distorsión del sentido y significado de las palabras, comenzando por el preciado principio de la libertad, que han bastardeado hasta el escándalo–; y 3) la apelación a la violencia física –armada en el límite– y simbólica para oponerse a quienes las confrontan (Ansaldi 2022, 128-129).

Sin embargo, pese a la tozuda continuidad de tales aspectos, tampoco sería del todo correcto obviar algunos elementos relativamente novedosos de las estrategias de las élites económicas más concentradas y con aspiraciones a la participación directa en el escenario político: a) consolidación de un conjunto de trincheras en la esfera de la sociedad civil para apuntalar la dimensión consensual de su poder: adquisición o creación de medios de comunicación de masas; fundación de centros de pensamiento (*think tanks*) con orientación neoliberal para promover sentidos comunes acusadamente individualistas, anti-políticos y críticos de cualquier tipo de agencia estatal que proteja a las mayorías del despotismo de mercado; b) reciclaje de viejos partidos tradicionales o creación de nuevos instrumentos partidarios para renovar su imagen; c) puesta en marcha de un conjunto de acciones legales y paralegales para socavar la legitimidad de los proyectos políticos de orientación progresista (guerras mediáticas y judiciales o *lawfare*); d) en los casos más extremos, implementación de estrategias *neogolpistas* con diferentes grados de participación de las fuerzas internas (policía, fuerzas armadas, grupos paramilitares, mercenarios) y externas.

Por supuesto que hay que remarcar que el relativo éxito de tales apuestas ha estado en una relación directamente proporcional con la incapacidad de los gobiernos de izquierda y demás fuerzas progresistas para garantizar la sostenibilidad de sus proyectos transformadores y de emancipación social. En pocas palabras, el fortalecimiento y los triunfos de las fuerzas de derecha no se pueden explicar exclusivamente a partir de sus fortalezas, sino también de las debilidades y contradicciones irresueltas de los proyectos políticos de signo contrario, al calor de las crisis políticas y económicas de los últimos tiempos. En este sentido, como anotan Orozco y Bolaños:

[algunas derechas latinoamericanas] contemporáneas consiguieron politizar a su favor los sentimientos de incertidumbre y de temor que dichas crisis han provocado entre amplísimos sectores de la población global, obligándoles a pensar mucho menos en términos de esperanzas y de utopías realizables que en términos de catastrofismos y, sobre todo, de construcción de otredades [a combatir], como las mujeres, las disidencias sexogenéricas o las clases más empobrecidas... las poblaciones migrantes o las identidades religiosas distintas de la propia (Orozco y Bolaños 2023, 38).

El presente *Dossier* aspira a poner su granito de arena para enriquecer el conocimiento y el debate en torno a las diferentes derivas de las derechas latinoamericanas contemporáneas, en aras de entender sus dinámicas y aspiraciones comunes, pero también de relevar sus especificidades y características particulares. Lamentablemente, por cuestiones de espacio no se pudieron incorporar aportes a casos nacionales que son paradigmáticos en la región, como la emergencia del *bolsonarismo* en Brasil. Privilegiamos la selección de estudios sobre las derechas de un puñado de países andinos (Perú, Ecuador y Colombia), a los cuales se suma un texto sobre México, otro sobre el caso argentino, y uno más sobre las redes transnacionales de las derechas latinoamericanas.

Presentamos en primera instancia el texto de Anahí Durand, “La derecha peruana y su deriva neogolpista”, enfocado en dos aspectos: la caracterización del amplio campo de las derechas de ese país, las cuales son simultáneamente conservadoras, autoritarias y defensoras a ultranza del neoliberalismo; así como el análisis de su proceder en la coyuntura de los últimos años, antes y durante el breve gobierno del profesor Pedro Castillo, a quien ayudaron a derrocar. De acuerdo a Durand, la coalición neogolpista articuló poderes económicos, mediáticos y judiciales con el objetivo común de defender sus intereses de clase y faccionales. La segunda contribución, “Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador”, de Franklin Ramírez, pasa revista a la historia política reciente del país equinoccial, tomando como eje la reconstrucción de las trayectorias de radicalización de unas derechas que, sin descartar su participación electoral y utilizando la bandera de la “defensa de la democracia”, combinaron esta última con discursos de odio, estigmatización y judicialización de sus enemigos políticos; una forma de proceder que apostó por normalizar la violencia simbólica y material contra la fuerza política –el correísmo– que se considera el principal enemigo a vencer, con la finalidad de proseguir con la profundización del proyecto neoliberal, en una modalidad particularmente destructora de las capacidades estatales y del tejido social, así como de un realineamiento con la geopolítica hemisférica de los Estados Unidos. En un contexto muy diferente al ecuatoriano, al artículo de Alexander Gamba, “Dominación y conflicto político del uribismo en Colombia”, nos muestra cómo la gestión gubernamental de Álvaro Uribe (2002-2010) articuló hábilmente altas dosis de violencia estatal –y paraestatal– con un estilo particular de gobierno que supo establecer canales de comunicación directos con diversos sectores populares, así como aprovechar en beneficio propio la creciente zozobra de una parte importante de la sociedad, para poder desplegar una política de “seguridad democrática” que, sin dar respuesta a los problemas estructurales que

originaron el conflicto secular, generó la expectativa de que para alcanzar la paz el gobierno debía primero “ganarle la guerra” a los enemigos internos que él mismo ayudó a construir.

Por fuera del arco andino, incorporamos la contribución de Hugo Sánchez Gudiño: “La derecha en México: entre el Yunque y Vox”, en donde se pasa revista a la reconfiguración de las derechas del país norteamericano al calor de la emergencia de una alternativa gubernamental a la izquierda del espectro político: la encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Sánchez nos propone una caracterización de varias corrientes de derecha con temporalidades históricas distintas, pero todas ellas convergentes en un gran polo anti-lopezobradorista, que articula a poderes oligárquicos, expresidentes, medios de comunicación y movimientos “ciudadanos” financiados por el gran capital. Cierran el *Dossier* los textos de un par de académicos argentinos. Por un lado, Andrés Tzeiman nos comparte “De Macri a Milei: la peligrosa obsesión de las clases dominantes argentinas”, en donde se abordan las diferencias y similitudes entre ambos gobiernos de derecha, poniendo énfasis en las relaciones que han desarrollado con los sectores dominantes. Una primera conclusión es que se trata de un *proyecto común* más allá de sus matices y particularidades, lo que queda de manifiesto en el reciclaje de varios ministros del gobierno de Macri en el gabinete del actual gobierno. Pero, el proyecto “refundacional” de Milei –al cual Tzeiman caracteriza como el de un “totalitarismo de mercado”– además de reciclar ministros, da continuidad al macrismo en al menos tres aspectos: un proyecto de nación excluyente, una ofensiva ideológica anti-igualitaria y una mentalidad neocolonial. Tal vez la principal diferencia entre ambas experiencias radica en la “temporalidad”, pues Milei no dudó en meter a fondo el acelerador en sus reformas, en una especie de terapia del shock. Finalmente, Ariel Goldstein brinda un panorama general sobre “La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina”. Su propósito es el análisis de un conjunto de redes internacionales de derecha en las que han venido participando líderes políticos de nuestra región (Bolsonaro y Milei, entre otros). Unas redes en cuyo tejido ha tenido gran protagonismo el partido Vox, y cuyo entramado también alcanza al trumpismo y al gobierno de ultraderecha de Israel.

Esperamos que esta pequeña muestra de estudios de académicos de la región pueda contribuir a la mejor comprensión de un fenómeno de primerísima importancia para el presente y futuro de los países de *Nuestra América*.

Bibliografía

- Ansaldi, Waldo. 2022. “Propuesta para una agenda de investigación sobre las derechas latinoamericanas”. *Revista CIDOB d’Afers Internacionals*, 132: 123–144. <https://n9.cl/0y9x7>.
- Bohoslavsky, Ernesto. 2023. *Historia mínima de las derechas latinoamericanas*. México: El Colegio de México.
- Cannon, Barry. 2016. *The Right in Latin America: Elite Power, Hegemony and the Struggle for the State*. Nueva York: Routledge.
- Giordano, Verónica. 2014. “¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»?”. *Nueva Sociedad*, 254. <https://n9.cl/mhifn>.
- Orozco, Ricardo y José Víctor Bolaños. 2023. “En torno a la necesidad de un programa de investigaciones sobre las derechas contemporáneas en América Latina y el Caribe”. En *Viejas y nuevas derechas en América: contrainsurgencia, despojos y sentidos comunes*, coordinado por Ricardo Orozco, Thays Fidelis, José Víctor Bolaños Alcántara, y Robert Adrián Quintero Leguizamón, 27-54. Buenos Aires: CLACSO.

La derecha peruana y su deriva neogolpista

Anahí Durand Guevara*

Resumen

El presente artículo tiene como objetivo analizar la práctica política de la derecha peruana, signada por su carácter conservador, tendencia autoritaria y una cerrada defensa del modelo neoliberal que, en el reciente contexto de crisis política, deriva en una postura neogolpista. En primer lugar, ensayamos una caracterización de la derecha tensionada por un conservadurismo estamental autoritario y por la adhesión al neoliberalismo como modelo de gobierno y sociedad. En segundo lugar, abordamos su accionar en la coyuntura abierta en el 2021 con la derrota electoral de Keiko Fujimori y el triunfo de Pedro Castillo, que socava el ya deteriorado sistema democrático. Finalmente, analizamos la consolidación de una derecha neogolpista, abocada a destituir al presidente constitucional y respaldar a Dina Boluarte como mandataria designada.

Introducción

La profunda crisis política que atraviesa el Perú ha tenido a la derecha entre sus principales protagonistas. Sea en su versión fujimorista, emergente provinciana, o de ultraderecha empresarial, los grupos políticos situados en el espectro conservador del campo político –que calificamos ampliamente como “derecha”– comparten características que han impactado directamente en el colapso de la democracia, asumiendo una posición abiertamente favorable a los denominados “neogolpismos”.

Desde una mirada general, puede afirmarse que en el país la derecha se ha caracterizado por preservar una herencia colonial que avala un orden desigual de privilegios sustentados en condiciones económicas, sociales e incluso étnico raciales. Presenta también una tendencia autoritaria, expresada en su débil compromiso con la democracia, tal como lo demostró –entre otras ocasiones– al respaldar el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992. Durante los diez años de fujimorismo, la derecha fue parte activa del régimen, impulsando las reformas estructurales dictadas por el consenso de Washington y obteniendo

* Socióloga, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Docente investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima.

grandes ganancias en el trayecto. Muestra también un carácter patrimonialista, tendiente a utilizar los recursos del erario como propios, involucrándose frecuentemente en casos de corrupción que han llevado a juicio a líderes políticos y grupos empresariales.¹ En tiempos más cercanos, vale destacar su ortodoxia neoliberal y su cerrada defensa de las políticas económicas impuestas durante la dictadura fuimorista de los noventa.

Justamente, desde 1992 y por casi tres décadas, los grupos políticos del campo conservador peruano consiguieron manejar la política económica con amplia discrecionalidad, manteniendo ventajas y privilegios del uso del aparato estatal y los recursos naturales. La caída de Alberto Fujimori no significó mayores alteraciones, por el contrario, acomodaron su accionar al nuevo período democrático respaldando a los sucesivos presidentes electos por voto popular. El crecimiento macroeconómico y los altos precios de los *comodities* en el mercado internacional reforzaron la percepción de una sociedad controlada donde la derecha había logrado consolidar su hegemonía. Si bien se sucedían conflictos sociales en los Andes y la Amazonía, eran esporádicos y fragmentados, sin representar una amenaza grave al modelo. Tampoco tomaban demasiado en serio la grave crisis política –que se gestaba con intensidad enfrentando los poderes del Estado– ni la devastadora pandemia, que acrecentó la indignación de las mayorías contra los grupos dominantes.

Ensimismada en sus sueños hegemónicos, la derecha peruana no vio venir la derrota de Keiko Fujimori ante el maestro rural Pedro Castillo en las elecciones presidenciales del 2021. El triunfo de un serrano, sindicalista y rondero con el voto del país plebeyo que exigía cambios de fondo a décadas de neoliberalismo fue un balde de agua helada y activó todas sus alarmas. Fueron adoptando así una postura “neogolpista” que declaró un inexistente fraude electoral y se abocó a boicotear el nuevo gobierno, al que consideraban una amenaza a sus intereses.

Tal como anotan Tzeiman y Martuscelli (2024), frente a gobiernos democráticos que amenazan con desobedecer los dictámenes impuestos por las clases dominantes, surgen modos novedosos de producir quiebres para alterar la dinámica institucional. Antes que fuerzas militares operando para derrocar gobiernos, encontramos nuevas formas de golpe de Estado realizadas por vías alternativas. La intrusión del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, junto con la persecución de líderes políticos por parte del Poder Judicial en connivencia con los grandes

¹ Para profundizar sobre la corrupción en el Perú y sus vínculos con el poder empresarial puede verse, por ejemplo, a Quiroz, 2013.

medios de comunicación y los grupos de poder económicos –conocido como *lawfare*– constituyen en el siglo XXI las nuevas modalidades de quiebre de los sistemas democrático- institucionales. Este neogolpismo fue asumido por la derecha peruana para derrocar el gobierno de Pedro Castillo y colocar una autoridad subordinada a sus fines.

El presente artículo tiene como objetivo analizar la práctica política de la derecha peruana, signada por su carácter conservador, tendencia autoritaria y una cerrada defensa del modelo neoliberal que, en el reciente contexto de crisis política, deriva en una postura neogolpista. En primer lugar, ensayamos una caracterización de la derecha tensionada por un conservadurismo estamental autoritario y por la adhesión al neoliberalismo como modelo de gobierno y sociedad. En segundo lugar, abordamos su accionar en la coyuntura abierta en el 2021 con la derrota electoral de Keiko Fujimori y el triunfo de Pedro Castillo, que socava el ya deteriorado sistema democrático. Finalmente, analizamos la consolidación de una derecha *neogolpista*, abocada a destituir al presidente constitucional y respaldar a Dina Boluarte como mandataria designada.

En momentos en que las propuestas de derecha y extrema derecha toman fuerza en Latinoamérica, es fundamental analizar su accionar en Perú como representativo de fuerzas conservadoras que progresivamente abandonan las formas democráticas. Se trata de renovadas formas de alteración de la voluntad popular que complejizan el concepto de “golpes de Estado” tradicionales mediados por el uso de la fuerza, llevándonos a nuevos quiebres, caracterizados por el manejo de la legalidad y la justicia a favor de los grupos de poder. Con el posicionamiento neogolpista, la derecha logra reeditar privilegios, desconociendo y manipulando su propia legalidad y también imponiéndose violentamente sobre los sectores populares cuando se movilizan contra la inminente alteración del régimen. Esperamos que este texto pueda aportar a un análisis de mayor alcance y profundidad sobre el accionar de las derechas y el desafío de fortalecer democracias sustantivas que, más allá de lo procedimental, logren cumplir viejas promesas de igualdad y bienestar.

Entre la nostalgia colonial y la cerrazón neoliberal

En su clásico libro *Clases, Estado y Nación*, Julio Cotler señala el carácter conservador de las clases dominantes del virreinato del Perú, las mismas que mantuvieron hasta el final su lealtad con la corona. Mientras los criollos del Río de La Plata, Caracas o Nueva Granada se levantaban contra el régimen colonial, las principales ciudades del Virreinato peruano sufragaban al ejército realista y

engrosaban sus filas. Así ocurrió en la batalla de Ayacucho, donde el número de oficiales leales al rey de origen peruano era una abrumadora mayoría en contraste con el número reducido presente en el bando patriota, liderado por oficiales venezolanos, colombianos y argentinos. Concluidas las guerras de independencia, a falta de una clase política “peruana”, los jefes de los ejércitos libertadores tuvieron que hacerse cargo de la naciente república (Cotler 1978).

Los grupos que se turnaron el gobierno las primeras décadas de vida republicana no dudaron en considerarse herederos de la dominación española. Tal como afirma Aníbal Quijano, se configuró un patrón de dependencia, colonial primero y neocolonial después, expresado en la continuidad de dos aspectos claves: la dependencia externa del país respecto de un centro de poder mundial y las jerarquías sociales a través de una clasificación racial (Quijano 2000). El grupo criollo gobernante heredó el carácter estamental del régimen colonial y afianzó el patrimonialismo, que no distingue entre el bolsillo privado y el tesoro público. El racismo, el patrimonialismo y el autoritarismo fueron características de una oligarquía conservadora que se turnó el gobierno en alianza con caudillos militares.

La derrota en la guerra con Chile, con la pérdida de territorio y decenas de miles de muertos, llevó a que los actores políticos e intelectuales se plantearan la precaria estructuración del Estado nación peruano, cuestionando que mantuviera a la mayoría de su población, básicamente indígena, sumida en el atraso. Desde el espectro crítico que reclamaba por profundas transformaciones se elevaron voces como la de José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre. Desde el campo conservador, pensadores como José de la Riva Agüero plantearon una regeneración del país desde el rescate del pasado colonial y las tradiciones hispanistas. También se sumaría la voz de Víctor Andrés Belaunde, líder del social cristianismo en el Perú que abogaba por una “síntesis” de la cultura occidental española y la cultura andina, aunque sin complejizar el dominio ejercido por la primera sobre la segunda. Ambos pensadores serían claves en la construcción de los partidos políticos del espectro conservador, como el Partido Popular Cristiano (PPC) y Acción Popular (AP).

Durante toda la primera mitad del siglo XX la elite gobernante impuso una democracia restringida que dejó fuera a las clases populares, al punto que para 1930 la participación electoral apenas alcanzaba al 7% de la población total (López 2010). A ello se sumaba un régimen económico dependiente, donde el arcaico sistema de hacienda convivía con el naciente capitalismo industrial. La sociedad peruana reclamaba profundas transformaciones y las élites se negaban a ceder privilegios. Paradójicamente, fue el gobierno militar de Juan Velasco Al-

varado el que llevó a cabo las transformaciones democratizadoras que el país requería; entre 1968 y 1977 el gobierno militar puso en marcha un ambicioso proyecto de reformas estructurales, incluyendo nacionalizaciones y estatizaciones que ampliaron la función de producción del Estado. Velasco además ejecutó una radical reforma agraria que redistribuyó la tenencia de la tierra y eliminó poderes locales como el gamonalismo, acabando con la servidumbre que afectaba a la población que vivía en las haciendas. Estas medidas fueron reafirmadas en la Constitución de 1979 que por primera vez consagró el voto universal incluyendo los analfabetos.

Tras la crisis del proyecto nacionalista industrializador impulsado por Velasco Alvarado, y su colapso total durante el primer gobierno de Alan García, los neoliberales peruanos tomaron iniciativa. No sólo consiguieron mostrarse como alternativa de gobierno ante la crisis política y la crisis económica hiperinflacionaria, también consiguieron presentarse como un proyecto capaz de reestructurar el campo político, debilitando algunas tensiones y fortaleciendo otras. Siguiendo a Adrián (2017), fue Hernando de Soto quien con su libro *El otro Sendero* (1986) consiguió trazar esta nueva frontera política, que a la larga se volvería hegemónica. De Soto descarta la dicotomización hegemónica del espacio social entre explotadores y explotados para proponer una nueva frontera en torno a la ley y la exclusión-inclusión de los nuevos actores con respecto a ella. Para de Soto, proletarios y burgueses –o si se quiere trabajadores y empresarios– dejan de ser actores antagónicos para convertirse en aliados que combaten codo a codo por ingresar a la campana de cristal de la legalidad, logrando con ello surgir en el mercado.

Tanto la derecha tradicional como la neoliberal terminarían avalando el autogolpe de Fujimori en 1992 que permitió alinear al país con los mandatos del Consenso de Washington. El neoliberalismo peruano se instaló en lo ideológico, lo programático y lo societal, limitando al Estado a su función de promotor de la inversión privada, desarrollando una legislación y una arquitectura estatal favorable al libre mercado y expandiendo una racionalidad individualista que, en nombre del emprendedurismo, alentaba la informalidad y justificaba la desprotección social. Todo esto en un contexto de postconflicto armado interno y crisis de las organizaciones sociales que pulverizó las mediaciones, abonando al individualismo. La Constitución de 1993 colocó mayores candados a las reformas neoliberales y la derecha peruana pudo participar del festín de privatización de empresas y recursos públicos con sendas dosis de colusión y corrupción.

La caída del fujimorismo en el 2000 golpeó fuertemente a la derecha, que se encontraba muy cómoda gobernando y haciendo negocios durante la dictadura.

No obstante, lograron reacomodarse con el candidato Alejandro Toledo, quien junto a su ministro de economía Pedro Pablo Kuczynski garantizaban la absoluta continuidad del modelo. Si bien las demandas embalsadas en diez años de dictadura y la ortodoxia neoliberal jugaron contra Toledo generando un rechazo popular, la amenaza de un joven Ollanta Humala que cuestionaba el sistema y amenazaba con volver a la Constitución de 1979 llevaron a un cierre de filas en defensa del sistema. Posteriormente apoyarían a Alan García durante las elecciones del 2006; finalmente, del APRA antiimperialista no quedaba nada.

Con el apoyo a Alan García y el rápido alineamiento de Ollanta Humala, que abandonó a los pocos meses de gobierno su predica electoral radical, la derecha peruana del siglo XXI logró consolidarse como bloque hegemónico en el poder. Consiguió un férreo consenso en torno a sus intereses de clase, avalado por los grandes medios de comunicación corporativos que presentaban su proyecto como lo mejor para el Perú. Esporádicamente, tal hegemonía era interrumpida por conflictos sociales en territorios andinos y amazónicos, descontentos ante la profundización del extractivismo, pero eran presentados como asuntos de resentidos radicales. Protestas como el Paro Amazónico, la masacre de Bagua o las protestas en Cajamarca fueron brutalmente reprimidas, sacando a relucir la mencionada raigambre clasista, racista y autoritaria de las élites.

Haciendo un intento por agrupar políticamente las fuerzas que componen la derecha peruana de las últimas décadas, encontramos cuatro grupos. El primero lo conforman los partidos sobrevivientes del siglo XX, específicamente Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. El segundo, y quizá el más importante, es el partido Fuerza Popular que reivindica la dictadura de Alberto Fujimori, es dirigido por su hija Keiko y tiene un alcance nacional que los ha llevado a la segunda vuelta presidencial tres veces consecutivas. Un tercer grupo lo forma la llamada derecha “emergente”, con personajes provincianos como Cesar Acuña de Alianza para el Progreso (APP) o José Luna de PODEMOS, dueños de universidades, empresas de transporte o farmacias, que generalmente se jactan de haber amasado una fortuna con su esfuerzo, aunque varios enfrenten denuncias por vínculos con el narcotráfico. Finalmente, se cuenta una extrema derecha conservadora en lo social y defensora del neoliberalismo económico, con personajes como el empresario Rafael López Aliaga de Renovación Popular.

Este conglomerado de fuerzas conservadoras, con sus respectivos líderes y vínculos con el mundo empresarial, ignoraron la crisis política y subestimaron los efectos devastadores de la pandemia. Aferrados a la teoría de “cuerdas separadas” (Thorne 2019) –según la cual se podía preservar la política económica, aunque el sistema

político se deteriorara y el malestar social se impusiera en la ciudadanía-, calcularon que las elecciones presidenciales del 2021 mantendrían el gobierno. Por eso el triunfo del candidato “antisistema” Pedro Castillo fue una verdadera sorpresa para ellos.

Crisis política y derrota electoral; adiós a las formas democráticas

Desde 1992 y por casi treinta años consecutivos, la derecha peruana consiguió una importante hegemonía económica, política y social que le permitió mantener el control de los poderes del Estado. Con una sociedad fragmentada y sin mediaciones legitimadas, consolidó lo que Francisco Durand denomina una “república empresarial”, donde la precariedad política era compensada por el apoyo del bloque económico nacional-internacional y por la acción de los poderes fácticos, unidos por el común interés en desarrollar la economía de mercado y fortalecer a los oligopolios (Cosamalón y Durand 2022).

Seguros de la hegemonía conseguida, subestimaron la grave crisis de régimen que se venía gestando y que estalló con mayor nitidez desde el 2016 cuando Keiko Fujimori perdió la elección presidencial ante Pedro Pablo Kuczynski (PPK), pero consiguió una hipermayoría en el Congreso. Desde entonces, el fujimorismo utilizó el Parlamento para cambiar el régimen político y en la práctica imponer un parlamentarismo. El Congreso adquirió cada vez mayor centralidad, siendo la instancia que designa integrantes de instituciones claves como la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales. Es el Congreso también el que decide cuándo usar figuras como la “vacancia por incapacidad moral”² para destituir al presidente de la República. Y es el Congreso quien designa los miembros del Tribunal Constitucional, encargado de delimitar el uso de la vacancia y otras facultades parlamentarias, generalmente dándole la razón.

Desde el Parlamento, el fujimorismo y sus aliados se abocaron a obstaculizar el gobierno de PPK, quien además estaba involucrado en el caso *Lava Jato* por negociados de sus empresas cuando fue ministro de economía. Ante una inminente moción de vacancia, la renuncia de Kuczynski intensificó la crisis. El vicepresidente Martín Vizcarra asumió la presidencia desarrollando un corto período marcado por la confrontación con el Parlamento. Vizcarra optó por cerrar el Congreso, aunque paradójicamente los nuevos congresistas lo destituyeron a él. Tras una componenda de la ultraderecha, el congresista Manuel Merino fue proclamado

² La vacancia por incapacidad moral fue incluida en la Constitución de 1993 para casos graves de enfermedad o salud mental, pero desde el 2000 empezó a usarse a discrecionalidad de la mayoría parlamentaria.

presidente, pero su elección generó tal rechazo que renunció a los cuatro días. El Parlamento designó como presidente transitorio a Francisco Sagasti, casi con la exclusiva tarea de organizar las elecciones generales del 2021.

Todas estas maniobras incrementaron el repudio de los sectores populares frente a la clase política. La pandemia del Covid-19 agravó la situación, golpeando la salud y la economía de los hogares que se encontraban abandonados a su suerte. Las elecciones generales de abril del 2021 actuarían como un catalizador del enorme descontento social y serían un voto de castigo a la derecha. Vale mencionar, además, que el espectro conservador estuvo sobrerrepresentado por seis partidos con posibilidades de pasar a la segunda vuelta, incluyendo todos los de la tipología presentada (Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Acción Popular). Sin duda, esta dispersión de candidaturas fue contraproducente para sus aspiraciones. Tal es así que la primera vuelta electoral dio como ganadores a Pedro Castillo con un 18,9% de los votos y a Keiko Fujimori con el 13,4% de las preferencias electorales (ONPE 2021).

Para el espectro conservador, era una verdadera amenaza la elección de Castillo, con el voto de los sectores más empobrecidos y descontentos con el modelo neoliberal. Las masas populares de cholos, serranos y provincianos, que vivían principalmente en el campo y las ciudades del centro y sur andino, habían elegido a alguien que impugnaba frontalmente el sistema y era directamente uno de los suyos. El maestro y sindicalista había liderado una masiva huelga magisterial en el 2017, y durante la campaña electoral había ofrecido el cambio de la Constitución, encarnando además la exclusión del sistema y el desprecio de las clases dominantes. No era Ollanta Humala, el ex militar con ínfulas de estadista a quien rápidamente cooptaron para sus filas. El riesgo de que ganara la presidencia era demasiado grande, así que optaron por impedir su triunfo, traspasando incluso las normas democráticas.

Durante la segunda vuelta electoral, la derecha desató una cruenta batalla con el respaldo de los grandes medios de comunicación y grupos empresariales alineados con la candidata Fujimori. El “terruqueo” estuvo a la orden del día por parte de políticos y periodistas que acusaban a Castillo y su entorno de vínculos con grupos como Sendero Luminoso, siempre sin sustento alguno. También salieron a relucir la vena racista y clasista de la derecha, haciendo escarnio y burla del profesor, su familia y sus electores, a quienes presentaban como sucios, peligrosos e ignorantes. La derecha internacional participó bajo la coordinación del escritor Mario Vargas Llosa, organizando acciones como el foro “Amenazas a las democracias” con el auspicio de la Fundación Friedrich Naumann. El evento congregó

a líderes como el venezolano Leopoldo López, quien junto a Keiko Fujimori advirtieron que de ganar Pedro Castillo “Perú se convertiría en Venezuela”.

El 5 de junio del 2021, concluida la segunda vuelta electoral, las autoridades anunciaron el triunfo de Castillo con una ajustada ventaja de cerca de cincuenta mil votos. Los resultados finales fueron mal recibidos por Fujimori que a las pocas horas denunció un fraude, a todas luces, inexistente. Lo que al inicio parecía la pataleta de una mala perdedora se fue revelando como una estrategia para dilatar la proclamación del ganador, socavar la legitimidad de su triunfo y sembrar dudas sobre su futuro gobierno. De forma coordinada, el fujimorismo y sus aliados –estudios de abogados, periodistas, medios de comunicación y empresarios– respaldaron la teoría del fraude y se plegaron a la cruzada contra el “fraudismo castillista”. La determinación de los opositores y su ensañamiento contra los organismos electorales y las misiones de observación internacional, que informaban el normal desarrollo del proceso electoral, fueron un campanazo de alerta sobre cómo la derecha peruana iba perdiendo las formas democráticas.

Los partidos de derecha se unificaron en respaldo a la teoría “fraudista” de Keiko Fujimori y actuaron como voceros políticos. El fujimorismo y Renovación Popular –del ultraconservador López Aliaga– llevaron la batuta sosteniendo que se había registrado fraude en provincias alejadas del sur andino. Los grupos empresariales también aportaron lo suyo, financiando diversas acciones. Es el caso de los estudios de abogados más caros del país que, durante dos semanas, se abocaron a impugnar cerca de doscientos mil votos indígenas y rurales aludiendo malos manejos en las mesas de sufragio. Los servicios fueron registrados como aporte económico a la campaña, de modo que el reporte financiero de Fuerza Popular confirma que cuarenta abogados de reconocidos estudios revisaron actas electorales, brindaron asesoría legal y pagaron las búsquedas en el sistema del Registro Nacional de Identidad (RENIEC) por un monto de US\$ 500.000 (Ojo Público 2021).

Los medios de comunicación jugaron también un rol importante, canales como Willax perteneciente al empresario Erasmo Wong o el grupo El Comercio, de la tradicional Familia Miro Quesada, entre otros medios avalaron la teoría del fraude desatando sendas campañas de desinformación. Por ejemplo, desde el canal Willax, el periodista Beto Ortiz difundió publicaciones de redes sociales donde afirmaba se había detectado personas fallecidas en el padrón electoral de la ONPE, insinuando que existía la posibilidad de un eventual fraude, algo que se sabía falso.³ Días después el programa Cuarto Poder, de América TV, entrevistó

3 Ver: Plataforma You Tube Willax Televisión: <https://n9.cl/vcy6t2>.

a un “criptoanalista” que había creado una fórmula matemática para demostrar un comportamiento anormal de los electores, algo que resultó un escandaloso *fake news* (América TV 2021). También las autoridades electorales fueron blanco de ataques mediáticos, como ocurrió con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Salas Arenas, a quienes periodistas como Philips Butters, conductor de la Radio PBO, llamaba diariamente “terrorista” (Ojo Público 2021).

Por su parte, las distintas misiones de observación electoral, incluyendo a la OEA, presentaron sendos informes que ratificaban la pulcritud del proceso y felicitaban a los organismos electorales peruanos por llevar los comicios con gran profesionalismo (OEA 2021). No obstante, la derecha no cedió y las impugnaciones dilataron la proclamación del nuevo jefe de Estado como nunca había ocurrido en la historia republicana. Los seguidores de Castillo se movilizaron a Lima desde distintas regiones del país para defender su voto. Cientos de maestros, ronderos, campesinos acamparon en las puertas del Jurado Nacional de Elecciones y marcharon por Lima con sus trajes típicos, machetes y sombreros provocando nuevos ataques racistas por parte de la derecha.

Finalmente, luego de semanas de espera y tensa confrontación, Pedro Castillo fue juramentado presidente. La negativa de la candidata perdedora y el espectro de derechas a reconocer su derrota, así como todo lo actuado durante el proceso electoral, evidenciaron con nitidez que las fuerzas conservadoras podían desconocer las reglas de juego democrático, inventar un fraude y socavar las instituciones electorales con tal de no ser derrotadas. Demostró también que partidos políticos, gremios empresariales y medios de comunicación eran capaces de dejar de lado viejas rencillas y articularse en torno a un mismo fin, en este caso, impedir y/o deslegitimar el triunfo de Castillo. La deriva hacia posiciones neogolpistas tomaba fuerza y se hizo más nítida en las acciones que llevaron a cabo para destituir un gobierno constitucionalmente y legítimamente electo.

La derecha “neogolpista” se consolida: destitución de Pedro Castillo

Tal como se ha planteado, una de las características constitutivas de la derecha peruana ha sido su tendencia autoritaria y su escaso compromiso con la democracia, que la ha llevado a respaldar diversos militarismos y golpes de Estado, incluyendo el de Alberto Fujimori en 1992. Con el triunfo de Pedro Castillo, este carácter autoritario toma protagonismo actuando en los márgenes del orden institucional hasta asumir una postura abiertamente neogolpista. Durante los

quince meses del gobierno de Castillo, y los meses posteriores de estabilización de Dina Boluarte, la derecha va a operar sobre las fuerzas institucionales del Estado, como el Parlamento y el Poder Judicial, para derrocar al gobierno y colocar uno favorable a sus intereses, siempre con el apoyo activo del grupo empresarial, la participación de los medios de comunicación y la oportuna intervención de las fuerzas militares y policiales.

Una vez instalado el nuevo gobierno, la derecha peruana consolida las coordinaciones iniciadas durante la segunda vuelta electoral y constituye una “coalición golpista”, entendida como la articulación de poderes institucionales, económicos, mediáticos y judiciales trabajando coordinadamente para destituir a un presidente constitucionalmente electo (Durand 2024). Sobreponiéndose a sus diferencias internas, el espectro conservador supo definir un objetivo común y priorizar sus intereses de clase, pues de por medio estaba la orientación misma de la política económica. Aprovecharon además la débil correlación de fuerzas que sostenía a Pedro Castillo, quien no logró la mayoría calificada necesaria en el Parlamento. El inexperto presidente carecía de nexos con los grupos de poder y se hallaba tensionado por Perú Libre y los partidos aliados, más preocupados por lograr puestos en el gobierno que por asegurarle gobernabilidad; eso lo hacía una pieza fácil de remover. Sabían también que el profe Castillo podía tener la simpatía popular, pero no contaba con una organización que lo defendiera organizadamente en las calles.

El Parlamento tuvo la acción estelar en la deriva neogolpista de la derecha peruana. Desde el Congreso, el fujimorismo tomó iniciativa en reclutar y sellar una alianza parlamentaria con partidos de ultraderecha (Renovación Popular y Avanza País) y de derecha emergente, como Alianza para el Progreso. Este bloque logró controlar la Mesa Directiva y algunas comisiones claves para golpear al nuevo gobierno, como Constitución y Fiscalización. El Congreso abusó además de la figura de “vacancia por incapacidad moral” y en quince meses presentó tres mociones de vacancia contra el Presidente, una cada cuatro meses, todas por supuestos hechos de corrupción sin más sustento que reportajes periodísticos. Por otro lado, intentaron su inhabilitación constitucional, forzando una absurda acusación de traición a la patria por declaraciones de Castillo favorables a la salida al mar para Bolivia. Mecanismos parlamentarios de control que hasta entonces operaban como formalidades se convirtieron en armas para sabotear al nuevo gobierno.

Otro hecho particularmente grave fue la aprobación de la “Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y 133 de la Constitución Política”. Dicha norma modificó la facultad del

presidente para disolver el Parlamento tras dos cuestiones de confianza rechazadas, señalando que solamente el mismo Parlamento podía definir si tales confianzas procedían o no. Fue clave aquí el aval del Tribunal Constitucional electo por el mismo Congreso, que respaldó las decisiones de la mayoría parlamentaria de derecha. Sin consultar a la ciudadanía, el Congreso terminó con el equilibrio de poderes y alteró la Constitución haciendo del Perú un régimen parlamentarista. Los medios de comunicación guardaron conveniente silencio ante este hecho, lo mismo que las fuerzas políticas de centro y centro izquierda que normalizaron la situación y prácticamente no levantaron su voz de protesta.

El Poder Judicial y, especialmente, la Fiscalía de la Nación fueron también actores estelares de la deriva neogolpista. Apenas asumió el cargo como fiscal de la Nación, Patricia Benavides tomó la inédita decisión de investigar a un presidente en funciones reinterpretando a su manera la Constitución de 1993. De acuerdo con el artículo 117 de la Carta Magna, las únicas razones por las cuales el presidente puede ser acusado son: traición a la patria, impedir las elecciones generales o subnacionales, disolver el Congreso o impedir el funcionamiento del Legislativo o de los organismos electorales. No obstante, Benavides –investigada por organización criminal desde diciembre del 2023– presentó una denuncia que no apelaba a ninguna de las causales enumeradas para investigar a un presidente en ejercicio, denunciando a Castillo por supuestamente liderar una “organización criminal”. La Fiscalía acumuló más de sesenta carpetas fiscales contra él, incluyendo a su esposa y su hija, evidenciando la efectividad del *lafware* como herramienta para desactivar a un líder político, imputándole un delito y exponiendo su entorno más cercano como criminal (Tirado 2021).

Los medios de comunicación fueron, nuevamente, un actor clave en esta deriva, ya fuera generando desinformación, campañas de desprestigio o normalizando acciones claramente antidemocráticas de la derecha. En el extremo de la desinformación y la difamación se ubicó Willax, canal de televisión propiedad del empresario Erasmo Wong con varias denuncias por agraviar a políticos y autoridades. Diariamente Willax insultaba y atacaba al presidente, su gabinete y su familia, amplificando presuntas denuncias de corrupción, inventando rumores de golpe de Estado, o dando tribuna a supuestos testigos de hechos de corrupción. Aparentando mayor seriedad, estuvieron televisoras como América TV, Panamericana o Frecuencia Latina, emitiendo sendos reportajes contra Castillo y sus bases como las rondas campesinas. También, merece destacarse al tradicional Grupo El Comercio, trabajando coordinadamente con la Fiscalía para publicar y direccionar las primicias en las investigaciones fiscales contra el presidente.

Un actor que procuró pasar desapercibido pero fue crucial en todo el proceso fue el poder económico empresarial. Justamente, siguiendo lo anotado por Martuscelli (2024), una de las características centrales del neogolpismo es reforzar el capitalismo neoliberal, lo cual implica neutralizar las fuerzas que ponen en cuestión el modelo económico y el *statu quo* en su conjunto. La llegada al poder de Pedro Castillo era una amenaza a ese modelo ya deteriorado por décadas de política ortodoxa, y los empresarios no se pusieron de costado. La CONFIEP, el mayor gremio empresarial del país fue un tenaz opositor, lo mismo que la Conferencia de Empresarios, que por primera vez en su historia desistió de invitar al presidente de la República a su evento anual. Hubo también empresarios militantes como Erasmo Wong, dueño de Willax TV, o de José Luis Silva Martinot, del sector turismo, que junto a otros financiaron acciones a favor de la vacancia como marchas y movilizaciones minoritarias, pero debidamente amplificadas por los medios con altas dosis de racismo y clasismo.

Todas estas acciones –ocurridas en el límite o en clara transgresión de la institucionalidad– fueron configurando un escenario de crisis favorable a un desenlace acorde a la deriva neogolpista que buscaba destituir al presidente. El punto culminante ocurrió el 7 de diciembre de 2022, fecha en que el Parlamento debía votar la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo. Pocas horas antes de la votación, el presidente leyó un mensaje disolviendo el Congreso y llamando a constituir una Asamblea Constituyente en el más breve plazo. El mensaje no tuvo ningún efecto real, pues las fuerzas armadas y policiales ya no eran leales a él, pero fue aprovechado por la derecha para culminar su plan. El Congreso presentó los hechos como un autogolpe y actuó para sacarlo del poder aprobando una nueva moción de vacancia que vulneraba su propio reglamento.⁴ En simultáneo, siendo todavía presidente, Castillo fue retenido por su escolta policial mientras la Fiscalía ordenaba prisión preventiva, desconociendo los fueros que le asistían en un claro desacato a lo establecido por la Constitución. Ese mismo día, la hasta entonces vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, juramentó como presidenta designada, a la cabeza de un gobierno formado por los partidos que habían perdido las elecciones y boicoteado el gobierno del cual ella era parte.

Destituido Castillo, lo que seguía para la derecha neogolpista era restaurar el régimen neoliberal, neutralizando la reacción popular que rápidamente se expandía

⁴ Según lo anotado por el artículo 89-Ac del Reglamento del Congreso, la vacancia inmediata del Presidente de la República requiere de procedimientos formales tales como presentar una moción debidamente sustentada y contar con el voto de 107 congresistas sobre el total de 130. El 7 de diciembre no se presentó la moción y votaron a favor de la vacancia 101 congresistas. www.congreso.gob.pe.

en el país. Desde el 8 de diciembre del 2022 y hasta entrado marzo del siguiente año, el pueblo se volcó masivamente a las calles exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. La brutal represión, con un saldo dramático de más de sesenta asesinados y mil doscientos heridos, demostró la determinación de la coalición para retomar el poder y no dejarlo ir fácilmente. El cerrado respaldo al nuevo gobierno también se expresó en el blindaje a Boluarte ante denuncias de crímenes de lesa humanidad o corrupción por el intercambio de relojes rolex a cambio de presupuesto público. La deriva neogolpista de la derecha peruana había concluido anclando en un puerto seguro donde una sometida presidenta garantizaba el relanzamiento de la política neoliberal y la continuidad de los privilegios amenazados. Todo con el aval de los medios de comunicación y la comunidad internacional, particularmente los Estados Unidos y la Unión Europea, que dieron el espaldarazo final al nuevo régimen.

Epílogo temporal

La experiencia de la derecha peruana en su deriva deja múltiples lecciones sobre cómo las fuerzas conservadoras logran corromper y degradar un sistema democrático, hasta conseguir el cambio de las autoridades legítimamente electas. Hoy en Perú la sociedad tiene plena conciencia de que gobiernan quienes perdieron las elecciones a través de Dina Boluarte como una autoridad absolutamente funcional. La encuesta IPSOS del 30 junio del 2024 revela esta situación, pues una gran parte de la población considera a Keiko Fujimori (49%), César Acuña (48%) y Rafael López Aliaga (42%) como los principales socios de Dina Boluarte en el gobierno. Las políticas económicas favorables a relanzar el modelo neoliberal, como nuevas licencias para empresas mineras o la reestructuración del sistema de pensiones (AFP), confirman el carácter restaurador del régimen basado en una agenda de gobierno por la cual no votó la ciudadanía.

El neogolpismo ensayado por la derecha –y lamentablemente tolerado por las fuerzas políticas denominadas de centro e incluso centro izquierda– agrava mucho más la democracia peruana ensanchando la indignación y desafección de la ciudadanía. Este no es un proceso aislado, se ubica en un amplio contexto de exacerbación de contradicciones y conflictos de clase, así como en la deliberada determinación de desconocer la voluntad popular de los grupos subalternos. Es además un posicionamiento recurrente que debieron enfrentar las fuerzas democráticas, tal como hicieron las masivas protestas ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 contra la destitución de Pedro Castillo y las maniobras

del Congreso. La confusión del centro político que prefirió confiar en Boluarte, y el deliberado manejo informativo de los medios de comunicación, fueron claves para normalizar la imposición de un régimen que a todas luces carecía de la legalidad y legitimidad requeridas.

En Perú y Latinoamérica la deriva neogolpista muestra finalmente los límites de la democracia liberal, desafiando lo expuesto por las teorías neoinstitucionalistas que colocaban el énfasis en el rol de las fuerzas armadas para derrocar un gobierno. Hoy las fuerzas conservadoras utilizan la legalidad y las instituciones para dirimir el manejo del poder y el direccionamiento de la política de Estado, aprovechando el conocimiento del aparato público, su presencia en el poder judicial y su llegada a las fuerzas armadas y policiales. Es difícil predecir si surgirá en Perú una derecha democrática y respetuosa de las reglas de juego, incluso cuando se ven amenazados sus intereses de clase. Por lo pronto, son las grandes mayorías las que reclaman una democracia sustancial como forma política capaz de articular la participación y equidad social. Dependerá de la organización y movilización social alinear a la derecha peruana, tradicionalmente estamental y autoritaria, en el respeto al juego democrático sustantivo que supere viejas exclusiones aún vigentes.

Bibliografía

- América TV. 2021. “Arturo Arriarán: Una organización ha falseado los resultados del verdadero voto popular”. 21 de junio, <https://n9.cl/om4wh>.
- Cosamalón, Jesús y Francisco Durand. 2022. *La República Empresarial, Neoliberalismo, emprendedurismo y desigualdad*. Lima: Derrama Magisterial.
- Cotler, Julio. 1978. *Clases, Estado y Nación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- De Soto, Hernando, en colaboración con Enrique Ghersi y Mario Ghibellini. 1986. *El otro sendero. La revolución informal*. Lima: Editorial El Barranco.
- Durand, Anahí. 2024. “Coaliciones golpistas, crisis de la democracia en la destitución de Pedro Castillo”. En *La crisis de la democracia en América Latina*, coordinado por Andrés Tzeiman y Danilo Enrico Martuscelli. Buenos Aires: CLACSO.
- IPSOS. 2024. Informe de Opinión, Perú, junio 2024. Ipsos Opinión y Mercado S.A. <https://n9.cl/6fvdxx>.
- López, Sinesio. 2010. “Estado y ciudadanía en el Perú”. En *El Estado en debate múltiples miradas*, Alberto Adrianzén Merino et al. Lima: PNUD.
- Martuscelli, Danilo. 2024. “Reflexões críticas sobre o debate em torno do neogolpismo na América Latina”. En *La crisis de la democracia en América Latina*, coordinado por Andrés Tzeiman y Danilo Enrico Martuscelli. Buenos Aires: CLACSO.

- OEA. Organización de Estados Americanos. 2021. Misión de Observación Electoral de la OEA en Perú presenta informe preliminar. (11 de junio). <https://n9.cl/wf2ny>.
- ONPE, Oficina Nacional de Procesos Electorales. 2021. “Presentación de resultados. Elecciones generales y parlamento andino 2021. Resumen General”. [sitio web] Oficina Nacional de Procesos Electorales. Lima, Perú. <https://n9.cl/7049l>.
- Ojo Público. 2021. Portal de noticias e investigación. www.ojo-publico.com.
- Quijano, Aníbal. 2000. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*, compilado por Edgardo Lander. Buenos Aires: CLACSO.
- Quiroz, Alfonso W. 2013. *Historia de la corrupción en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos; Instituto de Defensa Legal.
- Thorne, Alfredo. 2019. “¿Cuerdas separadas?”. *El Comercio*. <https://n9.cl/rlq0hm>.
- Tirado, Arantxa. 2021. *Lafware, golpes de Estado en nombre de la Ley*. Barcelona: Ediciones AKAL.
- Tzeiman, Andrés y Danilo Enrico Martuscelli, coords. 2024. *La crisis de la democracia en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.
- Willax Televisión. 2021. “Beto a Saber- La prueba del fraude es...”. Canal de You Tube: <https://n9.cl/vcy6t2>.

Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador

Franklin Ramírez Gallegos*

Resumen

El artículo analiza el lugar del antipopulismo en el proceso de radicalización de la derecha ecuatoriana en la última década. A partir de la reconstrucción de los macroprocesos de contienda y de los específicos espacios de conflicto abiertos en el país tras el ascenso al poder de la Revolución Ciudadana (2007), el trabajo sitúa la emergencia del anticorrelismo como enclave de articulación de múltiples líneas de oposición política (2010-2016) y atiende su despliegue como plataforma electoral y ejercicio de poder estatal de las derechas tras el giro de 2017. A diferencia de otros casos regionales, el devenir radical de la derecha criolla no concierne la implantación exitosa de liderazgos u organizaciones extremas, sino la progresiva transformación de su identidad colectiva desde la polarización con el correlismo a la contrarreforma estatal y el escalonamiento de la violencia política en tres gobiernos consecutivos.

Introducción

El 24 de mayo de 2021, en su toma de mando, el banquero Guillermo Lasso (2021-2023), remarcó su compromiso con las libertades individuales, la integración del Ecuador a los mercados globales y el equilibrio de poderes. La promesa de restaurar la República –tras un “largo tiempo de autoritarismo” y “culto al caudillo” durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017)– fue transversal en su discurso. Días antes, sin embargo, Jaime Nebot, líder del más importante partido de la derecha ecuatoriana desde el retorno a la democracia –el Partido Social Cristiano (PSC)– revelaba que sectores del empresariado, el entonces Contralor y sectores afines al nuevo presidente tenían preparado un golpe de Estado si el candidato de la Revolución Ciudadana (RC) triunfaba en el balotaje.¹ El entrevistador –cabeza de un poderoso portal digital multimedia conservador– no cuestiona la revelación; está familiarizado con la operación de marras. “¡Ah! El Plan Yerovi”, dice; Nebot asiente. Ninguna instancia de la justicia, ni el poder parlamentario, iniciaron indagación alguna ante tales declaraciones.

* Profesor investigador del Programa de Sociología Política de FLACSO-Ecuador.

1 Ver la entrevista en: Plataforma X Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial), <https://n9.cl/nvjhbu>.

En su crudeza, la imagen condensa tres dinámicas concurrentes en la política ecuatoriana hace más de una década: a) la disponibilidad de las élites para combatir por cualquier medio a quien consideran su principal enemigo; b) la normalización de la violencia, el odio y el hostigamiento como repertorios de acción política contra la RC; y c) la implantación de una extensa coalición sociopolítica que sostiene los embates autoritarios de las derechas contra específicos opositores. Tales elementos suponen un abierto proceso de radicalización de la derecha criolla, incubado al interior de la confrontación con la RC y sedimentado con el retorno de las élites al poder desde 2017. Motorizado por un anticorrelismo extremo, dicho cuadro advierte una mutación de la identidad política de las derechas y estrecha el espacio democrático en medio de una vertiginosa contrarreforma estatal que apuntala los grandes intereses económicos e instala el padecimiento generalizado de las mayorías.

Semejante dinámica no es ajena a la controversia latinoamericana en torno al populismo. Entre otras de sus aristas, aquella entraña el temor exacerbado de las élites –y de facciones de las clases medias– a la politización, autonomía y ascenso de sectores subalternos o plebeyos en el espacio político. El antipopulismo ha sido definido como un curso de identificación colectiva que se construye como pura contraposición, negación y repulsión a elementos populistas de diverso tipo (Stoessel y Bracco 2024). Como sugiere Semán, en el antipopulismo “el rechazo es el dispositivo interno de una visión política que construye una mirada orgánica” (2021, 13). Se trata de una política de reactividad plena, sin vista de ir más allá de la negatividad. Desde esa mirada, los grupos dominantes perfilan la deslegitimación, domesticación o desmonte de la incorporación de “los de abajo” en la comunidad política. En efecto, si bien tales plataformas federan actores de diverso signo –derechas, liberales, izquierdas– y se configuran como engranajes transideológicos (Van Dyck 2019), terminan conducidas por las derechas y desde el protagonismo de las élites tradicionales (Enríquez 2019). En cualquier caso, los específicos contornos del antipopulismo deben ser leídos a la luz de los ciclos de irrupción popular contra los que se instituyen, aún si beben de representaciones peyorativas “históricamente sedimentadas” (Stavrakakis 2017), a saber, el populismo como matriz inherentemente demagógica, autoritaria, etc.

El caso bajo estudio se inscribe en la “tercera ola populista” del siglo XXI. Tras una intensa década de movilización social, dicha oleada combinó el acceso democrático de las izquierdas al poder, la reorientación postneoliberal de la agenda pública y cierta apuesta geopolítica que amplió la autonomía regional respecto a EE.UU (Grugel y Ruggirozzi 2012). Sucesivas reelecciones presidenciales prolon-

garon la hegemonía progresista e incubaron un singular momento de debilidad de las derechas. Si bien aquello no deterioró por completo su influencia institucional, a causa del poder estructural de las élites (Luna y Rovira Kaltwasser 2014), sí fraguó un escenario de confrontación y voluntad de bloqueo de parte de grupos económicos, gremios empresariales, medios, organizaciones de la alta sociedad civil, etc., junto a las derechas partidarias. Aunque la intensificación del conflicto fue más notoria en las experiencias sostenidas por liderazgos decisionistas –Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina–, no pasó desapercibida en los procesos de cambio más gradual, como lo retrata el golpe de 2016 y la irrupción bolsonarista en Brasil. Quizás por ello, tras la crisis progresista, la pandemia y en un clima global que nutre diversos radicalismos de derecha (Stefanoni 2021), se ensanchó el espacio de ideas, narrativas y contramovimientos beligerantemente antipopulistas, anti-izquierdistas, antifeministas, contrarios al avance de derechos o políticas redistributivas. Ganaron eco, además, tesis paleolibertarias, anarcocapitalistas y discursos regresivos. Estas claves de “batalla cultural” prepararon el terreno para el avance de las derechas extremas, el vaciamiento de las tendencias moderadas y la estabilización de lógicas radicales en el juego político (Ramírez Gallegos 2023).

Ahora bien, si los nexos entre antipopulismos y derechas saltan a la vista en el reciente ciclo político regional, sus específicas líneas de retroalimentación deben ser situadas en cada caso. En el Ecuador la implantación anticorreísta –un subtipo paradigmático de antipopulismo similar a constelaciones como el anti-kirchnerismo, el antievismo, etc.– moldea la vigente radicalización de la derecha criolla en una trama que ensambla su lugar como núcleo de oposición al gobierno de Correa con su ejercicio del poder estatal tras el giro político de 2017. En el corazón de tal proceso se coloca una disposición al desprecio de la legitimidad de determinados adversarios y al tratamiento de aquellos como enemigos a ser borrados del juego político.

Visto así, el caso ecuatoriano remite menos a la emergencia de una figura o de una derecha partidaria extremista –recurrente tópico en la literatura politológica contemporánea– que a una progresiva radicalización del conjunto de la derecha criolla. La vía local difiere entonces de los liderazgos personalistas exitosos (Bolsonaro, Milei, Bukele) o de los avances electorales de organizaciones extremistas (el Partido Republicano de Antonio Kast en Chile, Cabildo Abierto en Uruguay, etc.). En Ecuador el proceso asume formas incrementales desde la polarización con la RC, hasta el escalonamiento de la beligerancia y violencia política en tres gobiernos consecutivos (L. Moreno, 2017-2021; G. Lasso, 2021-2023; D. Noboa, 2023-2025). Políticas de odio, discriminación, estigmatización, judicialización,

securitización, entre otras formas de confrontación, se encadenan como artes de gobierno y administración del conflicto mientras se afirma el proyecto autoritario de las derechas y el despojo en curso.

La cuestión de cómo se llegó a este punto es clave para el análisis. Explicar un proceso político, dice Tilly, es describirlo a cabalidad. En ese ejercicio, situar la *emergencia* de un fenómeno y los cambios a él asociados asume plena importancia. Aquello demanda sensibilidad a la secuencia de los acontecimientos descritos y sus interconexiones. Si la reconfiguración de la derecha criolla se labra al interior de la prolongada polarización con la RC, la centralidad del anticorreísmo en sus marcos, esquemas de pensamiento y formas de acción es fundante de su radicalización. A su vez, en cuanto forma de confrontación que niega de modo regular y hasta el límite de la violencia directa la legitimidad de particulares adversarios, dicho fenómeno se estabiliza con la captura estatal de las élites, y se profundiza a medida que sucesivos gobiernos de derecha expanden dicha lógica hacia nuevos oponentes.

En línea tillysiana, los trayectos de radicalización se examinan desde el rastreo de los macroprocesos de contienda y la reconstrucción del espacio relacional del conflicto. Solo entonces aparece la radicalización como una forma de confrontación surgida, entre otras opciones posibles, al interior de la lucha política (Alimi et al. 2015). Si la mirada procesual y relacional alerta sobre la combinación de regularidad y contingencia en la lucha política, la observación de las opciones colectivas que llevan a la radicalización apunta a los *agenciamientos estratégico-tácticos* de los actores en función de sus acotados objetivos. Bajo tal comprensión, este trabajo interroga los contextos, interrelaciones contenciosas y opciones estratégicas que han dado cuerpo al devenir radical de las derechas en el Ecuador del siglo XXI.

Giro a la izquierda y nuevo conflicto

El acceso de Correa y su movimiento (Alianza País – AP) al poder en 2007 se produjo en medio de la crisis hegemónica del bloque que impulsó la liberalización económica desde los ochenta. A pesar de las reformas constitucionales que en 1998 intentaron relegitimar al proyecto neoliberal, las sucesivas caídas presidenciales (1997, 2000, 2005) de cambio de siglo señalaban hasta qué punto las élites y partidos dominantes desde la transición democrática habían perdido capacidad de dominio del conjunto social. Además de las frustradas promesas de la modernización conservadora (crisis bancaria 1999-2000), el empuje de la

movilización social fraguó dicho desgaste. El protagonismo del movimiento indígena fue descollante en ese cuadro. Su impugnación al neoliberalismo se articuló con el proyecto de reconocimiento del carácter plurinacional del Estado. Aquello abrió espacios de negociación que permitieron a las organizaciones indígenas y a otros sectores sociales conquistar garantías y representación institucional. La relativa permeabilidad del Estado neoliberal a ciertas demandas identitarias contrastaba con el veto de la tecnocracia financiera al debate democrático de la agenda promercado.

Antes de la aparición de Correa, el gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005) fue el último intento del sistema político para conciliar heterogéneos intereses (banca, Fuerzas Armadas, organizaciones populares). Aunque se alineó a Washington y prosiguió la ruta neoliberal, el coronel llegó al poder con banderas postajuste y en coalición con Pachakutik (PK) –brazo electoral del movimiento indígena– y el Movimiento Popular Democrático (MPD), las fuerzas más presantes de la izquierda para entonces. Una inédita movilización ciudadana facilitó su caída (2005) tras su intento de copar el poder judicial para recomponer su gobernabilidad. La fallida coalición desprestigió al movimiento indígena mientras la legitimidad partidaria y la agenda neoliberal quedaban asfixiadas.

El agotamiento de los actores centrales del conflicto político –la derecha tradicional y el movimiento indígena– facilitó el ascenso de Correa. Nutrida de vieja y nueva militancia izquierdista, y de las redes de proximidad del presidente, AP produjo su propia base e infraestructura organizativa. No dependió de las organizaciones sociales en su confrontación con las élites, la ortodoxia de mercado, la “partidocracia”. Bajo tal estrategia, la acumulación del movimiento fue meteórica. El carrusel electoral² para viabilizar la Constituyente minó a la derecha y encumbró a Correa. Su posterior performance electoral sería igualmente impresionante: reelecciones presidenciales sin balotaje (2009, 2013), sucesivas mayorías parlamentarias (2007, 2009, 2013, 2017), nacionalización de la representación, etc.

La fuerza del voto operó como principal recurso para que la RC se colocara por encima de grupos económicos y actores políticos y sociales con capacidad de veto. El anclaje popular de Correa le permitía invocar la representación de las grandes mayorías y erosionar la legitimidad de los “no electos”. Las opciones para la participación popular se estrecharon. Diversas líneas de reforma estatal

² Entre 2007-2008 se convocó a: Consulta Popular para convocar la Constituyente; elección de asambleístas; y Consulta para aprobar la Carta Magna. La RC se impuso en los tres sufragios.

facilitaron a la vez el desacople institucional entre intereses privados y acción pública. En la estela del jacobinismo revolucionario (Rosanvallon 2008), la RC sospechaba de toda presencia particularista en las instituciones. Así, mientras la matriz estatal del “neoliberalismo multicultural” de los noventa hacía crisis, en la cima del poder se afirmaba una gestión decisionista y reacia a la negociación y al intercambio con adversarios y aliados.

Si en el curso de la Constituyente la polarización abierta entre la RC y la “partidocracia neoliberal” consiguió configurar un amplio espacio progresista en apoyo a la Carta Magna, tras su aprobación se resquebrajaron sus cuerdas. Sectores de la izquierda y los movimientos sociales resintieron la falta de diálogo político, el estrechamiento de los espacios de representación colectiva en el Estado y la inercia extractivista. El distanciamiento giró progresivamente hacia la confrontación, muchas veces gestionada solo con respuestas de fuerza desde el poder.

Desde las derechas, por su parte, la impugnación se disparó con la misma convocatoria a la Constituyente. Rechazaron la vía refundacional, la retórica socialista y la visión estatal-nacionalista del desarrollo de la RC. La campaña para la aprobación del nuevo texto (Consulta Popular, septiembre 2008) visibilizó ya su capacidad de movilización en diversos frentes. Además del embate mediático, destacaron los colectivos “provida” y otras asociaciones vinculadas con el clero en varias demostraciones contra la “constitución abortista”, el “matrimonio homosexual” o el “totalitarismo estatal” en la educación.³ La debilidad de las derechas,⁴ durante y después de la Constituyente, incentivó siempre su mayor agitación extrainstitucional. Van Dyck (2020) documenta diversos casos en los que la escasa competitividad electoral de la derecha, en medio de la solidez populista, la empujan a salidas disruptivas. Con una débil representación y un ejecutivo reacio a conciliar, tal fue una de las opciones de la derecha en años siguientes.

La articulación antipopulista

El *tempo* revolucionario de las reformas postconstituyentes prosiguió con el estrechamiento del debate público. AP hacía uso de su bloque mayoritario para acelerar la aprobación de las nuevas normas de la República. En tal entorno, el 30 de septiembre de 2010 estalló una obscura protesta policial contra la Ley de Servicio Público diseñada por el Ejecutivo. Entre otros aspectos, la ley planteaba

³ Ver al respecto: “Iglesia católica no acepta 4 temas de nueva Constitución”, en *El Universo* (2008).

⁴ En la Convención, la derecha (cuatro partidos) obtuvo solo 25% de los asientos; en la Legislatura 2009-2013 alcanzó 38% de las curules (cuatro partidos). Entre 2013-2017 descendió otra vez a 17%.

reordenar categorías laborales en el Estado, reducir poderes corporativos y recortar prebendas a las fuerzas del orden (Stoessel 2013). El gobierno denunció un golpe en ciernes. Mientras, el sindicato docente –bajo control del MPD– llamó a movilización general, sectores del movimiento indígena se solidarizaron con el motín y la derecha pedía amnistiar a los sublevados. El *putsch* escenificaba así cierta insólita confederación entre derechas, policía y gremios populares contra la reforma estatal (Quintero y Silva 2011). No sería su último acercamiento.

Tras horas de encierro en un hospital policial, Correa fue liberado por cuerpos militares en medio de un tiroteo que causó varias víctimas. Los sucesos fueron transmitidos en vivo a lo largo del día. No obstante, la decisión oficial de centralizar las emisiones en los medios públicos fue contestada como un intento de manipular la información. En adelante, el esclarecimiento e interpretación de los hechos –¿motín o golpe?– y la adjudicación de responsabilidades y penas intensificó la polarización. Para el anticorreísmo no hubo desestabilización, sino un legítimo reclamo policial que derivó en violencia debido al estilo pendenciero y la baja disposición negociadora del presidente.

Un enmarcado antiautoritario tomó desde entonces centralidad en el discurso de las élites al costado de sus denuncias contra la “chavización” del gobierno y el recorte de libertades. La alusión a cierta “defensa de la democracia” renovaba la restringida narrativa neoliberal de la derecha. La extensa producción académica sobre el inexorable carácter autoritario del populismo ocupa un destacado lugar en dicha trama (Weyland 2019). Al hacer de cierto liberalismo el único referente normativo de la democracia, dicha literatura propone una comprensión unidimensional de los nexos entre populismo y des-democratización (Ramírez Gallegos y Stoessel 2018). En Ecuador este corpus enfatiza en la capacidad del populismo para corroer las instituciones en nombre de las fantasías redentoras del caudillo de turno (Enríquez 2019).

Si la “cuestión democrática” tuvo un lugar secundario en la campaña con que la derecha tradicional retomó la disputa electoral en 2013⁵ –primera candidatura de Lasso–, la tentativa de Correa (2015) de reformar la Constitución para habilitar la reelección indefinida permitió expandir dicho marco y hacer del rechazo a la concentración de poder un objeto mayor de movilización. Se multiplicaron los llamados a las calles. Se hacía evidente la voluntad de incluir a los más amplios sectores en el espacio de las derechas y de disputar el terreno de la sociedad civil.

5 En 2009 la derecha oligárquica no presentó candidatura. Destacó la ausencia del PSC. Nebot se refugió del ascenso de la RC invocando, desde el poder municipal, la autonomía local.

Ésta era invocada como polo de resistencia al “populismo autoritario” y como lugar para resolver aquello que el “Estado obeso” no conseguía tramitar. En el terremoto de 2016 emergió, de hecho, la tesis filoliberal de que el voluntarismo cívico debía desplazar al Estado en la gestión de la catástrofe.

Tras ampliar su campo discursivo y sus esferas de intervención, las derechas consiguieron liderar el miniciclo de conflicto 2015-2017 que plasmó al anticorreísmo como enclave de identificación colectiva de heterogéneos sectores. Su punto más alto fue la movilización contra “los impuestos marxistas” que Correa pretendió colocar a las grandes herencias y a la especulación inmobiliaria (2015). Bajo la consigna *con mi familia no te metas* –usada también por grupos provida–, las élites comandaron una potente demostración de fuerza que, junto con la expatriación de divisas, doblegaron al expresidente. El ataque a las ideas de igualdad y redistribución, así como la defensa de los patrimonios familiares, convocaron a sectores medios y populares contra una medida que afectaba al 2% más rico. La clase dominante hacía pasar su agenda como asunto de interés general. El canto destituyente “fuera Correa fuera” era coreado por todo el arco opositor. El anticorreísmo expandía sus contornos. En medio de las protestas, exhibiendo *banderas negras*, una caravana de autos de alta gama pretendió emboscar a Correa en el aeropuerto de Quito. Tras el *odio* al personaje, los signos de un más amplio antiprogresismo empezaban a emerger. La implicación de ciertas organizaciones en las calles colaba una capa de niebla sobre tal deriva.⁶

Además del retiro del proyecto de tasar las herencias, la “marcha de las banderas negras” forzó el abandono de la reelección indefinida⁷ y condicionó la designación de Lenín Moreno como candidato oficialista para 2017, cerrando opciones para una sucesión por parte de las izquierdas. Como vicepresidente (2007-2013) de Correa, Moreno nunca mostró convicciones políticas y prefirió aparecer como figura conciliadora en las antípodas del líder. En campaña confesó incluso su distancia con el programa postneoliberal de su movimiento. Aunque procuraba así hablar a sectores ajenos al correísmo, no pudo imponerse en primer turno. En su segunda candidatura (2017), Lasso alcanzó el balotaje. Incluso MPD y Pachakutik lo apoyaron: la configuración transideológica del antipopulismo facilitaba el crecimiento electoral de la derecha.

La candidatura de Lasso se movió entre batalla ideológica y cruzada moral. Desde años atrás la Fundación Ecuador Libre –un tanque de pensamiento presi-

⁶ Para Houtart (2015) la derecha provocó un profundo malentendido y logró que “una buena parte de la clase media baja, y aún campesinos e indígenas, reaccionen contra medidas para repartir la riqueza”.

⁷ Correa retiró el proyecto de reelección inmediata y propuso una enmienda para que rija desde 2021.

dido por Lasso y entroncado con redes de la extrema derecha global⁸ había expandido la circulación de ideas libertarias en su abierta disputa programática con el “socialismo del siglo XXI”. Entre otras de sus tesis, los libertarios niegan que Ecuador hubiera vivido nunca un ciclo de economía de mercado. Dicha idea solo era parte de la “mitología populista” con que la izquierda justificaba el retorno del “Estado expansivo”.⁹ Además de su promesa de restaurar las libertades cercenadas por la RC, Lasso presentó un programa privatizador como vía para sanear el Estado de la “corrupción populista”. En campaña, el país amaneció cada día con nuevos escándalos ventilados en medios públicos, privados y un emergente enjambre de plataformas digitales cercanas al anticorreo. La batalla de denuncias arrojó la política al fango de las “fake news” y la postverdad. Las imputaciones a Jorge Glas, binomio de Moreno, tuvieron particular resonancia.

Aunque creció 21 puntos en segunda vuelta, Lasso fue derrotado. De inmediato, y sin pruebas, denunció fraude y llamó a movilización contra la autoridad electoral: “Incendiamos Quito hasta nuevos resultados”. Lasso anticipó a Donald Trump (2021, EE.UU.), Keiko Fujimori (Perú, 2021) o Jair Bolsonaro (Brasil, 2023) en la táctica de ensuciar elecciones y desconocer resultados. Ni la apertura de urnas ni el informe de la OEA, persuadieron al banquero. Sus seguidores intensificaron más bien los discursos de odio contra la RC.

Austeridad permanente y violencia política

Con la victoria de Moreno, el anticorreo se hizo del poder. El giro político fue profundo. Si su trama y razones aún no generan consenso –abundan tesis conspirativas– es claro que en esos años (2017-2021) terminó el predominio de la RC y el Estado fue reencuadrado hacia el neoliberalismo (Freiro y Sánchez 2021).

El curso de los sucesos puede ser trazado como una veloz recomposición de las alianzas y redes de poder en medio de las fracturas del oficialismo y la beligerancia de una oposición que nunca reconoció el triunfo del nuevo presidente. Fragilizado por la tesis del fraude y las denuncias contra su segundo a bordo, Moreno apostó a sostener su gobernabilidad con el apoyo de las élites. La apertura de un Diálogo Nacional (2017-2018) con los detractores de su antecesor –banqueros, medios privados, empresarios, indígenas, etc.– marcó un primer quiebre con su movimiento. Las críticas de Correa no tardaron, pero nunca recondujeron al gobierno.

⁸ Hace parte de Atlas Network, comunidad transnacional de tanques de pensamiento liberal-libertarios.

⁹ Refiero al libro de Caicedo y Tanca (2018). Aparicio Caicedo fue alto consejero presidencial de Lasso, director de Ecuador Libre, coordinador de la Cátedra Hayek y encargado del programa de CREO.

Si el Diálogo dio apariencia consensual al nuevo momento, también facilitó el dominio de la agenda pública por los grandes intereses. Chiasson-LeBel (2019) entiende el viraje de Moreno como resultado de la readequación estratégica del empresariado ya en el curso del propio gobierno de Correa y aprovechando su declive.¹⁰ Los circuitos previamente dibujados se activaron totalmente cuando Moreno –siempre complaciente con las élites– toma el poder. No en vano el canal para la incidencia empresarial en la política económica –el Consejo Consultivo Productivo Tributario (junio 2017)– fue el primero en activarse como parte de los diálogos y el único que se sostuvo en el tiempo. Más tarde, dichos sectores tendrían pleno control del gobierno. A cambio de su apoyo, exigieron a Moreno “descorreizar” el Estado.

Esa demanda enhebró básicamente dos líneas de acción: el desmonte de la matriz estatal construida tras diez años de política neodesarrollista y la anulación del correísmo como sujeto político. Lo primero remite a una serie de agresivas contrarreformas económicas, lo segundo, al despliegue de violencia política sobre una específica identidades. Si la anulación de la RC operó como recurso político para avanzar en la reforma estructural, nunca dejó de ser un objetivo en sí mismo. El escalonamiento en radicalidad de la derecha atiende a este “fin último” y a la internalización de una lógica política en que todo adversario toma el nombre del enemigo (correísta).

La captura del poder

En *Neoliberalism by surprise* Stokes (2001) estudia los problemas de legitimidad democrática de gobiernos latinoamericanos que, como el de Moreno, llegaron al poder con un programa contrario al Consenso de Washington y luego lo implementaron por entero. Si Fujimori en el Perú de los noventa superó el impasse trocando seguridad –derrota de Sendero Luminoso– por ajuste estructural, en Ecuador ésta se justificó en nombre del combate a la corrupción. Austeridad y recorte del Estado fueron presentados como consecuencia directa de la “crisis moral” y del “despilfarro populista” que malograron la economía a pesar de los abundantes recursos que Correa administró en una década.

El “discurso anticorrupción” operó entonces como marco maestro y principal mecanismo de legitimación del nuevo ciclo estatal. Si en los años previos tal era

¹⁰ Para los grupos económicos, el ciclo gubernativo de la RC fue mucho más acuciante por su extrañamiento del poder que por el cabal deterioro de sus ventajas estructurales de acumulación.

la narrativa de las derechas, con Moreno fue también el lenguaje del poder.¹¹ La cantaleta del carácter intrínsecamente opaco de la economía del Estado popular repicaba en todas partes: el estatismo solo engendra políticos inescrupulosos y desvío de fondos. Así, ortodoxia fiscal y Estado mínimo se posicionaron como categorías morales para recomponer la economía. Desde ese mismo enmarcado, se hilvanaron una serie de escándalos públicos y la sobreactuación de las autoridades de control para multiplicar los expedientes contra la RC. El circuito retroalimenta primeras planas, *trending topics* y decisiones judiciales.

Al tiempo en que exfuncionarios y cuadros políticos eran procesados, el conjunto de la política pública de la RC se sentaba al banquillo. Más allá de la razonabilidad de las denuncias, estaba en juego erosionar su prestigio y debilitar su organización. Con el retiro de funciones (agosto 2017) y la fulgurante detención de Jorge Glas (enero 2018), en el marco del capítulo Odebrecht Ecuador, el relato anticorrupción ganó en credibilidad y potencia. AP implosionó. Buena parte de la mayoritaria bancada parlamentaria pasó a alinearse con el gobierno. En ese clima, el Contencioso Electoral permitió a Moreno la expropiación de AP (enero 2018), el imbatible instrumento electoral de la RC. La medida era emblemática, con la determinación de la derecha para *poner fin a la RC como sujeto político*. En los años siguientes, el correísmo estaría virtualmente proscrito.

La Consulta de febrero 2018 completó la captura anticorreísta del poder. Sin partido y con su imagen golpeada, Correa sufrió su primera gran derrota electoral. El pueblo apoyó eliminar algunas de sus emblemáticas decisiones (impuestos a la plusvalía, reelección indefinida) y mandató a que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio evalúe y destituya, de ser necesario, a autoridades nombradas previamente con irregularidades. Casi todos los evaluados fueron removidos. A pesar de sus esfuerzos por probar anomalías, los consejeros transitorios recibieron presiones para destituir autoridades básicamente por su cercanía a Correa (Celi 2020). Figuras insignes del anticorreísmo pasaron a ocupar la jerarquía de las instituciones de control, electoral, justicia.

Neoliberalización y enemigo interno

Copado el poder, la derecha exacerbó sus expectativas. La designación de Richard Martínez (mayo 2018), presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, como ministro de Economía selló el pacto de dominación entre las élites y Moreno, y

¹¹ Para aludir a los problemas del fisco Moreno repetía: “la mesa no está servida”, “se lo llevaron todo”.

gatilló una serie de reformas pospuestas hacía mucho. Martínez operó la reunificación empresarial durante el gobierno de Correa (Chiasson-Lebel 2019). A su costado llegaron otros representantes de grupos económicos a carteras como Comercio Exterior o Relaciones Laborales en un proceso de captura empresarial de la agenda pública (Guamán y Stoessel 2022).

La “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal” (LFP, agosto 2018) fue la carta de presentación de Martínez. Para Brenner, Peck y Theodore (2021) los procesos de neoliberalización instituyen esquemas regulatorios que apuntalan la gobernanza de los mercados a través de políticas destructivas y constructivas. La LFP configuró una sofisticada bisagra entre ambas dimensiones. En su *faz destructiva*, la ley atacó los mecanismos de autofinanciamiento del Estado y el papel económico del sector público: quedó prohibido que éste crezca más de 3% anual; se restringió la movilización de crédito interno para gestionar liquidez;¹² se reforzó la interdicción para que el saldo de deuda pública total no supere el 40% del PIB y se estipuló que, salvo excepciones, el presupuesto sea aprobado con déficit solo para cancelar intereses de deuda. Salgado (2018) llamó la atención sobre la directa introducción del manejo ortodoxo del fisco como ley orgánica. En su *faz creativa*, la LFP reconfiguró el entorno para las inversiones. Por un lado, introdujo un sistema internacional de arbitraje de inversiones en cualquier materia, lo que –rompiendo la Constitución– bloquea las facultades estatales para privilegiar determinadas inversiones según los objetivos nacionales de política. Por otro, debilitó los esquemas impositivos: renunció a gravar los incrementos extraordinarios en los precios de los recursos naturales, redujo el impuesto a la salida de divisas, entre otros. Las facilidades tributarias a futuros inversores se complementaron con anuncios de mayor flexibilización laboral y una enorme remisión tributaria favorable a los grupos empresariales.

Así, entre un exacerbado antiestatismo y el mantra de la atracción de capitales, la LFP fue un punzante instrumento para la expansión del poder de los mercados tras la prolongada interrupción populista. Su aprobación dio paso a una nueva entente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo 2019. El realineamiento del Ecuador con los EE.UU facilitó las cosas (Ruiz 2019). Tras la visita del vicepresidente Mike Pence en junio 2018, se multiplicaron las señales de rompimiento con el embrionario regionalismo sudamericano promovido

¹² Se anuló el Código Monetario y Financiero (2014) y el Programa de Inversión Doméstica de Excedentes de Liquidez de la Reserva Internacional, clave para gestionar la crisis de 2016 (Chiriboga 2019).

en el ciclo progresista. El fin del asilo a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres y su entrega a la justicia británica en abril 2019 fue, no obstante, la decisión clave con que Moreno asentó la nueva subordinación a Washington. Más tarde, Ecuador reconocería (2019) a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, dejaría UNASUR y OPEP y redoblaría la cooperación con EE.UU en materia de seguridad. La embajada norteamericana ha sido un activo vigilante de la transición postcorreísta.

La celeridad del ministro Martínez evitó que la Asamblea y la Corte Constitucional se pronuncien sobre el acuerdo con el FMI, como ordena la Carta Magna. Proseguía la imposición del nuevo rumbo económico de espaldas al debate democrático. Como siempre, el crédito del FMI condicionó una serie de reformas estructurales. Así, el 1 de octubre de 2019, Moreno anunció draconianas medidas para “equilibrar el fisco”. El fin de los subsidios a los combustibles fue particularmente impactante. El decreto 883 incrementó de modo sustantivo el precio del diésel y la gasolina extra. Desde la crisis de la deuda de los ochenta todos los gobiernos exploraron la opción de eliminar dichos subsidios. El temor al conflicto les disuadió. No fue así en 2019: la unidad del bloque dominante, la fragilidad de su gran opositor y las ambivalencias populares hicieron pensar al gobierno que el “tiempo había llegado”.

La paralización que siguió al 883 no estaba en los cálculos de nadie. Era la más grande protesta popular desde 1990. La autonomía y la disposición de lucha de los manifestantes –una multitud plebeya, heterogénea y desorganizada– forzaron a la dirigencia popular, indígena y sindical, a masificar la convocatoria a las calles. El país se paralizó por doce días en medio de una inusitada violencia estatal.¹³ La narrativa oficial –luego convertida en discurso de Estado– denunció un intento de golpe y trató el conflicto como un problema de seguridad interna. En lenguaje anticorreísta, Maduro fue presentado como cerebro de la revuelta. El movimiento indígena, que terminó por liderar el paro, quedó así retratado como parapeto de los “amigos de Correa”. En medio de la declaratoria de estado de excepción –que habilita el despliegue conjunto de policías y militares– el ministro de Defensa reivindicó que “las FFAA, orgullosamente, tienen *experiencia de guerra*”.¹⁴ La lucha social se fijaba como objetivo bélico. Se insinuó su carácter

13 Ver Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (2019): *Verdad, Justicia y Reparación. Informe de verificación sobre DDHH, Paro Nacional y levantamiento indígena. Quito-Ecuador. Octubre 2019*. El informe de Defensoría al respecto provocó la persecución y encarcelamiento de su entonces titular.

14 En una entrevista televisiva al ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, en “Los Desayunos de 24 Horas”, *Teleamazonas*, 7 de octubre de 2019 (20:14-20:20). Disponible en canal YouTube: <https://n9.cl/vfgxw>.

terrorista. Nada disuadió a los manifestantes. Tras tensas negociaciones con la dirigencia indígena, Moreno derogó la medida.

El levantamiento endureció más al poder. La frustración de Carondelet impregnó todo el juego político con pautas coercitivas. El guion sobre la “conspiración bolivariana” atravesó las redes de inteligencia, las fuerzas del orden, los grandes medios y portales digitales y el activismo de Fiscalía. La “corrupta RC” ahora era, además, golpista. Durante el paro, Moreno emitió siete cadenas nacionales para inculpar sin evidencia a Correa y Maduro. La ministra del Interior llegó a anunciar la detención de diecinueve migrantes por actitudes sospechosas y supuestas intenciones de atentar contra el vicepresidente. Fue un caso de falsos positivos contra trabajadores venezolanos.¹⁵ El odio político excusaba delitos de xenofobia. La máquina antipopulista nunca puso freno a su encono ni abandonó el guion. Apenas finalizó el paro, tres altos dirigentes de la RC fueron detenidos por supuesta rebelión; otros salieron al exilio. El miedo tomó forma política. Los procesados se contaban por decenas e incluían a la nueva generación de dirigentes indígenas que lideraron la revuelta. Las fronteras del “enemigo interno” se ensanchaba.

Con el aterrizaje del Covid-19, el confinamiento abrió la oportunidad para que el gobierno retomara la hoja de ruta del FMI sin mayor resistencia. Así, no solo se liberalizaron los precios de los combustibles –medida neutralizada por el paro de 2019– sino que se flexibilizaron todas las condiciones de contratación, salarios y negociación de conflictos laborales a favor del capital. El estado de excepción para gestionar la pandemia facilitó la desmovilización y permitió la aprobación exprés de la norma (Ley Humanitaria, mayo 2020). Asimismo, prosiguieron los recortes de burocracia y presupuesto. Ecuador fue el país latinoamericano con menor gasto fiscal (0,7% del PIB) durante la pandemia: *austeridad permanente*. El ministerio de Economía efectuó además onerosos pagos de deuda externa e hizo una renegociación “exitosa” con acreedores internacionales. El reperfilamiento ocasionó una modesta reducción de capital, pero tuvo un altísimo costo de oportunidad en medio de la peor crisis social del siglo (King 2020). Los escasos recursos públicos disponibles se destinaron a opacos tenedores de bonos mientras los hospitales públicos colapsaban. El gobierno exhibía como logro la confianza de los mercados. Naomi Klein habla de doctrina del shock cuando los desastres colectivos son usados para apalancar reformas favorables a los poderosos y a la profundización de las desigualdades.

¹⁵ Ver el Informe sobre el Caso #Falsos Positivos (Observatorio de Derechos y Justicia, Organización Venezuela en Ecuador, y Acción Jurídica Popular 2019).

Antipopulismo ampliado

El Paro de 2019 extremó la beligerancia antipopulista y ensanchó su radio de descalificación. A partir del encono al correísmo, una lógica de violenta polarización pasó a conducir los modos de relacionamiento del bloque dominante con adversarios reales o imaginados. Lasso señaló cualquier gesto de oposición, incluso en la esfera parlamentaria, como conatos golpistas. Mientras la continuidad de la contrarreforma estatal y la austeridad permanente estrechaban la coalición anticorreísta, más inclinada lucían las derechas al desconocimiento sistemático de la legitimidad de sus críticos.

El cómodo triunfo de Lasso en balotaje (abril 2021) no hacía presagiar tal escenario. La primera victoria electoral de la derecha en el siglo XXI abría la ocasión para materializar su promesa de refundación democrática. En campaña, de hecho, Lasso habló de un “gobierno del encuentro”. Sugería la necesidad de superar la polarización constitutiva del período y gobernar por consensos. La elección de una asambleísta de PK a la cabeza de la Asamblea parecía certificar dicha apertura. La nueva mayoría no se correspondió, sin embargo, con el diseño del Ejecutivo ni configuró un espacio de acuerdo político. En el espejo de Correa, Lasso imaginó para sí una “presidencia imperial” en que se entreveraba su lugar como patrón de un emporio bancario y su encumbramiento como nuevo jefe de la élite antipopulista. La sobreestimación de su fuerza democrática le impidió reconocer que contaba solo con 10% de los escaños y que carecía de toda base partidaria. Aun así, rompió con su socio electoral, el PSC, y retomó la diatriba anticorreísta contra unos y otros. Así, ante las primeras señas de inconformidad social, vinculó protesta con desestabilización, prometió mano dura a “los anarquistas” y respaldó a policías y militares querrellados por atentados a los DD.HH.

El paro plurinacional de junio 2022 –segundo mega estallido del ciclo– llevó esta matriz política al paroxismo. El nuevo levantamiento contestó, como en 2019, al alto precio de la gasolina y el diésel como efecto del sistema de flotación de bandas instalado en 2020. El resto de las demandas presentadas por el movimiento indígena, diez en total, testimoniaban el brutal deterioro de las condiciones de vida en el campo y la ciudad y bosquejaban medidas puntuales para sostener mínimos de dignidad social en medio del shock neoliberal. La represión fue inmediata. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, fue detenido apenas iniciado el paro. Con el trasfondo del colosal incremento de la violencia,¹⁶ la protesta ya

16 Entre 2020 y 2023 la tasa de homicidios intencionados creció de 7,8 a 42,6 por cada cien mil habitantes.

no fue solo encajonada como golpista, sino como delincuencial. Si en 2019 se acusó al bolivarianismo de sostener el “entente” entre correístas e indígenas, esta vez se aludió al papel del narcotráfico. Se sugería que la economía criminal estaba detrás de los supuestos intentos destituyentes de Correa y de la propia movilización indígena (*El Comercio* 2022). Lasso y su entorno acudieron también a la jerga uribista de la “guerrilla urbana”¹⁷ y volvieron a hablar de terrorismo. Mientras una clave contra-insurgente se instalaba en el nuevo orden estatal, Policía y FFEE pasaban a ocupar las primeras líneas del frente político. El movimiento indígena se emplazaba como nuevo enemigo del orden. La cruzada anti-RC giraba hacia una campaña contra el conjunto de la izquierda y la resistencia popular.

Ahora bien, si la consagración de Lasso en 2021 fue inobjetable, el trayecto que condujo a las elecciones de ese año no transcurrió en condiciones de competencia justa. Tras ser expropiada de su instrumento electoral en 2018, la RC fue sistemáticamente imposibilitada de operar como movimiento político autónomo en los comicios de esos años (Hernández 2023). Dicha virtual interdicción expresó del modo más elocuente la voluntad de las élites de desaparecer al correísmo como sujeto político. En 2018 se arguyó que la denominación de “Revolución Ciudadana” para el nuevo movimiento ya era parte de la imagen de AP, ahora en manos de Moreno. El segundo episodio fue aún más absurdo: los órganos electorales establecieron que la etiqueta de Revolución Alfarista¹⁸ no se correspondía con la identidad socialista de la organización. Ante el bloqueo, la RC debió participar en alianza y con siglas prestadas en las seccionales de 2019. En 2020, no obstante, Contraloría intervino para retirar el registro de Compromiso Social (CS), movimiento con el que el correísmo aspiraba a terciar en las elecciones generales de 2021. El Contralor –un poderoso alfil anti-correísta hoy preso– amenazó con destituir a los vocales electorales si incumplían su fallo. Aunque la amenaza no pasó, era inocultable que la proscripción a la RC era una acción de Estado. El correísmo inscribió sus candidaturas in extremis y participó con nueva imagen, sigla y casillero.

En paralelo al acoso sobre la organización política, innúmeras causas judiciales llovieron sobre Correa y la dirigencia histórica. El paraguas anticorrupción

17 Álvaro Uribe y el entonces presidente Iván Duque hablaron de una “revolución molecular disipada” para referir al estallido colombiano de 2021 (Chaparro 2022). El término fue acuñado por un neonazi chileno –profesor en academias militares en Colombia– y expandido por referentes de la derecha regional tras los estallidos de esos años. En Ecuador, en medio del paro de 2022, la intelectualidad cívico-militar cercana al régimen usó el mismo discurso. Ver: Pazmiño (2022). “Estas son las estrategias de desestabilización empleadas para destruir el país”.

18 La revolución liberal (1895) siempre ha sido reivindicada por la RC como parte de su base ideológica.

eslabonaba múltiples procesos. Por lo regular, las acciones de la justicia –y en particular las acusaciones de Fiscalía– se filtran a ciertos medios y portales noticiosos que cocinan efectivos escándalos públicos, rentables para desprestigiar a los acusados de turno y enardecer a la ciudadanía. Si la destitución y apresamiento de Jorge Glas fue el primer golpe a la imagen correísta, el proceso abierto a Correa se llevó todas las luces. La velocidad en la tramitación de la casusa estaba atada a la cercanía de las elecciones de 2021. Para el anticorreísmo, que siempre retrató a la militancia de la RC como una masa sin convicciones propias subyugada por el líder, era imperativo descabezar al movimiento e impedir cualquier candidatura del expresidente. En abril de 2020 es sentenciado a ocho años de prisión por “instigación e influencia cognitiva” sobre sus subalternos en supuestos casos de sobornos a empresarios. Todo fue muy rápido. Por comparar: las acusaciones penales (2000) contra el también expresidente Jamil Mahuad¹⁹ se procesaron catorce años después. A la vez, su casación presentada en 2017 se resolvió en tres años. Con Correa todo se consumó en dieciséis meses²⁰ y la casación en 72 horas. El doble estándar de los fallos judiciales apoya las denuncias de RC sobre una guerra jurídica en su contra.

Como fuere, entre las denuncias sobre corrupción, golpismo o delincuencia, el embate sobre el correísmo ha trabajado de modo menos ruidoso, pero igualmente consistente, sobre los cuadros y militantes del movimiento y sus representaciones sociales. La violencia instrumental fijada desde arriba moviliza en la sociedad el resentimiento, el odio y otras “tristes pasiones”, reforzando clivajes y permitiendo a quien la despliega escenificar la defensa de ciertos valores frente a peligrosos enemigos (Illouz 2023). Así, en la administración pública, la discriminación laboral por razones políticas transcurrió como ley no escrita. Las escenas de ocultamiento de la identidad militante ante el riesgo de señalamientos de cualquier tipo persisten en diversas esferas. El desprecio a las bases del movimiento, etiquetadas como sometidas e irreflexivas, se sintetiza en su caricatura como un rebaño de borregos²¹ al mando del pastor carismático. La máquina anticorreísta ha querido marcar con el signo del oprobio el cuerpo social del correísmo, su existencia como organización, identidad colectiva y compromiso individual. La

19 Gobernó entre 1998-2000 y fue sindicado como responsable del crack bancario y la incautación de los ahorros ciudadanos en 1999.

20 Ver la cronología del caso en: González, Mario (2020). “Un trámite falta para que se ejecute la sentencia de Rafael Correa”. *Primicias*.

21 Surgidas de la mesosfera, las imágenes de los “borregos correístas” abundan en medios tradicionales. En un ejercicio de reversión de estigma, el correísmo se apropió de dicho símbolo en la campaña electoral de 2023.

lógica del deterioro y descrédito de ciertas identidades a través de la estigmatización bien puede explicar tal proceso (Goffman 1970).

Cuando en 2023 ante el magnicidio de un candidato presidencial, diversos agentes del anticorreísmo –actores políticos, Fiscalía, portales digitales, etc.– inculparon a la RC por el crimen, estaban operando sobre la base de ese prolongado curso de estropeo y menoscabo de su imagen pública. El impacto sobre la dinámica electoral fue inmediato y explica en parte el triunfo del actual presidente Daniel Noboa. Similar escena tuvo lugar en 2021 –en medio del segundo turno con Lasso– cuando se acusó al candidato correísta de estar financiado por la guerrilla del ELN. La Fiscalía llegó a recibir a su par colombiano para inefables indagaciones. La operación política revelaba las cuerdas transnacionales de la derecha radical. Más que una acotada línea de confrontación que transcurre a nivel de los símbolos y las representaciones se trata, entonces, de una intervención directa de opacos poderes sobre el proceso democrático y las libertades políticas de la ciudadanía.

Paradójicamente, sin embargo, el recurso a la descalificación del correísmo es moneda corriente en los intercambios en el espacio político nacional. Incluso las organizaciones sociales lo han incorporado en sus repertorios discursivos como forma de diferenciación y confrontación dentro y fuera de sus redes (Zambrano 2022). En la asimilación popular del lenguaje anticorreísta se vislumbra el enraizamiento y la potencia política –¿una verdadera operatoria “transformista”?– del ciclo de radicalización de las derechas. Dicha eficacia política corre por cuenta también de la capacidad del antipopulismo para implicar en dicha lógica de relacionamiento y desprecio a los múltiples “otros” que define, según la coyuntura, como nuevos enemigos. Tal desplazamiento sugiere que más que una acotada dinámica de negación de una determinada identidad, el anticorreísmo ha terminado por producir particulares modos de experimentación y comprensión de la vida política que refuerzan las vías de la confrontación y la disposición radical de las derechas a delinear rígidas fronteras identitarias.

Tras la reciente declaratoria de “conflicto armado interno” (enero 2024) por parte del presidente Noboa, múltiples actores sociales y organizaciones de derechos humanos denunciaron la violencia militar en las cárceles y en las calles. Rápidamente, tales sectores fueron situados en la orilla de los “zurdos” y diabolizados como enemigos de la seguridad. Los ataques en su contra explotaron. Tal es

el legado del vigente ciclo de predominio de una derecha que escala en radicalidad a medida que la crisis social se asienta y su ejercicio de poder requiere mayor coerción y miedo en la sociedad. La “guerra de Noboa” al crimen organizado solo puede reforzar estas coordenadas. No en vano, aunque llegó al poder impugnando la polarización – “no soy anti-nada” –, tras apenas cinco meses de gobierno invadió la Embajada mexicana en nombre del anticorreísmo más ramplón. La derecha criolla no puede ya hablar otro lenguaje.

Bibliografía

- Alimi, Eitan Y., Lorenzo Bosi y Chares Demetriou. 2015. *The dynamics of radicalization: A relational and comparative perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Brenner, Neil, Jamie Peck, y Nik Theodore. 2011. “¿Y después de la neoliberalización? Estrategias metodológicas para la investigación de las transformaciones regulatorias contemporáneas”. *Urban*, 1: 21-40. <https://n9.cl/twxbu> .
- Caicedo, Aparicio y Arriana Tanca. 2018. *Noche larga No liberal. Realidad detrás del mito populista*. Guayaquil: Fundación Ecuador Libre.
- Celi, Israel. 2020. “Del Correísmo al Anti-Correísmo. Radicalismo, polarización y cambio político en Ecuador”. *Sur Academia*, 7 (13): 81-98. <https://n9.cl/ld5wsx>.
- Chaparro, Adolfo. 2022. “Revolución molecular y estallido social en Colombia”. En *Pensar en marcha: filosofía y protesta social en Colombia*, editado por Delfín Ignacio, Grueso Vanegas, et al. Buenos Aires: CLACSO.
- Chiasson-LeBel, Thomas. 2019. “Neoliberalism in Ecuador after Correa: A surprise turn or according to economic elites' plan?”. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 108: 153-174.
- Chiriboga, Andrés. 2019. “La gestion de la liquidité dans l'économie du Bien Vivre”. *Crisol*, 9: 1-26. <https://n9.cl/819fa>.
- El Comercio. 2022. “Guillermo Lasso dijo que el paro de junio fue financiado por el narcotráfico”. *El Comercio*, 8 de julio. <https://n9.cl/yf0sv>.
- El Universo. 2008. “Iglesia católica no acepta 4 temas de nueva Constitución”. *El Universo*, 29 de julio. <https://n9.cl/i3t0x>.
- Enríquez, Eduardo. 2019. “Understanding Latin American Anti-Populism”. *APSA Preprints*. <https://doi.org/10.33774/apsa-2019-kttcq>.
- Frieiro, Leonardo y Belén Sánchez. 2021. “Ecuador: el neoliberalismo por sorpresa”. *Revista Argentina de Ciencia Política*, 1 (26): 125-164. <https://n9.cl/dxlvx>.
- Goffman, Erving. 1970. *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires-Madrid: Amorrortu editores.
- Grugel, Jean y Pía Riggirozzi. 2012. “Postneoliberalism in Latin America: Rebuilding and Reclaiming the State after Crisis”. *Development and change*, 43 (1): 1-21.

- Guamán, Adoración y Soledad Stoessel. 2022. “Del derecho al trabajo digno al régimen laboral neoliberal: captura estatal y autoritarismo en el Ecuador contemporáneo”. *Revista latinoamericana de derecho social*, 35: 211-238. DOI: <https://n9.cl/3modp>.
- Hernández, Virgilio. 2023. “Lawfare recargado, reforma constitucional y bloqueo político: el caso de la revolución ciudadana en Ecuador”. En *Guerras jurídicas contra la democracia*, coordinado por Ernesto Samper, Larissa Ramina y Carol Proner. Buenos Aires: ELAG / Instituto Joaquín Herrera Flores.
- Houtart, François. 2015. “El Ecuador de 2015: el agotamiento de un modelo en un contexto de crisis mundial”. *CADTM Comité para la abolición de las deudas ilegítimas*, 27 de agosto. <https://n9.cl/nkghc>.
- Illouz, Eva. 2023. *La vida emocional del populismo*. Buenos Aires: Katz Editores.
- King, Katuska. 2020. “Ecuador paga y renegocia su deuda externa en medio de la Covid-19”. *Análisis Carolina*, 52: 1-11. <https://n9.cl/eoote>.
- Luna, Juan Pablo y Rovira Kaltwasser, editores. 2014. *The Resilience of the Latin American Right*. Baltimore: John Hopkins University Press.
- Observatorio de Derechos y Justicia, Organización Venezuela en Ecuador, y Acción Jurídica Popular. 2019. “Informe sobre la detención de 19 ciudadanos extranjeros y nacionales en Tababela el 11 de octubre”. <https://n9.cl/vnyy0>.
- Pazmiño, Mario. 2022. “Estas son las estrategias de desestabilización empleadas para destruir el país”. *Plan V*, 29 de junio. <https://n9.cl/mrtpu>.
- Quintero, Rafael y Erika Silva. 2011. “Ecuador: la alianza de la derecha y el corporativismo en el ‘putsch’ del 30 de Septiembre del 2010”. *Observatorio Latinoamericano*, 7. Buenos Aires: UBA-IEALC, 26-40.
- Ramírez Gallegos, Franklin. 2023. “¿Nuevo giro a la izquierda o transformación del conflicto político?”. *Cuestiones de Sociología*, 28: e156. DOI: <https://n9.cl/jf0fjy>.
- Ramírez Gallegos, Franklin y Soledad Stoessel. 2018. “El incómodo lugar de las instituciones en la ‘populismología’ latinoamericana”. *Estudios políticos*, 52: 106-127. DOI: <https://n9.cl/cvv9p8>.
- Rosanvallon, Pierre. 2007. *El modelo político francés: la sociedad civil contra el jacobinismo, de 1789 hasta nuestros días*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Ruiz, Miguel. 2019. “¿De vuelta al corral? El giro de las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos”. Ponencia presentada en el XXXII Congreso ALAS, diciembre. Lima. <https://n9.cl/i8dfq2>.
- Salgado, Wilma. 2018. “Paquetazo para toda una vida”. *Ecuador Debate*, 104: 7-23. CAAP.
- Semán, Ernesto. 2021. *Breve historia del antipopulismo: Los intentos por domesticar a la Argentina plebeya, de 1810 a Macri*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Stavrakakis, Yannis. 2017. “How did ‘populism’ become a pejorative concept? And why is this important today?”. *POPULISMUS*, Working Papers 6, abril. <https://n9.cl/u02pqx>.
- Stefanoni, Pablo. 2021. *¿La rebeldía se volvió de derecha?* Buenos Aires: Siglo XXI.
- Stoessel, Soledad y Olga Bracco. 2024. “Antipopulismos en América Latina desde una perspectiva histórica”. *Historiapolitica.com*, 146. <https://n9.cl/a2ieo>.

- Stokes, Susan C. 2001. *Mandates and democracy: Neoliberalism by surprise in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Dyck, Brandon. 2019. “Why Not Anti-Populist Parties? Theory with Evidence from the Andes and Thailand”. *Comparative politics*, 51 (3): 361-383.
- Weyland, Kurt. 2019. “Populism and authoritarianism”. In *Routledge Handbook of Global Populism*, editado por Carlos de la Torre. London: Routledge.
- Zambrano, Ricardo. 2022. “‘Conaie puede identificar infiltración correísta que vandalizó las protestas, pero el problema es que su presidente (Leonidas Iza) es muy próximo al correísmo’, dice Yaku Pérez”. *El Universo*, 30 de junio. <https://n9.cl/q58oi>.

ISSN: 1390-0099 / e-ISSN: 2588-0780
<http://https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/procesos>

ESTUDIOS

Comerciantes republicanos en el Suroccidente colombiano
(1850-1912)

BRAYHAN AREVALO MENESES

Entre filólogos y misioneros: debates y usos del quichua
en Ecuador (1868-1913)

LUIS ESTEBAN VIZUETE MARCILLO

El monumento al sacrificio de Ricaurte, un dispositivo
de memoria demolido en Bogotá (1913-1936)

ABEL FERNANDO MARTÍNEZ MARTÍN
ANDRÉS RICARDO OTÁLORA CASCANTE

La búsqueda de profesionalización en la actividad teatral de Quito
(1925-1927)

ALEJANDRO AGUIRRE SALAS

DEBATES

Ideas políticas populares en la provincia de Popayán (1809-1821)

LUIS ERVIN PRADO ARELLANO
DAVID FERNANDO PRADO VALENCIA

OBITUARIO - DIALOGO CRÍTICO -
RESEÑAS - REFERENCIAS - EVENTOS



UNIVERSIDAD ANDINA
SIMÓN BOLÍVAR
Ecuador

Dominación y conflicto político del uribismo en Colombia. 2002-2010*

Alexander Gamba Trimiño**

Resumen

El presente artículo aborda los tipos de dominación política del uribismo y su forma de construcción del conflicto político. El uribismo es un movimiento político que emergió en Colombia en el año 2002 y que desde entonces se ha convertido en la principal fuerza de derecha en el país andino. El artículo aborda el periodo que va de 2002 a 2010, cuando Álvaro Uribe Vélez —el principal dirigente de este proyecto— fue presidente de la nación. Se aborda a la luz de la teoría de la dominación política de Max Weber y de la teoría política de Carl Schmitt y Chantal Mouffe. Se usan fuentes documentales, en especial discursos políticos, reportes de prensa y archivos de la época de estudio.

Introducción

A comienzos del siglo XXI en Colombia se presenció un fenómeno político novedoso para su historia política reciente: la emergencia de un movimiento político diferente a los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) y que se ubicaba abiertamente en el campo político de la derecha. Si bien el país ha tenido una tradición política conservadora, la derecha como formación política identificable desde la década de 1960 se había mimetizado en el bipartidismo como facción de algunos de los partidos tradicionales.

Con la elección de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, en el año 2002 se dio el principal punto de quiebre en el sistema bipartidista colombiano que se había gestado en 1958, en el que se alternaban el poder los tradicionales partidos Liberal y Conservador, hegemónicos desde mediados del siglo XIX. Ocurrió por el relevo de las élites nacionales que se abrió con el triunfo de un representante de las

* Este artículo hace parte de la tesis doctoral del autor: *Élites políticas y guerra en Colombia en tiempos del Uribismo, 2002-2010*. Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, 2023.

** Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestría en Estudios Latinoamericanos de la UNAM y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del grupo de investigación *Conflictos sociales, género y territorios*, de la Universidad Santo Tomás, Colombia. Correo electrónico: gagambat@unal.edu.co.

élites regionales y las emergentes que no siguieron las directrices de los partidos tradicionales, como había sido recurrente hasta entonces, sino que constituyeron un bloque de poder en el que los nuevos actores eran la voz central y las élites nacionales pasaron a jugar como aliados de ese proyecto.

Esa coalición, que es la base del uribismo, se construyó con un núcleo de élites empresariales, ganaderas y terratenientes, con el apoyo –primero oculto y después público– de las élites emergentes que controlaban los negocios ilícitos y dirigían las acciones de la estrategia paramilitar (López Hernández 2010). Se sumaron además los sectores más de derecha del partido Conservador y de disidencias del partido Liberal. De la coalición sólo quedaron excluidos el oficialismo de este último y los partidos políticos de izquierda que se declararon en oposición. De manera muy breve se puede sintetizar al uribismo como un proyecto político que se ha fundamentado en la promesa de la seguridad para la nación colombiana, ofreciendo “mano dura” frente a los diferentes tipos de violencia que aquejan a la sociedad, particularmente la proveniente del conflicto armado y en concreto de las FARC-EP (López de la Roche 2014).

Así, bajo esta promesa inicial y ante el fracaso de las conversaciones de paz entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), Uribe prometió al pueblo colombiano acorrallar a las fuerzas insurgentes y, una vez rodeadas, obligarlas a la rendición. Con esta promesa y en medio de un gran desgaste producto de las acciones armadas en el país –ante el descrédito del proceso de paz y en un clima internacional signado por la “lucha contra el terrorismo” que se enmarcó en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York– se emprendió una “cruzada” para ganar la guerra; para lo cual se movilizaron recursos económicos, se elaboraron discursos militaristas y se consolidó un gobierno cuyo epicentro fue: es posible derrotar militarmente a las FARC-EP (López de la Roche 2014).

En sus ocho años de gobierno (dos períodos, 2002-2006 y 2006-2010) Uribe les dio un gran protagonismo a las Fuerzas Armadas, invirtió un alto nivel del presupuesto nacional en la guerra y reformó la Constitución para posibilitar su reelección. Su política estelar se llamó seguridad democrática, la misma que se articuló a la estrategia global de lucha contra el terrorismo liderada por Estados Unidos de América (EE.UU.), y que en Colombia se plasmó en la lucha contra las FARC, a las que tanto Uribe como el Departamento de Estado de EE.UU. calificaron como grupo terrorista. Las bases de la política de seguridad democrática implicaron una pérdida de iniciativa por parte de las FARC, que se replegaron

en varios territorios; situación que, en todo caso, no representaba una derrota militar irreversible, pero sí fuertes golpes políticos –el principal de los cuales fue la movilización urbana contra estas en las marchas de *No más Farc* en febrero de 2008–. Los mayores logros de la política de seguridad democrática estuvieron en la estrategia de recuperación y consolidación territorial, lo cual permitió que los principales corredores económicos del país fuesen controlados de nuevo por las Fuerzas Armadas, en tanto las guerrillas se replegaron a las zonas de fronteras en la selva. No obstante, nunca realmente se estuvo ante una derrota militar de las FARC-EP, pero sí se les golpeó políticamente. El uribismo logró movilizar a la población contra esta insurgencia (Leal Buitrago 2010).

A partir de allí se construyó un relato centrado en la idea de que la guerra se podía ganar, pero “que la culebra seguía viva” y se necesitaba darles continuidad a las políticas uribistas para tal fin. Dado que la Corte Constitucional en el año de 2010 no aprobó la posibilidad de habilitar un tercer mandato del presidente Uribe, fue necesario que se pensara en la continuidad de este proyecto sin el caudillo. La alta popularidad de este auguraba que, fuese quien fuese el elegido, sería el nuevo presidente de Colombia (Cardona Zuleta 2016) y así ocurrió.

Ante el fracaso de la aprobación de la reforma constitucional, el mandatario selló una alianza con Juan Manuel Santos –representante de las élites liberales y ministro de defensa en su segundo mandato– para que llevara las banderas del uribismo en este nuevo ciclo sin Uribe. En el 2010 el candidato liberal ganó sin dificultad en segunda vuelta ante sectores de centro.

La alianza duró poco, hasta que Juan Manuel Santos empezó a dar un giro en sus discursos frente a la guerra y la paz, y empezó a plantear reformas que tácitamente reconocían causas sociales del conflicto armado y se alejaban bastante de la narrativa del uribismo –que establece que en el país no había razones para un alzamiento, y que no existía un conflicto armado sino un par de grupos terroristas que buscaban enriquecerse con el negocio del narcotráfico e implementar el modelo de Venezuela en Colombia–. Esta narrativa no ameritaba reformas sociales o de justicia, y sólo daba lugar a una posibilidad: la rendición o derrota militar. Santos cambió esa narrativa y emprendió dos iniciativas que iban en la dirección contraria con la creación de la Ley de Víctimas y de la Ley de Tierras, ambas en clave de hacer reformas sociales y reparar a las víctimas –incluidas las de los agentes del Estado– de las afectaciones del conflicto armado (Palacios 2012).

Pese a este revés, el uribismo se convirtió en la principal fuerza de oposición al liberalismo representado por Santos y logró derrotar a la alianza entre izquierdas

y liberales en el plebiscito por la paz de 2016, en el que ganó la opción del NO en el apoyo al acuerdo de paz. Así mismo, en 2018 ganó las elecciones presidenciales con Iván Duque.

Este movimiento cambió la historia política reciente de Colombia. Si bien los partidos tradicionales no desaparecieron, se convirtieron en un apéndice de otras expresiones políticas. Con el uribismo desapareció el pacto bipartidista: emergió una derecha caracterizada, la izquierda se agrupó y en 2022 logró conquistar el poder, y los partidos tradicionales quedaron disputando el Congreso y algunas elecciones regionales, pero muy alejados de ser opción de poder en el Ejecutivo.

En este escrito se buscan responder dos preguntas. La primera es ¿Cuál fue el tipo de dominación que construyó el uribismo que le permitió convertirse en el proyecto hegemónico durante los años de sus dos gobiernos? La segunda indaga acerca de cómo este movimiento construyó el conflicto político, en particular, a sus adversarios a lo largo de su gobierno (2002-2010).

El artículo está organizado en dos apartados. En el primero se aborda el liderazgo del uribismo, en donde se reconstruyen los principales mensajes políticos que se agitaron y cómo se le dio coherencia a un relato para ganar el apoyo popular y ejercer así su dominio. En el segundo se enfoca en la naturaleza del conflicto político, allí se analiza cómo este está atravesado por la lógica de la guerra y se expresa en las dinámicas de la enemistad.

Las fuentes teóricas van desde la sociología comprensiva de Max Weber –en especial, los tipos de dominación– hasta la concepción del conflicto político de Carl Schmitt y Chantal Mouffe. En cuanto a la metodología, esta se inscribe en la hermenéutica social; particularmente se emplea el análisis de las palabras, de los discursos y de las narraciones desde el referente metodológico de María Teresa Uribe (Uribe y López 2010), conocido como la mimesis del discurso. A partir de él se analiza cómo determinados actores han construido el relato histórico y, por ende, los discursos; tanto en el terreno de la retórica, es decir la narración racional y ordenada de hechos y acontecimientos, como en el de la poética, es decir, los discursos que movilizan sentimientos. Las fuentes que se emplearon fueron discursos aparecidos en el escenario público, tales como los principales diarios y semanarios impresos del país (*El Tiempo*, *El Espectador* y *Revista Semana*), los debates en el Congreso de la República, documentos públicos de los dirigentes políticos del uribismo y sentencias judiciales.

Liderazgo carismático cubierto de tradición

Al finalizar su segundo mandato Uribe Vélez contaba con un alto porcentaje de aprobación, algo sin precedentes desde que se hacen este tipo de mediciones en Colombia. A lo largo de esos ocho años su popularidad siempre estuvo en la media del 70%, lo que demuestra que tenía una gran conexión con la mayoría de la población colombiana. Según los analistas de la época, esta popularidad se debía a tres factores: su manera de gobernar, más cercana a la gente y sin intermediación de las instituciones; su mano fuerte y sus programas asistencialistas articulados, “familias en acción” y “jóvenes en acción”, que involucraban transferencias directas a las poblaciones más vulnerables (*El País* 2010).

En los ocho años de gobierno el uribismo no logró consolidar un equipo colectivo para ejercer un liderazgo en grupo, y este estuvo en cabeza de su fundador. Ello no quiere decir que fuese un proyecto individual; de hecho, sí existió un proyecto colectivo, pero con una autoridad muy centrada en Álvaro Uribe Vélez quien ejercía la vocería hacia el conjunto de la sociedad.

¿Qué tipo de liderazgo construyó? De conformidad con Max Weber (2014) se pueden identificar dos tipos de dominación que en principio cumple Uribe: el primero es el tradicional, sustentado en tradiciones que le dan la legitimidad; el segundo es el carismático, fundamentado en el “don” del líder, que le da una legitimidad frente a sus súbditos.

A primera vista, ambos tipos de dominación se presentan como los adecuados para caracterizar su liderazgo, pero –tal como lo plantea el mismo Weber (2014)– el tradicional es para mantener un estado de cosas, en tanto el carismático implica una transformación, que no siempre es progresista en el sentido político del término, por lo cual puede ser un cambio tanto de derecha como de izquierda.

Estos tipos de dominación no se presentan de manera pura y no son excluyentes: mientras el tradicional busca mantener, sostener y conservar, el carismático busca transformar. Uribe buscaba cambiar el poder político en la sociedad colombiana, fue un disidente de las estructuras partidistas tradicionales y, en términos de élites, su núcleo duro es más una élite regional que ha buscado consolidarse como una nacional.

Su dominación es la carismática que busca en la tradición un ámbito de legitimidad, un mito de origen que le dé sentido a este nuevo tipo de dominio que se presentó en la sociedad colombiana. En el análisis de sus discursos y sus formas de ejercer el dominio se han encontrado dos grandes mensajes que logró consolidar en sus ocho años de gobierno. El primero fue un relato en el cual su

presidencia era una cruzada por la patria en la que ganar la guerra era solo el medio; se trataba de salvar un modo de vida que, según su narración, estaba en peligro. El segundo fue presentarse como la encarnación, el vocero y el salvador de un tipo de habitante que tiene unos valores que se representan en la figura del “arriero antioqueño”.

Las cruzadas por la patria

Álvaro Uribe Vélez, es su discurso tras atentado en el Nogal en el año 2003, expresaba:

Sé que tendríamos que ser más eficaces para no evitar solamente dos o tres carros bomba sino para evitarlos todos. Tenemos años que los marcan los terroristas, nos acaban de hacer este daño tan grande, pero si persistimos en la determinación, si persistimos en la acción, si persistimos a pesar del dolor y el desconcierto se tendrá que repetir lo que siempre ocurre para bien del pueblo: el delito hace mucho daño, pero no triunfa, el triunfo finalmente será de la democracia, del ordenamiento jurídico de la gente de bien. A mis compatriotas, en medio del dolor, una voz de ánimo. Colombia está en un momento único ideal para derrotar el terrorismo, y al mundo no más divagaciones, no más debate estéril, al mundo democrático he pedido determinación para que nos ayuden a superar este daño tan grande que han ayudado a causar. A todos, en medio del dolor, un saludo con afecto y al mismo tiempo una convocatoria para que unida nuestra Policía, nuestro Ejército, nuestra Fiscalía, nuestras autoridades civiles, nuestro pueblo con un apoyo que esperamos sea fervoroso, eficaz y resuelto de la comunidad internacional, emprendamos el camino definitivo de derrotar el terrorismo (Uribe Vélez 2003).

En medio de una de las mayores crisis políticas y sociales que ha vivido Colombia, el mandatario se erigió con un mensaje que prometía una “salvación”, para lo cual invocaba una amenaza posada sobre la sociedad y que buscaba atender contra la inmensa mayoría del pueblo.

Uribe construyó un mito a partir del asesinato de su padre, lo que le dio a su relato un componente de tragedia; pero a través del proyecto de la seguridad democrática ofrecía derrotar a esos enemigos. Esta tragedia individual se convirtió en un mito colectivo y una invitación a un relato épico: invoca a su padre como encarnación de los valores y un modo de vida que está siendo amenazado por los “terroristas”. Ese modo es la imagen del hacendado de Colombia: un hombre recio del campo, disciplinado, con rasgos autoritarios –aunque él los denomina “de firmeza”– que le dan la legitimidad para enfrentar a los enemigos. El rasgo

distintivo de la tradición que lo caracteriza –tanto a él, como después al uribismo– es el del patriarca. Allí es donde se encarna en su padre y desde allí legitima su manera de gobernar:

Mi padre fue asesinado en la tarde del 14 de junio de 1983 durante un intento de secuestro. Le dispararon dos veces; una en la garganta y otra en el pecho, el disparo lo mató. Tenía cincuenta años [...]

Amaba a mi padre y lo extraño todos los días. La tragedia de Guacharacas marcó en mi vida personal y profesional un punto de quiebre cuya influencia tal vez sea incommensurable [...]

Sí, sentí un dolor inmenso tras la muerte de mi padre y lloré con la familia. Sufríamos por vivir en un país donde sucedían cosas horribles. Al mismo tiempo sabíamos que no éramos los únicos: muchos amigos y conocidos perdieron también a sus seres queridos en secuestros y tiroteos [...].

Así pues, no estábamos solos, el nuestro era un dolor compartido por millones de personas. Entonces dije a mis hermanos y hermanas:

“El dolor que sentimos también lo sufre la mitad de los colombianos. La nuestra es una tragedia personal y un problema nacional. Debemos hacerle frente de alguna manera” (Uribe Vélez 2012, 80-81).

Desde la campaña presidencial de 2001-2002 ofreció “mano firme”, que es autoridad, y “corazón grande”, que es cuidado, dos características centrales del patriarca; y es desde allí donde construye su relato. Como heredero de su padre, él encarna la imagen del hacendado, que en su narración fue la que dio grandeza al país que en ese momento se veía amenazado por los terroristas.

En cuanto a la “mano firme”, la personalidad del líder es central para proyectar esa imagen. El temperamento de Uribe, que afirma ser “un hombre de pantalones” y que decía en momentos de crisis “estoy cargado de tigre” –que significa un estado de ánimo de enojo y determinación–, fue tema central en su proyecto político: él encarnó el enojo de los sectores rurales contra las élites bogotanas que supuestamente habían desatendido el tema del “terrorismo” en el campo y no habían tenido la determinación para enfrentarlo con fuerza:

Veo que ese lenguaje moderado crea confusión en la ciudadanía, en esas grandes mayorías ciudadanas que apoyan la Seguridad Democrática. Veo que ese lenguaje moderado desorienta a la fuerza pública, en perjuicio de la eficacia de la política de seguridad. Y lo peor: veo que ese lenguaje moderado no atrae a los terroristas hacia la paz. Simplemente les agranda su ambición terrorista; facilita que los terroristas poseen de personajes de la política. Debe quedar absolutamente claro que una cosa ha sido en estos últimos meses el mensaje moderado para buscar la paz; y otra cosa es la voluntad, que es total,

sin atenuantes, para avanzar con la Seguridad Democrática. Hemos expresado lo que sentimos: ¡voluntad de paz! ¡Pero jamás debilitaremos la determinación de avanzar con la Seguridad Democrática! ¡Muy apreciados soldados y policías de mi Patria! ¡comandantes! ¡señor ministro de la defensa! ¡nadie en los cuarteles! ¡nadie en las oficinas! ¡nadie en las escuelas! ¡todo el mundo a las calles! ¡a fortalecer la política de Seguridad Democrática! (Uribe Vélez 2006a).

Esta “fuerza” apareció desde su temprana carrera política. Así, en el año 1994 en un evento en Jardín, Antioquia, en medio de un mitin político con un competidor, junto a su primo Mario Uribe Vélez sacaron un revólver cada uno de su cinto y amenazaron a su competidor para que se bajara de la tarima (Duzán 2004). Otro episodio aconteció en la noche de la elección como gobernador de Antioquia –30 de octubre de 1994–; ante unos resultados electorales muy ajustados con el candidato del Partido Conservador, Uribe le propinó un golpe en la cara a Fabio Valencia Cossio que denunciaba un posible fraude electoral (Oquendo et al. 2020). Estas formas violentas de tramitar las contradicciones con sus oponentes se trasladan al terreno internacional en el enfrentamiento que tuvo con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Protagonizaron un acalorado altercado en una cumbre realizada en México en febrero de 2010. Según los presentes, Uribe reclamó a Chávez por el embargo que su país había impuesto a los productos colombianos y la discusión fue subiendo de tono. El venezolano intentó retirarse, pero Uribe lo interceptó con un grito: “Sea varón, qué-dese aquí y hablemos de frente”, le dijo (Oquendo et al. 2020).

Su forma de gobierno no fue solo de autoridad y violencia, también se preocupó mucho en transmitir la otra faceta del patriarca: el proveedor, que en su eslogan de campaña era la frase del “corazón grande”. Su relación con la población está mediada por el hecho de que él se presenta como el padre protector: en sus alocuciones se dirige a la población colombiana como “hijitos”. El uso del diminutivo aquí no solo le da una cercanía con el público, sino que define una jerarquía.

Desarrolló esta faceta a través de políticas hacia los sectores más empobrecidos de la población, en programas que se llamaron, entre otros, “familias en acción” y “jóvenes en acción”, que le posibilitaban hacer transferencias directas masivas. Estos programas, y en general el manejo de las políticas sociales del Estado, no los ofrecía con un criterio de universalidad, sino que fueron dirigidos a poblaciones específicas; y la manera de hacer el reparto –un aporte sin contraprestaciones– fue de manera directa, sin intermediarios. A este mecanismo lo llamó el Estado comunitario.

Creemos en el Estado comunitario, promotor y subsidiario, árbitro que no invasor. El Estado comunitario es el medio para que la actividad pública beneficie a los gobernados, no a los funcionarios, los grupos de poder, la politiquería, las burocracias laborales. El Estado comunitario es participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, su ejecución y supervisión. Es garantía de transparencia, eficiencia y equidad en el resultado de la acción oficial. La exigencia ciudadana permanente demanda sincero afán de los funcionarios, prudencia en el compromiso, diligencia en la acción, imaginación para explorar opciones y superar obstáculos. La presencia continua del funcionario, de cara a la comunidad, facilita acceso a la información, conocimiento de cifras, conciencia sobre posibilidades y limitaciones, reflexión sobre obligaciones y confianza en las instituciones (Uribe Vélez 2006b).

Uno de sus programas bandera –Consejos Comunales– fue el mecanismo para emprender ese proceso. Eran audiencias públicas con la comunidad, autoridades locales y regionales; algo que inició desde la gobernación de Antioquia y continuó como presidente, llegando a realizar trescientos seis consejos comunales (Camacho et al. 2010).

Estos se llevaban a cabo los sábados, desde las nueve de la mañana con una duración de ocho a nueve horas. Tenían lugar en municipios y ciudades de todas las regiones del país, en sitios abiertos como canchas deportivas, de fácil acceso para la mayoría de la población que participaba, con una asistencia de entre mil a mil quinientos invitados. Además de la ciudadanía, participaba el alcalde del municipio, alcaldes de municipios cercanos, congresistas de la región y funcionarios del Estado –en especial, de entidades de educación, salud y de infraestructura vial de parte del gobierno nacional–. Además del presidente, había ministros y altos funcionarios del Estado (Camacho et al. 2010).

Un aspecto central de estos eventos era la transmisión en directo por televisión, que se hacía a través del canal público nacional, a cargo del jefe de prensa de la presidencia, Ricardo Galán, quien había sido el coordinador de comunicaciones en la primera campaña presidencial de Uribe. El presidente era el moderador y el que directamente resolvía una a una las peticiones de la ciudadanía, de las autoridades municipales y de los gremios. En todos los consejos comunales había actos folclóricos, el mandatario solía vestirse con prendas de las regiones a las que asistía y se recogía un acta de compromisos con los que él se comprometía personalmente desde su condición de presidente (Camacho et al. 2010):

Apreciada comunidad:

[...] Me complace mucho llegar a esta tierra, realmente todo lo de esta tierra es emocionante, gocé tanto ahora, oyendo ese verso de Aurelio Arturo, traído por Parmenio

[Cuéllar, gobernador de Nariño] que es un gobernador y un colombiano tan importante por su honradez, por sus principios. Aquí vamos a firmar hoy, cero pactos. Ojalá hacer cero promesas. Vamos a experimentar un mecanismo de trabajo entre los Gobiernos municipales, departamentales, el Gobierno nacional, de cara a la comunidad. En un momento muy difícil del país, con una situación fiscal difícil, un desempleo muy alto, con mucha violencia. El tema de orden público generalmente no se trata en estos consejos, pero nos acompaña la ministra [de defensa, Marta Lucía Ramírez], quien seguramente va a examinarlo ahora, en un saloncito, con los altos mandos. Tratamos fundamentalmente los temas sociales, tenemos que proceder con mucha agilidad, intervenciones cortas, respuestas cortas, concisas, todo debe quedar en un acta, se le debe hacer seguimiento, a ver cómo hacemos este trabajo metódico, de identificación de unos programas, de impulso de los mismos, podemos avanzar en estos cuatro años (Uribe Vélez 2002).

En estos espacios desaparecen las entidades del Estado en tanto responsables de las políticas públicas, y el gran ejecutor es el presidente quien se ubica en el centro y escucha las peticiones de los asistentes al evento. Así, además de ser el mandatario de una nación, Uribe se convierte en el proveedor de esa “comunidad”. En estos espacios se hizo cargo de muchos asuntos de microgerencia. En cuanto al tema técnico del gobierno, los organigramas pasaron a un segundo plano; lo importante era tener una solución inmediata a las demandas. El proceso comunicativo era claro: el mandatario estaba intentando resolver los problemas reales de la sociedad que un Estado lento y burocrático no atendía.

Una de las principales críticas que se les hicieron a los consejos comunales era que prescindían de la mediación de instancias colectivas, fundamentales para la democracia moderna, como son los partidos políticos, los sindicatos y las instituciones del Estado. Este vínculo de la administración pública entre Uribe y la ciudadanía concentró aún más el poder en la figura presidencial, en un país como Colombia que de por sí ya es muy presidencialista (Atehortúa Cruz 2007).

El pueblo arriero y “echado p´alante”

Hay algo en el uribismo que le permitió tener un apoyo en lo popular que lo diferencia del resto de las élites políticas colombianas: logró inventar un pueblo al cual apelar. Esta imagen se encarnó en un sujeto, el “arriero”, símbolo del hombre antioqueño que conquistó la inhóspita selva aún virgen y creó pueblos, ciudades y empresas. En su riqueza inicial solo tiene su fuerza de trabajo y un legado cultural muy aferrado a sus tradiciones, de profundas creencias católicas y con familias numerosas que aportan en el trabajo de construir nuevas fronteras.

Esa idea mítica que algunos denominan “raza antioqueña”, del emprendedor, la intentó expandir al resto del país. De alguna manera su presidencia es una plataforma para expandir los valores del arriero paisa¹ para “desarrollar” el país. Para el uribismo, el “pueblo” emprendedor podría tener un mejor país si no fuera por dos “plagas”: la clase política tradicional vinculada a las viejas élites urbanas, en especial las bogotanas, educadas en Europa y que no conocen los problemas del pueblo, y las guerrillas de izquierda que quieren imponer un régimen similar al de la vecina Venezuela “chavista”:

Hemos trabajado sin darnos cuenta que hemos trabajado, porque esta tierra antioqueña es una escuela de formación, de disciplina de trabajo. Las nuevas generaciones tienen todas las posibilidades para mejorar la plana nuestra, para enmendar la tarea que nos haya quedado mal hecha [...] aquí hemos procurado interpretar la disciplina del trabajo con que los mayores remontaron las dificultades de la montaña. Antioquia nos enseñó que el dominical no hay que consagrarlo con el descanso, que mientras haya dificultades hay que sumarle a la oración el trabajo. Fue muy grato haber trabajado casi todos los sábados y casi todos los domingos por la nación entera. Antioquia nos enseñó que no puede haber cansancio, que finalmente lo único que evita el cansancio es tomar goticas en cantidades inagotables de amor, de amor infinito por Colombia. Antioquia nos enseñó que hay que recorrer la milla adicional. Antioquia nos enseñó que tiene que haber meta parcial, pero nunca meta final [...] Apreciados coterráneos, Antioquia al ritmo de nuestro himno, ha inyectado en las pasadas y en las presentes generaciones un gran amor por la región. Yo prometo que para bien del nombre del pueblo de Antioquia he procurado trabajar por todas las regiones de Colombia con el afecto infinito que Antioquia nos enseñó por esta tierra antioqueña (Uribe Vélez 2010).

Uribe proyecta su pertenencia a ese “pueblo” a través de frases y mensajes políticos, se precia de ser un madrugador –algo propio de la población rural– cuyo valor central es el trabajo. Su conocida expresión “trabajar, trabajar, trabajar” fortalece su imagen del arriero antioqueño.

Así mismo, proyecta una imagen de desdén sobre los “placeres” de la vida mundana, pese a haberse educado en Harvard y haber pasado una estancia investigativa en Oxford. No gusta de la buena mesa, vinos, cine, artes, no gusta de los cócteles –algo propio de las élites bogotanas tradicionales– y se precia de ser un hombre austero –algo que, si bien en su cotidianidad se ve reflejado, no concuerda con un hombre que es uno de los grandes propietarios de tierra del país– (Duzán 2004).

¹ “Paisa” es una manera coloquial para referirse a los nacidos en el departamento de Antioquia y la región del eje cafetero (Caldas, Quindío y Risaralda).

Gracias a su madre conoció el pensamiento de quien ha sido el caudillo más importante del país: Jorge Eliecer Gaitán. En su juventud, Uribe recitaba de memoria los discursos del prócer de la causa populista de Colombia. Uno de los ejes de argumentación central de Gaitán era que había una fractura entre el país nacional y el país político, siendo el primero el de los pobres y los sectores no vinculados a la clase política, y el segundo el de las élites políticas. Uribe así se apropia de la lógica del discurso “gaitanista” como el antagonista de las élites urbanas que no conocen al país y reemplaza la reivindicación de Gaitán –que era la justicia social– por otro significante: la seguridad.

Logró delimitar su frontera frente a “los otros”: de un lado el pueblo de arrieros y del otro la guerrilla y sus cómplices, las élites urbanas, quienes permitieron que esa amenaza creciera, siendo “blandos” con esos enemigos, porque en esencia a ellos, a estos señores de Bogotá, no les importa la violencia en el campo y por eso “dialogan” con las guerrillas y no las combaten. Él se presentó como un hombre exitoso, con riqueza, pero del campo, y que por eso entiende los dolores de ese pueblo amenazado.

Conflicto político y la prevalencia de la enemistad

Como todo proyecto político, además de un “nosotros”, el uribismo necesita aludir a los “otros”, sus adversarios, sus contradictores. Después de la revisión de los documentos y discursos, se encuentra que el este plantea el conflicto político en clave de enemistad, tal como lo define Carl Schmitt (1998).

Es importante recordar que si bien Schmitt (1998) había planteado que todo conflicto político está determinado por la relación entre nosotros y los otros –donde los otros son enemigos–, en las reflexiones políticas contemporáneas como las que ha expuesto Chantal Mouffe (2003; 2011) se sostiene que se puede mantener un conflicto político sin caer en la lógica de la enemistad, dado que esta implica intrínsecamente el uso de la violencia. Esta autora y esta escuela de pensamiento consideran que el conflicto político se diferencia según se presente en contextos de paz o de guerra. En la paz la disputa con los oponentes se libra de manera agonista, por lo que se les trata como adversarios –esto quiere decir que se les puede disputar el poder, pero siempre en el marco de las reglas de la democracia liberal (Mouffe 2003)–, mientras que en contextos de guerra el conflicto político adquiere dimensiones antagonistas: el opositor no es el adversario, sino que se convierte en enemigo y así la disputa política se transforma en enemistad no sólo con los ejércitos con los que se libra la batalla sino con los opositores que,

aun sin ser parte del conflicto armado, terminan siendo incluidos en la lógica de enemistad (Franco 2008).

La guerra se libra en dos terrenos: en el campo de batalla y en el escenario de la disputa política abierta. Este segundo sirve para dirimir conflictos, aplazar oposiciones, pero sobre todo para ganar niveles de adhesión de la población: movilizarla en defensa de un enemigo común es una de las tareas más importantes de las guerras civiles. En ambos escenarios hay un uso de la violencia particular: la política.

En la guerra prevalece el *animus belli*, la hostilidad hacia el otro, escenario en el cual la élite política gobernante juega un papel central para definir a nombre del Estado quién es el enemigo de una nación. En las relaciones basadas en la enemistad las razones para tratar al otro como enemigo no son precisamente sus características ni su condición, ni siquiera su origen o su nivel socioeconómico; lo importante es que haya una disputa tan intensa que, incluso, propicie la idea de que se pueda eliminar al oponente (el otro), no importa si es feo, bello, pobre o rico. Lo central es la relación de enemistad que se construye, el resto es secundario. Ahora bien, un conflicto por la belleza, la riqueza, la identificación racial, étnica o ideológica puede llevar a que se construya una enemistad. En esos casos, esta se convierte en marcas que se extrapolan, y lo realmente importante es que se construye un nosotros y un los otros (Schmitt 1998, 79). Una cohesión basada en el odio y el miedo, lo que trae consigo es una predisposición a la violencia y por esa vía a la guerra. Es decir, las características que se le señalan al enemigo son más una imagen que se construye en torno a él, y lo central no es que realmente sea un enemigo, sino la imagen que se construye sobre ese otro (Eco 2013, 16).

En contextos de guerra, la enemistad no se agota sólo en los enemigos que usan las armas, se expande a los oponentes políticos y sociales que son tratados de la misma manera, así estén desarmados y no participen efectivamente en la contienda. La dinámica de la guerra hace que la política sea absorbida por su lógica, por la de la enemistad, y que los diferentes conflictos sociales y políticos sean asumidos por los actores en lógicas de hostilidad.

En el caso de Colombia la disputa política ha sido permeada por la guerra, no solo con el uribismo sino a partir de profundos antecedentes que han construido la manera como se hace política en el país. Las guerras civiles del siglo XIX y la forma de construcción de los partidos tradicionales a partir de estas ha hecho que la lógica de enemistad trascienda al terreno del conflicto político en general, no solo al de los contendientes armados. En el contexto del conflicto armado que se libraba desde la década de 1960, la literatura académica ha logrado identificar cuatro tipos de enemigo: el efectivo, el objetivo, el contingente y el absoluto.

El *enemigo efectivo* es el combatiente ligado a sus estructuras de mando, que son las fuerzas insurgentes (Franco 2009). Es la facción abiertamente declarada en rebelión, aquella que se puede identificar como tal, tiene una estructura de mando y se convierte en blanco legítimo para el accionar armado, aunque con los límites que impone el derecho internacional humanitario.

Los actores en disputa en la guerra civil no son binarios; si bien hay dos bandos principales, estos no están claramente diferenciados. Las fuerzas insurgentes pueden estar dispersas y no corresponder a una sola organización. Así mismo, las estatales o progubernamentales varían, desde las Fuerzas Armadas del Estado hasta los grupos paramilitares legales o ilegales que se alinean en la defensa del gobierno. A esta aparente dispersión se agrega la dimensión local, que lleva a que en el terreno más periférico y comunitario la diversidad de los actores pueda variar de una manera muy extensa. A pesar de esto, es posible identificar los actores principales de la contienda entre los enemigos públicos y los actores periféricos. Los enemigos efectivos en el período del uribismo fueron las guerrillas, especialmente las FARC-EP.

El segundo tipo es el *enemigo objetivo* que se configura como alguien a quien se busca vencer, y eso incluye el uso de la violencia para doblegarlo (Franco 2009). El fin no es su exterminio, sino el vencerlo a través del uso de la violencia. La idea es que los contrincantes de las guerras siempre serían en primer lugar enemigos porque lo que se busca es su derrota y su rendición. Suelen ser los no combatientes, los que se consideran como parte de la contienda, pero que no están directamente involucrados: son los actores políticos y civiles. Hay que decir que no son blancos legítimos, pero son tratados como tales, ya que se los considera una extensión de los combatientes. Aquí caben los partidos de oposición, los movimientos sociales y, en general, quienes tienen conflictos sociales o políticos con las élites políticas en la guerra.

En un contexto de guerra civil, los *enemigos objetivos* tienen esta doble dimensión: son actores con reconocimiento institucional formal, que actúan en la legalidad y, por eso, son adversarios; sin embargo, en el terreno de las acciones de la guerra, los actores armados y el gobierno los tratan como parte del enemigo *efectivo*.

Este tratamiento se evidencia en el uso de las palabras, en la exclusión formal, a través de mecanismos legales de parte del gobierno y en la persecución judicial; lo que implica quitarles su condición de adversarios y tratarlos como parte del enemigo objetivo aduciendo su vinculación con los combatientes, ya sea como “brazo” político o como cómplices. En el terreno menos formal, estos enemigos

objetivos son de los principales focos de tratamiento de la llamada *guerra sucia*, una acción indiscriminada que hacen los actores de la violencia –es decir los ejércitos legales e ilegales– contra civiles, en particular contra líderes sociales, organizaciones comunitarias y movimientos sociales, entre otros.

El *enemigo contingente* es aquel que, sin estar involucrado en el conflicto, se usa para justificar acciones, para implementar políticas (Angarita et al. 2015). Es, si se quiere, un “daño colateral”, o una excusa, ya que al ser externo, solamente se presenta como funcional. Si una guerra es por razones ideológicas, no importa; con el enemigo contingente no es necesario precisar estas diferencias; lo mismo vale si es por razones étnicas o económicas. Sencillamente, es un grupo social que puede ser destruido, sustituido, asesinado o desaparecido aun sin estar inmerso en ninguna conflictividad mayor, pero cuya aniquilación sirve para otros fines, como mostrar resultados militares o políticos, o simplemente porque se le considera un blanco legítimo de exterminio así no esté ni política o militarmente vinculado a la contienda. El caso más emblemático en Colombia es el de las ejecuciones extrajudiciales llamadas “falsos positivos”, jóvenes pobres que no hacían parte de ningún grupo armado y no eran parte de ningún grupo político, solo se sumaban para mostrar positivos en la lucha contrainsurgente de las Fuerzas Armadas colombianas, y que por ello fueron primero desaparecidos, luego asesinados para ser reportados como éxitos en operaciones militares.

El *enemigo absoluto* implica el desconocimiento del otro, su deshumanización y la opción siempre es su exterminio (Schmitt 1998). No se trata de gobernarlo, no se trata de vencerlo; lo que se busca es su exterminio sistemático. Allí prima la noción de que el otro no es humano, que es la forma clásica en que se expresan los genocidios (ONU 1948), los *politicidios* y el llamado exterminio recíproco (Kalyvas 2010). Algunos ejemplos en los que se despliega este tipo de enemistad son el holocausto nazi, el genocidio armenio, el *politicidio* en Indonesia y el genocidio en Rwanda. En todos estos casos estuvo siempre en juego el exterminio del otro; ya sea justificado por razones étnicas, culturales o de género –que es como se tipifican los genocidios– o por razones políticas, como en el caso de Indonesia –y es como se conoce el *politicidio*–. Un principio básico para que opere este mecanismo es la deshumanización del enemigo, quitarle su noción de humano y, por esa vía, configurar la posibilidad de su exterminio al declararlo enemigo de la humanidad. En Colombia, el caso más emblemático es el *politicidio* contra la Unión Patriótica, que implicó el asesinato de los miembros de este partido de izquierda hasta su casi exterminio (*Verdad Abierta* 2014).

Tabla 1. Tipos de enemistad durante el conflicto armado colombiano

Tipo de enemistad	Características	Casos en Colombia
Enemigo efectivo	Es el combatiente, se identifica como tal, se auto reconoce como el enemigo frente al otro bando. Son los ejércitos.	FARC-EP, ELN, guerrillas en general.
Enemigo objetivo	No son combatientes, no pertenecen a las organizaciones insurgentes ilegales y, de hecho, se separan de estas en sus medios y fines. Son reconocidos como parte de la estructura legal, pero el tratamiento hacia ellos es de sospecha y estigmatización. Discursivamente, se les vincula bien como aliados, funcionales, o el brazo político de las organizaciones insurgentes.	Oposición política, ONG de Derechos Humanos y movimientos sociales.
Enemigo contingente	Son pobladores muy pobres en condiciones de alta precariedad, poblaciones estigmatizadas como "pandilleros", traficantes o consumidores de drogas. En general está muy articulado a su origen social, son especialmente jóvenes pobres a los que se les elimina para reportar resultados o mostrar fuerza.	Ejecuciones extrajudiciales, "Falsos positivos", "daños colaterales", "limpieza social".
Enemigo absoluto	Son los que se deshumanizan, no se les considera un contendiente legítimo, ni siquiera como combatientes. Sobre ellos recaen todos los discursos de odio y se justifica su exterminio. En el conflicto armado colombiano los que han usado un discurso de exterminio han sido fundamentalmente los grupos paramilitares.	Partido político Unión Patriótica.

Fuente: Elaboración propia basada en: Angarita et al. 2015; Franco 2009; Gallo et al. 2018.

En el caso del uribismo han primado *los tres primeros tipos de enemigo: el efectivo, el objetivo y el contingente*, en tanto las políticas de la enemistad absoluta han estado en cabeza de los grupos paramilitares.

Para el caso del *enemigo efectivo*, Uribe construye un relato en el que se califica a las insurgencias de dos maneras: por una parte, como aliados del narcotráfico que han perdido sus ideales altruistas de la década de los setenta y cuyo único móvil es el enriquecimiento. Con esto los despoja de su agencia política y los ubica solamente en el terreno del crimen organizado:

La caída del muro de Berlín, el colapso soviético, la transición de Mao Tse Tung a Deng Xiao Ping no fueron fenómenos *anticipables*. Tomaron por sorpresa al pensamiento social de la época. Diría yo que en ese momento empezó la transición de las viejas guerrillas ideológicas que soñaban con la dictadura del proletariado y la socia-

lización de los medios de producción, a las guerrillas mercenarias del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Y me atrevería a proponer la tesis que esos fenómenos anarquizaron la guerrilla, y que su posterior mezcla con el narcotráfico le quitó toda legitimidad (Uribe Vélez 2009).

Un segundo calificativo es el de terroristas. Si bien en Colombia el uso del término no surgió con el uribismo, su generalización fue muy común en ese período: se trataba de identificarse en el contexto internacional de la “guerra contra el terrorismo” emprendida en Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2011:

Hoy más que nunca debemos reiterar que con el terrorismo no se puede jugar. Al terrorismo no se le puede contemplar. A la arrogancia, a la ceguera del terrorismo no se le puede tener consideración. El mundo no debe venir a Colombia a pedirnos consideraciones con el terrorismo. Necesitamos que el mundo democrático venga a Colombia a ayudarnos a derrotar el terrorismo. Necesitamos que así como se está dando en Naciones Unidas una discusión sobre el caso Irak, el mundo tome la decisión de ayudar a Colombia. Necesitamos la tecnología de los países democráticos, sus recursos técnicos, sus recursos financieros, sus sistemas de transporte, para que le ayuden a nuestra fuerza pública y a nuestra Fiscalía a derrotar los terroristas (Uribe Vélez 2003).

Esta doble identificación no es contradictoria: de un lado, parece indicar que hay una cúpula fundamentalista de ideas políticas caducas que busca imponer su voluntad a partir del terror y, de otro, sostiene que lo único que los mantiene es el dinero del narcotráfico y que, al grueso de las guerrillas, en especial a las FARC-EP, no las mueven los ideales sino el afán de riqueza. Allí les da una nueva palabra que usa en varias de sus alocuciones: *narcoterroristas*.

En relación con el *enemigo objetivo*, el relato del uribismo es muy concreto: asume que las organizaciones sociales y políticas de izquierda se han aliado en el pasado con las guerrillas en la tesis de la “combinación de todas formas de lucha”, y esto legitimaría que sean el blanco de grupos al margen de la ley como los paramilitares. Su recurso retórico es que son perseguidos y han sufrido violencia, no por su accionar como movimientos sociales de oposición, sino por sus vínculos con las guerrillas:

Primero fueron las guerrillas marxistas las que practicaron la tesis de la combinación de las formas de lucha. Asesinaban y penetraban el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, la política, el periodismo.

Vinieron los paramilitares e hicieron lo propio. Y asesinaban a líderes sindicales,

acusándolos de ser colaboradores de la guerrilla. Y, a su vez, la guerrilla asesinaba a líderes sindicales acusándolos de ser traidores.

Este problema de la violencia sindical, que hemos hecho todo el esfuerzo para superarlo, se remonta a lo que fue la combinación de las diferentes formas de lucha. Qué daño tan grande se le hizo a Colombia, como a tantas otras naciones.

Posteriormente, hubo el fenómeno de la Unión Patriótica. Pienso que allí confluyeron dos errores: muchos de los integrantes de la Unión Patriótica practicaron la combinación de las formas de lucha. Querían estar en la acción política y también en la guerrilla.

Y todo esto para llamar la atención sobre el peligro de lo que quiere, nuevamente, ensayar el movimiento terrorista en Colombia: el impulso a opciones políticas, mientras ellos mantienen todas las acciones terroristas.

Es importante mirar ese proceso evolutivo que nos señala muchas de las situaciones que hemos tratado de superar en los últimos años (Uribe Vélez 2009).

El segundo mecanismo fue el de señalar que las marchas y movilizaciones sociales estaban infiltradas por las guerrillas. Esto se dio en particular con el movimiento indígena, que en sus ocho años de gobierno fue muy activo:

Es muy importante [...] evitar infiltraciones de grupos violentos, ¿por qué? porque ya se conoce. Están incitando y tratando de hacer de esta marcha, de las comunidades indígenas, algo más grande [...] Yo sí le ruego a la fuerza pública impedirlo y hacer todo el esfuerzo que hay que hacer, para capturar estos sectores guerrilleros que están cumpliendo esa misión terrorista (Uribe Vélez, citado en Pensamiento y acción social 2017).

Con las organizaciones de Derechos Humanos, las acusaciones no eran ya de infiltración, sino de trabajo mancomunado con las guerrillas. En el año 2003, en el marco de la celebración del día de los Derechos Humanos, manifestó que había tres tipos de ONG en ese ámbito: las teóricas, las respetables y, por último, las de escritores y politiqueros al servicio del terrorismo, las dos primeras eran merecedoras del apoyo del Estado, las últimas debían ser desmanteladas:

Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terrorismo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de Derechos Humanos. No tienen vergüenza ni limitaciones. Sacan libros en Europa sobre rumores y calumnias. Ellos saben que su única arma es la calumnia que hipócritamente se esconde detrás de los Derechos Humanos.

Es necesario que estos señores sepan nuestra determinación de derrotar al terrorismo y a sus secuaces, que una de nuestras decisiones políticas es la de aislar al terrorismo y que para hacerlo vamos a capturar a todos aquellos que cometen esos delitos por complicidad o por ocultamiento.

Cuando yo comencé la tarea de combatir el terrorismo como gobernador de mi provincia, [...] aparecieron colectivos y abogados, esos portavoces del terrorismo aparecieron bajo ese nombre y bajo otros. Ellos no atacan a los terroristas sino atacan la voluntad de aquel Gobierno departamental de derrotarlo (Uribe Vélez, citado en OMCT- SOS-Torture Network 2003).

El relato de que los opositores y las ONG estaban infiltrados, eran aliados o funcionales a las guerrillas estigmatizaba estas organizaciones y les restaba una agenda propia. Se les ponía como instrumento de otros, se deslegitimaban las razones de sus protestas, movilizaciones o, en el caso de las organizaciones de Derechos Humanos, se invalidaba la veracidad de sus informes y denuncias. El mecanismo del estigma les posibilitaba a los organismos de seguridad justificar detenciones, intervenir comunicaciones y también abrir el camino para la criminalización de su accionar; pero, sobre todo, anulaba su voz en el espacio público y en el debate colectivo al ser descalificadas porque, en teoría, hablaban al servicio de otros.

El último caso para analizar es el del *enemigo contingente*, la ampliación más compleja de la enemistad, una categoría en la que cualquiera puede devenir; sólo importa que esté en el lugar y el momento “equivocado”. Esto se evidenció en el uribismo en el caso de los “falsos positivos”.

Con el objetivo de mostrar con resultados que se estaba ganando la guerra, el Ministerio de Defensa promovió la eliminación física de combatientes de los grupos insurgentes, para lo cual se crearon incentivos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas para que presentasen más números de muertes de los alzados en armas. El Ministerio emprendió un proceso de recompensas a través de los lineamientos de la Directriz 029 de 2005, cuyo asunto especificaba que era una:

Política ministerial que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y pago de información que sirva de fundamento para la continuación de las labores de inteligencia y posterior planeamiento de operaciones (Ministerio de Defensa 2005).

Esto trajo consigo el asesinato de 6.402 jóvenes populares en varias zonas del país a manos de las unidades del ejército. Se les desaparecía con falsas promesas de trabajo y luego se les asesinaba, presentándolos como dados de baja y pertenecientes a las guerrillas. Esa práctica se convirtió en un patrón de comportamiento de varias unidades que involucraban tanto a soldados de rango bajo como a altos oficiales. A esta política se le conoció como la de los “falsos positivos” y es

considerada un crimen de lesa humanidad que en la actualidad está siendo procesado por la Justicia Especial para la Paz JEP (JEP 2021).

En una de las audiencias públicas de la JEP para tratar este tema en 2022, los militares involucrados rindieron testimonios donde manifestaba que ellos sabían que estaban asesinando a jóvenes que no tenían nada que ver con la guerra y que era solo para mostrar resultados:

“Y hoy el mundo quiero que sepa que eran campesinos”, dijo Néstor Guillermo Gutiérrez, quien fue cabo en el ejército, “que yo, como miembro de la fuerza pública, asesiné cobardemente, le arrebaté la ilusión a sus hijos, le desgarré el corazón a sus madres por una presión, por unos resultados, por unos falsos resultados, por tener contento a un Gobierno. No es justo”.

Los magistrados del tribunal consideran que sus víctimas son solo una pequeña fracción de las personas que fueron ejecutadas entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Álvaro Uribe, como parte de la estrategia de los falsos positivos (Turkewitz y Villamil 2022).

Esto demuestra hasta qué nivel puede llegar la exacerbación de las políticas de muerte. En las declaraciones que dieron los militares a la justicia colombiana, manifiestan que sabían que los jóvenes asesinados no eran parte de ninguna organización criminal, de hecho, que los engañaban, les ofrecían puestos de trabajo en el campo y los jóvenes se subían a los camiones pensando que esta era su oportunidad de trabajar. Una vez arriba de los camiones, los llevaban a zonas de conflicto armado y los asesinaban. El testimonio de un exmilitar narra cómo el máximo comandante del Ejército los incitaba a asesinar para mostrar resultados:

Antes de llegar a la Brigada Móvil 15, en 2006, Rincón recuerda haber sido abordado por el que luego sería el comandante del Ejército, general Mario Montoya, ya en retiro, y quien también comparece ante la JEP, creada a partir del Acuerdo de Paz del 2016, que condujo al desarme de las FARC.

‘¿Cómo va a aportar a la guerra?’, me dijo. Y yo le pregunté: ‘¿Cómo, mi general?’. Entonces, él me dice: ‘¿Cuántos muertos va a poner?’. Y yo le respondí: ‘¿Pero muertos de dónde?, yo no tengo ninguna funcionalidad operacional’. Entonces él, no sé si de forma jocosa pero sí directa, me dijo: ‘*¿Y por qué no saca unos tipos allá de la morgue, los viste con uniforme y los reporta como resultados?*’.

Cuando se reencontró con Montoya, Rincón ya había sido asignado a la brigada móvil. “Ahora sí va a saber qué es la guerra, ahora sí le va a aportar a la guerra”, asegura que le expresó Montoya, jefe del Ejército entre 2006 y 2008. Y aunque nunca recibió de él una orden directa de matar, *el coronel reveló la existencia de un top 10 de unidades militares en el que los éxitos se medían exclusivamente por el número*

de muertos. Si alguien no “estaba dando resultados, tenía que irse de la institución” (Legrand 2020).

La reacción del presidente Uribe cuando Organizaciones No Gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, medios de comunicación y políticos de oposición denunciaron lo que estaba pasando fue de negacionismo:

Al intervenir en la asamblea de ANIF, el mandatario de los colombianos dijo que “el Fiscal general de la nación afirmó que los jóvenes desaparecidos en Soacha fueron dados de baja en combate”. Aseveración que fue tomada por los críticos como una absolución a los militares involucrados en la investigación.

“No fueron a coger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde”, dijo el mandatario de los colombianos (*El Espectador* 2008, énfasis propio).

El capítulo de los “falsos positivos” demostró los alcances de las políticas de construir un ambiente de guerra como incentivo general de la sociedad. La banalidad del mal, como diría Hannah Arendt (2018), se expresó en todas sus dimensiones. Algo había quedado claro: estas ejecuciones extrajudiciales no se trataban de casos aislados y hacían parte de una política que se instauró en las Fuerzas Armadas, según la cual cualquier medio era válido para ganar la guerra o al menos para hacer parecer que se estaba ganando.

Conclusiones

El uribismo usó el discurso de la seguridad como un mecanismo para apalancar un proyecto de derechas. Así, logró el apoyo de sectores políticos y sociales que –si bien ideológicamente no tenían una mirada conservadora del mundo– se articularon con él en defensa de la seguridad.

La ruptura del proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana le permitió presentarse a un sector de las élites como una alternativa ante el país, a través de un relato y un proyecto político centrados en un mensaje simple pero contundente: para alcanzar la paz hay que ganar la guerra. La estrategia del uribismo fue construir una negación del conflicto armado para justificar la concentración de todos sus esfuerzos en la única salida posible: el fortalecimiento militar frente a un asunto que consideraba como exclusivamente criminal. Esta narrativa logró que la mayoría de la sociedad asumiera el costo económico y político de cambiar una estrategia previa respecto a las insurgencias –la de combinar la vía militar con las negociaciones políticas– para concentrar todos los esfuer-

zos en la victoria militar. El aumento del presupuesto de defensa y de personal militar, junto al consenso político consolidado en esos ocho años, favorecieron importantes resultados en indicadores de éxito militar.

En la cruzada del uribismo se cimentó un discurso muy movilizador: o se estaba con este proyecto para ganar la guerra o se era cómplice de los enemigos. Era un relato sin matices, de modo que los críticos de las violaciones de los derechos humanos, los sectores liberales de la prensa o los organismos multilaterales de derechos humanos se convertían también en “cómplices” o “idiotas útiles” de los terroristas.

Se estableció una disyuntiva entre *nosotros* y los *otros*, central en toda lógica de enemistad. Una de sus consecuencias fue asegurar la movilización de un sector muy amplio de la población con el objetivo de ganar la guerra; aunque al final ese resultado no se alcanzó. Si bien mejoraron algunos indicadores de seguridad, empeoró la situación de violación de los derechos humanos y se presentaron casos de crímenes de lesa humanidad y de exacerbación de actos que se contraponían con la esencia de un Estado democrático.

La elaboración de ese relato puede ser muy efectiva en la popularidad de un líder, pero entre sus costos conlleva a la fractura de la nación como comunidad política, lo que imposibilita construir un proyecto de país. Por esta vía, se creó un marco comprensivo según el cual las diferencias de modelo de sociedad, de modelo económico o de modelo de distribución del ingreso eran funcionales a la “amenaza terrorista”, y se consolidó un discurso según el cual, si se deseaba seguridad –y, por esa vía, tranquilidad– se requería seguir el modelo del uribismo, que políticamente se caracterizaba como de derecha.

La idea era que se debía hacer lo necesario para ganar la guerra. Eso generó incentivos perversos entre las fuerzas militares: la victoria no solo precisaba de un gran presupuesto, sino de que se pudieran destacar logros; mostrar resultados indicando que sí era posible y que valían la pena los sacrificios que la sociedad colombiana estaba haciendo. Aquí adquirieron visibilidad las llamadas “bajas en combate”, unas acciones que se estimularon a través de recompensas económicas a las unidades militares que registraran más bajas del enemigo. Se enviaba el mensaje de que había que “hacer lo que fuese necesario” para derrotar al enemigo. Ante esto, las fuerzas militares emprendieron una conducta aberrante que hoy es conocida como “falsos positivos”. Día a día, semana a semana, en los noticieros y en las ruedas de prensa de las fuerzas militares y de los sectores políticos se presentaban estos hechos como un indicador de que se estaba derrotando a las guerrillas, sin importar que estas realmente se habían replegado en el interior de

la selva y que, si bien habían sufrido una gran merma de capacidad, estaban lejos de la derrota. Los números llegaron a 6.402 casos documentados de asesinatos de civiles inocentes.

En la sociedad, así mismo, el identificar como “cómplice” o “idiota útil” del terrorismo a opositores y activistas tuvo repercusiones en los movimientos sociales, en los sectores políticos de oposición y, en general, en los sectores no uribistas, a los que se les empezó a catalogar como aliados o funcionales a esta causa insurgente, no importaba que nada tuvieran que ver con las guerrillas.

Otro elemento central en el tipo de dominación del uribismo fue su estilo de liderazgo, encarnado en el arriero paisa, madrugador, trabajador y asceta, que conectó muy bien con los valores e ideales del poblador más popular, tanto del campo como de las ciudades. Esto lo articuló con un plan de transferencias monetarias directas y con un gran despliegue presencial en las regiones a través de los consejos comunitarios, con lo cual alcanzó una gran cercanía con los sectores populares.

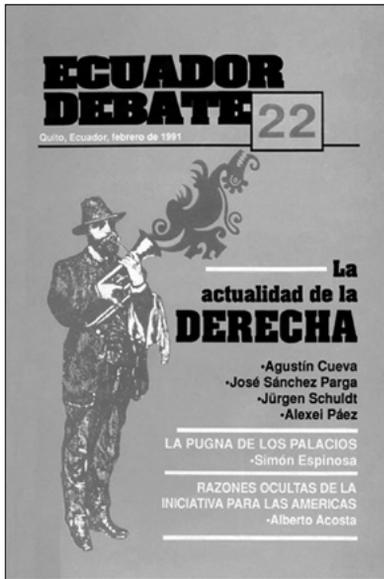
Al final del segundo mandato, los logros de la política de seguridad se estancaron, los índices no bajaron a la misma velocidad que al comienzo y las guerrillas se reacomodaron, cambiaron sus tácticas, aprendieron del accionar de las Fuerzas Armadas y se refugiaron en sus zonas de retaguardia. La victoria entonces comenzó a alejarse. Mientras tanto, los grupos paramilitares que pasaron por un proceso de negociación, no dejaron por completo sus armas; se reacomodaron y pasaron de una iniciativa nacional a varias regionales. La política de seguridad democrática se estancó, los grupos se reajustaron y la posibilidad de la paz negociada no estaba aún en el horizonte.

Todos estos factores generaron una paradoja: los logros militares y el discurso guerrillerista se convirtieron en el principal capital político del uribismo, su lugar en el campo de la política colombiana. La política de seguridad democrática que en principio estaba destinada a vencer las insurgencias armadas, y restablecer la seguridad, se convirtió en la principal fuente de legitimidad del gobierno. Ante la imposibilidad real de lograr el objetivo de victoria militar, se debía mantener un estado de guerra con la sociedad en permanente movilización. La guerra trascendió así la dinámica propia de la confrontación militar y se instaló en todos los poros de la vida nacional, se convirtió no en el medio para lograr objetivos, sino en el fin: ganar la guerra era imposible, por lo que la única fuente de legitimidad terminó siendo mantener viva la amenaza. Al fin y al cabo, la guerra se volvió funcional al *statu quo* de las élites en el poder.

Bibliografía

- Angarita, Pablo, Héctor Gallo, Blanca Jiménez, Hernando León, et al. 2015. *La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010*. Medellín: Sílabo Editores, Universidad de Antioquia e Instituto de Estudios Regionales.
- Arendt, Hannah. 2018. *Sobre la Violencia*. Segunda edición en Español. Traducido por Carmen Criado. Madrid: Alianza Editorial.
- Atehortúa Cruz, Adolfo. 2007. *Las banderas del presidente Uribe. Estado comunitario, seguridad democrática y revolución educativa*. Medellín: La Carreta Editores.
- Camacho, Nubia, Laura Pareja, & Yesid Bernal. 2010. *Credibilidad en el diálogo público. Consejos comunales de gobierno, el sello del presidente Álvaro Uribe Vélez*. Bogotá: Presidencia de la República.
- Cardona Zuleta, Luz. 2016. *La culebra sigue viva: miedo y política. El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia.
- Duzán, María Jimena. 2004. *Así gobierna Uribe*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, S.A.
- Eco, Umberto. 2013. *Construir al enemigo*. Barcelona: Random House Mondadori, S.A.
- El Espectador. 2008. "Uribe dice que desaparecidos de Soacha murieron en combates". *El Espectador*. 7 de Octubre. <https://t.ly/off8U>.
- El País. 2010. "Presidente Álvaro Uribe termina su gestión con 80% de aprobación". *El País. Cali*. 30 de Julio. <https://t.ly/63R2g>.
- Franco, Vilma Liliana. 2008. *Guerras civiles. Introducción al problema de su justificación*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- _____. 2009. *Orden contrainsurgente y dominación*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores e Instituto Popular de Capacitación.
- Gallo, Héctor, Blanca Jiménez, Daniela Londoño, et al. 2018. *Discursos de enemistad. Pronunciamientos sobre los medios de comunicación las ONG en el conflicto armado colombiano, 1998-2010*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- JEP. 2021. "Caso 03. Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado". *Jurisdicción Especial para la Paz*. <https://n9.cl/s3l8fg>.
- Kalyvas, Stathis. 2010. *La lógica de la violencia en la guerra civil*. España: Akal.
- Leal Buitrago, Francisco. 2010. "La Política de Seguridad Democrática." *Razón Pública*. 18 de Enero. <https://t.ly/oCuj0>.
- Legrand, Diego. 2020. "Falsos positivos: crudos testimonios ante la JEP". *El Tiempo*. 17 de Mayo. <https://n9.cl/luh7j>.
- López de la Roche, Fabio. 2014. *Las ficciones del poder: patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010)*. Bogotá: IEPRI; Debate.
- López Hernández, Claudia (Coord.). 2010. *Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá: Debate: Random House Mon-

- dadori; & Corporación Nuevo Arco Iris.
- Ministerio de Defensa. 2005. “Directiva 029 de 2005”. *Justicia por Colombia*. 17 de Noviembre. <https://rb.gy/c2ae6x>.
- Mouffe, Chantal. 2003. *La paradoja democrática*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- _____. 2011. *En torno a lo político*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- OMCT- SOS-Torture Network. 2003. *Colombia-comunicado: El presidente asimila a las ONG con los terroristas*. 12 de Septiembre. <https://n9.cl/7d5kxa>.
- ONU. 1948. *Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio*. 9 de Diciembre. <https://n9.cl/qn0xk>.
- Oquendo, Catalina, Camila Osorio, Santiago Torrado, y Sally Palomino. 2020. “Uribe. La sombra política de Colombia”. *El País*. <https://n9.cl/hb3gb>.
- Palacios, Marco. 2012. *Violencia pública en Colombia: 1958-2010*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Pensamiento y Acción Social. 2017. *Las bases discursivas de la estigmatización en Colombia. Un modelo por desmontar*. 01 de noviembre. <https://n9.cl/2i2b7>.
- Schmitt, Carl. 1998. *El concepto de lo político*. Traducido por R. Agapito. Madrid: Alianza.
- Turkewitz, Julie, y Sofía Villamil. 2022. “Colombia confronta el legado del conflicto armado en una audiencia sobre el caso de los falsos positivos”. *New York Times*. 22 de abril. <https://rb.gy/r6kl87>.
- Uribe de Hincapié, María Teresa, y Liliana María López Lopera. 2010. *Las palabras de la guerra. Un estudio sobre las memorias de las guerras civiles en Colombia*. Medellín: La Carreta Editores; Universidad de Antioquia.
- Uribe Vélez, Álvaro. 2002. *Discurso de Álvaro Uribe en el primer Consejo Comunal de 10 de Agosto*. Último acceso: 1 de octubre. <https://n9.cl/u2sb9v>.
- _____. 2003. *Discurso de Álvaro Uribe tras atentado en el club El Nogal*. 08 de febrero. <https://n9.cl/96phb>.
- _____. 2006a. *Discurso de Álvaro Uribe “¿Por la dignidad de la patria, por el futuro de las nuevas generaciones, enfrentemos el terrorismo!”* 20 de octubre. <https://n9.cl/ta7gk>.
- _____. 2006b. *Discurso de Álvaro Uribe en la posesión presidencial periodo 2006-2010*. 7 de Agosto. <https://n9.cl/4mxxh>.
- _____. 2009. *Discurso de Álvaro Uribe en la “Conferencia Antiterrorismo Contemporáneo: La Experiencia Colombiana”*. 31 de marzo. <https://n9.cl/cjdiw>.
- _____. 2010. *Discurso de Álvaro Uribe Vélez en el “Gran Acto de Agradecimiento de Antioquia”*. 16 de julio. <https://t.ly/PQxhb>.
- _____. 2012. *No hay causa perdida. Memorias*. New York: A Celebra Book, Penguin Group.
- Verdad Abierta. 2014. *Los crímenes contra la UP no fueron aislados*. 26 de octubre. <https://rb.gy/wrh87h>.
- Weber, Max. 2014. *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.



Ecuador Debate N° 22 La actualidad de la derecha

Febrero 1991, pp. 138

Si pensamos que la resaca de la derechización ha sobrecogido a casi todos los países del mundo en el transcurso de la última década, es posible que nos encontremos con un fenómeno nuevo, el cual se sustrae a los clásicos parámetros de la polaridad izquierda y derecha, que nos obliga a repensar el nuevo orden planetario de acuerdo a otros paradigmas. La derecha se ha hecho actualidad, y ella misma cree que le ha llegado su hora histórica, al "fin la historia", para convertirse en la gestora de las sociedades del futuro.

La derecha en México: entre el Yunque y Vox

Hugo Sánchez Gudiño*

Resumen

Existe una enorme complejidad metodológica y teórica en la definición de la derecha en México. Si bien ha sido coyuntural la aparición de la derecha mexicana como fuerza política organizada, el potencial que ha demostrado manifiesta la presencia de un importante sustrato conservador en la sociedad. La derecha cristaliza —y en ocasiones distorsiona hasta la desnaturalización— el conservadurismo del cuadro de actitudes dominante. Los grupos pertenecientes a esta tendencia tienen algunos rasgos comunes: especialmente su oposición al cambio, su desprecio a los sectores vulnerables, su racismo y discriminación contra los pobres y marginados. Sin embargo, grupos que provienen históricamente de trayectorias distintas y diversas: los de derecha y ultraderecha están perfectamente delimitados, pero otros bloques de opositores y críticos del Gobierno, vienen del liberalismo o de sectores moderados. En este contexto, también los corporativos empresariales tienen sus propias particularidades.

Ciertamente, el movimiento de derecha ha logrado confundir a viejas y nuevas generaciones. Las suyas son palabras supuestamente críticas, sin relación alguna con la historia ni con la circunstancia nacional que vivimos y padecemos.
Gastón García Cantú, historiador mexicano (1987).

Introducción

Ernest Nolte (1965) afirma que el origen de la derecha es siempre el desafío de la izquierda y con ello nos ofrece un punto de partida válido para identificar sus valores esenciales: el individualismo, la defensa de la propiedad privada y de la libre empresa —la base del individualismo posesivo—, el mantenimiento de estructuras verticales de autoridad y el nacionalismo. De éstos los tres primeros son indiscutibles, mientras que los dos últimos no son de ninguna manera una exclusiva de la derecha. El socialismo real demostró que el monolitismo del poder y la verticalidad de las relaciones de autoridad pueden sustentarse en un

* Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de FES-Aragón.

aparato ideológico de izquierda. En 1955 Simone de Beauvoir festejaba la muerte de la derecha con estas palabras: “La verdad es una y el error múltiple. No es un azar el que la derecha profese el pluralismo”.

Si bien ha sido coyuntural la aparición de la derecha mexicana como fuerza política organizada, el potencial que ha demostrado manifiesta la presencia de un importante sustrato conservador en la sociedad. La derecha cristaliza –y en ocasiones distorsiona hasta la desnaturalización– el conservadurismo del cuadro de actitudes dominante. Entre la derecha y el conservadurismo media la misma distancia que entre el activismo y la pasividad (García Cantú 1987).

La derecha en México es una tradición clandestina. El repudio oficial de que ha sido objeto enmascara la presencia en la sociedad del conservadurismo y el uso de los valores tradicionales como mecanismos de control social. Peor aún, en la medida en que el discurso del poder la ha estigmatizado como el enemigo del pueblo, marcada como está por el desprestigio moral que en un país como el nuestro suponen posturas antisociales y antipopulares, nos encontramos con una derecha que no se atreve a decir su nombre y que sobrevive, rozagante, en la ilegitimidad discursiva.

Pero ¿qué significa, en México, ser de derecha? Hay un paradigma universalmente aceptado de que esta corriente ideológica ha permanecido idéntica a sí misma a través de la historia: contrarrevolucionaria y aristocratizante, la reacción ha sido consistentemente denunciada como un fenómeno unidimensional, como una línea continua en la que se inscriben el partido conservador de Miramón, Mejía y el Partido Acción Nacional, de empresarios. En su libro sobre *El Pensamiento de la reacción mexicana*, García Cantú (1980) llega incluso a afirmar que las tesis de la reacción son siempre las mismas y que lo único que cambia son los procedimientos. Desde luego, en el país existe una tradición conservadora, pero eso nos remite más a permanencias y a continuidades culturales que a una ideología política –ya no digamos a una organización partidista–. Las derivaciones implícitas en este primer aspecto del paradigma oficial van desde el antinacionalismo que recurre a un príncipe extranjero hasta el clericalismo ultramontano –igualmente antipatriótico– y la subversión antirrepublicana (Campbell 1976).

Un segundo aspecto del paradigma de la derecha mexicana adquirió mucha fuerza después de la terrible experiencia chilena en 1973, sobre todo, pero ya desde el golpe militar de 1964 en Brasil y ante la dureza diazordacista: al fantasma de la derecha se le atribuía una creciente empatía con este tipo de soluciones.

Después de 1910 el conservadurismo mexicano siguió una trayectoria cuyos perfiles han ido definiéndose al ritmo de un proceso más o menos acelerado de

pluralización social que, sin embargo, no se ha traducido en pluralismo político. La Iglesia fue el primer portavoz articulado de la oposición individualista a la injerencia del Estado en la vida social. Ante los nuevos ordenamientos legales que en materia educativa y religiosa estableció la Constitución de 1917, la Iglesia y la militancia católica volvieron los ojos a la tradición del liberalismo mexicano, hasta entonces el adversario político y cultural declarado, para señalar las inconsistencias de un proyecto que se quería heredero de la Constitución de 1857 y reivindicador de las libertades del individuo. Las nuevas atribuciones de intervención en la esfera social que adquirió entonces el Estado empujaron a los defensores de la tradición a acogerse a un acervo que les había repugnado, y la libertad de enseñanza que durante el siglo XIX había sido la cabeza de turco de la oposición de la Iglesia al liberalismo se convirtió después de 1917 en la bandera de su lucha contra el Estado (García Cantú 1980).

En el México de la Sociedad Red, en pleno siglo XXI, la derecha clásica ha cambiado: si bien los conservadores han tenido como soporte general la indiferencia hacia la ciudadanía, los defensores de la llamada nueva derecha hablan de ésta y de democracia (King 1987). Norberto Bobbio lo ha planteado en los siguientes términos: hay diferencias entre la centro derecha y la extrema derecha, ya que para el teórico italiano la derecha tiene posiciones con una fuerte afirmación de doctrinas económicas que fundamentan, preservan y desarrollan las desigualdades. Al referirse a la ultra derecha, también llamada extrema derecha la caracteriza como anti-igualitaria y anti-libertaria, que hace de las diversas formas de autoritarismo la esencia de su concepción de poder, y que sus mejores expresiones están en el nazismo, en el franquismo, en el fascismo y en el pinochetismo (Bobbio 1998).

De acuerdo con M. Winock, la nueva derecha internacional tiene los siguientes rasgos (citado en Barranco 2022):

1. El odio al presente, considerado un periodo de decadencia.
2. Nostalgia por una época dorada en el pasado.
3. El elogio de la inmovilidad, consecuencia del rechazo al cambio.
4. El anti-individualismo, consecuencia de las libertades individuales y del sufragio universal.
5. La apología de las sociedades de élites; consideran como decadencia la ausencia de élites.
6. Nostalgia por lo sagrado, ya sea religioso o moral.
7. El miedo a la mezcla genética y al colapso demográfico: supremacismo.

8. Censura de la moral, en particular a la libertad sexual y a la homosexualidad.
9. Anti-intelectualismo, intelectuales que no tienen contacto con el mundo real.

Finalmente, para Amnistía Internacional el concepto “nueva o extrema derecha” es muy ambiguo, pues bajo ese perfil suele encuadrarse a un gran número de movimientos, corrientes y partidos que tienen relativamente poco en común y que suelen ser, además, antinómicos, adversarios, incluso enemigos. Este concepto se utiliza, de hecho, para dos tipos de movimientos: primero, los calificados como “reaccionarios”, según la definición del término que hace la sociología de izquierda: presuntos partidarios de un retorno a un supuesto antiguo régimen; segundo, un conjunto de grupos identitarios, verdaderamente extremistas y potencialmente violentos (Amnistía Internacional 2024).

Planteamos lo anterior porque en este mapa político-ideológico de la derecha mexicana, en sus distintas vertientes, se puede ubicar dos acontecimientos relevantes que pretenden posicionarla como cónclave y punta de lanza en nuestro país –que consideran clave en el hemisferio– de la ultraderecha internacional en contra de los distintos movimientos sociales progresistas de todo el continente: 1) Realización de la Cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Santa Fe, México, en noviembre de 2022; y 2) ¿Qué miembros del Partido Acción Nacional (PAN) impulsan en este país posturas políticas de Vox?, el partido de extrema derecha español que en América Latina promueve estrategias para deslegitimar elecciones donde triunfen candidatos de izquierda o progresistas. Vox creció gracias a la acción de dos organizaciones ciudadanas, CitizenGo y Hazte Oír –aliada al Yunque mexicano–, en más de cincuenta países como parte de un operativo conspirativo internacional que destapó WikiLeaks en 2021 (Bayo 2021).

CPAC y su agenda “contra la expansión del socialismo”

La reunión ultraderechista más grande del mundo, la CPAC, tuvo lugar en noviembre de 2022 en México. Un hotel de lujo en Santa Fe, fue testigo fiel de la asamblea de militantes de esta organización –como Juan Iván Peña Neder, exfuncionario calderonista que se hizo famoso por su imagen haciendo el saludo nazi; el actor Eduardo Verástegui, amigo y admirador de Trump; y el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro– que desean impulsar una agenda contra lo que consideran una “expansión del socialismo” en América Latina. La CPAC avanza en la articulación de los movimientos conservadores y su apuesta es a largo plazo (*Forbes México* 2022).

En agosto de 2022, Eduardo Verástegui, actor mexicano, activista conservador y aliado del expresidente Donald Trump, participó en Texas en la CPAC, anunciando que esta convocaba a sus líderes a reunirse en nuestro país para oponerse a quienes quieren implantar el socialismo en la región. “Como amantes de la libertad, todos debemos estar preocupados por la expansión del socialismo en América Latina”, dijo en su discurso en referencia a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Colombia y más recientemente Brasil. “Nosotros sabemos que el socialismo está trabajando muy duro para conquistar México y Estados Unidos, pero amigos míos... ¡No dejaremos que eso pase jamás!” (*Milenio Digital* 2023).

La ultraderecha avanza en el mundo y en este país su crecimiento fue expuesto el pasado 18 y 19 de noviembre del año citado. Verástegui organizó y encabezó la CPAC, cuya agenda históricamente ha servido de trampolín para los candidatos republicanos en Estados Unidos, con el propósito de generar un partido político conservador en México y fortalecer la red transnacional de la ultraderecha. “Estoy usando esto para hacer de este México un mejor país, un país de primer mundo, acabar con la pobreza y llevarlos a una clase media y que esa clase media que se convierta en un trampolín para que todo mundo brinque hacia donde quiera”, apunta el actor, para más adelante agregar: “así como Lula fundó el Foro de Sao Paulo con una agenda radical muy fuerte”, CPAC se reúne en México para marcar una ruta; es el inicio de un movimiento en “defensa de la vida, la familia, las libertades fundamentales que hoy están en juego” (San Martín 2022).

Por otra parte, se anunció que tienen planes de crear un partido político de “derecha verdadera en México”, pues, señalaron que Acción Nacional no representa la agenda de un verdadero partido conservador. El PAN es vergonzante de una gran tendencia en la cultura política en el mundo. Verástegui calificó a Acción Nacional como “derechita cobarde” y “acomplejada” para combatir “el aborto, el matrimonio homosexual y el comunismo”. Trató de provocar a los blanquiazules al ostentar que hoy en el mundo ser de ultraderecha es un buen negocio político. Ahí están Fratelli d’Italia, de Giorgia Meloni; el Fidesz-Unión Cívica Húngara, de Viktor Orbán; Santiago Abascal con Vox, en España; el Frente Nacional, de Marine Le Pen, en Francia; el Partido Social Liberal de Jair Bolsonaro, en Brasil, y por supuesto Donald Trump en Estados Unidos.

Verástegui fue ampliamente reconocido en el foro por el expresidente Trump y proclamado próximo presidente de México por el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro. Excitante, actor y modelo, es un apóstol del “bien común”, encarna los valores ProVida y es firme su militancia contra la llamada “ideología de género”. Presume ser un hombre de valores cristianos y ascéticos, dice llevar una

castidad radical al no haber tenido relaciones sexuales en los últimos diecisiete años. Junto con otros actores, como Toño Berumen, representan una nueva generación de la ultraderecha en el país. Dejan atrás los amargos rostros de los Serrano Limón, los Abascal Carranza, Guillermo Velasco Arzac y Bernardo Ardaín. Se debe puntualizar que su base social y operativa para la formación de un nuevo partido de ultraderecha se encuentra en El Yunque, una organización semisecreta y complotista que articula y suma decenas de organizaciones de la sociedad civil (unas clandestinas y otras con registro legal), como Yo Influyo, los Tecos y los Legionarios de Cristo. Como Vox en España, pretende arrebatar importantes sectores ultraconservadores que actualmente se mueven al interior del PAN (Barranco 2022).

Todo indica que la ultraderecha internacional deposita en Verástegui la difícil tarea de organizar a las derechas mexicanas y articular el objetivo de crear un nuevo partido en 2025, como marca la ley, con un objetivo concreto: la toma del poder.

Vox y la Carta de Madrid

Senadores del PAN se reunieron en México en septiembre de 2021 con Santiago Abascal, dirigente del Vox, partido español de ultraderecha, para firmar la ‘Carta de Madrid: En defensa de la libertad y la democracia de la Iberosfera’.

Este documento tiene como objetivo que los diferentes líderes políticos y sociales firmantes de la carta trabajen conjuntamente en acciones para que los países, incluido México, sean naciones “libres y soberanas”. Los motivos que orillan a la firma, indicaron, se deben a que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”, según indica el oficio (García 2021).

La carta sostiene que “el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y desarrollo de las naciones”. En este sentido, el propósito es instaurar un “Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”. Los integrantes de Vox y el PAN coinciden en que el futuro de los países debe estar “basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia” (*El Financiero* 2021).

La Carta de Madrid es impulsada por la Fundación Disenso, comprometida “con la promoción de todos estos valores en la ‘Iberosfera’, una comunidad de más de setecientos millones de personas de la que España forma parte y cuyos integrantes comparten una historia y una cultura común”.

Esta carta ha sido firmada históricamente por líderes políticos y mundiales como Diego Arria, exgobernador de Caracas y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU; Francisco Álvarez De Soto, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Matt Schlapp, presidente de la American Conservative Union (ACU) de Estados Unidos; Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano de EU y Roger Noriega, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) con el presidente George W. Bush.

La visita de Abascal a México se dio a partir de una invitación hecha por Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado. Entre los panistas que apoyaron la Carta estuvieron Fernando Rodríguez Doval (secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del partido), Pablo Adame (exdiputado federal), Alejandra Reynoso (senadora), además de Mario Romo, director nacional de Red Familia (*Infobae* 2021).

La reunión ocasionó una fisura interna en el partido Acción Nacional. El senador Gustavo Madero y el exsenador Roberto Gil Zuarth manifestaron estar en contra de los principios de Vox y aseguraron que no coinciden con los del PAN. Las críticas llevaron a que Julen Rementería ofreciera disculpas a integrantes de su partido. “Lo sucedido el jueves, por las condiciones en las que se dio, fue un error. Y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios del PAN, mucho menos se trató de una alianza”, dijo en conferencia el coordinador panista en el Senado.

Una constelación de personajes e intereses anticomunistas gravitan en este amplio bloque de derecha que Vox impulsa desde México para combatir a gobiernos de izquierda y progresistas considerados por el organismo como autoritarios y antidemocráticos: De Keiko Fujimori del Perú a José Antonio Kast, líder del Partido Republicano chileno, han sido reclutados en esta cruzada, a quienes se suman populistas de derechas y nostálgicos de las dictaduras militares (González et al. 2021).

El “Tío Richie” cuestiona a los “goviernícolas” de izquierda

Tradicionalmente, buena parte de los viejos historiadores mexicanos sobre el pensamiento conservador y la derecha, especialmente García Cantú, establecieron una tipología que se ha transformado con el paso de los años. Ejemplo de ello es el exitoso empresario y uno de los hombres más ricos de México, Ricardo Salinas Pliego –el “Tío Richie”–, que se ha convertido en el prototipo del activista

emprendedor de la nueva derecha mexicana que rompe con el paradigma: fresco, hiperactivo, bien informado, polemista y sobre todo youtuber siempre opinando en redes sociales, especialmente en Tik Tok y X.

Salinas Pliego, el millonario dueño de TV y Banco Azteca (cuyo abuelo fue fundador de algunos de los grupos clandestinos de la ultraderecha mexicana), así como exitoso influencer en redes sociales donde es conocido como “el Tío Richie”, ha tenido intensos enfrentamientos con el presidente López Obrador al cuestionar severamente a su gobierno. Pese a que se aliaron, se protegieron y se apoyaron recíprocamente hasta que por fin López Obrador ganó la presidencia, hoy esa relación se ha roto y el Tío Richie desde su condición empresarial se ha convertido en un vocero de un sector de la derecha mexicana.

Es en 2023 –a un año de que concluya su gestión Andrés Manuel López Obrador (AMLO)– cuando “el Tío Richie” se radicaliza llamando a los funcionarios del gobierno como “goviernícolas, piojosos, pendejos [...]”. Pero con todo y eso, cuando quisieron negociar desde el gobierno con él, respondió repitiendo el discurso del presidente: “El pueblo manda... y el pueblo dice que no borre nada”. Y para que quedara bien claro quien tiene el poder económico retador, les dijo: “[...] los ignorantes, serviles, represores vestidos con chaleco rosa” (Montaño 2024).

El último enfrentamiento se dio cuando López Obrador aseguró que la televisora perteneciente al empresario mantiene una campaña “en contra de su gobierno” por los adeudos fiscales que persiguen al “Tío Richie”, ahora en el marco de la reconstrucción de Acapulco, después del paso del huracán Otis. Pero Salinas no se quedó callado y respondió de inmediato señalando que el “país se cae en pedazos” y que el gobierno federal debería ponerse a trabajar pues ya se vio que “echar culpas no resuelve nada”. Además de asegurar que su conglomerado ya se encuentra “trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados con despensas y servicios que son necesarios”.

Cuando se dio la polémica sobre los libros de texto, Salinas Pliego centró su crítica contra el gobierno federal armando en sus noticieros televisivos y plataformas noticiosas una campaña en contra de “los libros comunistas”. Ante dichas críticas, el presidente aseguró que su gobierno no veía “como enemigo” a Ricardo Salinas Pliego, aunque reconocía que tenía con él diferencias en lo político e ideológico, señalando que esto “es normal en una democracia, donde no puede haber pensamientos únicos”. Más adelante agregaba que la supuesta campaña de Salinas Pliego de desprestigio en contra de su gobierno se debía a que tenía una querrela por no pagar impuestos y que estaba enojado por ello. Salinas dijo que eso no era cierto: “Es falso, yo no estoy enojado, yo estoy en paz y trabajando”.

Tal vez se refería a múltiples reportajes sobre Acapulco que enfurecieron al presidente Obrador, transmitidos en todos los noticieros y plataformas de TV Azteca, como el siguiente: una nota en video donde aparecen varias señoras humildes en Acapulco ante los rayos del sol esperando una botellita de agua. La cámara las enfoca y les colocan el micrófono para que ellas molestas señalen casi gritando “Estamos emputadisísimos con AMLO y Morena y en las próximas elecciones se las vamos a cobrar”. Acompañaba la nota la etiqueta del hastag #AmloElfracasoPresidencial#. Más adelante Salinas pregunta:

¿o no hay tragedia, ni muertos, ni violencia, ni desabasto, ni medicamentos, ni falta de ayuda en Guerrero? Los noticieros no podemos permitir que un gobierno nos diga a quién correr o qué callar y qué decir, debemos defender nuestras libertades. Transmítimos las porras y las mentadas porque las 2 vienen de la gente (el pueblo) ¿Está mal? (Salinas Pliego 2023).

En su última visita al estado de Sinaloa, en Mazatlán, se reunió con empresarios dejando el siguiente mensaje: “Hay Muchas cosas que hacer por México... Agárrense Fuerte #Gobviernicolas HDP”. Frente a los señalamientos recientes que le hizo López Obrador en el sentido de que le daría “vergüenza subirme a un yate de esos en un país con tanta pobreza”, el Tío Richi respondió que vergüenza es “Tener al País, Hundido en la Pobreza y la Violencia... Y echarle la culpa a un Yate”.

La nueva derecha y su campaña del #NarcoPresidente

El lunes 26 de febrero de 2024, cuando se dio a conocer la encuesta del periódico *El Universal* (2024) en la que Claudia Sheinbaum –candidata presidencial de la Coalición Sigamos Haciendo Historia– mantenía ventaja sobre la candidata de las fuerzas de derecha, Xóchitl Gálvez,¹ el presidente López Obrador anunció que se venía “lo peor”, radicalizando su mensaje político, generando con ello una dura respuesta de la derecha que mantuvo durante varias semanas una guerra cibernética en la web con la viralización del hashtag #NarcoPresidente.

Lo anterior, derivado de los reportajes de los periodistas Tim Golden y Anabel Hernández, quienes llegaron a la misma conclusión: el Cártel de Sinaloa aportó dos millones de dólares para la campaña presidencial de AMLO. A cambio del dinero, los criminales buscaban que el eventual gobierno facilitara sus

¹ Se indicaba que la primera acaparaba 59% de la intención del voto, la candidata del PRI-PAN-PRD obtenía 36% y Máynez 5% (*El Universal* 2024).

operaciones y realizara nombramientos a modo. De igual manera, ambos comunicadores coincidían en que el gobierno de Estados Unidos investigó el tema con testigos protegidos y diversas indagatorias en ambos lados de la frontera, incluyendo una operación encubierta para contactar con personajes cercanos al actual presidente de México (*Aristegui Noticias* 2024).

En este sentido, Obrador dijo que campañas como esta pueden tumbar a un gobierno cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. Evidentemente tiene razón, aunque el citado hashtag no representaba a una multitud de ciudadanos furiosos que se expresaban en redes sociales. Así lo habían documentado algunos reportajes o monitoreos que explicaban cómo operaban los *trolls centers* de la derecha, especializados en sembrar este tipo de tendencias (Sánchez s/f).

La aritmética de la nueva derecha mexicana

La clasificación tradicional sobre la derecha ha cambiado, porque en el siglo XXI buena parte de los actores políticos que antes se movían en la clandestinidad, en sectores subterráneos o en la tiniebla política, actualmente están incorporados a la vida institucional. Las famosas asociaciones secretas de esta ultraderecha prácticamente ya no existen, existe su historia, pero hoy en día participan abiertamente en la política institucional.

De acuerdo con esta tipología, la derecha tenía las siguientes corrientes: la primera, la derecha católica y conservadora, donde estaba ubicada la Iglesia; el sinarquismo, la segunda corriente con la derecha demócrata cristiana, donde estaba el PAN; la tercera era la liberal burguesa, donde se ubicaba un sector del empresariado; la cuarta, la pequeñoburguesa-protofascista, donde estaban las clases medias; la quinta era la derecha revolucionaria carrancista –que situaba esa tendencia de la Revolución mexicana de Venustiano Carranza– y la última, la ultraderecha, donde figuraban precisamente las sociedades secretas, siendo las más conocidas los Conejos, el Yunque, el Muro y los Tecos.

Actualmente, esta constelación de fuerzas anti-AMLO y un sector de la derecha tradicional son llamados los nuevos conservadores (o la nueva derecha), y consideramos que por las acciones que han emprendido, prácticamente desde que inició este sexenio, es posible agruparlos en cinco grupos, de acuerdo con el trabajo de seguimiento y análisis que hemos elaborado.

El primero lo forman los oligarcas, los dueños del dinero y los grupos *ultras*, aquí se insertaría FRENAAA (Frente Nacional Anti-AMLO); el segundo grupo, los nuevos bárbaros o gobernadores del norte y sus aliados; en el tercero estarían

los cinco expresidentes del México neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto; en el cuarto, el PRIAN, sumado el PRD y su alianza Va por México; y en el quinto grupo, la mediocracia y la llamada prensa vendida o “chayotera”.

a) *Los oligarcas*

El primer grupo cobija en su seno a los oligarcas, los dueños del dinero y algunos grupos ultras como FRENAAA. En su lógica, como ya lo hicieron en 1988, en el 2006 y en el 2012, la democracia es sobre la que se impone a través del fraude y del dinero. Aquí tenemos un sector del empresariado –política e ideológicamente afín a la ultraderecha– que ha utilizado campañas de odio con tintes fascistas mediante *fake news*, a través de la mentira, la difamación, la descalificación, el insulto, el rumor y la amenaza de utilizar el golpismo blando o duro.

El grupo FRENAAA, ha sido su *caballito* de batalla, organizando caravanas con automóviles de lujo y bicicletas en distintas ciudades del país, así como el llamado “plantón fantasma” en el Zócalo capitalino, exigiéndole a AMLO que se vaya de la presidencia por ser, según ellos, un peligro para México y un dictador comunista (Baranda 2020).

b) *Los norteños*

Los norteños o gobernadores del norte y sus aliados, que abarca a siete mandatarios, cuatro de estados norteños y tres del occidente mexicano. Se encuentra en este grupo Enrique Alfaro, de Jalisco –del Movimiento Ciudadano–; Silvano Aureoles, de Michoacán –PRD y PRI–; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas –PAN–; José Ignacio Peralta, de Colima –PRI–; Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila –PRI–; Jaime Rodríguez, “El Bronco”, de Nuevo León; y José Rosas Aispuro, de Durango –PAN– (*La Jornada* 2020).

Su característica principal es que han boicoteado a lo largo de la pandemia las distintas estrategias, medidas, acuerdos e informes dados por el gobierno federal y, de manera simultánea, estos siete gobernadores han tratado de bloquear y sabotear distintas políticas sociales emprendidas por este.

c) *Los expresidentes*

Un tercer grupo lo integran estos personajes, más en el imaginario colectivo que en presencia real, tal vez los más mediáticos sean Vicente Fox y Felipe Calderón, pero

–ya rastreando a los grupos conservadores cargados a la derecha o anti-AMLO– ubicamos ramificaciones con estos cinco expresidentes del México neoliberal. El primero, Salinas, segundo, Zedillo, los más activos Fox y Calderón, y Peña Nieto, de bajo perfil (Arroyo 2021).

d) Alianza “Va Por México”

El PRIAN, el PRD y su alianza que lleva por nombre “Va por México” configuran el cuarto bloque. Esta coalición la conformaron los dirigentes partidistas, Jesús Zambrano Grijalva, del PRD, Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, y Marko Cortés Mendoza, del PAN. El último sostiene que los junta una forma de entender el sistema democrático y político del país, así como “la amenaza que hoy vivimos”, al apostar por seguir viviendo en un México del pasado, según indican (Camacho 2021).

Va por México tiene como objetivo, y quizás ese es el punto central de este bloque, alcanzar y ganar la mayoría de la Cámara de Diputados, es decir, arrebatársela la mayoría a Morena. Al respecto, Gustavo de Hoyos, el presidente nacional de la Coparmex felicitó esta alianza e indicó que esta coalición es por el bien de México (*Proceso* 2021).

e) La mediocracia

La mediocracia y la prensa “chayotera” conforman el quinto bloque, que nos proporciona mucha información, permitiéndonos abordar múltiples líneas de investigación inéditas, como la chayocracia y el hampa del periodismo. Aquí conviene recordar que en mayo de 2019 se da a conocer una lista de treinta y seis periodistas chayoteros, que recibieron \$1.081 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto por concepto de publicidad y otros servicios (*Aristegui Noticias* 2019). Durante su conferencia mañanera, AMLO anunció que había entregado la lista al INAI sobre los pagos a periodistas en el sexenio pasado, esto luego de que el youtuber Ignacio Rodríguez Chapucero hiciera la solicitud al Ejecutivo federal. Por su parte, el INAI se deslindaba de la filtración a un diario de circulación nacional (*Reforma*) de la lista de empresas y periodistas que recibieron apoyos durante el gobierno de Peña Nieto.

En la lista dada a conocer había de todo: salinistas, intelectuales orgánicos, voceros empresariales, destacando los nombres de Joaquín López Dóriga, Federico Arreola, Enrique Krauze, Oscar Mario Beteta y Beatriz Pagés. Así como Ray-

mundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Adela Micha y Luis Soto, Pablo Hiriart, Jorge Fernández Menéndez, Animal Político,² Francisco García Davish y José Cárdenas, entre otros. Al describir los apoyos dados se observaba lo siguiente: López-Dóriga y sus empresas obtuvieron más de 251 millones de pesos, siendo el periodista que más ganó con el gobierno de Peña; en segundo lugar aparecía Federico Arreola con su SDP Noticias, con 153 millones de pesos; y en tercer lugar Enrique Krauze, con 144 millones. Solo entre ellos tres sumaban más de 500 millones de pesos. Tras difundirse la lista, distintos medios cuestionaron esa información y algunos de los personajes citados abordaron el tema por medio de sus cuentas oficiales de X, justificando los apoyos (*Sin Embargo* 2019). Este bloque inició una brutal campaña mediática en contra del gobierno de AMLO, y se alió con otros sectores de los medios que habían sido críticos a la labor de López Obrador (*El Universal* 2021).

Consideraciones Finales: el amplio y complejo abanico conservador

La nueva derecha en México vislumbraba dos objetivos concretos: 1) desplazar al partido político gobernante Morena de la Cámara de Diputados en la elección intermedia del 2021 y ganarle la elección presidencial de 2024; y 2) retirar a AMLO de la presidencia de la República en 2022 a través de la revocación de mandato. En ambos casos fracasó, pues la elección presidencial fue ganada por Morena y sus aliados (PT y PVEM) con su candidata Claudia Sheinbaum, que alcanzó 35,9 millones de votos, convirtiéndose también en un referéndum favorable a López Obrador –que neutraliza o anula cualquier revocación de mandato–.

Por otra parte, es necesario matizar lo siguiente: existe una enorme complejidad en la definición que hemos revisado y analizado de la derecha en México, una complejidad metodológica y teórica sobre esta y sobre las fuerzas conservadoras. En los grupos analizados hemos señalado algunos rasgos comunes: especialmente su oposición al cambio, su desprecio a los sectores vulnerables, su racismo y discriminación contra los pobres y marginados, así como su espíritu anti-López Obrador. Sin embargo, grupos que provienen históricamente de trayectorias distintas y diversas: los de derecha y ultraderecha están perfectamente delimitados, pero otros bloques de opositores y críticos del gobierno, como anotamos, vienen del liberalismo o de sectores moderados. En este contexto, también los corporativos empresariales tienen sus propias particularidades.

² Medio digital.

Podríamos decir entonces que, efectivamente, el sector de la nueva derecha mexicana es una suma de bloques, es un híbrido de fuerzas ideológicas, un arcoíris de fuerzas políticas distintas, que tienen rasgos comunes más afines y cercanos al modelo político de la democracia neoliberal que al de la derecha misma, pero que articulan características similares: son un abanico de actores políticos de muchos colores; por lo que resulta complicado integrarlos bajo un concepto único, tanto teóricamente como por sus historias y su praxis política.

Siguiendo en esta dirección, podrían incorporarse otros bloques, como las ONG y la Iglesia, pero en el período que hemos estado analizando su presencia es menor y más débil; destacando los cinco grupos citados como los más belicosos, los que más confrontan, los que más están cuestionando al Gobierno, sus políticas públicas, los que frente a cualquier error de los gobernantes lo magnifican. Por ende, cada uno de estos bloques está utilizando sus propios recursos, se confrontan desde el sector empresarial, es decir, más de derecha, con sus brazos operativos civiles como FRENAAA, hasta el sector intelectual que utiliza herramientas más académicas en la radio, en la televisión, en los libros y en las redes sociales.

La definición de derecha e izquierda no es la tradicional, es un híbrido de fuerzas y de intereses. He aquí el problema teórico metodológico, ya que estamos hablando de actores de carne y hueso de la política real, no de la política que apuntaba Giovanni Sartori; esta rebasa los planos teóricos y tiene todas las contradicciones del sujeto político.

La derecha en México: entre el Yunque –las fuerzas conservadoras del pasado tradicionalista y primitivo– y Vox –las fuerzas conservadoras del presente, con aires cosmopolitas y conectadas a la web–, entre la tradicionalidad de lo arcaico y la modernidad del universo digital, trazando su última cruzada de combate en México contra la “Cuarta Transformación” de AMLO, que Steven Forti resume en los siguientes términos: Estaríamos frente a una nueva derecha 2.0, que utiliza un lenguaje y un estilo populistas, que se ha transformado sustituyendo la temática racial por la batalla cultural y ha adoptado ciertos rasgos provocadores y antisistema gracias a la capacidad de modular la propaganda a través de las nuevas tecnologías (Stefanoni 2021). Sin embargo, pese al disfraz y a la estética rebelde que ostentó durante su campaña electoral en 2024 por la presidencia de la República, fue derrotada por las fuerzas progresistas, liberales y de izquierda que apoyan el proyecto del “Segundo Piso” de las 4 T enarbolado por Claudia Sheinbaum.

Bibliografía

- Amnistía Internacional. 2024. “Qué hacemos”. Amnistía Internacional [sitio web]. <https://www.amnesty.org/es/what-we-do>.
- Aristegui Noticias. 2019. “Lista de periodistas chayoteros servirá para desacreditarlos y apostar por nuevos medios: Fabrizio Mejía/ Entérate”. *Aristegui noticias*. <https://n9.cl/4ld15>.
- _____. 2024. “Crimen organizado financió campaña de AMLO de 2006: reportajes de Propublica y DW”. *Aristegui Noticias*. <https://n9.cl/3phs5>.
- Arroyo, Lorena. 2021. “La consulta popular para enjuiciar expresidentes no alcanza el 8% de participación”. *El País México*. <https://n9.cl/ja7a1>.
- Baranda, Antonio. 2020. “Se queda Plantón de Frena en Zócalo”. *Reforma*. <https://n9.cl/r35bv>.
- Barranco, Bernardo. 2022. “Eduardo Verástegui, punta de lanza de la ultraderecha en México”. *Proceso*. <https://n9.cl/33gpy>.
- Bayo, Carlos Enrique. 2021. “Grandes fortunas y altos ejecutivos españoles financiaron el nacimiento de Vox a partir del grupo ultracatólico Hazte Oír”. *El Público*, 8 de agosto. <https://n9.cl/v2z16>.
- Bobbio, Norberto. 1998. *Derecha e Izquierda*. España: Taurus.
- Camacho, Zósimo. 2021. “Va por México, la alianza desesperada de los desplazados del poder”. *Contra línea*. <https://n9.cl/tc6hc>.
- Campbell, Hugh G. 1976. *La derecha radical en México 1929-1949*. México: SepSetentas.
- De Beauvoir, Simone. 1955. “La pensée de droite aujourd’hui”. *Les temps modernes*, 112-113: 1539-1575.
- El Financiero. 2021. “Carta de Madrid: ¿de qué va el documento firmado entre Vox y el PAN?”. *El Financiero*. <https://n9.cl/5kuau>.
- El Universal. 2021. “Medios me ‘mayoritean’; si no ejerciera mi derecho de réplica, ‘nos aplastarían’: AMLO”. *El Universal*. <https://n9.cl/4q8ltx>.
- _____. 2024. “Claudia Sheinbaum mantiene ventaja sobre Xóchitl Gálvez”. *El Universal*. <https://n9.cl/mhi0g>.
- Forbes México. 2022. “México acoge la CPAC, la cumbre global de conservadores”. *Forbes México*. <https://n9.cl/sl4ndh>.
- García Cantú, Gastón. 1987. *El Desafío de la Derecha*. México: Joaquín Mortiz-Planeta.
- _____. 1980. *El pensamiento de la reacción mexicana*. México: UNAM.
- García, Carina. 2021. “Grupos de Panistas firman Carta de Madrid, en alianza con partido Vox de España”. *Expansión Política*. <https://n9.cl/s8vk8>.
- González, Miguel, Naiara Galarraga y Federico Rivas. 2021. “Vox teje una alianza anticomunista en América Latina”. *El País*. <https://n9.cl/hb3ky>.
- Infobae. 2021. “Qué es la Carta de Madrid, el documento que firmaron senadores del PAN y desató la polémica con el partido Vox”. *Infobae*. <https://n9.cl/zvp8n>.
- King, Desmond. 1987. *The New Right: Politics, Markets & Citizenship*. USA: Macmillan.

- La Jornada. 2020. “Lanzan Amenazas 10 gobernadores a AMLO”. <https://n9.cl/r35bv>.
- Milenio Digital. 2023. “¿Se destapa? Actor Eduardo Verástegui publica mensaje sobre elecciones de 2024”. *Milenio Digital*. <https://n9.cl/v52u1>.
- Montaño, Francisco. 2024. “Ricardo Salinas tacha a AMLO de “Goviernicola mentiroso””. *Debate*. <https://n9.cl/l79pm>.
- Nolte, Ernst. 1965. “Germany”. In *The European right. A historical profile*, edited by Hans Rogger y Eugen Weber. Berkeley: The University of California Press (261-307).
- Proceso. 2021. “De Hoyos revisa a AMLO por crítica a Va Por México: ‘resistiremos y Echaremos a Morena’”. *Proceso*. <https://n9.cl/f95x9>.
- Salinas Pliego (@RicardoBSalinas). 2023. Post de X, 3 de noviembre de 2023, 19:57hs. <https://n9.cl/xkfrt5>.
- Sin Embargo. 2019. “Reforma divulga lista de 36 periodistas y sus empresas que habrían recibido contratos de Peña”. *Sin Embargo*. <https://n9.cl/8u4sx>.
- San Martín, Neldy. 2022. “Cumbre de CPAC en Santa Fe: la ultraderecha encuentra tierra fértil en México”. *Proceso*. <https://n9.cl/3oxef>.
- Sánchez Gudiño, Hugo. s/f. “Alacranes 500”. Tiempo de Alacranes [Blog]. <https://n9.cl/2bvsg>.
- Stefanoni, Pablo. 2021. *¿La Rebeldía se volvió de Derecha?* Buenos Aires: Siglo XXI.

De Macri a Milei: la peligrosa obsesión de las clases dominantes argentinas

Andrés Tzeiman*

Resumen

El presente trabajo aborda la relación que se puede trazar entre el proyecto político ejecutado por el gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) y el proyecto del actual primer mandatario, Javier Milei (que inició en diciembre de 2023). El objetivo es comprender las diferencias y similitudes entre ambos experimentos políticos. Con ese propósito, el artículo presenta los rasgos principales del gobierno de Macri, para luego dilucidar las continuidades y rupturas que existen con el de Milei. En ese sentido, se coloca el foco en las temporalidades diferenciales de ambos procesos, así como en el vínculo entre tal aspecto y los contextos inmediatamente previos al comienzo de sendos mandatos presidenciales. Por último, a modo de reflexión final, el trabajo analiza la relación que cada una de dichas experiencias ha establecido con los sectores dominantes.

Introducción: ¿bajo qué perspectiva analizar la relación Macri-Milei?

En la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales argentinas de 2023 se produjo una divisoria de aguas en las filas del entonces campo opositor, ubicado en la expandida franja derecha del espectro político. Tal como pudo observarse a lo largo del año, fueron tres las candidaturas que se turnaron para presentar su programa de gobierno en las grandes tertulias empresariales organizadas por el *establishment* local: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. Los dos primeros pertenecientes a la alianza Juntos por el Cambio, que había gobernado el país bajo la presidencia de Mauricio Macri entre 2015-2019 y que fue derrotada en los comicios de 2019 por el peronista Frente de Todos. Mientras que el tercer candidato, Javier Milei, representante de la extrema derecha, había fundado de forma muy reciente el partido La Libertad Avanza, cuyo debut electoral, circunscripto a la Ciudad de Buenos Aires, había ocurrido en los comicios de medio término de 2021.

* Doctor en Ciencias Sociales (UBA, Argentina), Investigador IDH-UNGS/CONICET y docente de Sociología Política en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. E-mail: andrestzeiman@hotmail.com.

De esa forma, la derecha diversificaba su oferta político-electoral. Por un lado, su vertiente más clásica contaba con dos candidaturas que dirimirían su competencia en las elecciones primarias: una “moderada” (Horacio Rodríguez Larreta) y otra más radical (Patricia Bullrich). Mientras que, por el otro lado, aparecía un líder de ultraderecha que se manifestaba en contra de todo el sistema político (Javier Milei).

Ahora bien, la figura opositora que estuvo merodeando todo el período 2019-2023, mirando la competencia desde arriba, con un comportamiento político que oscilaba entre apariciones públicas intermitentes y una omnipresencia en las sombras, fue el expresidente Macri. De hecho, cada vez que Rodríguez Larreta o Bullrich –siempre ubicados en la primera plana mediática– mostraban una mínima intención de clausurar de forma anticipada el duelo interno de Juntos por el Cambio, allí irrumpía Macri para dejar en claro quién era el auténtico referente de ese espacio político. Aunque, vale señalar, el principal encono estaba puesto en el alcalde porteño, Rodríguez Larreta, quien demostraba mayores anhelos de independizarse del patronazgo de su jefe político mediante una alianza amplia con peronistas, radicales, progresistas, conservadores y reaccionarios de distintas procedencias.

De manera consecutiva –seguramente asistido por una buena dosis de encuestas y resultados sistemáticos de grupos focales de forma previa a la campaña electoral– Macri, no dudó en repartir elogios hacia Javier Milei. Más aún, llegó a vaticinar con entusiasmo la posibilidad de un ballotage presidencial entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Pero lo más saliente fue que el expresidente destacó públicamente la vocación radical y refundacional desplegada en la prédica de Milei, incluso en momentos en los cuales, ante la mirada de la opinión pública, el líder libertario no figuraba como un serio competidor en las elecciones venideras. Fue así que en abril de 2023, ante el selecto público de empresarios nucleados en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Macri afirmó: “Vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista y de enojo. Va a ser un desafío para el candidato que gane la interna [de Juntos por el Cambio]”. Y, en el mismo sentido, augurando el camino que debería seguir el país bajo una nueva gestión a partir del 10 de diciembre de 2023, sentenció: “Cada vez más gente se enoja y cree que hay que dinamitar todo, yo creo que hay que dinamitar casi todo” (*El Cronista* 2023). El guiño hacia el candidato libertario resultaba inequívoco. Pues la idea de “dinamitar casi todo” provenía de uno de los *hits* lanzados por Milei en sus permanentes apariciones televisivas: la propuesta de dinamitar el Banco Central.

En ese marco no resultó casual que la misma noche del 13 de agosto de 2023, cuando se celebraron las elecciones primarias en las que Milei conquistó el primer lugar con el 30% de los votos, Macri resaltaré que Argentina estaba entrando en un “cambio de era” (*Ambito* 2023). Y explicó que esa transformación residía en que Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza habían conseguido una mayoría de los votos (el 58% sumando sus tres candidatos) que indicaba la existencia de una porción contundente del país alineada con la necesidad de un cambio radical. De ese modo se consolidaba la idea de un *proyecto* común, más allá de las diferencias entre ambas fuerzas políticas. Tanto es así que en las semanas posteriores a las primarias de agosto, Macri declaró en los medios de comunicación que los desacuerdos entre Bullrich y Milei se restringían estrictamente a la experiencia y a las formas, pero de ningún modo a cuestiones de fondo.

Entre agosto y octubre, en el tránsito desde las elecciones primarias hacia las generales, tuvo lugar un período de virulentas agresiones de Milei hacia Bullrich. El candidato libertario olfateaba acertadamente que entre ambos estaba en disputa un radio común de votantes. Haciendo gala de su incontinencia verbal, esos dos meses concentró sus energías en fustigar a la candidata de Juntos por el Cambio recordando su pasado militante en los años setenta, cuando Bullrich integraba las filas de la organización político-militar Montoneros, perteneciente a la izquierda peronista (*elDiarioAR* 2023).

Las acusaciones cruzadas entre Milei y Bullrich permitían prever un camino de no retorno en su relación. Sin embargo, una vez consumados los resultados en las generales del 22 octubre –en las que Bullrich quedó tercera y excluida de la segunda vuelta– Macri dio un paso al frente con velocidad y volvió a ganar la escena. Apenas unos días después de esos comicios se celebró el “Pacto de Acassuso” entre Macri y Milei. En una reunión privada en la casa del primero, el expresidente selló un acuerdo con Milei según el cual, junto con Bullrich, apoyarían activamente al candidato libertario en el camino al ballottage. Pese a que esa determinación significaba una ruptura conjunta del tándem Macri-Bullrich con todo un sector de Juntos por el Cambio –conformado principalmente por Rodríguez Larreta y la conducción partidaria de la centenaria Unión Cívica Radical–, el viraje decidido por el expresidente resultaba irreversible. Ese movimiento se coronaría definitivamente en la noche del 19 de noviembre, con el abrazo entre Macri y Milei en el búnker de este último tras conocerse el triunfo de la Libertad Avanza en el ballottage.

Pero, ¿qué se tramaba en el acuerdo Macri-Milei?, ¿a qué se debía la velocidad y naturalidad de esa confluencia? En este artículo no nos interesa reconstruir la dinámica del vínculo personal entre ambos líderes; tampoco nos concierne

responder las intensas rencillas de poder entre estos dos protagonistas de la derecha argentina ocurridas de forma posterior a la noche del 19 de noviembre –que, por cierto, no han sido pocas ni carecen de relevancia–. Más bien, en las siguientes páginas quisiéramos indagar la relación que existe entre los proyectos políticos de Macri y Milei, sus temporalidades y sus principales características. Es decir, qué diferencias, similitudes y, sobre todo, qué relación podemos encontrar entre sus respectivos experimentos políticos al frente del gobierno, más allá de que recién nos encontramos a cuatro meses del inicio de la gestión de Milei.

Con ese propósito, dividiremos este trabajo en tres apartados, más uno al final a modo de conclusión. En el primero, esbozaremos los rasgos principales del gobierno de Macri. En el segundo, responderemos brevemente lo sucedido en los primeros meses de la administración de Milei y, en función de ello, trataremos de dilucidar cuál es la diferencia fundamental que existe entre su gestión y la del expresidente sobre la base del contexto político previo a sendas asunciones. Luego, en el tercer apartado presentaremos las características específicas del perfil político de Milei. Y, por último, plantaremos algunas reflexiones finales.

Cinco rasgos principales del gobierno de Macri (2015-2019)

Tal como lo hemos desarrollado previamente en otro trabajo (Tzeiman 2023), consideramos que pueden distinguirse cinco características principales al momento de aproximarnos a una definición general del gobierno de Macri. Las mismas son:

1. Un *proyecto de nación excluyente*, tanto en el plano económico como en el político; es decir, el desarrollo de un proyecto histórico que se propone –siguiendo a O’Donnell (2009)– la negación de las aspiraciones de participación económica del sector popular y, a su vez, el cierre de los canales de acceso político a los sectores subalternos, junto con la eliminación o subordinación de sus bases organizacionales.
2. Una *revancha de clase*, en la medida en que el despliegue del proyecto mencionado en el punto anterior requiere extirpar de los sectores populares tanto las conquistas de derechos como la subjetividad política producida durante el período inmediatamente anterior –en este caso, el proceso kirchnerista (2003-2015)–.
3. Una *relación de inmediatez entre Estado y clases dominantes*, ya que durante el gobierno de Macri tuvo lugar el fenómeno de “puerta giratoria” (Canelo et al. 2018), es decir, una ocupación de las principales carteras ministeriales

por parte de cuadros dirigenciales que hasta el momento previo a la asunción de la nueva gestión se desempeñaban en grandes empresas del sector privado (vinculadas al área de gobierno, sobre la cual a partir de entonces toman el cargo de ministros o secretarios de Estado). Ese fenómeno de “puerta giratoria” supone a la vez una confianza plena en la capacidad de los tecnócratas provenientes de grandes corporaciones para volver eficiente el funcionamiento del sector público –y, con ello, una idea de traducción transparente de los parámetros de la gestión privada hacia la estatal–.

4. Una *ofensiva ideológica y cultural anti-igualitaria*, orientada a poner en cuestión los principios democratizadores que perviven en la sociedad civil y el Estado en Argentina y, en el mismo sentido, erigir un dominio duradero que arraigue en el conjunto de la nación prácticas y creencias de defensa genuina de la desigualdad –tanto en la parte beneficiaria de esta posición como en los perjudicados por ella–.
5. Una *mentalidad neocolonial*, ya que la política exterior de Mauricio Macri estuvo marcada por un abandono de la orientación integracionista hacia la región latinoamericana que había emprendido el kirchnerismo, para priorizar en su lugar un vínculo de subordinación hacia las naciones de “Occidente” y las instituciones financieras tradicionales con sede central en Washington.

Hay uno de estos puntos que se vuelve especialmente sensible en la experiencia macrista de 2015-2019: *la revancha de clase*. Su centralidad no es caprichosa. Remite a la necesidad de saldar cuentas con una etapa que tuvo consecuencias concretas en la vivencia cotidiana de las grandes mayorías populares de Argentina. Resulta *sintomática* en ese sentido la declaración realizada en los medios de comunicación por Javier González Fraga, quien fuera presidente del Banco de la Nación Argentina durante el gobierno de Macri: “Venimos de 12 años [en referencia al período kirchnerista: 2003-2015] en donde las cosas se hicieron mal. Se *alentó el sobreconsumo*, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio... Donde *le hiciste creer* a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior” (*Infobae* 2017, énfasis nuestro). Creemos que se trata de un testimonio contundente, porque retrata de forma transparente la curiosa percepción que tiene la derecha local sobre los procesos de redistribución progresiva del ingreso: los conciben, al mismo tiempo, como un *exceso* y una *fantasía*. Por eso el macrismo proponía una respuesta marcial contra los doce años de populismo. Tal como fue señalado por el periodista Mario Wainfeld (2017, 22), el objetivo fue convertir y reducir el proceso político del kirchnerismo a un

capítulo del código penal. La amenaza latente de prisión a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y a sus hijos, la persistente demanda de un conjunto de periodistas para que avancen las causas judiciales en contra de ella y el dictado de prisión preventiva a ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas configuraron un mapa de disciplinamiento hacia la sociedad y hacia la dirigencia política, social y sindical, destinado a evitar el retorno del “fantasma del populismo”.

Ahora bien, la razón por la cual consideramos que el macrismo se vio obligado a una reacción potente contra la experiencia kirchnerista no es solo la construcción de su identidad política –en definitiva, el anti-populismo–. Ello también se debió a la necesidad de imponerle a la sociedad argentina la imagen de una crisis aguda y de decadencia moral que fundamentara el carácter perentorio de una refundación social, o de aquello que la alianza macrista denominó insistentemente “cambio cultural”.

Para ser más concretos, el gran espectro que tanto incomodaba en la llegada de Macri al poder ejecutivo es la inexistencia de una crisis económica inmediatamente previa. Efectivamente, durante el tramo final del ciclo kirchnerista el país atravesaba tensiones macroeconómicas, que la gestión triunfante en las elecciones de 2015 debería afrontar de allí en adelante. Las más importantes eran la inflación y, fundamentalmente, la restricción externa, provocada por la falta de dólares ante la clausura del acceso a los mercados internacionales de crédito. Pero esa situación estaba muy lejos de la existencia del terreno fértil que significa una crisis económica a la hora de llevar adelante una transformación radical sobre las coordenadas generales de organización e intelección social.

Por ese motivo, hubo una palabra que se instaló forzosamente en el léxico oficialista desde la llegada de Macri a la Casa Rosada: el *gradualismo*. En las huestes macristas había un pleno acuerdo sobre que el arribo del exjefe de gobierno porteño a la cúspide del ejecutivo nacional debía estar acompañado por fuertes ajustes macroeconómicos. Pero, al mismo tiempo, aquello que no encontraba un consenso pleno al interior de su espacio político era el modo y la temporalidad con que esos ajustes se tenían que llevar a cabo. De esa manera, frente a los sectores “duros” que demandaban una terapia de *shock* para remendar sin anestesia los desequilibrios macroeconómicos heredados de la etapa kirchnerista, terminó imponiéndose la posición alternativa de los “blandos”: un *gradualismo* que permitiera calibrar las transformaciones deseadas con las relaciones de fuerza realmente existentes.

En ese sentido, unos años después, ya concluida su gestión presidencial, en su libro titulado *Para qué*, fue Macri quien mejor expresó un balance de aquel

enfoque: “Nuestra debilidad tuvo un nombre: *gradualismo*” (Macri 2022, 170; énfasis del original). Al fin y al cabo, aquello que condicionaba el nivel *posible* de avance del nuevo paradigma era el grado de aceptación social. En el volumen recién citado el expresidente lo explicó del siguiente modo: “Me habría sentido feliz de ir más rápido. De haber podido, hubiese impulsado todas las reformas necesarias en los primeros noventa días. Pero ¿la sociedad las habría tolerado?” (Macri 2022, 189).

El proyecto económico de Macri al comenzar su gobierno en 2015 implicaba una refundación social que echaba raíces en el programa aplicado por José Alfredo Martínez de Hoz cuando fue ministro de hacienda durante la dictadura cívico-militar de 1976 (Tzeiman 2017). En sus propios términos, una reconfiguración radical de la sociedad argentina que acabase con las trabas “corporativas” –todo tipo de regulaciones existentes en el Estado y la sociedad–, en tanto impedimentos para poner en el centro al individuo y así liberar todas sus capacidades creativas y productivas, imprescindibles en la construcción de un capitalismo pujante y moderno, integrado virtuosamente al mercado mundial.

El gran dilema que debió enfrentar el macrismo como experiencia política fue llevar a cabo ese proyecto ante una sociedad que no estaba preparada ni dispuesta frente al despliegue de semejante reconfiguración social. Ante la ausencia de una crisis previa, su disyuntiva, en síntesis, rondaba alrededor de la cuestión del *tiempo*. Por tal razón, en los primeros años de mandato el endeudamiento fue la vía utilizada para aplazar la velocidad del ajuste, mientras el gobierno ganaba consenso social y acumulaba poder político.

Sin embargo, el ocaso de esa alternativa comenzó en la primera mitad del 2018. Ello ocurrió después de que en diciembre de 2017 la sociedad le pusiera un freno al riguroso programa de metas de inflación trazado por Federico Sturzenegger (entonces presidente del Banco Central) y de que el gobierno sufriera el cierre del crédito en los mercados financieros, que tuvo como consecuencia su llamado desesperado al Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese momento se labró el acta de defunción del enfoque gradualista. Y, a su vez, resultó el inicio del fin del gobierno de Macri, que sería derrotado en las urnas en el año siguiente.

La gran diferencia: crisis multidimensional y terapia de *shock*

Argentina llegó al inicio de la campaña electoral de 2023 en medio de una situación muy delicada. Para ilustrarla muy resumidamente, podemos enumerar los siguientes elementos: un pronóstico asegurado de tres dígitos de inflación anual; un cuadro al límite en materia de restricción externa debido a la escasez de divisas, agravada por una sequía histórica en el sector agropecuario (que privó al país del ingreso por exportaciones de alrededor de 20.000 millones de dólares); un acuerdo pernicioso con el FMI, renegociado y firmado en 2022, que sometía al Ejecutivo a las auditorías trimestrales de dicho organismo; un deterioro sostenido en los ingresos de la clase trabajadora, especialmente en los sectores informales, agudizado por los efectos de la pandemia, y, para completar el panorama, la desilusión provocada por el gobierno de Alberto Fernández a la hora de revertir los daños socioeconómicos causados por el mandato de su antecesor en la presidencia –que Fernández se había comprometido firmemente a reparar–. En síntesis: la acumulación de desazón, hartazgo e incertezas en la sociedad argentina pospandémica conformaba un cóctel explosivo de cara a las elecciones de 2023.¹

En ese sentido, tal como señalan Pablo Villarreal y Ezequiel Ipar (2023), la vivencia social de la crisis que signó la parte final del mandato de Alberto Fernández se expresó en una sensación generalizada de malestar, asociada a una imposibilidad de crecimiento a futuro, que redundó en una “temporalidad catastrófica sin fin”. Dicha crisis encontró sus tres vectores principales en la inseguridad, la falta de trabajo y la inflación, coadyuvando a un escenario de *incertidumbre* sostenida. Se trataba, según los autores, de una “crisis multidimensional” que invocaba un sentimiento de hartazgo en vastos sectores de la sociedad.

En la misma clave de reflexión, Cuesta et al. (2023) hablan para el mismo contexto de una “crisis social amplia”, y hacen referencia a por lo menos cuatro trazos que caracterizaron la coyuntura pre-electoral de 2023. El primero es el de la *crisis económica*, cuya expresión abierta se presenta en 2018, a partir del retorno del país al FMI. El segundo es el de los *efectos de la crisis sanitaria* del Covid-19, que profundizó los rasgos de la crisis económica preexistente y provocó una sensación de hartazgo de los individuos frente a las medidas impuestas por el Estado

1 Hemos escrito un balance sobre los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández, recogiendo a su vez los resultados que éste recibió tras el mandato de Mauricio Macri, en un artículo titulado “El regreso del peronismo al gobierno en Argentina (2019-2023): de la ilusión al fracaso” que próximamente será publicado en la revista brasileña *Enfil*. Quienes tengan interés en hacerlo, mediante la lectura de ese trabajo podrán obtener una descripción más acabada del cuadro de situación previo al proceso electoral del año 2023.

para gestionar la pandemia. El tercero es la *aceleración tecnológica e informática*, que conmovió las temporalidades hasta entonces concebidas como hábitos por las personas. Y la cuarta es una *crisis del sistema de representación democrático*, junto con un cuestionamiento ante las promesas y valores propios de la democracia.

A partir de estas características del escenario de crisis que sobreolaba el año electoral, resulta sugestivo volver al libro *Para qué*, de Mauricio Macri. Allí, el expresidente subrayaba que en 2023 la sociedad argentina ya no estaba en las mismas condiciones que cuando él llegó a la primera magistratura, allá por el año 2015. En sus propias palabras:

No pudimos hacer todo lo que me había propuesto. A veces, porque no nos dejaron. Otras, porque no supimos cómo. Pero siento que *sembramos una semilla, la semilla del cambio. Durante la pandemia esa semilla germinó* [...] Hoy es parte de la identidad de gran parte de la sociedad. *A diferencia de lo que sucedía en 2015, los argentinos hoy quieren más cambio y no menos. Lo quieren más rápido y no gradualmente. Exigen más libertad y no menos* (Macri 2022, 193; énfasis nuestro).

Resulta necesario destacar cuatro aspectos de esta cita de Macri. La primera, ya señalada más arriba, es la existencia en 2023 de un deseo de cambio expandido sobre gran parte de la sociedad: la fertilidad para una transformación profunda se había vuelto una realidad. La segunda es el corte que el autor sitúa en la pandemia como momento en el cual “la semilla del cambio germinó”. La tercera es la identificación del cambio en 2023 con una *nueva temporalidad*, o sea, una mayor velocidad que la implementada en 2015-2019. Y la cuarta, que nos conecta directamente con la figura de Milei, es la alusión al concepto de *libertad* como protagonista de aquellos valores que la sociedad le estaba exigiendo a la dirigencia política en la nueva coyuntura.

La experiencia que tendría lugar a partir de diciembre de 2023, según Macri, debía reconectar con la semilla plantada en 2015; en nuestros términos, con el proyecto iniciado en aquel entonces. Por eso no resulta una casualidad que las principales figuras ministeriales del gobierno de Milei repitan nombres en relación con la lista de funcionarios que integraron el gobierno de Macri. En efecto, hay dos piezas que son indicativas de la continuidad transparente que hilvana las perspectivas de Macri y Milei. Nos referimos a Luis Caputo, actual ministro de economía y secretario de finanzas durante el macrismo, y el ya mencionado Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central entre 2015-2018 y asesor en las sombras de Milei en materia económica –llamativamente, sin un cargo oficial–. Vale resaltar que Sturzenegger fue el autor intelectual del decreto de necesidad y

urgencia (DNU) del pasado 20 de diciembre de 2023, con el cual el presidente cambió drásticamente el andamiaje jurídico del país para avanzar hacia una radical liberalización, desregulación y privatización de la economía argentina.²

Volviendo al parangón entre 2015 y 2023, de acuerdo con el discurso de asunción presidencial de Milei, el argumento que fundamenta sus políticas durante los meses iniciales de gobierno es, primero, la existencia de una *crisis terminal*, y luego, en función de ello, la *terapia de shock* como salida inevitable frente a ese escenario. En aquella alocución, el nuevo presidente se apresuró a sentenciar: “Ningún gobierno recibió una herencia peor que la que recibimos nosotros” (*Página12* 2023). En el mismo sentido, el DNU del pasado 20 de diciembre –titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”–³ también invocó en sus considerandos la idea de una crisis sin precedentes: “si bien nuestro país ha atravesado graves crisis, y muchos gobiernos se han expresado en el pasado en forma similar acerca de la gravedad de la situación que enfrentó la Argentina, *la realidad indica que ninguna de las anteriores, pese a su seriedad, tuvo la magnitud y alcance de la crisis actual*” (Boletín Oficial, Decreto 70/2023; énfasis nuestro).

Tal como fue explicado por Naomi Klein (2007) en su *Doctrina del shock*, en la lengua neoliberal un contexto de crisis exige una *cirugía mayor*. No alcanza con retoques secundarios ni medidas accesorias. La solución debe ser radical. Las palabras de Milei el 10 de diciembre, en consonancia con lo pregonado en la campaña presidencial, confirmaron esa vía. Aquella jornada el nuevo jefe de Estado repitió enfático y con espíritu *thatcheriano*: “No hay solución alternativa al ajuste”. Y, en la misma dirección, estableció un diálogo más o menos implícito con la experiencia fallida de Macri: “No hay lugar a la discusión entre shock y

2 Para el momento en que escribimos estas páginas, dicho DNU fue rechazado por la Cámara de Senadores y aún aguarda su tratamiento en la de Diputados. Si esta última también procediera al rechazo, el DNU perdería vigencia. Es por eso que el sector más firme del peronismo está trabajando para conseguir esos votos en la cámara baja, mientras una porción de la oposición “amigable” proveniente de Juntos por el Cambio vacila, a sabiendas de que significaría asestarle un duro golpe al Gobierno.

3 Es importante subrayar que el concepto de “las bases” ha sido recurrentemente empleado con afán refundacional por la derecha liberal autóctona, dando cuenta del carácter inconcluso de la nación argentina. Los dos ejemplos más emblemáticos en ese sentido han sido: por un lado, el ya mencionado José Alfredo Martínez de Hoz, en su balance de gestión como ministro de hacienda durante la última dictadura, titulado precisamente *Bases para una Argentina moderna 1976-1980*; y, por el otro lado, Álvaro Alsogaray, fundador en la postdictadura del partido de derecha Unión del Centro Democrático (UCEDE), quien en 1988 publicó *las Bases liberales para un programa de gobierno* como preludio de su candidatura presidencial en las elecciones de 1989. Al respecto se puede consultar el interesante artículo de Pablo Martín Méndez (2023), titulado “La formación del neoliberalismo argentino a través de Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray y Alberto Benegas Lynch (1955-1973). Redes transnacionales, batalla de ideas y refundación de la Nación”.

gradualismo” (*Página12* 2023). Sin medias tintas: había llegado la hora del *shock*. El mega DNU anunciado diez días después ratificaría esa opción: “*no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas y, como contrapartida, un programa general de desregulación de la economía que saque al país del pozo en el que lo sumió la administración anterior*” (Boletín Oficial, Decreto 70/2023; énfasis nuestro).

En síntesis, ocho años más tarde, al proyecto de Macri le había llegado su tiempo. La crisis multidimensional, sembrada en su propio gobierno y agravada en el período posterior, había preparado a una sociedad que ya no le cerraba completamente las puertas a la implementación del *shock*.

Nuevo liderazgo y cuestionamiento a la casta como ariete político

Entonces, nos resulta claro que para comprender la llegada de Milei a la Casa Rosada resulta imprescindible remitir al contexto de crisis señalado en el apartado anterior. Pero, a su vez, no alcanza con eso. Es necesario analizar también cuáles son las características más salientes de su liderazgo político, que le permitieron concitar la adhesión de una porción significativa del electorado argentino. Más aun considerando el carácter disruptivo de su novísima fuerza política que, como fue señalado más arriba, surgió en las elecciones legislativas de 2021, sin gobernadores, intendentes o legisladores en su haber.

La figura de Milei, dotada de un histrionismo, verbosidad y locuacidad desplegados de forma recurrente en los *sets* televisivos, se constituyó como el atractivo excluyente de La Libertad Avanza. Mientras que sus ideas, en parte inspiradas en los manuales de la Escuela Austríaca de Economía, buscaron mostrarse rupturistas ante todo aquello que pudiera considerarse socialmente aceptado y establecido. Ahora bien, tanto su imagen como sus ideas fueron subestimadas de forma corriente mediante una identificación o proximidad con la locura, pero cumplían el objetivo de conectar con un sentido que se expandía cada día más en la sociedad argentina: la de un sistema político agotado, que debía ser dinamitado para –de esa forma– poder ser edificado *todo* de nuevo. Milei aparecía ante una parte creciente de la audiencia como un loco... pero un loco con ideas interesantes. Su estilo podía resultar exagerado, y sus propuestas un tanto radicalizadas, pero captaban aquello que para una porción considerable de la sociedad se presentaba como una *evidencia*: la urgencia de un liderazgo que rompiera contundentemente los moldes, porque ya no bastaba con reparar la máquina (la sociedad argentina), era necesario destruirla para poder armarla toda de cero. Ello se complementaba

con un elemento clave en el *slogan* electoral de Milei: esa tarea requería de una fuerza nueva, puesto que no la podían llevar adelante “los mismos de siempre”.

En ese itinerario supo erigir sagazmente su liderazgo sobre la base de un antagonismo particular: su lucha contra la *casta política*. Tal como explican Villarreal e Ipar: “en la coyuntura actual, la anti-política surge de una articulación entre el rechazo a la política institucional y aquellos que se perciben como sus beneficiarios, la oposición tajante entre el individuo y su libertad como contrapuestos al Estado y una discursividad que se apoya en un alto nivel de violencia” (2023, 86). Ante una situación de desafección política extendida, Milei logró detectar con astucia que, frente a la crisis, la sociedad demandaba que alguien le apuntara un responsable. Y, en efecto, allí estaba ante los ojos de la Argentina entera el fracaso de los últimos dos gobiernos, es decir, de las dos coaliciones hasta entonces predominantes en el sistema institucional y protagonistas del antagonismo político durante la última década y media. A su vez, también resultaba accesible para quien quisiera verlo que la dirigencia política no había sufrido como la ciudadanía de a pie los efectos de las restricciones impuestas por el Estado durante la pandemia. De allí la atracción generada por el líder libertario sobre toda una porción del mundo popular perjudicado por el persistente declive económico. Frente a ese escenario, Milei no dudó: señaló a *todo* el sistema político con el dedo sin ahorrarse un solo adjetivo. Mediante una irónica torsión de la historia reciente, en sus actos la asistencia cantaba con fervor las estrofas del popular cántico con el que la multitud estalló en las jornadas insurrectas de diciembre del año 2001: *que se vayan todos, que no quede ni uno solo*.

Así, la categoría de *casta política* fue empleada durante la campaña electoral en un sentido lato, como un cuestionamiento a la dirigencia política en su conjunto; es decir, como una interpelación “antisistema”. En el ya mencionado contexto de crisis multidimensional, pretendía poner en debate los privilegios de “los políticos”, en contraste con una sociedad exhausta. A la vez, el concepto cumplía el rol de presentar a Milei como un *outsider* que vendría a cambiar el sistema desde afuera, descontaminado de sus vicios y brindando la garantía de no traer en sus espaldas compromisos con nadie.

Sin embargo, a partir del 10 de diciembre la *casta política* se fue develando como un abanico mucho más amplio de sujetos y mediaciones sociales. Ciertamente, la categoría siguió teniendo su epicentro más palpable en la dirigencia política –esencialmente: gobernadores, intendentes y legisladores–.⁴ Pero el concep-

⁴ Por si acaso hiciera falta comprobarlo, a esta altura ese argumento ya se ha revelado falaz. Pues Milei ha

to de *casta* pasó a desempeñar un rol mucho más potente: crear una *comunidad punitiva* o *de castigo* ante cualquier sujeto o mediación social que funcione por fuera de las reglas del “libre mercado”. Así, el beneficiario de un programa social, un profesional del sistema público de ciencia y técnica, o un cineasta independiente que recibe un subsidio estatal para rodar una película son todos presentados por los libertarios como miembros de una casta impune que vive del Estado. Es decir, son señalados con el dedo ante la sociedad como privilegiados que se apropian injustamente de los impuestos pagados por los “argentinos de bien”, quienes, por el contrario, se ganan la vida trabajando diariamente sin recibir la ayuda de nadie –o sea, ateniéndose a las “estrictas” leyes del mercado–.⁵ Por supuesto, la distribución de la saña no es equivalente, puesto que las organizaciones sociales y sindicales van primeras en la fila. El mensaje libertario es contundente: el que se organiza y pelea por un derecho, en realidad está buscando apropiarse del esfuerzo ajeno. Por eso merece un castigo. De ese modo, dos sensaciones complementarias se imponen como modo de vida a la población: la *crueledad* y la *incertidumbre*. El verdadero héroe es el *Robinson* que se las apaña solo; pues, lo sepa o no, su acción cotidiana es el germen de un modelo virtuoso de sociedad.

De esa manera, recuperando lo señalado más arriba acerca de las características principales del gobierno de Macri, en este caso la revancha de clase continúa, pero atravesando una mudanza de piel. De hecho, ya no se observa una obstinación centrada en CFK y su espacio político. Más bien, durante el gobierno de Milei el foco está puesto, de conjunto, en todas aquellas mediaciones que obstaculizan la tarea refundacional, o sea, la reconfiguración del paradigma societal. Esa es la razón por la cual más arriba acudimos a la expresión “argentinos de bien”, utilizada por Milei en su alocución la noche de su victoria en el ballottage. Muy distanciado de un mensaje ecuménico sobre la construcción de la convivencia democrática, el oficialismo actual establece una línea divisoria tajante entre quienes se adaptan a las reglas de la nueva Argentina y quienes insisten en seguir viviendo en un pasado que debe ser enterrado para siempre.

procedido a un evidente reciclaje de funcionarios y dirigentes provenientes de distintas administraciones anteriores. Así lo demuestran su ya mencionado ministro de economía Luis Caputo y la de seguridad Patricia Bullrich (ministra de trabajo en la presidencia de Fernando de la Rúa y de seguridad en la de Macri). Ha sucedido lo propio con una de las recientes incorporaciones al gabinete: Daniel Scioli (ex vicepresidente de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007, ex gobernador oficialista de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2015, con un breve paso como ministro de producción durante el mandato de Alberto Fernández, en el cual también ofició como canciller en Brasil). Esos son los ejemplos más emblemáticos, de una larga lista que podríamos confeccionar en el mismo sentido.

5 En este mismo sentido recomendamos la interesante nota de la socióloga María Pía López (2023), bajo el título “La trampa”, publicada en el diario *Página12*.

El horizonte del presidente, en resumidas cuentas, es eliminar todas las trabas que impidan el libre y virtuoso funcionamiento del mercado, bajo la hipótesis –presentada en su conferencia en el Foro de Davos– de que “el fallo del mercado es un oxímoron” (Casa Rosada 2024). Pero lo más importante, y donde seguramente reside la radicalidad de su utopía libertaria, es que esa ausencia de regulaciones estatales no la restringe a la esfera estrictamente económica, sino que debe ocurrir en absolutamente todos los campos de la vida social: trabajo, salud, vivienda, educación, cultura, ciencia, deporte, turismo, y la lista continúa. Como expresión paroxística de ello, Milei ha declarado en los medios que “el Estado es una organización criminal” (Rodríguez Yebra 2024).

La *utopía refundacional* de Milei, por lo tanto, es la de una sociedad (des) organizada por el *totalitarismo de mercado*. Y no parece estar envuelto en un mero juego verbal, sino dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por ese sentido utópico. El presidente argentino se comporta como un *cruzado*.

Conclusión: la persistencia de una peligrosa obsesión

Retornemos otra vez al comienzo de estas páginas, más concretamente a la descripción general del gobierno de Macri. Podríamos decir a esta altura que hay tres de sus características que se mantienen firmes en la gestión de Milei: el proyecto de nación excluyente, la ofensiva ideológica y cultural anti-igualitaria y la mentalidad neocolonial. Hagamos un breve repaso. Con respecto a la primera, los meses iniciales de gobierno libertario, megadevaluación y desregulación, han sido una muestra cristalina del intento de redistribución regresiva del ingreso y de debilitamiento de las principales mediaciones organizativas de los sectores populares (sindicatos y organizaciones sociales). En cuanto a la segunda característica, las usinas oficialistas en las redes sociales son una fiel demostración del odio descargado sobre los sujetos sociales que expresan las “fracturas internas” de la sociedad (inmigrantes, trabajadores excluidos, minorías sexuales o raciales, etc.); a punto tal que el presidente en primera persona no se priva de gratificar con sus *likes* la violencia que se pone de manifiesto en tales publicaciones. En tanto, la mentalidad neocolonial es un signo inequívoco de la administración Milei, quien ya ha afirmado la alianza estratégica que pretende construir con Estados Unidos e Israel. Su expresión más cabal fue el acto realizado en la ciudad de Ushuaia –ubicada en el geoestratégico extremo sur del país– junto a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en el cual sonó el himno estadounidense.

Como ya fue señalado en el apartado precedente, la revancha de clase no asume la misma forma bajo el gobierno de Milei que durante la gestión de Macri, en virtud de las diferencias de contexto, más específicamente de los momentos inmediatamente previos a sus respectivas asunciones presidenciales. En el caso de Macri, hablamos de una despedida exitosa del kirchnerismo de la Casa Rosada, sin una situación crítica de por medio en los distintos frentes de conflicto posibles (económico, político, social). Ello incitó al expresidente a desplegar una fuerte ofensiva contra el sector opositor referenciado en CFK, cuyos logros aún ostentaban un grado considerable de reconocimiento social. En contrapunto, cuando el líder libertario asume la jefatura de Estado, estamos en presencia de una crisis multidimensional, tras un gobierno peronista atravesado por peleas internas y que no pudo, no supo o no quiso mejorar las condiciones de vida de los sectores mayoritarios de la sociedad. Por lo tanto, Milei puede concentrar las energías en su objetivo estratégico: su utopía de refundación social.

Nos queda entonces el quinto elemento con el cual caracterizamos al macrismo: la relación de inmediatez entre Estado y clases dominantes. Creemos que en este punto es donde probablemente el contraste entre los gobiernos de Macri y Milei encuentre ciertas diferencias. Veamos por qué.

Al igual que en la gestión de Macri, en la de Milei también se puede observar un componente de funcionarios de las grandes empresas que desembarcan en la administración estatal. De hecho, el propio presidente, junto con su jefe de gabinete y el ministro del interior, provienen del grupo Eurnekian, perteneciente a uno de los empresarios más importantes del país, quien además integra el selecto club de magnates listados por el ranking *Forbes*. También se destacan en el mismo sentido los funcionarios provenientes del Grupo Techint, liderado por Paolo Rocca, entre quienes sobresale Horacio Marín, nuevo CEO de YPF (la petrolera con mayoría accionaria estatal), llegado a la gestión pública desde la empresa Tecpetrol.

Sin embargo, tal como fue indicado, al mismo tiempo que el perfil político del gobierno de Macri estuvo signado por el desarrollo de una ofensiva ideológica anti-igualitaria, ello convivió con una prédica tecnocrática que confiaba en la capacidad de los CEOs para armonizar el funcionamiento del Estado y gestionar eficientemente su maquinaria; lo que se esperaba que redunde en un país ordenado, de acuerdo con los parámetros característicos del ámbito privado. El dilema de un Estado hasta entonces manejado por los vicios de “la política” sería solucionado entonces por el arribo de “los mejores”, “los que saben”, “los profesionales”. Como contrapunto, en la administración de Milei las esperanzas depositadas en

las bondades de la técnica empresarial parecen haber perdido protagonismo. Si bien las metas macroeconómicas son deducidas a partir de razonamientos técnicos bastante dogmáticos y esgrimidas en base a un hipotético funcionamiento “racional” del mercado, su concreción es permanentemente tamizada en la esfera pública por la lucha contra la *casta política*, conducida y protagonizada por la propia figura presidencial.

Pero existe otro aspecto que consideramos decisivo a la hora de señalar las diferencias entre ambas experiencias de gobierno. El fracaso de Macri luego de su derrota con el peronismo en las elecciones de 2019, sumado al escenario de crisis que produjo la *disponibilidad social* hacia soluciones radicales, han ordenado al conjunto de las fracciones más poderosas de las clases dominantes detrás del gobierno de Milei. En el *establishment* local existe la sensación de estar ante una oportunidad que han esperado por mucho tiempo, y que, por lo tanto, no pueden desaprovechar. Empresarios como Paolo Rocca –de Techint– o Alejandro Bulgheroni –de Pan American Energy–, entre los más destacados, han salido a apoyar públicamente al gobierno, incluyendo advertencias a los legisladores en caso de no aprobar las leyes que el poder ejecutivo envíe al Congreso (*Perfil* 2024). El vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina hizo lo propio en una entrevista televisiva, enfatizando que la *única* alternativa a seguir por la sociedad es el *sacrificio* (LN+ 2024). Mientras tanto, en marzo los titulares del “Grupo de los 6” (las cámaras patronales más importantes del país: la Unión Industrial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y la Asociación de Bancos Argentinos) visitaron en conjunto la Casa Rosada para reunirse con el presidente y hacer público el apoyo a sus políticas (Maza 2024).

Ahora bien, el unánime respaldo del gran empresariado a Milei, deducible del carácter contundentemente pro-patronal y anti-popular de sus políticas económicas, no se explica si no es bajo el *fantasma* del fracaso de la experiencia macrista. El confort empresarial ante la composición social de los referentes y funcionarios del PRO (el partido comandado por Macri) era notorio, gracias a la procedencia ya sea gerencial-corporativa o aristocrática de sus integrantes. Pero con Milei el panorama ha cambiado. La Libertad Avanza es conducida por un líder extravagante y sus filas están compuestas por un elenco inexperto de cosplayers, tarotistas, twitteros rabiosos, *influencers* y *trolls* de las redes sociales, que ocupan tanto puestos de gestión en el ejecutivo como bancas en el ámbito legislativo. El empresariado no ha presentado mayores reparos frente a tal esce-

nario: el negacionismo, el hiperpresidencialismo, el destrato sin antecedentes a gobernadores provinciales y legisladores, así como el aventurerismo en la política exterior parecen resultarles asuntos menores. Súbitamente, el drama de las formas políticas ha desaparecido. Su *límite* es claro. La aversión provocada por la posibilidad de un nuevo fracaso de la derecha, que los obligue a lidiar otra vez con las intervenciones estatistas-populistas –aún bajo formas ostensiblemente moderadas–, ha permitido que, a los ojos de la clase dominante, *un personaje tan mediocre y grotesco represente el papel de héroe*. Y que, junto con él, desembarque en el Estado una versión actualizada al siglo XXI de la *Sociedad 10 de diciembre*.

Entonces, para concluir, más allá de estas últimas diferencias, sumamente relevantes en el campo político, sostenemos que el *nudo gordiano* que hilvana las presidencias de Macri y Milei se halla en su deseo común de cumplir con el objetivo inconcluso de las clases dominantes argentinas, o bien, saciar su *peligrosa obsesión*. No es una cuestión vinculada estrictamente a la tasa de ganancia. Nos referimos más bien a la constitución de un orden duradero en el tiempo que establezca, de una vez por todas, una férrea y estable relación de mando del capital sobre el trabajo, que acabe con la presencia estructural e idiosincrática de actores “corporativos” –políticos, sindicales, sociales– con poder de voto. Ese es el prisma bajo el cual consideramos que se debe leer la relación de Macri y Milei: la utopía refundacional libertaria del segundo viene a concluir, en un contexto más propicio, el trabajo iniciado por el “cambio cultural” del primero.

Pero el problema de esta obsesión circular de las clases dominantes locales radica en su peligrosidad. Pues su realización se propone terminar, de una u otra manera, con las barreras igualitaristas que aún sobreviven en la maltrecha sociedad argentina, tanto en su entramado institucional como en su tejido social.

Ciertamente, la historia nacional conoce bien de reconfiguraciones drásticas en su estructura económico-social. En todos los casos esas experiencias estuvieron manchadas con sangre. En función de ello, nos preguntamos: ¿Hasta dónde llegará Milei en el despliegue de su utopía libertaria? ¿Persistirán los apoyos indeclinables del empresariado si se sostiene y agrava la degradación social ejecutada en tan solo cuatro meses de gobierno? ¿Predominará ese respaldo en función de una mirada estratégica? ¿O comenzarán a brotar, de forma creciente, los intereses particulares de los distintos grupos y fracciones dominantes (exigencias de devaluación, liberalización sin límites de precios básicos, etc.)? ¿Qué respuestas ensayará el gobierno si recrudece el conflicto social?

Resulta imposible predecir lo que sucederá de aquí en adelante. Pero hay algo de lo que estamos seguros: si las clases dominantes se aglutinan para llevar esta

experiencia hasta el fondo de las cosas, el contenido a futuro de las formas de dominación política es bastante previsible. No hace falta ser marxista para saber que la violencia es la partera de la historia.

Bibliografía

- Ámbito. 2023. “Mauricio Macri: ‘La Argentina está entrando en un cambio de era’”. Ámbito, 13 de agosto. <https://n9.cl/m9inx>.
- Boletín Oficial. 2023. “Decreto 70/2023”. *Boletín Oficial de la República Argentina*, 20 de diciembre. <https://n9.cl/hapzfb>.
- Canelo, Paula Vera, Ana Gabriela Castellani, y Julia Natalia Gentile. 2018. “Articulación entre élites económicas y élites políticas en el gabinete nacional de Mauricio Macri (2015-2018)”. En *Élites y captura del Estado. Control y regulación en el neoliberalismo tardío*, compilado por Daniel García Delgado, María Cristina Ruiz del Ferrier, y Beatriz de Anchorena. Buenos Aires: FLACSO.
- Casa Rosada. 2024. “Palabras del Presidente de la Nación, Javier Milei, en la 54ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en Davos”. *Casa Rosada* [sitio web], 17 de enero. <https://n9.cl/veixn>.
- Cuesta, Micaela, Pablo Villarreal, Sergio Fasán, Mora Spatz, Yair Arce, y Andrés Schragger. 2023. *Radiografía socioeconómica, política e ideológica del Área Metropolitana de Buenos Aires en la coyuntura actual*. Documento 1, febrero. EIDAES-UNSAM. <https://n9.cl/7cp3b>.
- El Cronista. 2023. “Macri pronosticó que irán a segunda vuelta con ‘Milei’ y envió un mensaje a Larreta”. *El Cronista*, 12 de abril. <https://n9.cl/iy72ob>.
- ElDiarioAR. 2023. “Milei sobre Bullrich: ‘Es una montonera tirabombas que tiene las manos manchadas de sangre’”. *ElDiarioAR*, 7 de octubre. <https://n9.cl/yxz61>.
- Infobae. 2017. “González Fraga: ‘Le hicieron creer a un empleado medio que podía comprarse celulares e irse al exterior’”. *Infobae*, 2 de diciembre. <https://n9.cl/gn8gh>.
- Klein, Naomi. 2007. *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*. Barcelona: Paidós.
- LN+. 2024. “¿Cómo ven los empresarios la economía de 2024? Marcos Pereda con Carlos Pagni”. *La Nación* [Entrevista], 18 de marzo. Canal de YouTube: <https://n9.cl/dypyo>.
- López, María Pía. 2023. “La trampa”. *Página 12*, 29 de diciembre. <https://n9.cl/3dr8zm>.
- Macri, Mauricio. 2022. *Para qué. Aprendizajes sobre liderazgo y poder para ganar el segundo tiempo*. Buenos Aires: Planeta.
- Maza, Agustín. 2024. “Los empresarios del G6 expresaron a Milei su apoyo al rumbo oficial, pero admitieron su preocupación por la recesión”. *Infobae*, 22 de marzo. <https://n9.cl/zkwwga>.
- Méndez, Pablo Martín. 2023. “La formación del neoliberalismo argentino a través de Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray y Alberto Benegas Lynch (1955-1973). *Redes*

- transnacionales, batalla de ideas y refundación de la Nación”. *Studia politicae*, 59: 123-156.
- O’Donnell, Guillermo. 2009. *El Estado burocrático-autoritario*. Buenos Aires: Prometeo.
- Página12. 2023. “Asunción presidencial: el texto completo del discurso de Javier Milei”. *Página 12*, 10 de diciembre. <https://n9.cl/7m99y>.
- Perfil. 2024. “Alejandro Bulgheroni respaldó a Milei: ‘Está haciendo lo mejor que se puede hacer’”. *Diario Perfil*, 23 de marzo. <https://n9.cl/faor5>.
- Rodríguez Yebra, Martín. 2024. “Un talibán en el engorroso laberinto de la política real”. *La Nación*, 13 de abril. <https://n9.cl/voqwt>.
- Tzeiman, Andrés. 2017. *Radiografía política del macrismo. La derecha argentina: entre la nación excluyente y el desafío democrático*. Buenos Aires: Caterva.
- _____. 2023. “Cambiamos. La tensa relación de la derecha con la democracia y el malestar de la crítica en los estudios políticos”. En *Los lentes de Víctor Hugo: transformaciones políticas y desafíos teóricos en la Argentina reciente*, compilado por Eduardo Rinesi y Andrés Tzeiman. Los Polvorines: UNGS.
- Villarreal, Pablo y Ezequiel Ipar. 2023. “Las formas de la anti-política y sus causas en la coyuntura argentina pos-pandemia”. *Revista Argentina de Ciencia Política*, 1 (30): 81-108. <https://n9.cl/ze4hl>.
- Wainfeld, Mario. 2017. *Kirchner, el tipo que supo*. Buenos Aires: Siglo XXI.



Contenido

Artículos

- 01** La Nueva Gobernanza Pública: un panorama conceptual
Luis F. Aguilar Villanueva
-
- 02** La corrupción judicial en América Latina: Ecuador en perspectiva comparada
Santiago Basabe-Serrano
-
- 03** Eficiencia de la educación secundaria en México, 2010-2017: Un estudio a nivel municipal a través del análisis de la envolvente de datos
Odette Virginia Delfín Ortega, José César Lenin Navarro Chávez, Giovani Cardona Martínez
-
- 04** Conflictos por agua de baja intensidad: Un caso de estudio en Aguascalientes (México)
Hime del Carmen Redin Morales, Alejandra García, Raúl Pacheco-Vega
-
- 05** Cambios en las sociabilidades entre pobres urbanos brasileños (1964-2016)
Ana Beraldo
-
- 06** Plataformas digitales y formalización laboral. El trabajo doméstico remunerado en Argentina durante la pandemia
Lorena Poblete, Ania Tizziani, Francisca Pereyra

Ensayos

- 07** Vejez y políticas públicas en Latinoamérica: una revisión de la literatura
Ariany da Silva Villar, Sara Caro Puga, Herminia González Torralbo

Reseñas

- 08** Rebeldía (inteligente) contra la panicofilia, de Santiago Cambero Rivero
Por Alfonso Vázquez-Atochero
-
- 09** Ensayo para después del naufragio, de Francisco Valdés Ugalde
Por Armando Chaguaceda

Entrevistas

- 10** Si las leyes no benefician a todas, no benefician a ninguna. Entrevista a Lucía Núñez Rebolledo
Chloé Constant



La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina

Ariel Goldstein*

Resumen

La consolidación política y electoral en los últimos años de partidos y líderes de derecha radical en América Latina ha colaborado en el proceso de internacionalización que conectó estas fuerzas políticas con expresiones semejantes en Europa y Estados Unidos. Estos grupos, que durante la Guerra Fría ocultaban su coordinación internacional, pues estaba dirigida a tácticas de represión contra la izquierda para la defensa del *statu quo*, hoy defienden abiertamente su asociación bajo el lema de "Dios, patria y familia". Este artículo tiene como propósito indagar en la conformación de estas redes internacionales y en particular en el papel que el partido español Vox desempeña con respecto a América Latina.

Introducción

Este artículo analiza el desarrollo y las características de las redes internacionales de derecha radical en los últimos años, en particular en lo referido a la incidencia que las mismas han tenido sobre América Latina. Para ello nos hemos basado en una investigación sobre el tema iniciada en 2018, que ha significado la realización de entrevistas a líderes y referentes políticos que participan en estas redes.¹

Como antecedente, a principios de siglo XIX se había configurado en Europa la Santa Alianza con Metternich, con el propósito de reestablecer los principios monárquicos y contener el ímpetu revolucionario iniciado en Francia de 1789. Otro antecedente más cercano ocurrió durante el siglo XX, con la influencia europea sobre América Latina de los principios de la hispanidad, reivindicados por los regímenes autoritarios de Franco en España y Salazar en Portugal (Goñi 1998).

Estados Unidos ejerció una influencia decisiva durante la Guerra Fría sobre las redes de derecha en América Latina, en particular luego de la Revolución

* Investigador Adjunto del Conicet, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Profesor de Política Latinoamericana en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y en la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires).

1 Al respecto, hemos escrito de forma más extensa en el libro *La reconquista autoritaria* (2022).

Cubana. Uno de los antecedentes en esa operatoria fue el golpe en Guatemala de 1954 al presidente Jacobo Árbenz, el cual contó con el financiamiento estadounidense a mercenarios dirigidos por el militar Castillo Armas. A su vez, la *Liga Anticomunista* tenía en Paraguay un punto privilegiado de funcionamiento. Bajo la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), la Operación Condor aglutinaba a las dictaduras para la persecución y el asesinato de dirigentes políticos de izquierda, como han investigado Calloni (1999) y Winer (2015).

Durante el siglo XX, las extremas derechas han mostrado en la región una estrecha colaboración en las tácticas de represión a los opositores políticos y en la defensa del “anticomunismo”. Por sus restricciones en la vía democrática, estos grupos se encontraban muy ligados a las intervenciones militares. Sin embargo, el siglo XXI se ha caracterizado por el desarrollo en la derecha latinoamericana de partidos, movimientos y/o liderazgos populares, capaces de ganar elecciones. Frente a una izquierda que ha abandonado la vía revolucionaria para la toma del poder, abrazando los principios democráticos, los primeros años del siglo XXI dieron lugar al surgimiento de propuestas de una derecha partidaria y democrática en la región. Sin embargo, esto se ha modificado en los últimos años, entre otras causas, debido al cambio en la comunicación relacionado con la emergencia y la centralidad que han adquirido las redes sociales en el desarrollo de los procesos políticos.

A su vez, la obtención de triunfos electorales en los últimos años por parte de la derecha radical en Estados Unidos (2016), Brasil (2018), Italia (2022) y Argentina (2023); la consolidación de su fuerza en los gobiernos de Hungría, Israel y Polonia; así como su crecimiento electoral y político –a pesar de no haber obtenido aún victorias que los lleven al gobierno– en Chile, España, Rumania, Portugal y Alemania, ha significado también un mayor desarrollo de sus redes internacionales.

Se trata de fuerzas que años atrás ocupaban espacios marginales, o que ni siquiera existían, con la excepción de los países de Europa Central y del Este, como Hungría (desde 2010) y Polonia (desde 2015), donde han tenido experiencias duraderas en el poder. Esto se explica por las particulares condiciones de Europa del Este y Central, donde la izquierda quedó asociada al autoritarismo y la represión de los partidos comunistas que gobernaron bajo el influjo de la URSS. O, en el caso de Israel, se explica por la permanente explotación del conflicto militar árabe-israelí en función de la manipulación política de la extrema derecha (Zertal 2010).

Si bien tiene antecedentes, este abierto *internacionalismo reaccionario*, parecía una práctica propia de las izquierdas comunistas y trotskistas –con sus I, II y III

Internacionales– que de las extremas derechas. Durante el siglo XX, mientras que por su prédica internacionalista del marxismo las izquierdas hacían visible su articulación, las derechas conservadoras tendían a establecer redes de forma secreta, en función de la efectividad de sus objetivos represivos y antidemocráticos, como lo fue la *Operación Cóndor*. Por otra parte, si bien había en el pasado influencias recíprocas, el nacionalismo chauvinista que caracterizaba a las derechas radicales parecía impedirles la formación de estas asociaciones, al punto que algunos académicos señalaban la imposibilidad de una “internacional populista” (Casullo 2019). A modo de ejemplo, durante el siglo XX las dictaduras de Argentina y Brasil, a pesar de compartir objetivos de represión a la izquierda, competían en el plano militar y mantenían abierta la posibilidad de una confrontación bélica como hipótesis de conflicto (Lederman 2015).

La derecha radical tiene su especificidad en América Latina, que la distingue de la derecha radical europea (Zanotti y Roberts 2021). En particular en lo referido a la cuestión de la migración, con mayor peso en el contexto europeo. Los autores sostienen que mientras en Europa prevalece el discurso anti-inmigración, en América Latina lo más importante lo constituye la defensa de valores religiosos y tradicionales; por lo tanto, presentan los ataques a grupos LGTB y la defensa de valores tradicionales como algo específicamente latinoamericano, aunque esto está enraizado también en Europa del Este.

Sin embargo, estas diferencias no han sido obstáculo para la conformación de redes internacionales. Lo que tratan de crear estos grupos es una “cultura común” para convocar y expandir sus lazos a nivel regional y/o global (Blee et al. 2024). El crecimiento de estas fuerzas políticas ha implicado el fortalecimiento de esas redes a nivel global.

La dimensión transnacional ha sido establecida como un aspecto clave para la comprensión de las derechas latinoamericanas (Cannon 2016). Estos fenómenos fueron estudiados en los últimos años desde una perspectiva que principalmente manifestaba sorpresa frente a su crecimiento y buscaba la explicación en el descontento político, la polarización y la crisis de los partidos. Sin embargo, faltan nuevos enfoques, con otras perspectivas, como desde las agencias de inteligencia estadounidenses presentes en los encuentros de la Fundación Disenso de Vox.

La crisis geopolítica global, que implica un retroceso de Estados Unidos y el ascenso de Rusia y China, lleva a un retorno en Norteamérica de posiciones aislacionistas que recuperan la herencia de Henry Ford y Charles Lindbergh, confrontando con lo que estos grupos denominan como “globalismo”. Esto supone una corriente nacionalista y conservadora que rechaza los principios del

multiculturalismo y la confianza en los organismos internacionales que imperaban desde la caída del Muro de Berlín. En este contexto, las derechas radicales participan en instituciones internacionales como la ONU y el Foro de Davos, pero las utilizan como vidriera para predicar sus teorías conspirativas contra el globalismo. Por el momento, este enfoque de redes de las derechas a nivel global-latinoamericano ha sido estudiado por Sanahuja y López Burian (2022), quienes desarrollaron el concepto de “derechas neopatriotas”.

En este artículo se analiza el peso de Vox en la configuración europea y sus aliados en la política latinoamericana; también, casos específicos como el de Milei en Argentina y el bolsonarismo en Brasil.

Ideas, propaganda e imaginarios de Vox en América Latina

Las derechas radicales de América Latina han crecido en los últimos años, siendo expresión de esta consolidación los liderazgos de Javier Milei, José Antonio Kast y Jair Bolsonaro. Para ellos, las mayores influencias han sido el Partido Republicano de Estados Unidos en su versión trumpista, así como la Fundación Disenso del partido español Vox. Si bien este último no ha obtenido a nivel nacional o europeo triunfos resonantes, sirvió como modelo e influencia cultural y política a partidos y líderes de América Latina. Ha permitido a líderes regionales que ocupaban posiciones marginales en la política de sus respectivos países formar parte de redes que les sirvieron como vidriera para proyectar sus carreras políticas en el plano local e internacional.

Vox ha desarrollado con respecto a Latinoamérica una serie de *ideas propaganda* que le sirven para construir una “cultura común” entre las derechas radicales de la región, a la vez que aumenta su prestigio e influencia sobre ellas y en el escenario internacional.

Por un lado, se encuentra la defensa de lo que llaman la “hispanidad”, relacionada con un legado formulado a partir de la influencia del ex embajador en Argentina y pensador conservador Ramiro de Maeztu. El periódico de Vox, *La Gaceta de la Iberosfera*, ha adoptado el lema de este autor “ser es defenderse”. Esto supone la recuperación del legado de Francisco Franco, quien orientó a España en su política exterior sobre la base de la idea de la hispanidad y que asociaba al país con una “nación católica”, inspirado también en el legado del falangista Primo de Rivera.

Vox quiere recuperar esta representación de España como “nación católica” que lleva y expande su prédica conservadora sobre sus ex colonias. En oposición

a Napoleón y a Francia, que denominaba a esta región como América Latina, España se pronunciaba por la denominación de Hispanoamérica (Rouquié 1990).

La principal iniciativa de Vox hacia América Latina es la “Carta de Madrid”, un documento que señala que la región y las democracias se encuentran en peligro por causa del “comunismo”. Parece repetirse aquí el libreto de la Guerra Fría que proclamaba por una “democracia sin comunismo” (Winer 2015). Sin embargo, la Carta es suficientemente amplia en su perspectiva como para recoger la mayor cantidad de firmas. La característica de Vox, visible en las firmas a la misiva, es que ha apuntado a establecer alianzas con los liderazgos de las derechas radicales como Kast, Milei y Bolsonaro, descalificando como una “derechita cobarde” a los tradicionales aliados del Partido Popular en la región, como Mauricio Macri y Sebastián Piñera. En este sentido, ha sabido encontrar un espacio vacante para explotar y acumular a nivel político –en un momento donde las derechas radicales, salvo en Brasil con Bolsonaro–, no tenían tanto peso político y electoral; y cuando se ve a la derecha tradicional retroceder en América Latina, siendo desplazada por los liderazgos radicales, lo cual fortalece la propuesta de Vox.

Unido a esta idea de la hispanidad se encuentra la definición de la *Ibersfera* como un “espacio de influencia” que abarca desde el mundo hispano de Estados Unidos hasta América Latina, en tanto se comparte un idioma (negando las tradiciones de los pueblos originarios, así como el mundo lusófono de Portugal y Brasil).²

El principal articulador de Vox en América Latina es Hermann Tertsch, quien en las entrevistas realizadas para nuestro libro *La reconquista autoritaria* ha sido referenciado por firmantes de la *Carta de Madrid* como el principal designado para la región.

Su padre, Ekkehard, fue jefe adjunto de la delegación de prensa de Hans Lazzar, propagandista del nazismo en España. La participación de Hermann como corresponsal del periódico progresista *El País* en Europa Central y del Este le produjo un rechazo visceral por el socialismo real, lo cual lo fue aproximando con las posiciones de la derecha radical. Su estadía en Europa Central y del Este le brindó contactos con el mundo de las derechas de Hungría y Polonia, países que lo han premiado con distinciones por defender a sus gobiernos.

El carácter medular que desempeña Tertsch en esta cuestión evidencia la estrategia de Vox hacia América Latina, que consistiría en producir un acercamiento

² Este parecía interesar especialmente cuando estaba en el poder Jair Bolsonaro.

entre las derechas radicales de Europa (Hungría / Polonia) y América Latina en su rechazo al socialismo, el comunismo o cualquier expresión de izquierda. Esto también ha sido expresado en foros del partido por otros miembros, como Alejandro Chafuen o María Fernanda Cabal. En este sentido, Chafuen, ex director de Atlas Network, ha señalado que:

Tenemos que crear nuevas redes de apoyo y nuevos centros que se enfoquen en temas de estrategias, procesos, en tomar e infiltrar instituciones. Quizás no podemos evitar que sigan existiendo, pero podemos potenciar algunas o neutralizar a otras. Eso es lo que hizo el enemigo. Hoy tenemos redes liberales en Latinoamérica donde nos miran a nosotros, liberales que damos respeto a las ideas conservadoras, y nos miran a nosotros como el enemigo. [...] Tenemos que replicar esta experiencia a nivel regional y buscar aliados. Eso es lo que ha hecho el enemigo. Donde es más posible que podamos encontrar aliados es en Europa Central y Europa del Este, donde es más viva la memoria del fracaso y de los horrores del socialismo.³

Para Cabal, así como para el presidente argentino Javier Milei, la disyuntiva pasa por “recuperar sus lazos con Occidente y poner a Dios primero o morir” (Cano 2024).⁴ Sin embargo, por el momento el éxito de esta iniciativa parece limitarse a la presencia de polacos y húngaros de posiciones de derecha radical en sus encuentros.

La idea de la reconquista se vincula con las teorías conspirativas de la derecha radical y la extrema derecha sobre el “dominio comunista del mundo” referidas a que “el poder está en manos de los otros”, así como a la búsqueda por recuperar los lazos coloniales que sostenía España desde 1492 hasta la independencia de las naciones americanas. A su vez, esto se engarza con la teoría conspirativa de que los medios y las universidades estarían en manos del comunismo y el “marxismo cultural”. Esta idea ha sido enfatizada también por Marión Maréchal Le Pen, cercana a Vox con el instituto ISSEP, quien llama a “la reconquista de Francia y Europa” para su partido Reconquista junto al periodista Eric Zemmour.⁵ Georgia Meloni, estrecha amiga de Vox y Abascal⁶ –ya que en el Parlamento Europeo

3 Cumbre de Vox, EuroLat 2021. Día 1, 15 de junio de 2021.

4 Este tipo de discurso es similar a aquel señalado por Milei en Davos (2024), cuando dijo que Occidente estaría en peligro por causa de que las elites globales han abrazado el marxismo.

5 “Meeting de lancement de campagne des Européennes 2024”, Reconquete!, Canal YouTube Union nationale. 20.03.2024.

6 Santiago Abascal es un político español, nacido en Bilbao. Abascal inició su carrera política en el Partido Popular (PP), donde se desempeñó en diversos cargos antes de desvincularse en 2013 debido a desacuerdos con la dirección del partido en el País Vasco. Luego se unió a Vox.

comparten el grupo de Conservadores y Reformistas– también se ha hecho eco de esta idea de reconquista en sus discursos.

Otro de los ejes del discurso de Vox hacia América Latina lo constituye la denuncia del “narcocomunismo”: con esa idea presentan las propuestas de los grupos de izquierda como asociadas al narcotráfico, y por lo tanto, como enemigos, por estar vinculados a la criminalidad. Esta concepción se encuentra ligada con la era de los conflictos de “baja intensidad” y con la amenaza del narcoterrorismo para la seguridad nacional definida por Estados Unidos (Winer 2015). En este caso, la innovación tiene que ver con asociar esas “amenazas” con la izquierda en la definición de “narcocomunismo”.

Luego de la derrota del partido Ley y Justicia y la vuelta de Donald Tusk al gobierno polaco, Hungría recuperó un lugar exclusivo en la inspiración de las derechas radicales de Europa. Entre las iniciativas, Orbán ha abierto en Madrid una sede de su *Centro de Estudios Fundamentales*, que en Hungría es dirigido por Miklós Szánthó y en España por Vajk Farkas, un diplomático condecorado del país ibérico y experimentado político del gobierno de húngaro, quien advierte contra la toma del mundo por lo *woke* y el “neo marxismo” (Farkas 2024). Durante la inauguración de ese centro, Farkas señalaba lo siguiente:

Lo que está fallando en la derecha política es la internacionalización [...] Creo que la necesidad de que las fuerzas patrióticas cooperen internacionalmente se ha hecho manifiesta –y está creciendo– [...] Sin embargo, necesitamos una mayor conciencia de que debemos dejar de lado nuestras diferencias y fortalecer nuestro apoyo mutuo, ya que tenemos muchos valores e intereses importantes en común (Fantini 2024).

Al igual que Vox, para pensar esta tarea de internacionalización de la derecha, Farkas toma el concepto de Iberosfera. Otro personaje que talla en este vínculo entre Vox y Hungría es Rodrigo Ballester, director de Relaciones Internacionales del Mathias Corvinus Collegium (MCC), una universidad creada por Orbán con el propósito de expandir el pensamiento conservador y de derecha en el mundo. Ballester denomina a Hungría como “el laboratorio conservador de Europa” (*Voz Media* 2022).

Otras instituciones que parecen vinculadas desde Estados Unidos con Vox son el Instituto Republicano Internacional (IRI) y Texas Public Policy Foundation. El IRI ha recibido distintas acusaciones por injerencia en países como Haití, así como por promover candidatos y partidos de derecha con dinero del Departamento de Estado norteamericano. También ha participado en estos foros David Hatchwell, presidente de la Fundación HispanoJudía de España, quien

señala que “el antisemitismo brota en España de una izquierda radical” (2017). También, Liliana Smiech del “think tank Warsaw Institute”.⁷

Muchos de estos institutos han participado del programa *Jóvenes Líderes de la Iberosfera*, que consiste en una beca de la Fundación Disenso (Vox) a jóvenes de la derecha radical latinoamericana para su participación en reuniones del Warsaw Institute, Mathias Corvinus Collegium y el partido *Reconquista* de Zemmour. Este programa evidencia la propuesta de Vox de acercar las experiencias de la derecha radical europea a la región latinoamericana.

En estas redes también tiene un papel el instituto New Direction, apadrinado por la primera ministra de Italia Giorgia Meloni, quien preside el grupo del Parlamento Europeo de los Reformistas y Conservadores (ECR), integrado por Vox y Ley y Justicia (Polonia). También forma parte de estas redes la Universidad CEU, de San Pablo, de tendencia católica y conservadora, que cuenta con seminarios como aquel sobre “Víctimas del comunismo” (2023) del cual ha participado con una ponencia la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel.

Una de las colaboraciones de los últimos tiempos es aquella entre la Fundación Disenso y la Heritage Foundation (2024), que han coorganizado un evento llamado “libertad y soberanía”. El mismo contó con políticos de la derecha radical húngaros y españoles. Estos encuentros, donde se repiten siempre los mismos personajes, dan la pauta sobre la existencia de una red internacional.

En este sentido, Vox apunta a ocupar un lugar como traductor entre ambos mundos de las derechas radicales: el de Polonia-Hungría, con su historia de rechazo al socialismo y la Unión Soviética, y las nuevas derechas radicales que emergen en América Latina.

No es posible soslayar la presencia en los últimos años de Israel en estas redes. La política exterior de Netanyahu se ha encargado especialmente de promover un acercamiento con Bolsonaro, Milei, Trump y Vox. En particular, la presencia de ese país brinda al discurso extremista de derecha de un “manto inmaculado” para sus violencias contra el enemigo, ya que su apoyo aporta la idea de que cualquier crítica a sus posturas estaría representada por el “antisemitismo”, el “terrorismo” y una repetición del Holocausto. A modo de ejemplo, en el festival de Vox del año 2024 se produjo la participación de Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora del gobierno israelí, alineado con el partido Likud del primer ministro Netanyahu. De este modo, en una reapropiación conservadora sobre el Holo-

⁷ Hemos tenido una entrevista con Smiech, donde negó cualquier vínculo político con la derecha radical. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues los múltiples entrevistados del curso *Jóvenes Líderes de la Iberosfera*, así como los eventos de Vox cuentan con la presencia de su think tank, Warsaw Institute.

causto, se intenta asociar de forma acrítica a la izquierda con el antisemitismo y se pretende borrar el vínculo entre el fascismo clásico y la extrema derecha actual.

La convención *Europa Viva 24* contó también con la presencia en primera fila de Matt y Mercedes Schlapp –organizadores de la Conferencia de Acción Política Conservadora de Estados Unidos– así como de Farkas. Este evento, que Vox ha denominado como “la casa común de la derecha”, fue utilizado por Abascal para llamar a la conformación de una alianza global” (*La Gaceta de la Iberosfera* 2024).

A su vez, las intervenciones de Vox en América Latina tienen un punto fuerte en criticar a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, así como en equiparar los mismos con cualquier propuesta de izquierda. De hecho, cuando se analiza la Carta de Madrid, muchas de sus firmas están vinculadas con estos tres países, en lo referido a grupos de exiliados que reclaman por el autoritarismo de estos gobiernos. En este sentido, se debe destacar la articulación de Vox para recibir a estos grupos de personas exiliadas en el núcleo del partido. Esto está principalmente conducido por Rocío Monasterio, una cubana española, cuya familia fue expropiada por el gobierno de Fidel Castro, y que resulta una de las principales figuras de Vox en la Comunidad de Madrid.

La idea de Santiago Abascal, como del CEO de X, Elon Musk, supone que aunque haya caído el Muro de Berlín se trata de un “comunismo de nuevo tipo” que se inserta de forma cultural en las instituciones y los gobiernos.⁸

Bolsonaro y Milei en la internacional reaccionaria

En los últimos años, se han revelado conexiones entre la derecha trumpista de Estados Unidos y el bolsonarismo. Ambos procesos políticos tienen semejanzas. Las apelaciones a la cuestión religiosa en asociación con las iglesias evangélicas conservadoras, así como la difusión de teorías conspirativas a través de las redes sociales constituyen un aspecto que demuestra el vínculo. La visión mesiánica de sus líderes como “elegidos por Dios” para realizar sus tareas gubernamentales presenta profundas similitudes.

También, la radicación de bolsonaristas en Estados Unidos, como el bloguero Allan Dos Santos y la diputada por San Pablo y dirigente del movimiento Nas Ruas, Carla Zambelli. Por otra parte, la organización del atentado golpista de enero de 2023 en Brasilia tuvo un apoyo desde ciudades de Estados Unidos

⁸ Discurso de apertura de Abascal en las jornadas Libertad y Soberanía en conjunto con Heritage Foundation, abril 2024, Youtube, Canal de Vox.

donde se llamaba a la movilización a través de WhatsApp (Pires 2023). En 2023, Eduardo Bolsonaro mantuvo ciento veinticinco reuniones con miembros de la extrema derecha estadounidense, incluyendo a grupos como The Heritage Foundation, Conservative Caucus, Cato Institute y Alliance Defending Freedom (Scofield 2024).

Durante la presidencia de Bolsonaro, Netanyahu realizó una visita especial a Brasil para su asunción, y nombró como embajador político al militar del Ejército Yossy Shelley, destinado a establecer vínculos con las iglesias evangélicas (Ninio 2019). También, es posible destacar los vínculos de la familia Bolsonaro con la derecha radical húngara, es así que el hijo del ex presidente, Eduardo, quien tiene una importante influencia en el plano internacional, ha tomado este modelo para su país.

Por otra parte, la asunción de Javier Milei en diciembre del 2023 se transformó en un punto de encuentro al cual acudieron las figuras más relevantes de la derecha radical a nivel internacional: Santiago Abascal, Eduardo Verástegui,⁹ José Antonio Kast¹⁰ y Alejandro Chafuen, ex director de Atlas Network.

También, se pudo ver a líderes jóvenes de la derecha peruana, como Alejandro Cavero y Alejandro Muñante. Uno de los aspectos más significativos resulta del hecho de que, en la *Carta de Madrid* la mayoría de las firmas son de Perú, así como que este es el único país donde todos los partidos de la derecha han firmado el documento.

En ocasión de asistir a la toma de posesión de Milei, Abascal había señalado que:

Creo que el triunfo de Milei tiene un impacto no solo nacional en la Argentina o regional en Iberoamérica sino un impacto internacional. Y tiene que ver precisamente con la batalla cultural, porque Milei contribuye no solo en el fondo sino probablemente en la forma, con un estilo muy contundente, descalificador del oponente izquierdista y del que ha dejado en la Argentina en esta situación (Pellet Lastra 2023).

Un importante político de Vox, Javier Ortega Smith, había señalado sobre el partido de Milei, *La Libertad Avanza*: “Creo que lo que recogieron desde Argentina es la experiencia de nuestro grupo a la hora de plantarles la batalla política y cultural al sistema establecido y a la extrema izquierda” (Artusa 2023).

Durante su papel como diputado, uno de los únicos proyectos presentados por Milei fue sobre la liberación de los judíos argentinos que eran rehenes de

⁹ Líder del Movimiento católico conservador “Viva México”.

¹⁰ Líder del Partido Republicano de Chile.

Hamás en el conflicto palestino israelí. Sin embargo, este fue criticado por referentes de Vox que se reconocen en una matriz católico nacionalista, como Raúl Tortolero, colaborador en el periódico *La Gaceta de la Iberosfera*, quien sobre Milei –con el cual ha compartido eventos como el Congreso Iberosfera de Monterrey en 2022– señala:

La Nueva Derecha es, en resumen, el retorno de Dios a la cultura, y nos basamos en un criterio de valores cristianos. No estamos de acuerdo con un liberalismo sin contrapesos, desbocado, ni nos hincamos ante la escuela de Austria. [...] Su aparente conversión al judaísmo no sabemos a qué responde” (Entrevista personal a Raúl Tortolero, 28 de noviembre de 2023).

En los últimos años, la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), organizada por Mercedes y Matt Schlapp en Estados Unidos, nacida en el espectro más conservador del Partido Republicano, comenzó a realizar encuentros de forma regular en otros países. En este sentido, se realizó una en México (2022) –organizada por el actor Eduardo Verástegui– y en varias ocasiones en Brasil –llevada allí por el hijo del ex presidente Bolsonaro, Eduardo–. En 2024, el eslogan de la primera reunión CPAC realizada en Estados Unidos fue “aquí muere el globalismo”¹¹ y contó con la participación de Nayib Bukele y Javier Milei, como sus estrellas latinoamericanas en el ascenso del firmamento de la derecha radical global.

En el caso de Javier Milei y Victoria Villarruel –representantes de una alianza entre sectores libertarios y nacionalistas religiosos–, cuando ambos eran políticos marginales de Argentina Vox les proveyó de una pertenencia, relaciones internacionales y la participación en eventos globales. A cambio, fueron adquiriendo la tónica de estos encuentros organizados alrededor del lema “Dios, patria y familia”. Como ha señalado el propio Milei:

Uno tiene que ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Por lo tanto, era un imperativo moral participar en el evento, pues además es un gran amigo, es un gran ser humano (Benito 2024).

El escritor de su biografía y quien reivindica la dictadura, Nicolás Márquez, ha adquirido popularidad junto al politólogo Agustín Laje con la publicación de su libro *El libro negro de la izquierda*; además, ha participado del CPAC Brasil en 2023, invitado por Eduardo Bolsonaro.

¹¹ “Where globalism goes to die”, fue el lema del de la Conferencia de Acción Política Conservadora, *Infobae* 2024.

La red Atlas Network, que años atrás expresaba un giro hacia el centrismo y las críticas a la derecha radical, hoy expresa un nuevo alineamiento con gobiernos como el de Milei, y algo similar sucede con la Fundación Libertad de Rosario.¹²

El panel “Voces de libertad contra la izquierda criminal” organizado por Vox en España (2024) contó con la presencia del secretario de Culto de Argentina, Francisco Sánchez. Éste llamó a recuperar los valores españoles de 1492 en América Latina, así como habló contra el divorcio, el aborto y el matrimonio igualitario señalando que “los conservadores nos aferramos a lo poco que nos dejan” (*La Nación* 2024).

Un aspecto interesante es que, en su conflicto con Pedro Sánchez, la Oficina del presidente Milei acusó al primer ministro español de que:

Ha puesto en riesgo la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas que sólo traen pobreza y muerte.¹³

No hay que descartar que uno de los propios líderes de Vox, Santiago Muzio –un abogado argentino que es director del centro ISSEP, sede Madrid,¹⁴ y quien ha escrito un artículo con un perfil similar en *La Gaceta de la Iberósfera*– haya expresado esa declaración (Muzio 2024). El programa de Liderazgo y gobierno del ISSEP se propone “Estudiar los procesos que han conformado la civilización occidental en general y la Hispanidad en particular”¹⁵ en un alineamiento ideológico claro con Vox. El plantel del ISSEP se encuentra constituido en su mayoría por profesores de la Universidad CEU, San Pablo, y de la Universidad de Navarra. También se incluye como profesor a Eduardo Bolsonaro.

Milei se sostiene en una prédica neoliberal radical en un contexto posterior a la caída del Muro de Berlín, la cual García Linera ha denominado como el “neoliberalismo zombie” para referirse a estos fenómenos, en tanto predicán neoliberalismo radical cuando ya ha pasado el clima del Consenso de Washington, por lo tanto debemos decir que el presidente argentino se sostiene en esta internacional reaccionaria, en la cual encuentra anclaje.

12 Mientras en el año 2023 Milei no había asistido a su cena al denunciar que allí se congregarían los miembros de la “casta”, en 2024 fue su principal orador.

13 Comunicado Oficial Número 41. Oficina del presidente, 3 de mayo de 2024.

14 Este centro fue fundado por Marion Marechal Le Pen en Madrid.

15 Ver: Sitio web, ISSEP, V Programa de “Liderazgo y gobierno”.

El conflicto entre Sánchez y Milei, a raíz de sus declaraciones en Europa Viva 24, refleja bien el tipo de operaciones conjuntas entre Vox y el presidente argentino. Primero, se instala un conflicto y luego, miles de cuentas en redes sociales de ambos países salen a respaldar su mensaje contra el presidente español; lo que muestra que este tipo de operatorias e intervenciones tienen un papel central en la articulación de la derecha radical.

Palabras finales

Lo que ha emergido en estos años es una *internacional reaccionaria* que se vio fortalecida por Vox, la derecha húngara y el Partido Republicano norteamericano con miras a la política de América Latina. En este marco, se busca construir una cultura política común en el espacio transnacional, nucleada alrededor de la idea de “Dios, patria y familia”, así como de las teorías conspirativas sobre el dominio comunista.

Si bien el “comunismo” como tal ya no es una amenaza real, el desplazamiento hacia la lucha cultural o simbólica por parte de las derechas radicales tiene un aspecto central en la construcción simbólica de esa amenaza que dota de sentido su prédica. La retórica de la Guerra Fría, donde el “enemigo interno” tiene un papel central, es reactualizada de acuerdo a los nuevos tiempos.

Se señala que habría un “comunismo de nuevo tipo”, insertado en el sistema como “marxismo cultural”. Esta teoría conspirativa hermana a las derechas radicales del mundo y actualiza una idea de la Guerra Fría en lucha contra un enemigo común: el viejo bolchevismo (inexistente tras la caída del Muro de Berlín) y el comunismo.

Las redes sociales parecen desempeñar un rol fundamental en nuclear a estos grupos, homogeneizando su discurso y sus comunicaciones, algo que no se podía ver años atrás. Eventos como CPAC y su exportación a Brasil y México han contribuido a la construcción de esta concepción. La Carta de Madrid de Vox y sus ideas propaganda –como hispanidad, reconquista, narcocomunismo– constituyen parte de esa cultura política común que hermana a las derechas radicales a nivel internacional, con una visión restringida de la democracia, atada al mesianismo y el autoritarismo.

Años atrás, la extrema derecha ocultaba sus redes internacionales, más enfocadas en la represión y el exterminio de la izquierda, mientras que esta última sí hacía visible su internacionalismo marxista. Actualmente eso parece haberse invertido: la extrema derecha muestra sus redes, haciendo énfasis en la denominada “batalla cultural” y en su deseo por ganar elecciones.

Vox, un partido que en España no ha obtenido resultados resonantes, más allá del crecimiento electoral de los últimos años, logra obtener una relevancia y prestigio en el mundo de las derechas radicales al operar como un articulador, un “traductor”, y quien brinda una consistencia identitaria e ideológica a nivel internacional. El legado idiomático y colonial de España sobre América Latina brinda al partido una oportunidad única para operar como punto de conexión de la internacional reaccionaria, algo que ninguna otra fuerza política puede sostener. Estas intervenciones han proyectado a Santiago Abascal –a pesar de tener solo un cargo como diputado– en la imagen de un “primer ministro de derecha radical”, en oposición a Pedro Sánchez, el “primer ministro comunista” en la visión de este partido.¹⁶

Bibliografía

- Artusa, Marina. 2023. “Tras la asunción de Pedro Sánchez, España se concentra en el balotaje argentino: la opinión de Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox”. *Clarín*, 17 de noviembre. <https://n9.cl/1qkfy>.
- Benito, Agustín. 2024. “Abascal se reúne con Milei: ‘Los argentinos tienen un gran presidente y el socialismo globalista un gran problema’”. *La Gaceta de la Iberofera*, 18 de mayo. <https://n9.cl/dx840>.
- Blee, Kathleen, Robert Futrell and Pete Simi. 2024. “Understanding the Far Right as a Constellation”. *RightNow!* [Blog], march 4, C-REX - Center for Research on Extremism. University of Oslo. <https://n9.cl/ws2ns>.
- Calloni, Stella. 1999. *Los años del lobo. Operación Cóndor*. Buenos Aires: Ediciones Continente.
- Cannon, Barry. 2016. *The Right in Latin America: Elite power, hegemony and the struggle for the state*. UK: Routledge.
- Cano, Unai. 2024. “Foro Madrid lleva el español a la CPAC de Hungría: ‘Estamos arrinconando a los narcodictadores comunistas’”. *La Gaceta de la Iberofera*, 26 de abril. <https://n9.cl/uo6nl7>.
- Casullo, María Esperanza. 2019. *¿Por qué funciona el populismo?: El discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Farkas, Vajk. 2024. “Europa y lo ‘woke’”. *El Debate*, 10 de mayo. <https://n9.cl/j77lv>.
- Fantini, Alvino-Mario. “Internationalizing a Confident Right”. *The European Conservative*, April 7th. <https://n9.cl/z3ug0t>.

¹⁶ Abascal intentó proyectar este tipo de imagen al recibir a comienzos de 2022 en Madrid a Morawiecki y Orbán, de Polonia y Hungría para un foro de discusión. También, fue tratado en esa línea en la asunción de Milei en 2024.

- García Linera, Álvaro. 2018. “Este es un neoliberalismo zombie”. *Página 12*, 21 de noviembre. <https://n9.cl/8lb2r>.
- Goldstein, Ariel. 2022. *La reconquista autoritaria*. Buenos Aires: Marea.
- Goñi, Uki. 1998. *Perón y los alemanes. La verdad sobre el espionaje nazi y los fugitivos del Reich*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Hatchwell, David. 2017. “El antisemitismo brota en España de una izquierda radical”. *Libertad Digital*, 27 de enero. <https://n9.cl/0yzjs>.
- Infobae. 2024. “Aquí muere el globalismo’: líderes de la ultraderecha de varios países se reúnen en EEUU”. <https://n9.cl/6l8z8>.
- Instituto Superior de Sociología, Economía y Política (ISSEP). 2024. “V Programa de Liderazgo y Gobierno”. <https://n9.cl/8h2248>.
- La Gaceta de la Iberosfera. 2024. “Editorial: Sánchez no es España”. *La Gaceta de la Iberosfera*, 20 de mayo. <https://n9.cl/znrvc>.
- La Nación. 2024. “El secretario de Culto de Milei habló en Madrid contra el matrimonio igualitario y el aborto”. *La Nación*, 18 de mayo. <https://n9.cl/juc98>.
- Lederman, Florencia. 2015. “La construcción del imaginario nacional brasileño en el ‘diálogo’ entre Veja y Primera Plana en torno a la rivalidad Brasil-Argentina (1968-1973)”. *Revista Afuera. Estudios de crítica cultural* 15: 1-15.
- Muzio, Santiago. 2024. “La Nación contra Milei y Abascal”. *La Gaceta de la Iberosfera*, 17 de mayo. <https://n9.cl/q2mao>.
- Ninio, Marcelo (2019): “Entrevista Yossi Shelley: Houve quatro conquistas para Israel na visita”, *O Globo*, 04 de abril, p. 24.
- Pellet Lastra, Ramiro. 2023. “Santiago Abascal, líder de Vox: ‘Javier Milei contribuye con un estilo muy contundente en la batalla cultural’”. *La Nación*, 10 de diciembre. <https://n9.cl/irvkd>.
- Pires, Carol. 2023. “Bolsonaro está detrás de los actos golpistas en Brasil. Es hora de que sea castigado”. *The Washington Post*. <https://n9.cl/qzxi6>.
- Presidencia de la Nación Argentina. “Comunicado Oficial Número 41”. Comunicado Oficial de la Oficina del presidente Javier Milei. <https://n9.cl/lc8ir6>.
- Rouquié, Alain. 1990. *Extremo occidente. Introducción a América Latina*. Buenos Aires: Emecé.
- Sanahuja, José Antonio y Camilo López Burian. 2022. “Hispanidad e Iberosfera: antiglobalismo, internacionalismo reaccionario y ultraderecha neopatriota en Iberoamérica”. *Documentos de trabajo* 69, 2da época. Fundación Carolina. <https://n9.cl/43rhqj>.
- Scofield, Laura. 2024. “Extrema direita tenta emparedar o estado brasileiro”. *Focus Brasil*, 137, 17 de abril. Fundação Perseu Abramo, Rede de Gestores Petistas. <https://n9.cl/nve1o>.
- Union nationale. 2024. “Meeting de lancement de campagne des Européennes 2024”. Canal YouTube Union nationale. 10.03.24. <https://n9.cl/pwcbg3>.
- Voz Media. 2022. “CPAC México 2022: Mario Noya conversa con Rodrigo Ballester y Vajk Farkas” [Video] Youtube. Voz Media, 29 de noviembre. <https://n9.cl/iyoam>.

- Winer, Sonia. 2015. *Doctrina de inSeguridad mundial: Paraguay como laboratorio de Estados Unidos en la región*. Buenos Aires: Prometeo.
- Zanotti, Lisa, y Kenneth M. Roberts. 2021. "(Aún) la excepción y no la regla: La derecha populista radical en América Latina". *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 30 (1): 23-48. <https://n9.cl/w6un4>.
- Zertal, Idith. 2010. *La nación y la muerte: La Shoá en el discurso y la política de Israel*. Madrid: Gredos.

Jóvenes indígenas: propósitos y desafíos

Luis Alberto Tuaza Castro* y Rudi Colloredo-Mansfeld**

Resumen

En este artículo se analizan los propósitos de los jóvenes indígenas y los desafíos a los cuales se enfrentan en estos momentos, a partir del acercamiento etnográfico y la reflexión comparativa con los anhelos de sus padres y sus abuelos. Los datos utilizados en este trabajo corresponden a los testimonios de jóvenes, sus padres y abuelos de las comunidades de Guamote, Colta y Calpi en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Se concluye que los objetivos existenciales de las generaciones anteriores se centran en la búsqueda de respuesta a una época de transición desde el medio rural a los contextos migratorios, y los intereses de la actual juventud enfatizan en la necesidad de insertarse en un mundo caracterizado por la globalización de la cultura y la economía.

Introducción

Durante nuestras visitas a las comunidades indígenas de Chimborazo, y en las entrevistas a los jóvenes, hemos planteado las siguientes preguntas: ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus aspiraciones una vez que han concluido sus estudios de bachillerato? ¿Qué quisieran estudiar en la universidad? Hemos encontrado varias respuestas asociadas a las necesidades del mundo contemporáneo, tal como se señalará más adelante, pero para poder comprender en profundidad sus propósitos, hemos preguntado también a sus padres y abuelos sobre qué intereses tenían cuando ellos eran jóvenes y cómo lograron concretarlos a lo largo de sus trayectorias existenciales. Desde luego, dependiendo de su contexto histórico, cada generación posee propósitos diversos (Pinker 2018). Cada cambio generacional, implica la emergencia de nuevos ideales y de respuestas que se van generando hacia los mismos. Aspectos que requieren ser estudiados con mayor detalle. A tenor de esta realidad, en el presente artículo se analizan los propósitos de los jóvenes indígenas de las comunidades de Chimborazo-Ecuador y los desafíos a los cuales se enfrentan en estos momentos, a partir de un acercamiento etnográfico y una reflexión comparativa entre los propósitos

* Universidad Nacional de Chimborazo.

** The University of North Carolina.

de sus padres y sus abuelos. Los datos utilizados corresponden a los testimonios de jóvenes, sus padres y abuelos de las comunidades de Guamate, Colta y Calpi en la provincia de Chimborazo.

Los propósitos de los abuelos

Muchos de los abuelos y de las abuelas, conocidos en las comunidades como *yuyakkuna*,¹ nacieron y crecieron en una época de profundas transformaciones sociales experimentadas en América Latina y en el Ecuador. Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado reinaba todavía en el mundo rural andino el régimen de hacienda, sólidamente establecido en la colonia y radicalizado en la república (Bretón 2012). Si bien en el año de 1964 se dio una primera reforma agraria –que recomendaba la modernización de las haciendas introduciendo mejoras agropecuarias, una tecnificación en los cultivos, introducción de maquinaria, la aplicación de las recetas de la revolución verde y el pago de las remuneraciones a los trabajadores agrícolas, especialmente indígenas, que otrora trabajaban gratuitamente (Jordán 2003)–, no obstante, el poder terrateniente gamonal continuaba vigente, obligando a los indígenas a vivir situaciones de discriminación, explotación y sometimiento (Ibarra 2002). María Chagnama de Pull recuerda: “cuando nosotros éramos niños todavía estaban las haciendas. Nuestros padres sufrieron ahí. Soportaron el maltrato, trabajaban gratuitamente en las tierras de los amos” (Chagnama 2023).² “Cuando vivíamos en la hacienda, no podíamos asistir a las escuelas. La escuela estaba en la ciudad, en las parroquias y era reservada para los blancos. Nosotras éramos destinadas al cuidado de animales y a las órdenes de los esposos”, recuerda Valeria Anaguarqui, dirigente indígena.³

Bajo el dominio gamonal hacendatario no había organización comunal ni se ejercía el liderazgo por parte de los indígenas (Tuaza Castro 2017). Aunque ya en 1937 el gobierno nacional emitió la Ley de Comunas y de Régimen de Orga-

1 Término kichwa que procede de *yuyay*, que traducido al español significa sabiduría o pensamiento. *Yuyakkuna* se traduce por sabios y sabias.

2 Mamá María es antigua lideresa de Pull. La entrevista fue realizada en el contexto del proyecto “Escuchando a una nueva generación. Apoyo universitario a jóvenes indígenas y campesinos”, de la UNACH con The University of North Carolina.

3 Valeria Anaguarqui es lideresa indígena en el tiempo de las reformas agrarias y cofundadora del Movimiento Indígena de Chimborazo. Procede de la Comunidad de Ballagán, San Juan. Actualmente vive en Riobamba. La entrevista fue realizada en el año 2012, en el marco de Investigación Etnografías comparadas, ejecutada con el apoyo del Centro Andino de Acción Popular (CAAP).

nización, exhortando a los indígenas a crear una organización comunitaria, esa ley era desconocida y los intentos por formar las comunidades fueron reprimidos por los hacendados. Uno de los dirigentes manifiesta: “cuando Basilio Yasaca, cabecilla de Yacupamba, gestionó la creación de la comunidad, el hacendado culpó de ser ‘comunista’, despojó de su casa, quemó la choza y sus pertenencias y luego le mandó sacando de su hacienda” (Carguachi 2014).⁴ Estos actos atemorizaron a los indígenas, hasta el punto en que no se atrevían a asumir la dirigencia de la comunidad ni a establecer las organizaciones.

En medio de las realidades descritas, los jóvenes indígenas soñaban con tener “tierra y libertad”, una idea que habían fomentado fuertemente entre la población indígena el Partido Comunista y la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), a fin de provocar el declive del régimen hacendatario y todas las formas de dominación gamonal (Ibarra 2013). Con la tierra, estos por fin serían libres y podrían soñar con días mejores, sin patrones ni maltratos. “Cuando vino la primera reforma agraria, soñamos con un lote de terreno, la casa y vivir por nuestra propia cuenta”, señala Nicolás Tambo uno de los dirigentes de Chacasa.⁵

Una vez que tuvieron la tierra y la libertad, soñaron con construir una organización comunitaria, amparados en la Ley de Comunas y Régimen de Organización. “Nuestro afán era llegar a ser un pueblo, una comunidad libre de las manipulaciones de los hacendados y de los mestizos, con iglesia, casa comunal y la escuela”, así lo señala José Huishka uno de los dirigentes de Galte.⁶ Junto con la organización comunal soñaban con ser un pueblo, libre de los centros parroquiales que históricamente fueron espacios de dominación y centros ceremoniales (Burgos 1997). La idea de construir las comunidades con cierta autonomía de las parroquias se vio fortalecida por el apoyo de Monseñor Leonidas Proaño, obispo de Riobamba, y de las organizaciones campesinas surgidas al calor del apoyo del Partido Comunista y la FEI.

Una vez que fueron creadas las comunidades con el reconocimiento jurídico del gobierno, a través de la certificación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ello posibilitó a los indígenas soñar con el establecimiento de escuelas en sus localidades, y así conocer el “secreto poder de la escritura” (Ramón 1992). Los

4 Expresidente de la comunidad Santa Teresita, Guamote. Entrevistado en el marco del desarrollo del Proyecto “Políticas públicas tras la Reforma Agraria” de la UNACH.

5 Antiguo presidente de la comunidad Santa Teresita, Guamote. Entrevista realizada en el 2023, UNACH-The University of North Carolina.

6 Huishka fue expresidente de la Comunidad Galte Jatun Loma, Guamote y diácono de la pastoral indígena. Lideró la lucha por la tierra en la década de los setenta. Entrevista realizada en el 2023, UNACH-The University of North Carolina.

jóvenes de aquel tiempo participaron en ese proceso y fueron, en algunos casos, alumnos. “Qué alegría, cuando por fin se crearon las escuelas en las comunidades. Mujeres y niños podíamos ir a aprender la letra” (Paucar 2023).⁷ Conocer la letra se convirtió en la necesidad de los niños y jóvenes indígenas porque con eso podían saber de la Ley de Comunas y de Régimen de Organización (1937), el Código de Trabajo (1938), la primera y segunda Ley de Reforma Agraria (1964 - 1973), que reconocían el derecho de los pueblos indígenas de llegar a ser propietarios de la tierra, a crear las organizaciones y exigir salarios por los años de servicio en las haciendas.

La tenencia de la tierra, la formación de las comunidades y la creación de las escuelas despertó entre los jóvenes indígenas el interés por formarse como líderes y lideresas. Al desarticular el régimen de hacienda y las antiguas formas de dominación, exigían la emergencia de un liderazgo protagonizado por los mismos indígenas. Antes de las reformas agrarias, los líderes que administraban las poblaciones indígenas eran los *jipus*,⁸ alcaldes y regidores indígenas designados por el patrón de la hacienda, el cura párroco y el teniente político (Arrieta 1984), que salvaguardaban los intereses de sus amos, en perjuicio de los indígenas.

La constitución de las comunas, de acuerdo con la ley mencionada, exigía la elección de la directiva del cabildo por parte de la comunidad, un cargo voluntario de un año de duración en el que podían participar todos. “De joven anhelaba ser presidente del cabildo. Empecé mi servicio a la comunidad como secretario, luego tesorero, hasta ser presidente. Estar en la directiva fue para mí una oportunidad de servicio gratuito a la comunidad. Servíamos plata y persona” (Guaraca, 2021), señala uno de los antiguos dirigentes.⁹

Dado que las comunidades indígenas querían otros servicios, muchos anhelaban ser catequistas de la Iglesia católica, diáconos y pastores de las iglesias evangélicas y alfabetizadores. “Llevo treinta años de catequista. Desde pequeño tenía la ilusión de servir a mi comunidad. Vinieron los misioneros y me invitaron a formar y servir como catequista. Hasta hoy sigo en este servicio” (Bocón 2023).¹⁰

7 Expresidente de la Comunidad La Moya. Acompaña a los jóvenes educando en la fe cristiana. Entrevista realizada en el marco del Proyecto UNACH - The University of North Carolina.

8 Indígenas varones con ciertos dotes de liderazgo que administraban a la población indígena dentro de las haciendas, asignados por los terratenientes.

9 Fue expresidente de la comunidad Pull Grande, lideró la compra de la hacienda del mismo nombre en 1983. Entrevistado en el marco del Proyecto “Conservación de bosques, autodeterminación indígena y cambio climático. Un análisis empírico del Programa Socio Bosque del Ecuador”. UNACH y la University of Guelph.

10 Comunero de Chismaute Alto y catequista. Entrevista realizada en el marco del Proyecto UNACH - The University of North Carolina.

“Me formé con los misioneros de la Unión Misionera Evangélica. Yo quería que mis hermanos indígenas vivieran libres de los maltratos de la religión. Formamos la iglesia en la comunidad y nos liberamos de la explotación de los blancos” (R. Guamán 2012);¹¹ estos testimonios revelan la opción de los indígenas por ejercer el liderazgo y servicio a sus comunidades.

En efecto, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, tanto la iglesia católica como las evangélicas ejercieron una fuerte influencia sobre estas comunidades. Junto con la evangelización, las iglesias buscaban la promoción humana, la revitalización de la lengua kichwa y el fortalecimiento de las organizaciones (Andrade 2004). Muchos de los líderes formados en el trabajo pastoral católico y evangélico se convirtieron en dirigentes de las organizaciones de segundo grado; más tarde, fueron candidatos para cargos de representación política y, años más tarde, algunos se convirtieron en autoridades elegidas en las urnas.

Propósitos de los padres

Los padres de los actuales jóvenes anhelaban ser promotores de los proyectos de desarrollo. Durante las décadas de los sesenta, ochenta y noventa del siglo pasado se ensayó en el medio rural indígena la implementación de estas iniciativas, lideradas por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de cooperación al desarrollo (Bretón 2001). Los casos emblemáticos fueron los proyectos promovidos por Misión Andina, el Fondo de Desarrollo Rural Marginal (FODERUMA), el Proyecto de Desarrollo Rural Integral y el Proyecto de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador. Cada uno buscaba combatir la pobreza y promover el desarrollo social y económico de las poblaciones indígenas. Entre las apuestas de trabajo, promovieron la formación de los líderes y motivaron a los jóvenes a ser promotores en sus comunidades (Tuaza 2013). “Cuando se ejecutó el proyecto FODERUMA, nuestra ilusión fue llegar a ser promotores de salud, contadores, animadores, veterinarios. Las instituciones nos dieron cursos de capacitación e impulsaban a mayor compromiso con la comunidad” (Sayay 2023),¹² recuerda uno de los entrevistados.

11 Pastor de la Iglesia Evangélica de Pulucate Centro, exconcejal de Colta por Pachakutik, expresidente de la comunidad. Entrevistado en el marco de Investigación Etnografías comparadas, ejecutada con el apoyo del CAAP.

12 Expresidente de la Comunidad Pull Grande. Actual presidente de la iglesia de su comunidad (UNACH-The University of North Carolina).

Los talleres de capacitación impartidos por las organizaciones de cooperación, las nuevas iniciativas de desarrollo y la emergencia de nuevas formas de trabajo despertaron en los jóvenes indígenas el deseo de estudiar y llegar a tener el título de bachillerato, tal como demuestra el siguiente testimonio:

Los jóvenes fuimos capacitados en el mejoramiento agropecuario, la atención de la salud, el manejo de las finanzas, las técnicas de riego, la forestación, pero necesitábamos un título. Muchos de nosotros estudiamos con sacrificio y de bachilleres ya podíamos trabajar en las mismas instituciones de ayuda y en la educación bilingüe (Lema 2023).¹³

Cuando en 1988 se creó el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, muchos de los bachilleres indígenas fueron designados profesores de las escuelas en el medio rural. “Apenas salí del bachillerato me invitaron a postular para trabajar de profesor en la escuela bilingüe. En ese tiempo no había gente con título universitario, la mayoría de los profesores éramos bachilleres” (T. Mullo 2023).¹⁴ La oportunidad de ser profesores despertó en muchos jóvenes la preferencia de optar por los estudios secundarios.

Para finales de la década de los ochenta del siglo pasado, en las comunidades indígenas de Colta que mantenían el contacto con los misioneros norteamericanos de la Unión Misionera Evangélica, y en algunos casos con las organizaciones de trabajadores relacionadas con Cuba, surgió la posibilidad de estudiar medicina. “Gracias a la organización indígena de nuestro sector vinculada con la Embajada de Cuba, mi hija obtuvo una beca y estudió medicina ese país” (Viñán 2023).¹⁵ “Yo pude estudiar medicina por el apoyo de los misioneros evangélicos. Ellos tenían una clínica aquí en Majipampa” (Cujilema 2023), recuerda uno de los médicos indígenas que recibieron el apoyo de los misioneros.

La fuerte emergencia del movimiento indígena en los noventa y la fundación de los movimientos políticos *Pachakutik* y *Amauta Yuyay*, que permitió su participación electoral, despertó en los indígenas la aspiración de llegar a ser autoridades por elección popular (Becker 2015). Los bachilleres vinculados con el sistema de educación intercultural bilingüe, los antiguos técnicos de desarrollo y los líderes

13 Morador de la Comunidad Santa Teresita de Guabug, San Juan (UNACH-The University of North Carolina).

14 Tránsito Mullo, profesora, ex directora de la Dirección Intercultural Bilingüe, Riobamba y actual concejal de Colta (UNACH-The University of North Carolina).

15 Profesor, morador de la Comunidad Quishuar la Esperanza, Colta. Entrevista realizada en el marco del Proyecto UNACH-The University of North Carolina.

jóvenes de las organizaciones anhelaban ser alcaldes, concejales, asambleístas y prefectos. Efectivamente, para finales de los años noventa varios de los municipios con mayor presencia indígena eligieron autoridades procedentes de los dos movimientos políticos anteriormente mencionados.

Por su parte, las personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar el bachillerato buscaron salir de sus comunidades a las grandes ciudades del país. Muchos de los indígenas que migraron, principalmente los hombres, consiguieron trabajar en la industria de la construcción, emprender el comercio de frutas y verduras, la venta de vehículos y accesorios de carros. “No había motivos para seguir viviendo en las comunidades. Tuvimos que salir a la ciudad, ir a lugares lejanos y ahí es donde emprendimos el comercio, educamos mejor a nuestros hijos” (Morocho 2023), señala una de las mujeres migrantes de Cacha Machangara, que hoy en día tiene su casa y negocio en la provincia de Santa Elena.¹⁶

Aspiraciones de los jóvenes

Actualmente los jóvenes indígenas al igual que sus padres, no encuentran mayores oportunidades de vida en sus localidades, por lo que su aspiración inmediata es abandonar sus comunidades. En efecto, quedan pocos jóvenes. De los diálogos mantenidos con los dirigentes de las comunidades de Columbe, “en los años noventa, solo en la comunidad de Llinllin, existían 150 jóvenes de una población de 270 habitantes”. Según los moradores de Zhuid del cantón Alausí, de 600 habitantes de la zona, 250 eran jóvenes”. Los adultos mayores de Galte Jatun Loma, señalan que había 300 jóvenes entre los 700 miembros comunitarios. Con el transcurso del tiempo, el número de jóvenes se ha ido reduciendo. Así, en Galte hay veinte jóvenes; de este número, quince están decididos a dejar la comunidad lo más pronto posible.

¿Por qué el interés de salir de las comunidades? El éxodo de los jóvenes hacia las ciudades y al extranjero tiene que ver con las pocas posibilidades de desarrollo y progreso que ofrece el campo. En las generaciones indígenas anteriores, el propósito fundamental era tener tierras y cultivos que garanticen el acceso a los alimentos y permitan obtener los ingresos económicos con los cuales pagar las deudas contraídas en la compra de tierras de las antiguas haciendas. En estos momentos, la tierra no produce lo suficiente. Los productos que se comercializan

¹⁶ La entrevistada en su juventud además formó parte del grupo de estudiantes kichwas de la Diócesis de Riobamba.

en los mercados no cubren los costos de producción. “Ya nadie quiere producir la tierra, se preguntan ‘¿Para qué?’. Hay mejor producción de hortalizas que vienen del Perú” (Curichumbi 2023), señala uno de los moradores de la comunidad El Troje.¹⁷ Evidentemente, los campos que a inicios de 2000 estaban cubiertos de cultivos de cebolla y ajos, hoy están abandonados y en algunos casos han sido reemplazados por los pastizales. Por otro lado, dado que los pisos ecológicos de altura son frágiles por el avance de la frontera agrícola, las tierras pierden fertilidad, desaparecen los humedales y limitan la producción agrícola. Esta situación obliga a abandonar el campo.

En el pasado, frente a las adversidades impuestas por el colonialismo, la discriminación racial, el maltrato en las haciendas, la comunidad se convirtió en un espacio de autoafirmación étnica y existencial. En ella los jóvenes encontraban apoyo, regocijo y seguridad (Albó 2015). En la lengua kichwa, comunidad se dice *Tantanakuy* (Cordero 1955), la familia que nace del pan, es decir, de la comida. A su interior, todos se sienten parte de una sola familia al margen de los apellidos, las posiciones políticas, la diferencia de credo. Vivir en comunidad implica mutuo apoyo y cuidado, pero paulatinamente esta función ha ido desapareciendo, hasta tal punto que la comunidad de origen no ofrece seguridad y esperanza de días mejores. “No tiene sentido quedarse en la comunidad, ya no hay nadie con quien interactuar. La mayoría de mi generación está en los Estados Unidos y en Riobamba” (Guamán V. , 2023), señala una de las jóvenes que migró de Guamate a Quito.¹⁸ En su momento, la literatura académica denominó este fenómeno como descomunalización de la comunidad andina (Sánchez-Parga 2013), un aspecto que es cuestionado porque, afortunadamente, los indígenas promueven otras formas de comunalización en los espacios migratorios.

La migración de los jóvenes de sus comunidades, igualmente, tiene que ver con la poca efectividad del sistema de educación. En la mayoría de las comunidades existen escuelas bilingües, pero no ofrecen una educación de calidad y de acuerdo con las necesidades locales. El pènsum de estudio está orientado a la ciudad en menosprecio del campo, y aporta a la invisibilización de las riquezas del mundo andino (Martínez 2016). “La educación que recibimos en la unidad educativa de las comunidades no estimula a conocer el campo, a potencializar nuestro medio, nos induce a salir, a buscar un refugio en la ciudad” (Guzmán

17 Entrevista realizada en el marco del Proyecto UNACH - The University of North Carolina.

18 Actualmente dirige el coro de mujeres de la pastoral indígena.

2023), señala una estudiante migrante de la comunidad de Pulingui que actualmente vive en Riobamba. Asimismo, dado que las unidades educativas de las comunidades son deficientes, y debido a que durante el gobierno de Rafael Correa algunas escuelas fueron cerradas, muchos padres de familia prefieren salir del campo e instalarse en la ciudad (Tuaza Castro 2016). “El gobierno cerró la escuela de nuestra comunidad. No tenía a dónde mandar a mis hijos. Vine a la ciudad [Riobamba], trabajo vendiendo frutas y educo a mis hijos en la escuela de aquí. Yo ya no puedo volver a la comunidad. Todo quedó allá” (Mullo A. 2023) es el testimonio de uno de los moradores de la comunidad de San Rafael, en las alturas de Colta.

Los jóvenes de las comunidades lejanas de Riobamba, que no obtienen cupo para estudiar en las universidades, buscan imperiosamente migrar hacia los Estados Unidos, por cuanto allí tendrían trabajo y mejores ingresos. Además, argumentan que conocen a familiares que con las remesas han comprado vehículos y casas en la ciudad. Evidentemente, las personas que migraron hace años han logrado garantizar cierta movilidad social a sus familias, comprando tierras, construyendo casas y educando a sus hijos en las escuelas de la ciudad. Hasta la década de 2010, la migración hacia los Estados Unidos y Europa era un asunto de la gente de la ciudad, pero en estos últimos años hay más indígenas que optan por la migración (Herrera Mosquera 2019).

Asimismo, la pandemia de Covid-19 y la escasa inversión estatal durante los dos últimos gobiernos de derecha han motivado el crecimiento del fenómeno migratorio. Entre los meses de enero y julio de 2023, más de 64.000 ecuatorianos en la edad comprendida entre 17 a 37 años, en su mayoría indígenas, salieron de las fronteras del país. Muchos han perdido la vida en su intento por cruzar las fronteras de México y Estados Unidos, y otros han tenido que ser repatriados (González 2023). El deseo de migrar al exterior es estimulado por personas foráneas a las comunidades, ofreciendo la posibilidad de llegar a los Estados Unidos en corto tiempo y por trayectos seguros a cambio del pago de entre veinte mil y veinticinco mil dólares, recursos obtenidos a través de préstamos a las cooperativas de ahorro y crédito, entregando como garantía las escrituras de los terrenos de sus padres. “Mi yerno y mi hija se fueron del país. Por este viaje estamos con la deuda de cuarenta mil dólares. A cambio, hemos entregado las escrituras de todos los terrenos, incluidos la casa” (Gahuin 2023), sostiene un morador de la comunidad Telán.¹⁹

¹⁹ Entrevista realizada en el marco del Proyecto UNACH-The University of North Carolina.

Por su parte, los jóvenes que han concluido el bachillerato y buscan un empleo rápido y seguro sueñan con ser policías y militares de tropa. Llegar a esos cargos implica tomar un curso de seis meses, con una inversión de diez mil dólares para ser policía y quince mil en caso de aplicar a la formación militar. La mayor parte de los jóvenes de las comunidades aledañas al volcán Chimborazo son militares y policías, tal como señala el siguiente testimonio: “Mis dos hijos son policías y el último irá al ejército. En la comunidad de Gultus, la mayor parte son policías y militares” (Chucho 2023).²⁰ Sin embargo, por su formación de seis meses, no pueden esperar a tener cargos de mayor rango en la policía y en el ejército. La jerarquía superior está reservada a aquellos que tienen una licenciatura y están dispuestos a invertir treinta mil dólares.

Por otra parte, los jóvenes indígenas que se han presentado a los exámenes de ingreso a las universidades tienen el propósito de llegar a ser doctores en medicina, porque esa profesión permitiría una rápida movilidad social; las consultas médicas cuestan entre treinta y cuarenta dólares, y ese título posibilitaría tener trabajo seguro. Si no logran un puesto en el Ministerio de Salud Pública, establecerían sus propios consultorios y farmacias; como médicos podrían vivir mejor en la ciudad. Los pocos estudiantes afirman que con esa profesión apoyarían a sus comunidades, a la gente sencilla que no tienen suficientes recursos. Pero la universidad no tiene suficientes cupos disponibles. Hay una demanda de ocho mil cupos en medicina y la disponibilidad es de mil quinientos. Esta situación hace que los jóvenes se frustren. Pocas son las familias indígenas, especialmente quienes tienen negocios o trabajan en el sector público, que invierten sus recursos para enviar a sus hijos a estudiar en las universidades privadas y en Argentina.

Entre los jóvenes que aspiran entrar a la universidad, algunos también anhelan ser abogados, una profesión históricamente reservada para los blancos y mestizos y asociada al poder. Quienes pretenden estudiar esta carrera consideran que podrían mejorar sustancialmente sus ingresos, defendiendo casos, estableciendo consultorios propios. Unos pocos piensan que tendrían la oportunidad de servir a la gente pobre. No obstante, los cupos en la universidad siguen siendo mínimos. Se exige la nota de novecientos treinta puntos sobre mil. Así, pocos son los estudiantes indígenas que acceden a estudios de derecho.

En menor proporción, algunos jóvenes indígenas sueñan con ser arquitectos e ingenieros civiles. Las razones son: promover los emprendimientos personales en la industria de la construcción, garantizar ganancias económicas, vivir mejor en

²⁰ Ídem, pie de página n. 17.

la ciudad y apoyar con la construcción de casas, puentes y fábricas en las comunidades. Por lo pronto, en estas dos carreras existe disponibilidad de cupos en la universidad, pero resultan de escaso interés.

Las carreras de ciencias sociales, de educación, ingeniería de alimentos, turismo, ingeniería ambiental, ciencias agropecuarias, diseño de modas, industria metalúrgica no son apetecidas por los jóvenes indígenas. Existe la creencia generalizada de que con ellas no se tendría futuro laboral.

Reflexión final

A manera de conclusión, se puede visibilizar que hay un contraste entre los propósitos de los abuelos y los padres con los de los actuales jóvenes indígenas. En las dos generaciones anteriores esos objetivos están definidos alrededor de la tierra, la formación de la comunidad, la necesidad de estudiar la primaria y el bachillerato, el desarrollo socioeconómico en las propias localidades, la búsqueda de la participación política; mientras que en la generación actual, los intereses se establecen en virtud de la vida moderna, la necesidad de la inserción en el mundo global y en los contextos urbanos y de migración. En la generación de los abuelos y de los padres existe un ideal de autodeterminación; a su vez, en los jóvenes actuales los propósitos se orientan a la supervivencia en un espacio geopolítico mundial caracterizado por la globalización de la cultura y de la economía (UNPFII 2023).

Igualmente, se destaca que frente a estos propósitos, el Estado –especialmente– y las instituciones de educación superior carecen de capacidad de respuesta. Asimismo, dado que los ideales de los jóvenes no coinciden con los de sus abuelos y padres, el medio rural y la organización comunal no tendrían las capacidades de maniobra que respondan a sus necesidades e inquietudes más urgentes. No obstante, habrá que ver cómo los mismos jóvenes y sus familias se redefinen en los contextos migratorios y articulan nuevas acciones que satisfagan sus propósitos.

Bibliografía

- Albó, Xavier. 2015. "El gran desafío de los indígenas en los países andinos y sus derechos sobre recursos naturales". *Raíz Diversa*, 2 (3): 39 - 62.
- Andrade, Susana. 2004. *Protestantismo indígena: procesos de conversión religiosa en la provincia de Chimborazo, Ecuador*. Quito: FLACSO/Abya Yala.
- Arrieta, Modesto. 1984. *Cacha, raíz de la nacionalidad ecuatoriana*. Riobamba: FODERUMA.
- Becker, Marc. 2015. *Pachakutik: movimientos indígenas, proyectos políticos y disputas electorales en el Ecuador*. Quito: FLACSO/Abya Yala.
- Bretón, Víctor. 2001. *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos*. Quito: FLACSO/Universitat de Lleida/GIEDEM.
- _____. 2012. *Toacazo en los Andes equinocciales tras la reforma agraria*. Quito: FLACSO/Abya Yala/Departament d'Història Social. Universitat de Lleida.
- Burgos, Hugo. 1997. *Relaciones interétnicas en Riobamba*. Quito: Corporación Editora Nacional.
- Cordero, Luis. 1955. *Diccionario Quichua - Español*. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana.
- González, Mario. 2023. "64.000 ecuatorianos salieron por tierra y no volvieron". *Primitias*. <https://n9.cl/0ba0i>.
- Herrera Mosquera, Gioconda. 2019. "Precariedad laboral y construcción social de la 'ilegalidad': familias indígenas ecuatorianas en Nueva York". *Migraciones Internacionales*, 10: 1-22.
- Ibarra, Hernán. 2002. "Gamonalismo y dominación en los Andes". *Íconos* 14: 137-147. FLACSO-Ecuador.
- _____. [Comp.]. 2013. *El pensamiento de la izquierda comunista (1928-1961)*. Quito: Ministerio de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados.
- Jordán, Fausto. 2003. *Reforma agraria en el Ecuador*. La Paz: CIDES-UMSA, Posgrado en Ciencias del Desarrollo, PLURAL editores.
- Martínez, Carmen. 2016. "Conocimiento occidental y saberes indígenas en la educación intercultural bilingüe en el Ecuador". *Alteridad. Revista de Educación*, 11 (2): 206-220.
- Pinker, Steven. 2018. *En defensa de la ilustración: por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso*. Barcelona: Paidós.
- Ramón, Galo. 1992. "Ese secreto poder de la escritura". En *Indios: una reflexión sobre el levantamiento indígena de 1990*, elaborado por Ileana Almeida et al. Quito: ILDIS/Abya Yala.
- Sánchez-Parga, José. 2013. *Qué significa ser indígena para el indígena: más allá de la comunidad y la lengua*. Quito: Abya Yala.

- UNPFII, The United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. 2023. *Juventud indígena como agentes del cambio para la determinación*. 9 de agosto. <https://n9.cl/adgdv>.
- Tuaza Castro, Luis Alberto. 2013. “Las huellas de la Misión Andina en las comunidades indígenas de Chimborazo”. *Revista Ciencias Pedagógicas*, 1 (2): 33-42.
- _____. 2016. “Los impactos del cierre de escuelas en el medio rural”. *Ecuador Debate*, 98 85-95. CAAP.
- _____. 2017. “Liderazgo indígena tras la disolución de la hacienda”. *Ecuador Debate*, 102: 33-44. CAAP.

ÍCONOS 79

REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES

vol. XXVIII
(2do. cuatrimestre)
N.º 79
mayo-agosto 2024



DOSSIER

Presentación del dossier
Alimentación y gentrificación en América Latina
Adrián Hernández-Cordero y José Antonio Vázquez-Medina

Gourmetización y gentrificación: paisajes alimentarios desde la ciudad hasta el campo
María Mercedes Di Virgilio, María Agustina Frisch, Sara González, Sebastián Grenoville, Candela Hernández, Beatriz Nussbaumer y José Manuel Vega-Barbero

“Comiéndose” el barrio: gastronomía y cambio urbano en Santa Cruz, Lima
Denise Claux

Desafiando fronteras: gastronomía gourmet en barrios populares de Buenos Aires
Mercedes González-Bracco

Mercados de producción agroecológica y artesanal: sustentabilidad y gentrificación en la Ciudad de México
Ayari G. Pasquier-Merino y Simone Buratti

Entre la informalidad y la inseguridad: nuevas dinámicas alimentarias y comerciales en el mercado San Roque de Quito
Mariuxi Paola Rojas-Galindo, Mauricio Javier Unda-Padilla y Andrea Pacheco

TEMAS

Desajuste educativo y ajuste económico: ¿cómo respondió el mercado de trabajo mexicano ante la pandemia?
Ana Ruth Escoto-Castillo y Emma Liliana Navarrete-López

“Nadie dice nada”. Percepción de estudiantes sobre el acoso sexual universitario en Ecuador
Ana D. Verdú-Delgado y Paz Guarderas-Albuja

TEMAS

Acordemos que estamos en desacuerdo. Estrategias partidarias en las elecciones primarias argentinas
Ignacio Santoro

Acciones climáticas frente a la sequía severa: el caso de comunidades rurales costeras del Chile central
Pedro Reyes-García y David Jofré

Racialización económica del trabajo en la frontera dominico-haitiana: el caso de CODEVI
Edwin Oscar Mendoza-Vargas y Claudio Garibay-Orozco

Número anterior:
ÍCONOS 78: Sistemas electorales subnacionales en América Latina

Número siguiente:
ÍCONOS 80: El derecho al aborto: un tema pendiente en la región

Íconos. Revista de Ciencias Sociales está incluida en los siguientes índices científicos: Academic Search Premier; Directory of Publishing Opportunities (CABELLS); Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC); Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales (CLASE); DIALNET; Directory of Open Access Journal (DOAJ); Emerging Source Citation Index (ESCI) Web of Science; ERIHPLUS; FLACSO Andes; Fuente Académica Plus; Hispanic American Periodical Index (HAPI); International Bibliography of the Social Science (IBSS); Informe Académico Thompson Gale; LatAm-Studies; LATINDEX catálogo; MIAR; Political Science Complete; REDALYC; REDIB; SciELO Ecuador; Sociological Abstracts; SCOPUS; Social Science Journals. Sociology Collection; Ulrich's Periodical Directory; Worldwide Political Science Abstracts (WPSA).
Página web: www.revistaiconos.ec
Correo electrónico: revistaiconos@flacso.edu.ec



FLACSO
ECUADOR

Revista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - Sede Ecuador

Información y colaboraciones: revistaiconos@flacso.edu.ec
Sitio web: www.revistaiconos.ec

La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales. El caso de la Asociación “17 de septiembre” en Portoviejo

Xavier León-Vega,* María Fernanda Solíz,** Claudia Rodríguez*** y Alía Yépez****

Resumen

Los aportes sociales, económicos y ambientales de la actividad del reciclaje se han venido evidenciando a nivel mundial. En el caso ecuatoriano, los recicladores y las recicladoras no han sido reconocidos como actores importantes para reducir los principales efectos y costos de la generación y el enterramiento de los residuos sólidos. Para los resultados del presente artículo se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas. En primer lugar, se realizó una investigación bibliográfica; además, se aplicaron tres encuestas a lo largo de once años a partir del 2010, en ellas se recopiló información de los recicladores del cantón Portoviejo respecto a sus condiciones socioeconómicas, ambientales y de salud. Los principales resultados muestran que su actividad ayuda a generar una recuperación importante de residuos sólidos y una reducción en la producción de gases de efecto invernadero y de lixiviados en el cantón; pero, pese a esto, son bajos los réditos económicos que obtienen los trabajadores, y al mismo tiempo, son altos los niveles de hacinamiento en sus hogares y su vulnerabilidad laboral. Esta información ratifica la necesidad fundamental de favorecer políticas y programas que mejoren las condiciones laborales y vitales de los recicladores y las recicladoras de Portoviejo y del país.

Introducción¹

La generación de los residuos sólidos urbanos (RSU) es considerada una problemática que ha ocasionado impactos ambientales negativos; está asociada al incremento de la población, a los procesos de transformación industrial (globalización) y a los hábitos de consumo de los individuos (Melo Henríquez 2014; Al-Khatib et al. 2010; Dangi et al. 2013). De acuerdo con

* Doctor en Estudios del Desarrollo. Investigador del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar.

** Doctora en Salud Colectiva Docente e investigadora del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar.

*** Doctora en Medio Ambiente. Universidad de Girona.

**** Investigadora del Área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar.

1 Los autores queremos agradecer la colaboración y aportes de los miembros de la Asociación 17 de septiembre, así como a los miembros del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar sin cuyo apoyo este artículo no se hubiera realizado.

Solíz et al. (2020), solo entre el 30% y el 70% de la basura generada en ciudades de países en desarrollo es recolectada para su disposición final. Los RSU todavía se siguen depositando principalmente en vertederos a cielo abierto en la región latinoamericana, muchos de los cuales se manejan de manera inadecuada sin cumplir con los requerimientos ambientales mínimos.²

Los principales impactos ambientales identificados en los vertederos están relacionados con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y lixiviados.³ Con el reciclaje, una gran cantidad de materiales, especialmente inorgánicos, reingresan al circuito de los metabolismos urbanos como materia prima, evitando su enterramiento; prescindiendo además de nuevos procesos de extracción que implican un gasto energético mucho más elevado, con impactos ambientales irreversibles en un planeta de recursos naturales finitos (Solíz et al. 2020). Es por estas razones que la actividad del reciclaje puede contribuir a la conservación de los recursos naturales y al manejo sostenible de los desechos en las ciudades (Ezeah et al. 2013; Sanmartín et al. 2017).

La naturaleza no tiene rellenos sanitarios porque existe una necesidad de recirculación de la materia en los ciclos orgánicos, entendiendo a la basura como comida. Desde esa perspectiva, los recicladores se insertan al considerar a la basura como naturaleza, proveedora de energía endosomática (alimento) y exosomática (bienes tecnológicos de uso). A nivel mundial, los recicladores recuperan objetos para su uso y comercialización, revalorizando la basura y brindándole una nueva vida.⁴

A través del presente artículo, se pretende evidenciar el papel de los recicladores y las recicladoras de base en los diversos eslabones de la cadena del reciclaje en el cantón Portoviejo desde el año 2010 hasta la actualidad. Para esto se propone responder a la pregunta ¿Cuáles son las características socioeconómicas y el aporte ambiental de los y las recicladores en la cadena del reciclaje en el cantón Portoviejo?

Para responderla se ha dividido el texto en cinco secciones principales. La primera describe la cadena del reciclaje en ese cantón, la segunda los resultados económicos, la tercera sección los resultados sociales, la cuarta los resultados ambientales y, finalmente, se presenta la discusión y las conclusiones.

2 Ver al respecto: Rivera y Morales 2021; Margallo et al. 2019; Torres Cedeño 2019; Hettiarachchi et al. 2018; Pellón Arrechea et al. 2015; Solíz 2015.

3 Al respecto ver: Yuan et al. 2020; Pellón Arrechea et al. 2015; Noguera y Olivero 2010; Mucelin y Bellini 2008.

4 Al respecto ver: Solíz et al. 2019; Cajamarca et al. 2019; Grinberg et al. 2013; Toledo y Luján 2008.

Materiales y Métodos

Para el presente artículo, se emplearon técnicas cualitativas y cuantitativas de manera combinada. En primer lugar, se realizó una investigación bibliográfica dentro de las diversas bases de datos de revistas científicas (Jstor, Taylor & Francis, Scopus), en bibliotecas virtuales, así como en las principales publicaciones sobre el tema a nivel internacional y nacional. Los criterios de búsqueda fueron: reciclaje, basura cero, economía circular, gestión de residuos.

Posteriormente, se recopiló información de los aspectos socioeconómicos, ambientales y de salud de los(as) recicladores(as) del cantón Portoviejo por medio de tres encuestas diseñadas específicamente, las cuáles fueron aplicadas a lo largo de once años.

La primera encuesta fue realizada en el año 2010 a los trabajadores de la Asociación de Servicio de Reciclaje 17 de septiembre (ASOSERJEBRE), logrando llegar a 84 personas de un grupo total de 100 recicladores. La muestra tuvo un margen de error del 5%, un nivel de confianza del 95% y una heterogeneidad del 50% de acuerdo con la fórmula estándar de cálculo de la muestra.

La segunda fue aplicada diez años después (2020) a miembros de la ASOSERJEBRE, logrando encuestar a 66 recicladores de un grupo total de 105 personas. Lo cual nos arrojó un margen de error del 7,0%, un nivel de confianza del 95% y una heterogeneidad del 50%.

La tercera encuesta se realizó en el año 2021 a miembros de la misma asociación, llegando a 119 recicladores y recicladoras de un grupo total de 120; lo cual es muy cercano a un nivel de confianza del 100% sin margen de error.

Por otro lado, para la obtención de los indicadores ambientales se utilizó la información obtenida en las encuestas mencionadas, a partir de las fórmulas que se detallan a continuación:

Gases de efecto invernadero

Para obtener las emisiones de GEI ocasionadas por disposición final de RSU (asumiendo que todo lo generado es enviado a un relleno sanitario o botadero a cielo abierto y no tiene ningún tipo de tratamiento o aprovechamiento), se estima que equivale a 0.09 tCO₂eq. por cada tonelada anual de residuos sólidos generados, considerando residuos sólidos totales (Solíz et al. 2020).

$$GEI = 0.09 \text{ tCO}_2 \text{ eq.} * \text{RSU (t)}$$

Emisión de lixiviados

De acuerdo al modelo propuesto por (Solíz et al. 2020), en Ecuador la cantidad de lixiviados que se emite por cada tonelada anual de residuo sólido es de 0.26 m³.

$$Lixiviados = 0.26 \text{ m}^3 \cdot \text{RSU} \text{ (t)}$$

Valor monetario total ahorrado por recuperación (VMA)

El costo de la gestión integral de residuos sólidos en Ecuador se ubica en un promedio de 126 dólares (USD) por cada tonelada de residuos sólidos recuperados (Solíz et al. 2020).

$$VMA = 126 \text{ (USD)} \cdot \text{RSU}_r \text{ (t)}$$

La información obtenida mediante encuestas sobre los/as recicladores/as, los intermediarios y comercializadores, así como la información bibliográfica, sirvieron de base para determinar los resultados socioeconómicos y ambientales presentados en el presente artículo.

Todos los participantes firmaron un consentimiento previo, libre e informado en el que dejaron constancia escrita de su voluntad de intervenir en el estudio. El consentimiento informaba los propósitos, alcances y la metodología de la investigación; garantizaba los principios de anonimato y privacidad; posibilitaba que él o la participante pudieran retirarse de la investigación en el momento que considerasen pertinente y aseguraba el uso de la información en beneficio de las comunidades intervinientes. Este trabajo garantiza la confidencialidad y el anonimato de todos los y las participantes.

El diseño de la investigación, de las metodologías e instrumentos, el trabajo de campo, el análisis y sistematización de la información fueron elaborados en coordinación con los miembros de la Asociación de Recicladores 17 de septiembre, y en especial con su directiva. La información ha sido devuelta sistemáticamente en asambleas comunitarias y ha constituido un insumo importante para la toma de decisiones colectivas.

La investigación está apegada al cumplimiento y exigibilidad de derechos humanos de las personas y colectivos con quienes se trabajó.

La cadena del reciclaje en Portoviejo

Generación

Los residuos sólidos del cantón Portoviejo provienen de las nueve parroquias urbanas: 12 de marzo, 18 de octubre, Andrés de Vera, Colón, Francisco Pacheco, San Pablo, Simón Bolívar, Picoazá y Portoviejo; y siete parroquias rurales: Abdón Calderón, Alhajuela, Chirijos, Crucita, Pueblo Nuevo, San Plácido y Río Chico.⁵ Según el último censo de población y vivienda del Ecuador (INEC 2010), en el cantón viven aproximadamente 280.029 personas.

Las familias de todo el cantón depositan sus desechos en la celda emergente del botadero semicontrolado de Portoviejo, ubicado a dos kilómetros en el sector Las Cumbres, en una zona de bosque protector con una extensión aproximada de dieciséis hectáreas y con más de cuatro décadas de funcionamiento (Torres et al. 2018). A este sitio de disposición final llegan diariamente 290 toneladas de basura (INEC 2020). Allí se desechan productos que antes fueron empleados en la alimentación, higiene personal, aseo del hogar, vestimenta, materiales didácticos, artículos del hogar, entretenimiento –aparatos eléctricos y electrónicos–, productos industriales, materiales de construcción, etc. Esos objetos provienen principalmente de grandes supermercados e industrias. Pero, adicionalmente, llegan lodos de pozos sépticos, desechos agroindustriales y otros desechos no registrados formalmente, en tanto ingresan en vehículos privados (observación directa del trabajo de campo y reportes de recicladores).

Por otro lado, existe una evidente diferencia entre los productos a los que puede acceder una familia de clase alta y media, en comparación con una de escasos recursos económicos. A pesar de eso, los principales residuos reciclables que llegan al botadero no provienen de barrios de clase alta y media sino del centro de la ciudad, debido a que es una zona muy comercial y la gente no recicla (Comunicación personal, presidenta de la Asociación “17 de septiembre”).

Los principales desechos provienen de todo el cantón Portoviejo, es decir, las nueve parroquias urbanas y siete rurales. Tienen su origen en las casas, comercios pequeños, restaurantes y hoteles de la ciudad, son principalmente orgánicos, como restos de comida, así como papel, cartón y plástico (Ávila et al. 2022; Cedeño 2020; Zambrano 2015). Por otro lado, también llegan al botadero los

⁵ Información obtenida a través de una comunicación personal por parte de la presidenta de la Asociación “17 de septiembre”.

desechos hospitalarios que no cuentan con un manejo adecuado en la fuente (Cabrera y Vélez 2022).

Los sectores residenciales, urbanizaciones dentro de la ciudad, son los lugares de donde se obtiene material reciclable de mejor calidad; sin embargo, en muchos casos se contratan servicios privados para la recolección de sus desechos. Algunos intermediarios tienen contratos con las urbanizaciones para retirar el material, cobrando hasta dos dólares diarios por casa retirada. El material es recogido, llevado a las bodegas de los intermediarios, separado y lo que no sirve es enviado al botadero de la ciudad.⁶

Portoviejo es el cantón más poblado de la provincia de Manabí y la séptima ciudad más poblada del país. Según los datos reportados en el último Censo de Población y Vivienda del Ecuador (INEC 2010), el 79% de residuos del cantón son recolectados por el municipio, 18,05% es quemado, 1,21% es arrojado en terrenos baldíos, 0,43% es enterrado y 0,20% arrojado al río. Diariamente en el cantón se recolectan 0,67 kilogramos por habitante al día de basura (INEC 2020).

Por otro lado, los recicladores de la ciudad se encuentran distribuidos en tres grupos identificados: los que trabajan dentro del botadero –que son miembros de la “Asociación 17 de septiembre”–, los que no están asociados y los recicladores a pie de vereda, que trabajan en toda la ciudad.

Dentro de esta caracterización se reconoce que los hombres dedican más tiempo al trabajo en horarios de la mañana, tarde y noche, con períodos de descanso entre turnos. La mayor parte de mujeres trabaja en la mañana y en la noche, porque también emplean su tiempo en labores de cuidado del hogar y de sus hijos (Comunicación personal, presidenta de la Asociación “17 de septiembre” 2020).

Acopio

El acopio de los materiales para el reciclaje es realizado principalmente por:

- a. Recicladores de base –aproximadamente doscientos–, los cuales están clasificados en recicladores organizados (Asociación 17 de septiembre), no organizados trabajando en el basural y a pie de vereda.
- b. Intermediarios pequeños –aproximadamente dieciocho– ubicados en la vía al Rodeo –muy cerca al botadero–; emplean a familiares que por lo general

⁶ Comunicación personal, presidenta de la Asociación “17 de septiembre”.

también son recicladores pertenecientes a la Asociación 17 de septiembre. Estos especialmente compran a los recicladores organizados y no organizados trabajando en el basural.

- c. Intermediarios medianos –aproximadamente seis– ubicados en el centro de la ciudad, que compran a recicladores a pie de vereda y otras personas particulares o empresas.
- d. Intermediarios grandes –aproximadamente tres– ubicados en la vía a Manta, que compran tanto a los intermediarios pequeños como grandes.
- e. Finalmente, todo este material se envía a las grandes recicladoras de Guayaquil.

Transformación, distribución y venta de los materiales reciclados

Dentro de la cadena del reciclaje, los intermediarios medianos y grandes venden el material a transformadores y otros comerciantes. Por ejemplo, en Portoviejo el material se vende a personas que transforman las fundas en mangueras. Los grandes vendedores entregan su material a industrias de plástico –en especial PET y plásticos duros–, metales, vidrio, papel y cartón.

Resultados económicos, sociales y ambientales de la actividad del reciclaje en Portoviejo

Resultados económicos

El promedio de ingresos por reciclador ascendió a 247,69 dólares mensuales en el año 2020. La mayoría de ellos, tanto hombres (84,75%) como mujeres (84%), tenía en el año 2010 ingresos por debajo de un salario mínimo vital. Sin embargo, en el 2020 la proporción de mujeres con ingresos bajos aumentó significativamente, llegando al 100% de las recicladoras (Tabla 1). En contraposición, los hombres con ingresos medios (entre uno y dos salarios mínimos vitales) y altos (mayor a dos salarios mínimos vitales) han aumentado en el periodo analizado, tal como podemos ver a continuación:

Tabla 1. Ingresos de recicladores/as 2010-2020

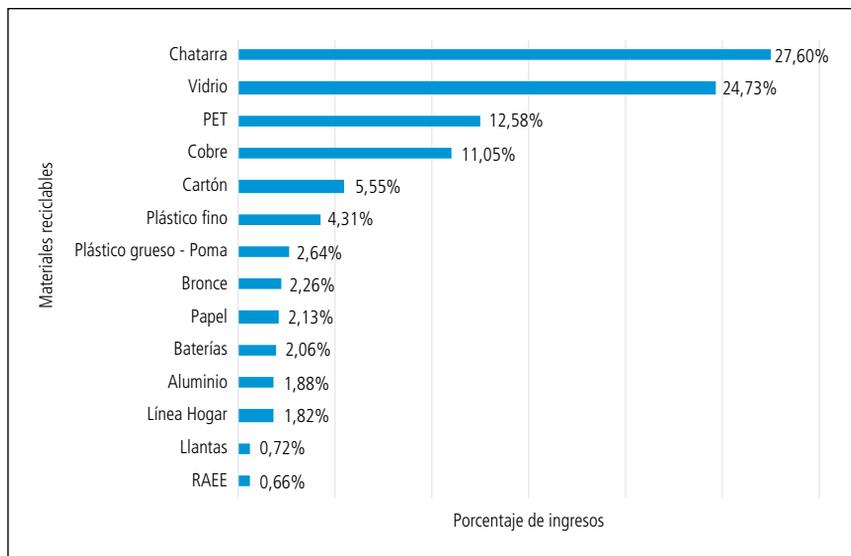
Ingresos	Porcentaje 2010	Porcentaje 2020
Mujeres con ingresos bajos	84%	100%
Hombres con ingresos bajos	84,75%	65,74%
Mujeres con ingresos medios	16%	0%
Hombres con ingresos medios	13,56%	32,41%
Mujeres con ingresos altos	0%	0%
Hombres con ingresos altos	1,69%	1,85%

Fuente: Encuesta a recicladores 2010 y 2020. Elaboración propia.

Nota: Ingresos bajos corresponden a recicladores que ganan menos de un Salario Básico Unificado (SBU), Ingresos medios quienes ganan entre uno y dos SBU y altos quienes ganan más de dos SBU.

Los materiales que mayores ingresos en dólares le representan a los recicladores y las recicladoras, son la chatarra, el vidrio, PET y cobre, como se puede observar en la siguiente figura:

Figura 1. Productos reciclables que mayores ingresos generan



Fuente: Encuesta a recicladores 2021. Elaboración propia.

En cuanto a la tenencia de los medios de producción, que para este estudio corresponde principalmente a maquinarias, equipos, herramientas y otros bienes; la mayoría de los recicladores de Portoviejo no cuentan con medios de producción (42,75%). Las mujeres cuentan significativamente con menos medios (48,28%). Por otro lado, pocos cuentan con vivienda propia (1,45%) y con tierra propia (21,74%). Finalmente, solo el 34,06% poseen medios de producción como maquinaria y equipos para la actividad del reciclaje; los hombres son quienes acceden a la mayoría de las maquinarias y equipos, los cuales son usualmente motos y triciclos. El detalle se puede observar a continuación:

Tabla 2. Medios de producción familias recicladoras

Medios de producción	Porcentaje Mujer	Porcentaje Hombre	Porcentaje Total
Vivienda	0%	1,83%	1,45%
Tierra	34,48%	18,35%	21,74%
Medios de producción	17,24%	38,53%	34,06%
Ninguno	48,28%	41,28%	42,75%

Fuente: Encuesta a recicladores 2020. Elaboración propia.

Respecto al costo de la gestión integral de residuos sólidos en Ecuador, esta se ubica en un promedio de 126 dólares por cada tonelada de residuos recuperados (Solíz et al. 2020); por tanto, las actividades del reciclaje en el 2010 ahorraron más de 181.000 dólares anuales por costos evitados de la recolección, mientras que en el 2021 el costo evitado al Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo ascendió a más de 320.000 dólares anuales. En resumen, en este último año se presentó un aumento del ahorro debido al incremento de la actividad del reciclaje, de acuerdo con el cálculo realizado con los datos obtenidos en las encuestas de recicladores de los años 2010 y 2021.

Resultados Sociales

La mayor parte de recicladores de Portoviejo viven en las parroquias de San Pablo y Picoazá. Las viviendas de quienes trabajan dentro del botadero y viven en la parroquia San Pablo y se ubican en los barrios Los Cañonazos y El Rocío, son precarias. La mayor parte de estas casas son de piso de tierra, paredes de caña y techo de zinc. Algunos materiales de construcción han sido tomados desde el mismo botadero, como madera y ciertas estructuras. En general son viviendas

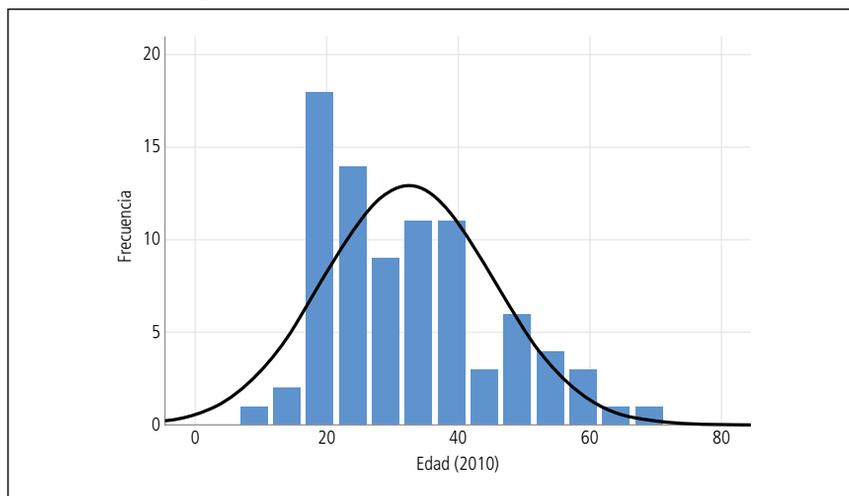
construidas sobre terrenos sin escrituras, que no cuentan con servicios básicos y cuyos materiales de construcción están en muy mal estado. Tienen uno o dos espacios y en ellas viven familias ampliadas.

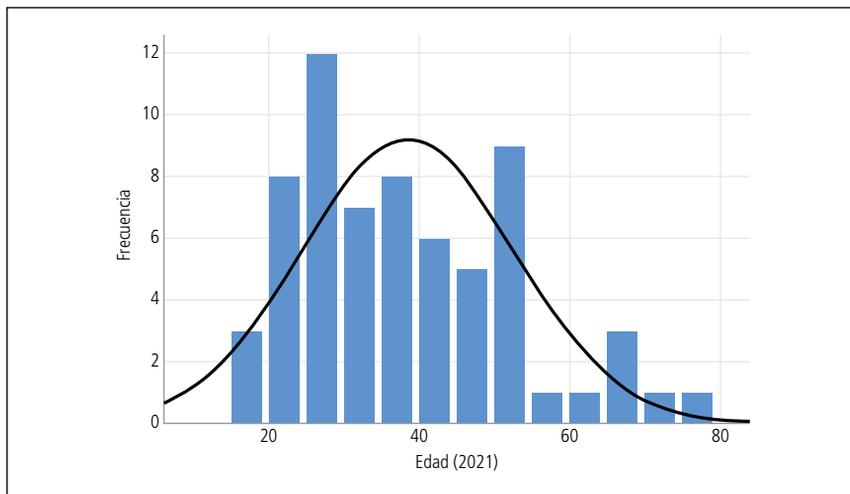
De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada en el año 2020, existe un problema de hacinamiento que afecta al 70,8% de los hogares de recicladores. Esto se debe, sobre todo, a que la mayoría de las casas están estructuradas por una habitación, donde duermen todos los miembros de la familia, y otra que en ocasiones es usada para cocinar. El 18,43% de los hogares no tiene acceso a ningún servicio básico; al no tener terrenos regularizados, no tienen acceso a servicios de luz, agua o teléfono. El agua es obtenida por tanquero, lo que representa una inversión grande, considerando los recursos con los que se cuenta.

Las familias de recicladores de Portoviejo estaban compuestas en el año 2010 por un promedio de cinco miembros, este valor se ha reducido en el 2021 a un promedio de cuatro miembros por hogar.

La edad promedio de los recicladores en Portoviejo en el 2010 era de 32 años; este valor aumentó en el 2021 a 38 años, reflejando que existe un envejecimiento sostenido de la población recicladora. Por otro lado, en el último año analizado, se pueden encontrar recicladores desde los 17 hasta los 75 años. Siendo más común el grupo de edad de entre los 25 a 55 años, como se puede ver en la figura a continuación:

Figura 2. Edad de los recicladores de Portoviejo 2010 - 2021





Fuente: Encuesta a recicladores 2021. Elaboración propia.

Por otro lado, en el año 2010 la mayoría de estos trabajadores eran hombres (70,20%), mientras las mujeres representaban un 29,8%. Para el 2021 estos valores se han modificado levemente, representando todavía mayor cantidad de hombres (67,70%) que de mujeres (32,3%).

Respecto a la vulnerabilidad laboral de la actividad del reciclaje, los hombres muestran un nivel más alto. Esto debido a que ellos son quienes trabajan mayoritariamente en esta actividad, y además, usan en menor medida implementos de protección (guantes, mascarillas, botas, gafas, etc.) respecto a las mujeres. Se puede ver un desglose de la vulnerabilidad en la tabla a continuación:

Tabla 4. Vulnerabilidad laboral de los(as) recicladores(as)

Vulnerabilidad Laboral*	Porcentaje Hombre	Porcentaje Mujer	Porcentaje Total
Alta	27,27%	9,52%	21,54%
Media	38,64%	38,10%	38,46%
Baja	34,09%	52,38%	40,00%

Fuente: Encuesta recicladores 2020. Elaboración propia.

*Recicladores(as) que cuentan con más de tres equipos de protección para el trabajo son considerados con baja vulnerabilidad laboral, entre uno y dos equipos media vulnerabilidad y ningún equipo alta vulnerabilidad.

Resultados ambientales familias recicladoras

En el año 2010 se obtuvo que la mayor proporción de materiales que se reciclaban eran los envases de vidrio (27,22%) y la chatarra (17,1%). En el otro extremo, los menos reciclados eran el cobre y el bronce, representando menos de 1% cada uno.

En el año 2021, la cantidad de materiales recolectados se incrementó en general en comparación con el 2010. En total se obtuvo un aumento del 44,7%; siendo la chatarra el material que más se recicla (20,46%), seguida del cartón, con 19,87% del total. Tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 5. Volumen y porcentaje mensuales de materiales reciclados en los años 2010 y 2021

Material	2010 (kg)	2010 (%)	2021 (kg)	2021 (%)
Aluminio	1.763,18	1,47%	6.141,33	2,83%
Bronce	567,27	0,47%	1.597,31	0,74%
Cobre	746,82	0,62%	3.795,38	1,75%
Línea hogar	3.883,56	3,23%	6.601,14	3,04%
Plástico fino	5.089,24	4,23%	12.455,4	5,74%
Papel	10.195,85	8,48%	15.241,28	7,03%
PET	17.776,64	14,79%	22.097,65	10,19%
Vidrio	32.730,91	27,22%	38.185,68	17,61%
Cartón	15.525,45	12,91%	43.082,48	19,87%
Chatarra	20.554,55	17,10%	44.368	20,46%
Llantas/caucho	21.18,12	1,76%	3.836,9	1,77%
RAEE	-	-	829,5	0,38%
Baterías	-	-	4491	2,07%
Plástico grueso		-	14.153,2	6,53%
Plástico soplado	9.280,2	7,72%	-	-
Total mensual Kg	120.231,8		216.876,25	
Toneladas anuales	1.443		2.603	

Fuente: Encuesta a recicladores 2010 y 2021. Elaboración propia.

En el año 2010, de acuerdo con los datos recolectados, se recuperaron 1.443 toneladas de residuos sólidos; lo cual representa un valor de 130 toneladas equivalentes de CO₂ que se evitó emitir a la atmósfera. Por otro lado, en el 2021 se re-

cuperaron 2.603 toneladas de residuos sólidos gracias a la actividad del reciclaje. Esta cifra se traduce en que se evitó emanar a la atmósfera más de 234 toneladas equivalentes de CO₂.

Finalmente, a partir de la información anterior se determinó que en el 2010 se evitaron verter al suelo 375 m³ de lixiviado, mientras que en el 2021 fue de aproximadamente 680 m³, gracias al incremento de las actividades de reciclaje.

Discusión y conclusiones

Respecto a lo económico, se evidencia que el ingreso promedio por reciclador es de 247,69 dólares mensuales. Este valor resulta ser un poco más elevado al que obtienen los recicladores de otras ciudades como Cuenca, donde no llega a superar los 200 dólares mensuales (Cajamarca et al. 2019). Sin embargo, se evidencia que las mujeres tienen menores ingresos que los hombres en el caso de Portoviejo; algo similar a lo que reportan otros estudios recientes (Barahona y Garzón 2021; Montesdeoca y Padilla 2021).

Según los datos recolectados, los productos que mayores ingresos en dólares le representan a los recicladores son la chatarra, el vidrio, PET y cobre. No obstante, estos se comercializan en el mercado de los intermediarios, por lo que los ingresos podrían ser aún mayores. A nivel nacional el producto que tiene mayor espacio de comercialización directa –y que podría incrementar los ingresos de los recicladores– es el papel y el cartón (Jimbo 2016). El PET, sin embargo, es uno de los productos que mayor crecimiento presenta en su recolección (Arroyo 2018), este material podría generar ingresos adicionales a los recicladores (Torres-Merlo et al. 2018).

Por otro lado, un número significativo de los recicladores no cuenta con un medio de producción, a excepción de los propios materiales reciclables, lo cual incide directamente en sus ingresos. En este sentido, poseen individualmente su fuerza de trabajo como medio de producción, lo cual también ocurre con recicladores en la península de Santa Elena en Ecuador (Rosales Suárez 2016), ya que muy pocos de ellos acceden a otros medios, como la tierra o máquinas para su trabajo en el reciclaje.

Respecto a los resultados sociales, el hacinamiento llega a más del 70% de los hogares, lo cual es mucho más alto que el valor de esa categoría a nivel nacional (11% de los hogares en el país, según INEC 2017). El hacinamiento de las familias recicladoras también es un factor común encontrado en otros casos de estudio en el área andina (Rendon 2021; Gómez-Correa et al. 2008).

En nuestro caso de estudio la mayoría de las personas que se dedican al reciclaje son hombres, muy similar a lo que pasa en otras ciudades, como Esmeraldas, donde los recicladores hombres llegan a un 63% (Ceballos 2016), pero diferente a casos como el de Cuenca, donde hay un mayor número de mujeres (Cajamarca et al. 2019).

La mayoría de hogares de recicladores no dispone de servicios básicos como agua potable o alcantarillado. Tomando en cuenta que el déficit de servicios a nivel nacional asciende al 33,7% de los hogares (INEC 2017), los resultados nos muestran que en el caso de recicladores/as de Portoviejo el déficit es mayor.

En cuanto a los resultados ambientales, según la información recabada en este estudio, se evidenció que los principales materiales recuperados son botellas de PET, plástico soplado, plástico duro, plástico de fundas, cartón, papel, metales (hierro, bronce, etc.) y vidrio. En menor cantidad se obtienen aparatos eléctricos y electrónicos. En Portoviejo, como en otras ciudades, no se acopia tetrapack, a pesar de que sí puede ser reciclado. En el Ecuador se importan cerca de 500 millones de envases de tetrapack, pese a lo cual no se reciclan (Hidalgo 2013).

Por otro lado, en Portoviejo la actividad del reciclaje ha evitado emisiones de CO₂ a la atmósfera sostenidamente en los últimos diez años, siendo una actividad importante en la reducción de los gases de efecto invernadero. De igual manera, la actividad evitó que una gran cantidad de lixiviados sean vertidos en el suelo.

Asimismo, se evidencia que en el cantón el reciclaje es importante para la recuperación de residuos sólidos y para reducir su costo por recolección, ahorrando más de 320.000 dólares anuales al GAD de Portoviejo. Estos datos pueden ayudar a generar incentivos económicos para recicladores/as (Gómez de Zea y Flores 2014), que mejoren las condiciones socioeconómicas de sus familias.

Finalmente, de acuerdo a los resultados, podemos concluir que es importante que el municipio de Portoviejo se plantee realizar una política que varios autores denominan como *reciclaje inclusivo* (Zapata et al. 2021; Zárte et al. 2020; Gutberlet y Careno 2020; Scheinberg y Simpson 2015), para mejorar las condiciones económicas y sociales de los recicladores y las recicladoras, y al mismo tiempo aumentar el ahorro por recolección y reducir gases de efecto invernadero en el cantón.

Bibliografía

- Al-Khatib, Issam, Maria Monou, Abdul Zahra, et al. 2010. “Solid waste characterization, quantification and management practices in developing countries. A case study: Nablus district–Palestine”. *Journal of environmental management* 91: 1131-1138.
- Arroyo, Flavio. 2018. “La economía circular como factor de desarrollo sustentable del sector productivo”. *INNOVA Research Journal* 3(12): 78-98.
- Ávila, Dayana, Johnny Giler, Brian Molina, Luis Lucio. 2022. “Manejo de los residuos sólidos en los hogares de la parroquia Portoviejo”. *UNESUM-Ciencias* 6(3): 160-169.
- Barahona, Maribel y Cindy Garzón. 2021. *Representaciones sociales sobre violencia de género en cinco mujeres recicladoras del barrio Santander-Bogotá*. [Tesis]. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios.
- Cabrera, Martha y Leither Vélez. 2022. “Auditoría de gestión ambiental a los desechos del hospital de especialidades de Portoviejo, 2020”. *Revista científica YACHASUN* 6(10): 40-52.
- Cajamarca, Edison, William Bueno, Santiago Jimbo. 2019. “De cero a dinero: La basura como fuente principal para un negocio inclusivo de reciclaje en Cuenca-Ecuador”. *Retos* 9(17): 71-87.
- Ceballo, Erika. 2016. *Enfermedades prevalentes en los recicladores del botadero de basura el jardín de la ciudad de esmeraldas durante el periodo septiembre 2015 a enero del 2016*. [Tesis]. Esmeraldas: PUCESE-Escuela de Enfermería.
- Cedeño, Luis. 2020. *Propuesta de un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos generados en el Mercado Municipal 2 del cantón Portoviejo*. [Tesis]. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.
- Dangi, Mohan, Urynowicz, Michael, Shashidhar Belbase. 2013. “Characterization, generation, and management of household solid waste in Tulsipur, Nepal”. *Habitat international* 40: 65-72.
- Ezeah, Chukwunonye, Jak A. Fazakerley, Clive L. Roberts. 2013. “Emerging trends in informal sector recycling in developing and transition countries”. *Waste Management* 33: 2509-2519.
- Gómez de Zea, Rosario, Francisco Flores. 2014. “Ciudades sostenibles y gestión de residuos sólidos”. Agenda 2014. Propuestas para mejorar la descentralización. Universidad del Pacífico, Centro de Investigación.
- Gómez-Correa, Jaime, Andrés Agudelo, Elena Ronda. 2008. “Condiciones Sociales y de Salud de los Recicladores de Medellín”. *Revista de Salud Pública* 10(5): 706-715.
- Gutberlet, Jutta, Sebastián Carenzo. 2020. “Waste pickers at the heart of the circular economy: a perspective of inclusive recycling from the Global South”. *Worldwide Waste* 3(1): 1-14.
- Hettiarachchi, Hiroshan, Sohyeon Ryu, Serena Caucci, Rodolfo Silva. 2018. “Municipal solid waste management in Latin America and the Caribbean: Issues and potential solutions from the governance perspective”. *Recycling* 3(2): 19.

- Hidalgo, Adriana. 2013. *Diseño de un proceso para la elaboración de tableros aglomerados a partir de envases Tetra Pak*. [Tesis]. Riobamba: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- INEC, 2020. Estadística de Información Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Quito: Ecuador.
- _____. 2017. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo - ENEMDU. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Quito: Ecuador.
- _____. 2010. V Censo de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Quito: Ecuador.
- Jimbo, José. 2016. “El negocio inclusivo de reciclaje entendido como una estrategia empresarial a desarrollar por la industria manufacturera de papel y cartón en la ciudad de Cuenca-Ecuador”. *Revista Economía y Política* (24):114-160.
- Margallo, María, Kurt Ziegler-Rodriguez, Ian Vázquez-Rowe, Rubén Aldaco, et al. 2019. “Enhancing waste management strategies in Latin America under a holistic environmental assessment perspective: A review for policy support”. *Sci Total Environ* 689(1): 1255-1275.
- Melo Henríquez, Aline. 2014. “Generación de residuos sólidos en el municipio de Galapa (Atlántico) y su aprovechamiento como forma de minimizar la problemática ambiental”. *Inge Cuc* 10(1): 89-96.
- Montesdeoca, Ana y Joseline Padilla. 2021. *Estrategias de afrontamiento frente a situaciones de estrés laboral en mujeres recicladoras carnetizadas por la EMAC-EP de la ciudad de Cuenca, durante el periodo 2021*. [Tesis]. Cuenca: Universidad de Cuenca.
- Mucelin, Carlos, Marta Bellini. 2008. “Garbage and perceptible environmental impacts in urban ecosystem”. *Sociedade & Natureza* 20(1): 111-124.
- Noguera, Katia, Jesús Olivero. 2010. “Los rellenos sanitarios en Latinoamérica: caso colombiano”. *Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales* 34(132): 347-356.
- Pellón Arrechea, Alexis, Matilde López, María del Carmen Espinosa, et al. 2015. “Proposal for leachates treatment in a municipal solid waste landfill”. *CiII Ingeniería Hidráulica y Ambiental* XXXVI(2): 3-16.
- Rendon, Valeria. 2021. *Cápsulas habitables*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Rivera, María y Morales Brayan. 2021. *Estudio comparativo bibliográfico de tratamientos biológicos anaeróbico, aeróbico y anóxico aplicados en lixiviados mediante la utilización de biorreactores*. [Tesis-Ingeniería Ambiental]. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- Rosales Suárez, Andrés. 2016. *Los Recicladores como actores de la Economía Popular y Solidaria: Análisis de la Asociación 15 de Diciembre de La Libertad*. [Tesis]. La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena.
- Sanmartín Ramón, Gladis, Rosalía Zhigue, Tania Alaña. 2017. “El reciclaje: un nicho de innovación y emprendimiento con enfoque ambientalista”. *Revista Universidad y Sociedad* 9(1): 36-40.

- Scheinberg, Anne y Michael Simpson. 2015. "A tale of five cities: Using recycling frameworks to analyse inclusive recycling performance". *Waste Management & Research* 33(11): 975-985.
- Solíz, María Fernanda. 2015. "Ecología política y geografía crítica de la basura en el Ecuador". *Letras Verdes* (17): 4-28.
- Solíz, María Fernanda, Juan Durango, José Solano, Milena Yépez. 2020. *Cartografía de los residuos sólidos en Ecuador 2020*. Quito: UASB/INEC/VLIR-UOS/GAIA/Alianza Basura Cero Ecuador/Acción Ecológica.
- Solíz, María Fernanda, Milena Yépez, Dominick Valencia, Rubén Solíz-Carrión. 2019. *Reciclaje sin recicladorAs es basura: el retorno de las brujas*. Quito: Ediciones La Tierra/UASB.
- Toledo Claudia y Marcos Luján. 2008. "Caracterización de residuos sólidos urbanos y análisis de opciones de revalorización de materiales en el municipio de Cercado, Cochabamba, Bolivia". *Acta Nova* 4(1): 3-21.
- Torres Cedeño, Reina. 2019. *Iniciativas en la gestión de los residuos del vertedero en LLano Bonito (distrito de Chitré, provincia de Herrera)*. [Tesis]. Panamá: Universidad de Panamá.
- Torres-Merlo, Oswaldo, Alex Vallejos Cazar, Johana Sierra. 2018. "Alternativa producción de material reciclado PET en la ciudad de Ibarra, Ecuador". *Revista UNIANDES Episteme* 5: 489-499.
- Yuan, Yujun, Li Tong, Qiang Zhai. 2020. "Life cycle impact assessment of garbage-classification based municipal solid waste management systems: a comparative case study in China". *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(15): 5310.
- Zambrano, Jorge. 2015. *Estudio de la actividad del reciclaje informal en vertedero a cielo abierto del cantón Portoviejo, su incidencia ambiental, social y económica, año 2014*. [Tesis]. Manta: Universidad Laica "Eloy Alfaro" de Manabí.
- Zapata, María, Sebastián Carenzo, Jaan-Henrik Kain, et al. 2021. "Inclusive recycling movements: a green deep democracy from below". *Environ Urban* 33(2): 579-598.
- Zárate, Alexandra, Jairo Ayora, José Jimbo. 2020. "La verdadera inclusión: controversia entre el reciclaje inclusivo y el reciclaje justo, en el marco del desarrollo sostenible". *Letras Verdes* 27: 71-89.



Ecuador Debate N° 112 Polarizaciones populistas en las Américas

Abril 2021, pp. 233

El Tema Central, se ocupa de una de las problemáticas más acuciantes por las que atraviesan las democracias en América Latina, esto es, el fenómeno de los populismos, que a su vez significa, uno de los mayores peligros de nuestros tiempos, ya que bajo la versión de los populismos de derechas, se acercan cada vez más a situaciones neofascistas, que se contraponen a los ya conocidos y estudiados populismos de lo que Laclau llamaría populismos de izquierda, los que para este autor y otros, aparecerían como algo necesario para frenar a los populismos xenófobos de derecha, recuperando al mismo tiempo las demandas de igualdad social y soberanía popular, en tanto estos populismos tendrían la valentía de enfrentarse al poder de las elites.

La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia

| Soledad Stoessel y Valeria Coronel, coordinadoras.
| CLACSO - CALAS, Buenos Aires / Guadalajara, 2024, pp. 426.

Danilo Rosero*

La obra que se reseña se inscribe en un ámbito de reflexión que convoca un creciente interés en la región: la generación y distribución de la riqueza, así como las dinámicas de poder que despliegan las élites económicas y políticas como condición para su concentración. A decir de Soledad Stoessel y Valeria Coronel, coordinadoras de la obra, la razón para orientar este proyecto se relaciona con que los estudios en Latinoamérica han prestado relativa atención sobre estos temas, y sólo en la actualidad se empieza a ver un extendido interés en abordarlos.

La obra articula cuatro ejes, precedidos por una introducción y un prólogo. En la introducción, Stoessel y Coronel posicionan dos claves para el análisis de la desigualdad y la riqueza en Latinoamérica: abordarla desde un enfoque re-

lacional y alimentar este abordaje con una mirada historiográfica de los ciclos y trayectorias de las disputas por regular la riqueza. Según las autoras, reconstruir estas disputas no sólo brindará una mejor comprensión de matrices específicas de desigualdad, sino que pondrá en discusión condicionamientos políticos concretos para articular proyectos regulacionistas en el presente. Por su parte, en el prólogo de la obra, René Ramírez argumenta que el abordaje de la desigualdad y la riqueza debe enfocarse en cómo se produce lo que denomina “distancias indígenas”, así como en los desbalances de poder que pueden ejercer diferentes actores en el Estado. Argumenta que el desafío actual es el de dirigir acciones que permitan producir “riquezas desconcentradas y distancias dignas”, por medio de proyectos políticos que quiebren las matrices de desigualdad en la región.

La primera sección, *Riqueza y privilegios, ¿Cómo medirlos?*, integra aportes que problematizan y posicionan claves

* Sociólogo graduado en la Universidad Central del Ecuador (UCE). Maestro en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Diplomado en Economía Política por CLACSO.

metodológicas para abordar la riqueza en la región. El primero lo presentan Juan Pablo Jiménez, Fernando Lorenzo, James Mahon y Gustavo Viñales, quienes analizan las limitaciones que tienen nuestros países para medir la riqueza y su impacto en la capacidad de los Estados para diagnosticar las desigualdades, diseñar políticas y adoptar marcos de cooperación internacional. Frente a esto, proponen pautas para mejorar la estimación de la riqueza y la adopción de políticas. El segundo lo presentan Jonathan Báez y Gonzalo Silva Zambrano. Poniendo en perspectiva el enfoque de Pfeffer y Witkus (2021, citado por los autores) sobre la centralidad de la vivienda propia como principal variable que permite abordar la riqueza y sus disparidades, los autores evidencian que en la región no sería dicha posesión lo que permite evidenciar las asimetrías de riqueza, sino que sería su calidad la que lo posibilita.

La segunda sección, *Imaginarios y representaciones en torno a la riqueza, los privilegios y la desigualdad*, integra aportes que problematizan imaginarios sociales contruidos sobre la riqueza y los privilegios. El primero lo presenta Irene Lungo. Partiendo del concepto de privilegio, analiza las diferentes implicaciones que adquieren las desigualdades en sociedades atravesadas por la violencia. Lungo argumenta que las desigualdades estructuran marcos diferenciados de vulnerabilidades y de acceso a recursos para enfrentarla, que generan a su vez

una jerarquía social y política frente a la violencia estatal y paraestatal. El segundo, de Luz Irene Pyke, quien parte del caso argentino, analiza los desplazamientos ideológicos de las élites en relación a la adopción de medidas tributarias en contextos de crisis. Comparando la crisis en el período de entreguerras del siglo XX y la crisis desatada por la pandemia de la Covid-19, la autora evidencia un desplazamiento ideológico de las élites respecto a la concepción de la tributación y la justicia social. El tercer aporte lo presenta Alba Carosio. Partiendo del postulado de Piketty (2020, citado por la autora) de que es la capacidad de justificar la desigualdad y su aceptación social lo que permite su persistencia, más que la sola dinámica económica, la autora problematiza las narrativas que legitiman la desigualdad y la riqueza en la región. Carosio plantea que se habría estructurado en América Latina una *cultura del privilegio* que construye a la igualdad social como algo indeseable, que amenaza la convivencia democrática. El cuarto aporte lo presenta Matías Landau, quien problematiza los discursos a través de los cuales las élites políticas y económicas justifican sus privilegios y las desigualdades. Contrastando la reacción de estos actores frente a dos medidas específicas adoptadas por el gobierno de Alberto Fernández en plena pandemia (el subsidio empresarial para el pago de salarios y el impuesto único a las grandes fortunas), el autor evidencia la respuesta

diferenciada dirigida desde las élites, visibilizando su accionar ideológico.

La tercera sección, *Mecanismos del capital y las élites para la generación y acumulación de riqueza*, incluye aportes que problematizan estrategias adoptadas por las élites para incidir en la producción y concentración de la riqueza. El primero lo realiza María Emilia Val. Partiendo del abordaje de los ciclos de endeudamiento y desregulación en Argentina, analiza la relación entre “desregulación, deuda soberana y desigualdad” como uno de los mecanismos que posibilitan el enriquecimiento de las élites. Esta reflexión pone en perspectiva la dependencia latinoamericana, su subordinación hacia los mercados de capital, los mecanismos de captura estatal, el carácter rentista de las élites y la dislocación entre sus intereses y los del pueblo. El segundo lo presenta María Elena Herrera. Partiendo del caso de la agroindustria de hortalizas en el norte de México, la autora analiza la forma en que ésta opera como “una maquinaria de acumulación de capitales” (2024, 264), sostenida en procesos de concentración de tierra y otros recursos, la consolidación de élites agrarias, la gestión del Estado y la explotación de poblaciones racializadas. Esto pone en perspectiva la forma en que las élites no fundan sus estrategias de acumulación únicamente en factores económicos. El tercero lo realiza Javier Pérez Ibáñez, quien parte del caso del mercado automotor argentino para argumentar que la

competitividad que promueven las empresas en el marco de las cadenas globales de valor, constituyen mecanismos que, bajo una retórica eufemística, encubren los procesos de transferencia de valor que operan aparejados a la división internacional del trabajo. El cuarto lo presentan John Crabtree, Francisco Durand y Jonas Wolff. Por medio de la reconstrucción de la trayectoria de las élites económicas en Ecuador, Perú y Bolivia, los autores buscan analizar las estrategias adoptadas para incidir en los ámbitos de decisión pública, en el marco de los reacomodos económicos y políticos operados en esos países. Partiendo de los conceptos de *poder empresarial* y *captura del Estado*, demuestran que las estrategias de las élites se manifiestan diferenciadas, a pesar de lo cual no han sido capaces de consolidar su poder ni estabilizar su incidencia en el Estado. El último lo realiza Priscilla Villagas. A partir de los casos de los clubes de categoría “unión” en Chile y Costa Rica: se enfoca en analizar los espacios de exclusividad que generan las élites como instancias que operan, a la par que activan “recursos no económicos” que producen condiciones de cohesión inter-élites, articulación de redes asociativas, así como recreación de sentidos de distinción social y de status, movilizados en su conjunto como formas de capital que inciden en la producción y acumulación de riqueza.

La última sección, *Y los Estados, ¿qué pueden hacer para incidir en la (des)con-*

centración de la riqueza?, articula aportes que discuten posibles rutas para regular y desconcentrar la riqueza. El primero es de Valeria Coronel. Por medio de la reconstrucción histórica de la experiencia ecuatoriana de regulación estatal del capital entre los años 1920 y 1940, a la luz de la trama sociopolítica articulada en aquella época, la autora discute la necesidad de analizar las condiciones que influyeron en la posibilidad de articular políticas reguladoras y redistribuidoras de la riqueza. De acuerdo con Coronel, este abordaje permite reconocer al Estado como un terreno en disputa y punto de apoyo fundamental para dirigir un nuevo ciclo regulacionista; además, plantea la necesidad de generar amplios proyectos interclasistas para dirigirlo. Finalmente, el segundo es el de Hans-Jürgen Burchardt, que problematiza la necesidad de procesar reformas a nivel fiscal y tributario de cara al rol proyectado para la región (producir “materias primas verdes”) en el marco del “capitalismo verde”, respuesta prevista por las élites globales para hacer frente al cambio climático. Esto, considerando la inviabilidad de procesar una transición del modelo de acumulación regional en el corto plazo, lo que no quita la necesidad de empezar a andar ese camino.

Más allá de los aportes específicos que integra la obra, es importante destacar que desde una lectura transversal el texto posiciona enfoques teórico-analíticos orientadores y útiles para el análisis de las desigualdades, el accionar de las élites y la riqueza. Entre ellos se puede mencionar: 1) el abordaje de la desigualdad como una relación en la que la pobreza y la exclusión están inherentemente vinculadas a las formas de producción y distribución de la riqueza y el ejercicio del poder; 2) el abordaje del Estado y sus efectos en la sociedad desde un enfoque relacional, problematizando su accionar a partir de la condensación y resolución de correlaciones de fuerza y arreglos socioestatales específicos en función de dicha correlación; y, 3) el abordaje de la regulación y la desregulación de la riqueza como orientaciones políticas y proyectos socioestatales divergentes referidos a la instauración de regímenes más o menos favorables a la reproducción del capital y la acumulación de la riqueza. Sin duda, la comprensión de la forma en que se configuran las desigualdades y sus procesos condicionantes a la luz de estas aristas posibilita abrir perspectivas de acción política orientadas a quebrar las matrices en que se fundan.

Pensamiento agrario: derribando mitos. Una antología de la obra de Fausto Jordán

Juan Fernando Regalado y Rosa Jordán, compiladores.

Abya – Yala / Comité Ecueménico de Proyectos / Centro Andino de Acción Popular,
Quito, 2023

Pablo Ospina Peralta*

No he sido un amigo personal de Fausto Jordán. Lo conozco por sus libros, sus escritos, su trayectoria. No puedo compartir anécdotas de una convivencia que no tuvimos ni disfrutamos. Apenas nos vimos en los cócteles de muchos libros sobre problemas agrarios ecuatorianos en los que coincidimos, y varias veces charlamos. Yo sabía quién era, por supuesto, su prestigio lo precedía; y a pesar de ello, lo acompañaba siempre que departíamos en esas ocasiones un ambiente de sencillez y humildad que le sentaba muy bien. Entre los hitos más importantes de la trayectoria profesional de Fausto Jordán figura que fue director del IERAC en sus primeros años; fue fundador de CESA, la primera organización no gubernamental del Ecuador en 1967; llegó a ser ministro de agricultura durante el gobierno

de Osvaldo Hurtado y presidente de la red financiera rural en los años 1990.

Esta reseña se centrará, entonces, en destacar el papel que me parece que cumple esta antología de la obra de Fausto Jordán. ¿Cómo podemos ubicarla en el panorama más amplio de la literatura agraria del país? ¿Cuáles son sus coordenadas académicas y su aporte?

Se trata de una obra que traza la evolución del pensamiento de quien fuera, quizá, el principal exponente en el Ecuador de la escuela de la “teoría de la modernización” cepalina aplicada al agro. Esta antología recoge en su mayor parte textos inéditos que Jordán escribiera desde sus tiempos como estudiante de economía de la Universidad Central hasta el año 2018. Cubre el largo arco temporal de su paso por el Instituto de Colonización, por el IERAC, por los pasillos y los proyectos de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas –CESA y por el oficio de consultor nacional e internacional sobre la maltrecha ruralidad ecua-

* Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.

toriana. Al mismo tiempo, organiza los lineamientos básicos y marca el rumbo de lo que hubiera podido ser la reforma agraria ecuatoriana y el campo ecuatoriano si se hubieran seguido de manera coherente y sistemática las prescripciones del desarrollismo cepalino; un tipo particular de modernización agraria que Jordán concebía como compatibles con la vida y la prosperidad campesina. Así adquiere sentido la frase que se le atribuye: “confíen en los que confían en los campesinos” (según Carlos Jara, citado por Javier Ponce, en Regalado y Jordán 2023, 18).

Pero era inequívocamente una modernización desarrollista del agro, no había ninguna idealización del pasado campesino:

Pocos reconocen que son las anacrónicas formas precarias de uso y tenencia de la tierra las que obstaculizan la implantación de nuevas técnicas y adelantos tecnológicos en la producción, la administración rural y, en general, en la organización empresarial que se compadezca con la época en que vivimos (2023, 171, texto de 1967).

Este proyecto cepalino no se cumplió, por supuesto, más que de una manera incompleta e intermitente, casi podríamos decir *pusilánime*. En 1988 en un libro hoy clásico, *El minifundio*, publicó unas breves palabras lapidarias sobre el balance final que se podía hacer del proceso reformista ecuatoriano:

La dinámica general que ha tenido el proceso de modificación de la estructura agraria desde inicios de la década de los sesenta, esto es, la extinción de formas no capitalistas de trabajo, el desarrollo de un tecnificado sector agropecuario empresarial y la mantención de una desequilibrada distribución en el acceso de la tenencia y propiedad de la tierra (Jordán 1988, 281).

Esta antología resalta la persistencia y la entristecida lucidez de quien percibía con claridad todas las oportunidades perdidas por una aplicación inconsistente de todo lo que hubiera debido acompañar el corazón de la reforma agraria ecuatoriana, que era la redistribución de la tierra. Esas ideas sostenidas tercamente a lo largo de los años se perfilan en los proyectos productivos de CESA, en las referencias a proyectos concretos de desarrollo rural integral, siempre quejándose de la insuficiencia del financiamiento, de la desconfianza de los técnicos en los conocimientos y necesidades de los campesinos, de la prioridad acordada por las políticas públicas a la agricultura de exportación, de la entrega de financiación bancaria a esa misma agricultura, etc. Y la misma concepción se encuentra en los últimos textos sobre la importancia de los servicios financieros rurales y la eclosión de cooperativas, que permitió revertir parcialmente la insolente concentración urbana del crédito.

¿En qué consistió esa concepción que nunca abandonó? Solo señalo dos elementos centrales, uno ampliamente

compartido, y otro más polémico, pero ambos ligados a problemas persistentes que siguen alimentando los debates agrarios del presente. La *Antología* es un fiel testimonio de la aguda contemporaneidad de aquellas discusiones.

En primer lugar, Fausto Jordán señaló la esencia del cambio agrario: “La Reforma Agraria no es simplemente una distribución de los recursos de las tierras y las aguas, sino un proceso global de transformación de un orden socioeconómico extremadamente rígido” (2023, 149-50, texto de 1967).

En consecuencia, los problemas que se plantean en estos vastos sectores de haciendas estatales no es solo el de niveles de infraconsumo, de primitivismo e inadecuación total de la vivienda –en la que conviven humanos y animales domésticos– de bajos niveles de productividad (especialmente cuando esta se estima por trabajador agrícola o por habitante rural), sino de localismo, de viejas y retrasadas formas culturales y de absoluta falta de integración a la vida nacional (...). Además, es recomendable desarrollar un programa de forestación que suministre inmediatamente leña a los campesinos ya que ahora usan la paja como combustible (2023, 112-3, texto de 1962).

La clave de la Reforma Agraria era, por lo tanto, un cambio de las *estructuras de poder* en el agro y en el país. Allí radicaba su más auténtica tarea. Sin ese desplazamiento, cualquier medida técnica de política sectorial sería una diversión. Con-

cordante con esa idea de base, Jordán era perfectamente consciente de las razones profundas de sus conocidas limitaciones:

Si en realidad este proceso de cambio en la tenencia y uso de la tierra ha sido bastante lento, se debe a la escasez de recursos financieros y técnicos necesarios del organismo ejecutor (IERAC), a las presiones de los terratenientes – que han ejercido no solamente poder económico sino también poder social y político– y, además, a la desorganización de los campesinos (2023, 269, texto de 1974).

Pero, hay un segundo componente que atraviesa la mirada de Fausto Jordán sobre la reforma agraria y cuyos trazos se encuentran en esta antología. Esta *teoría de la modernización* agraria suponía que la escala de la producción agropecuaria debía funcionar sobre la base de granjas de gran tamaño, integradas, en el mejor de los casos operadas por cooperativas. La pequeña parcela familiar campesina no era adecuada. Así, por ejemplo, su propuesta en las haciendas de la Asistencia Social era la “recolonización”, es decir, no entregarlas a sus ocupantes actuales, sino solo parcialmente, para reubicar allí otros grupos sin tierra de la Sierra y conservar la unidad de empresa de gran escala:

la política de parcelaciones basada en la entrega, gratuita u onerosa, de las parcelas actualmente ocupadas por la población tradicional de pobladores agrícolas no haría sino mantener la estructura

minifundista y anular las posibilidades de un verdadero cambio tecnológico y social (...). De allí que –de aceptarse el criterio de programar de inmediato la recolonización de todas las haciendas de la Asistencia Social– uno de los soportes de la programación tendría que ser el reasentamiento de la actual población de huasipungueros, aparceros, partidarios, ayudas, pequeños arrendatarios de asentamiento tradicional, etc. (2023, 115, texto de 1962).

Las cooperativas de recolonización deben ser integrales, tanto para hacer posible el mantenimiento del principio de unidad de empresa agrícola como para lograr el robustecimiento y desarrollo de la comunidad rural (2023, 124, texto de 1962).

Esta idea fue cambiando con la práctica. No permaneció inalterada. Pero es claro que ya no compartimos esa desconfianza en la pequeña agricultura de base familiar basada en la pequeña propiedad privada de campesinos y campesinas. Hoy sabemos mucho mejor, de lo que lo sabíamos ayer, que hay mayor eficiencia productiva, más amplios beneficios ambientales y extensas facilidades para la diversificación productiva hacia las artesanías, la pequeña manufactura y las finanzas cuando se tiene una base adecuada de pequeñas parcelas familiares viables en buenas tierras.

Llamativamente, Fausto Jordán fue uno de los autores de un monumental estudio sobre la provincia de Tungurahua en 1961, junto con Alfredo Costales y Piedad Peñaherrera de Costales, donde

constataron su notable desarrollo artesanal e industrial: textiles, quesos, aguardiente, chocolates, zapatos, bebidas, caucho. Sobre los zapatos dicen lo siguiente:

Quien visita la ciudad de Ambato, tiene la idea de que todas las tiendas son zapaterías (...). Estas zapaterías numerosas, por un lado, absorben un alto porcentaje de los cueros producidos en las curtiembres, por otro abastecen los mercados más fuertes del país como Guayas, Manabí, Esmeraldas y en general la Costa. Cuando se visita la Costa obsérvese que la mayor parte de establecimientos distribuidores de calzado son propiedad de ambateños (...). La organización máxima de zapateros de Ambato manifestó “que pueden producir medio millón de pares de zapatos mensualmente (1958)” (Costales, Peñaherrera y Jordán 1961, 396).

Jordán no llegó a relacionar la debilidad de las haciendas y la autonomía de los pequeños productores agropecuarios familiares con esa alucinante diversificación productiva, como uno de los ejemplos de los efectos poderosos y difusos que puede llegar a tener en regiones que tienen propiedades pequeñas con riego y acceso a mercados descentralizados. No solo Ambato y su región, sino también Otavalo y Cuenca, son ejemplos ecuatorianos de una vía campesina de diversificación artesanal y de pequeña industria que, de haber prosperado y haberse convertido en dominante, hubiera tenido efectos en cascada sobre toda la estructura social y económica nacional.

¿En qué sentido fue cambiando esta mirada desconfiada de Fausto Jordán frente a la producción familiar campesina? De lo que puedo percibir y entender, parece que fue decisiva su experiencia en el trabajo concreto de promoción en CESA. Para distribuir y planificar la entrega de las tierras de las haciendas de la Iglesia católica (para hacer esa tarea nació CESA), se abandonó progresivamente la idea de crear estas organizaciones artificiales. Aquí ya no tiene la idea de colonizar o reasentar campesinos o huasipungueros. Una idea impracticable y perniciosa, en realidad. La experiencia dictaba otra cosa:

El proyecto de Reforma Agraria en predios de la Iglesia ecuatoriana tendrá como beneficiarios inmediatos a las familias campesinas que viven o trabajan en las haciendas ya individualizadas de Tepeyac, San Antonio, Cochicharanqui, El Abra, Quitumba Grande y Zula, en calidad de exhuasipungueros, de sitiajeros, arrimados o partidarios (2023, 156, texto de 1967).

Como se puede observar, el número total de familias beneficiarias directas del proyecto alcanza 1240. De ellas, 312 corresponden a familias que actualmente viven o trabajan en las haciendas y 928 a familias minifundistas de comunidades vecinas a las haciendas (2023, 159, texto de 1967).

Las ideas originales e impracticables de desplazamientos y reasentamientos de familias campesinas, organizando cooperativas para un trabajo común entre

desconocidos que formarían una empresa única que no fragmentara la tierra, no resistían el fuego de la práctica.

Sea porque, al paso de los años, mantenemos hoy la misma lectura del peso de las estructuras locales de poder en el agro, sea porque las tesis de aquellos tiempos sobre la pequeña parcela familiar ya no nos convencen, lo cierto es que la *Antología* mantiene su vigencia porque nos ofrece materiales para seguir profundizando en discusiones y dilemas que tanto ayer como en la actualidad siguen apasionando nuestras opciones de futuro.

Bibliografía

Costales Samaniego, Alfredo, Piedad Peñaherrera de Costales y Fausto Jordán Bucheli. 1961. *Tungurahua. Estudio socio-económico de la provincia de Tungurahua*. Investigación y publicación auspiciada por la Municipalidad de Ambato por el 100 aniversario de fundación de la provincia. Ambato: Instituto de Antropología y Geografía. División de Antropología social y cultural.

Jordán, Fausto. 1988. *El minifundio: su evolución en el Ecuador*. Biblioteca de ciencias sociales 22. Quito: Corporación Editora Nacional.

Regalado, Juan Fernando, y Rosa Jordán. 2023. *Pensamiento agrario: derribando mitos. Una antología de la obra de Fausto Jordán*. Quito: Abya – Yala / Comité Ecuménico de Proyectos / Centro Andino de Acción Popular.



Tendencias en la sociedad rural ecuatoriana

Abril | 2024



Revista Ecuador Debate:
www.caapecuador.org/revista-ecuador-debate

Información, suscripciones y ventas:
revistaed@caapecuador.org | (593-2) 2522-763

Publicaciones anteriores

Desafíos
contemporáneos globales
Diciembre 2023

120

La transnacionalización
del crimen y la violencia
Agosto 2023

119

COYUNTURA

Ecuador 2024: narcotráfico y política ¿hasta dónde son sus nexos estructurales?

Julio Echeverría

Conflictividad socio-política: Noviembre 2023 - Febrero 2024

David Anchaluisa

TEMA CENTRAL

Presentación del Tema Central. Tendencias en la sociedad rural ecuatoriana

Lorena Toro Mayorga y Pablo Ospina Peralta

Preciada comida: el rol relacional de la yuca en el sustento de poblaciones precarizadas en Ecuador

Cristina Vera Vega y Cristina Cielo

El rol de las ciudades pequeñas para la seguridad alimentaria

Grace Guerrero y René Larenas

Racismo institucional en la salud. Claves para pensar la atención en salud desde la interculturalidad

Ana María de Veintimilla

Extractivismo y violencia en Esmeraldas, Ecuador

Pablo Anibal Minda Batallas

Factores determinantes de la gestión comunal del páramo de Quilloac en la provincia de Cañar

Christian Camilo Bernal Conde

"Mandar obedeciendo". El movimiento indígena de Cotopaxi en el gobierno provincial (2000-2022)

Pablo Ospina Peralta

DEBATE AGRARIO

Tejido social, finanzas y organización campesina en la Costa
Rafael Guerrero B.

ANÁLISIS

Pë'këya: Restitución del territorio ancestral de la nación Siekopai desde la memoria histórica y biocultural

Catalina Campo Imbaquingo y Justino Piaguaje Lucitante

¿Por qué debe cumplirse la consulta popular sobre el Yasuni-ITT? Una estrategia para superar la crisis

Carlos Larrea

RESEÑAS

La producción social de las violencias en Ecuador y América Latina. Histórica, estructural, plural y relacional

Sebastián Rodríguez y Emilia Silva



COYUNTURA

Estados Unidos 2024: elecciones políticas o guerra cultural

¿Un dilema coyuntural o una corriente profunda?

Fernando Bustamante

La derecha al poder en la Argentina (1983-2023):

los casos de Propuesta Republicana (PRO) y La Libertad Avanza (LLA)

Santiago C. Leiras

Conflictividad socio-política: Marzo – Junio 2024

TEMA CENTRAL

Presentación del Tema Central: Élités y derechas en América Latina

Miguel Ruiz Acosta

La derecha peruana y su deriva neogolpista

Anahí Durand Guevara

Antipopulismo y radicalización de las derechas en Ecuador

Franklin Ramírez Gallegos

Dominación y conflicto político del uribismo en Colombia. 2002-2010

Alexander Gamba Trimiño

La derecha en México: entre el Yunque y Vox

Hugo Sánchez Gudiño

De Macri a Milei: la peligrosa obsesión de las clases dominantes argentinas

Andrés Tzeiman

La internacional reaccionaria y su influjo sobre América Latina

Ariel Goldstein

DEBATE AGRARIO

Jóvenes indígenas: propósitos y desafíos

Luis Alberto Tuaza Castro y Rudi Colloredo-Mansfeld

ANÁLISIS

La cadena del reciclaje: aportes sociales, económicos y ambientales.

El caso de la Asociación "17 de septiembre" en Portoviejo

Xavier León-Vega, María Fernanda Solíz, Claudia Rodríguez y Alía Yépez

RESEÑAS

La (des)regulación de la riqueza en América Latina.

Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia

Pensamiento agrario: derribando mitos.

Una antología de la obra de Fausto Jordán

